TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref.: Exp. 11001-3103-011-2020-00289-01

Decídese el recurso de apelación propuesto por la parte ejecutante frente al auto de 8 de octubre de 2020, emitido por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, en la ejecución instaurada por JAS Forwarding de Colombia S.A.S., contra Technitel Soluciones y Servicios S.A.S.

Para resolver la inconformidad de la parte apelante frente a la negación de la orden de pago, por no estar firmada la factura base de la ejecución, bastan las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La apertura de un juicio ejecutivo demanda que, con la presentación del escrito introductor, se incorpore documento proveniente del deudor o de su causante el cual constituya plena prueba en su contra y dé cuenta de una obligación clara, expresa y exigible (artículo 422 del C.G.P.).

Si lo ejercido es la acción cambiaria propia de los títulos-valores, el accionante habrá de apuntalar sus súplicas en un documento cartular que contenga las exigencias generales del artículo 621 del Código de Comercio, y las especiales para cada instrumento en particular, establecidas en la misma legislación mercantil; las que, en tratándose de la factura, se encuentran previstas en los artículos 772, 773 y 774, modificados por los artículos 10, 2º y 3º de la Ley 1231 de 2008.

2. Los requisitos generales de la factura, al tenor del citado artículo 621, debe contener la mención del derecho incorporado en ella y la firma de su

creador, éste último reiterado en el artículo 772 del C. de Cio., modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, conforme al cual, "*para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original* [deberá estar] *firmado por el emisor*". Al tenor del artículo 774 *ejusdem*, disposición que debe entenderse reformada, como a continuación se expondrá, el título en cuestión deberá indicar la fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673, la mención expresa de la fecha de vencimiento, que en todo caso se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión, la fecha de recibo, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla; rezaba la noma, además, que el emisor, vendedor o prestador del servicio, debía dejar constancia en el original del documento, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso, obligación que corría en hombros, igualmente, de los terceros a quienes se hubiera transferido.

Mas, también el Estatuto Tributario fija algunas otras exigencias para este tipo de efectos del comercio, como bien se aprecia del artículo 617 de dicho cuerpo dispositivo, en cuanto exige para éstas, al margen de las indicaciones relativas a su *denominación como factura de venta, los apellidos y a la identificación por nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, al igual que los del adquirente, y la discriminación del IVA pagado, dice que ésta deberá mencionar igualmente el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, la fecha de expedición, la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, el valor total de la operación, el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, y la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas*.

Lo concerniente a la firma del creador, empero, es algo que debe analizarse a la luz de otras disposiciones legales que ateñen al punto, cumplidamente con vista en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, en cuanto dispone que "[c]*uando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación*"; precepto que fue reiterado en el artículo 16 de la Ley 1676 de 2016.

Algo que, en el momento actual, impone una consideración especial, pues si el artículo 2 del Decreto 806 de 2020, expedido por tazón de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, dispone que "*se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos*", muy a lugar es concluir que, en lo que hace a la firma de este tipo de efectos negociales, las circunstancias actuales imponen una lectura distinta de la regla que sobre el punto establecen los artículos 621 y 772 en mención.

La factura electrónica, definida en el artículo 1.6.1.4.1.2 del Decreto 1625 de 2016 -compilatorio del Decreto 2242 de 2015-, corrobora lo expresado, pues además de prever que ésta debe cumplir "con todos los requisitos previstos en la Ley 1231 de 2008", establece que ésta ha de contener "las particularidades que impone el hecho de ser desmaterializado", tales como el título de cobro previsto en los artículos 2.2.2.53.2 -num. 15- y 2.2.2.53.13 del Decreto 1349 de 2016, que fue derogado por el Decreto 1154 de 2020, expedido por motivos de la pandemia de Covid-19.

3. Ahora bien, la facturas aportada en este caso por la demandante con miras a soportar la ejecución, indica que, ciertamente, se trata del original de una factura de compraventa, su número, código, fecha, quién la expidió, o sea, el vendedor, su número de identificación tributaria, dirección, teléfono, fax, página web, identifica al destinatario –el comprador- por esos mismos datos, es decir, nombre, número de identificación tributario, dirección, teléfono, describe las mercaderías facturadas, el precio, términos del pago, IVA, número de vuelo, fecha de envío, ciudad de origen y destino, valor total a pagar en dólares y brinda la información de la cuenta donde se debía realizar el pago.

A continuación se puede verificar lo anterior:

BOGOTA - BRANCH
CALLE 98 NO 10-32 OFICINA 704-705
BOGOTA
Colombia
Phone: +57 1 7458980
Fax: +57 1 7458980
www.jas.com
CODIGO ACI 239

FACTURA DE VENTA 000016317 ORIGINAL

Page 1 of 2

NIT #: 830.055.625-0

TECHNITEL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS
ATTENTION: THE ACCOUNTS PAYABLE MANAGER
CARRERA 40 C 1 C 30
BOGOTA DC 11001

INVOICE DATE	11-Aug-20
CUSTOMER ID	TECSOLBOG
SHIPMENT	S004142011
CLIENT NIT #	900.698.585-7
DUE DATE	11-Aug-20
TERMS	Cash on Delivery
CONSOL NUMBER	C002385233, C002399429, C002403425

SHIPMENT DETAILS — 22 de 25 — **PRINTED BY: Fredy Galindo**

SHIPMENT DETAILS — **PRINTED BY: Fredy Galindo**

SHIPPER	**CONSIGNEE**
PHONIX TRADING LIMITED	TECHNITEL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS

JAS QUOTE NUMBER: QBOG00031953

ORDER NUMBERS / OWNER'S REFERENCE

GOODS DESCRIPTION
DISPOSABLE FACE MASK(NON-MEDICAL)

IMPORT CUSTOMS BROKER	**WEIGHT**	**VOLUME**	**CHARGEABLE**	**PACKAGES**
	14764.000 KG	104.940 M3	17490.000 KG	1500 PKG

FLIGHT / DATE	**MAWB**	**HAWB**
UA2809 / 05-Aug	01655078645	SHA004142011

ORIGIN	**ETD**	**DESTINATION**	**ETA**
CNPVG = Shanghai Pudong International Apt, China	05-Aug-20	COBOG = Bogota, Colombia	09-Aug-20

CHARGES

DESCRIPTION	**IVA IN USD**	**CHARGES IN USD**
Ingreso de Terceros (No Gravables)		
FREIGHT CHARGES - 17490 KG @ USD 8,00/KG	Zero Rated	139.920,00
ORIGIN TERMINAL HANDLING CHARGE - 17490 KG @ USD 0,15/KG	Zero Rated	2.623,50
MANIPULACIÓN DE ORIGEN / ORIGIN HANDLING	Zero Rated	75,00
DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGE - 14991 KG @ USD 0,10/KG	Zero Rated	1.499,10
TERMINAL TRANSFER FEE - DESTINATION - 17490 KG @ USD 0,10/KG	Zero Rated	1.749,00
DOCUMENTACIÓN - DESTINO / DOCUMENTATION - DESTINATION	Zero Rated	80,00
CERTIFICADO DE SEGURO / INSURANCE CERTIFICATE - 0,30% of (USD 361920,00 (FRT))	Zero Rated	1.085,76
Total Ingresos de Terceros (No Gravables)		147.032,36

FACTURA DE VENTA 000016317 ORIGINAL

Page 2 of 2

NIT #: 830.055.625-0

TECHNITEL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS
ATTENTION: THE ACCOUNTS PAYABLE MANAGER
CARRERA 40 C 1 C 30
BOGOTA DC 11001

INVOICE DATE	11-Aug-20
CUSTOMER ID	TECSOLBOG
SHIPMENT	S004142011
CLIENT NIT #	900.698.585-7
DUE DATE	11-Aug-20
TERMS	Cash on Delivery

TOTAL CHARGES

Please contact us within 7 days should there be any discrepancies. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DEL ARTICULO 774 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DE COMERCIO No hay lugar a retención de la fuente sobre fletes. En caso de mora se reajustara el cambio a la tasa del día de pago de los fletes y se cobrarán intereses a la máxima permitida por la ley sobre el valor total de esta factura cambiaria. JAS FORWARDING DE COLOMBIA S.A.S actúa como agente de carga y coordinador de embarques en nombre de sus clientes en calidad de mandatario, en consecuencia no es transportador, ni comisionista de transporte; razón por la cual se conviene que la citada empresa no es solidaria con las obligaciones del transportador. La carga viaja por cuenta y riesgo de nuestros clientes y no aseguramos las mismas de no mediar orden expresa por escrito. JAS FORWARDING DE COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de retener los documentos relacionados con esta factura y así lo aceptamos en el evento que la misma sea cancelada IMPORTANTE: Sírvase cancelar esta factura únicamente con cheque cruzado al Primer Beneficiario a favor de JAS FORWARDING DE COLOMBIA S.A.S. Resolución DIAN No 18763003084295 el 02 de Enero de 2020 al 02 de Enero de 2022 numeración habilitada 00012416 al 00019416. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, IVA REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 5229, TARIFA 9.66 X 1000.

SUBTOTAL USD	147.032,36
ADD IVA USD	0,00
TOTAL USD	147.032,36

Tipe de Cambio USD 3.765,54

ONE HUNDRED AND FORTY SEVEN THOUSAND, THIRTY TWO DOLLARS AND 36 CENTS

147.032,36 Zero Rated

CUSTOMER ID TECSOLBOG **Invoiced** USD 147.032,36 **BALANCE DUE** **USD 147.032,36**
DUE DATE 11-Aug-20

Transfer Funds To:

Bank		**SWIFT**	GEROCOBB
Account	0 833016207		
BANCO BBVA CARRERA 9 NO. 72-21; BOGOTA CO			
Pay Ref	TECSOLBOG 000016317		

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO) C.C O NIT

FAVOR CANCELAR A LA TRM DEL DIA DE PAGO MAS 20 PESOS SIEMPRE Y CUANDO NO SEA INFERIOR A LA TRM DE REFERENCIA.

Lo otro que debe subrayarse de la factura, es que, según se aprecia de la cadena de correos a que se refieren los demás anexos de la demanda, fue remitida por la vendedora, la demandante, del correo Lmartin@technitelsas.co, que corresponde a la dirección de correo electrónico que tiene ésta registrado en la Cámara de Comercio, como bien se verifica en el correspondiente certificado aportado con la demanda, al correo nataly.arbelaez@jas.com, dirección electrónica que, de acuerdo con la información que obra en la cadena de correos documentada en otro de los anexos de la demanda, pertenece a Nataly Arbelález, atañe a la Accounts Payable Specialist, Colombia, de JAS, Colombia, que registra como dirección la Calle 98 # 10 – 32 Of. 704-705, Bogota, 110221, O: +57(1) 7458980 Ext: 1100, nataly.arbelaez@jas.com.www.jas.com.

Ahora, analizados estos elementos a la luz de las normas que regulan hoy en día este tipo de efectos de comercio, es fácil concluir que extrañar en el documento la firma de su creador, no es asunto que pueda reducirse a un razonamiento tan corto como el que hizo el juzgador a-quo, como que ésta, conceptulamente, es mucho más que una grafía o un signo o símbolo, impuesto por la persona o por un medio mecánico aceptado, como lo autoriza el artículo 826 del Código de Comercio; a decir verdad, habiéndose expedido la Ley 527 citada hace más de veinte años, y atravesando el planeta entero una crisis sanitaria como la que padece actualmente, donde los gobiernos hacen esfuerzos por privilegiar el uso de las teconologías de la información, es ostensible que el proceso judicial no puede ser ajeno a ello; y menos en un caso como el presente, donde con prescindencia de cómo puede influir en la creación de un título valor esto de las tecnologías, la parte que pretende la ejecución de una obligación ha presentado un documento del que, sin muchos atisbos, se desprende que ella fue su creadora.

4. El auto apelado, en las condiciones anotadas, deberá revocarse. Mas, no con el objeto de proveer sobre el mandamiento de pago solicitado en la demanda, sino para que el juzgador a-quo vuelva sobre las demás exigencias de la demanda, a efectos de establecer si ésta es idonea, quehacer que, obviamente, habrá de adelantar, incluso, haciendo uso de la inadmisión.

Por lo brevemente expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá

RESUELVE

Primero.- REVOCAR el auto de fecha y origen anotados en el encabezado de esta providencia, para que, en su lugar, el Juzgado a-quo proceda en los términos anotados en esta decisión.

Segundo.- Oportunamente, **devolver** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas en la instancia.

Hora: 4:00 P.M.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA
OFICIO No. 4006 –819 DE 2021

Bogotá D.C.
4006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 20-47533- -43-0 **FECHA**: 2021-02-26 10:52:09
DEP: 4006 GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARÍA **EVE:** 362 DEMANDA
TRA: 400 DEM PROT JURISD **FOLIOS**: 6
ACT: 330 COMUNICACIÓN

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA CIVIL
jchaurn@cendoj.ramajudicial.gov.co
slotac@cendoj.ramajudicial.gov.co
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto:	***Proceso***	***Verbal Jurisdiccional***
	Radicación:	***2020 - 47533***
	Demandantes:	**CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A.S / ENZO FABIO CHIRO**
	Demandados:	***VOLVO GROUP COLOMBIAS S.A.S / AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S***

Respetados Señores:

AÑO DE INICIACIÓN DEL PROCESO: 2020 NÚMERO DE RADICACIÓN: 47533 TIPO DE PROCESO: DECLARATIVO**; CLASE DE PROCESO:** VERBAL**; SUB-CLASE DE PROCESO:**

APELACIÓN EFECTO SUSPENSIVO; CONTRA de SENTENCIA incorporado en **Acta No. 227 del 15 de enero de 2021, visto en la carpeta No. 40 del Expediente.**

Se remite el **EXPEDIENTE digital,** con todas sus piezas procesales en cuarenta y tres (43) archivos en **PDF**; conforme al protocolo establecido, los cuales constan de mil noventa y uno (1091) folios, el archivo de audio y video que recogió la pista de la grabación de la audiencia, la certificación que da fe que el expediente se encuentra completo con todas sus piezas procesales y que los audios funcionan correctamente y el índice donde se señalan los folios de cada archivo.

DEMANDANTE: CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A.S, identificada con numero de Nit 901.194.298-8, quien podrá ser notificada en la Carrera 10 No. 21-15, Bogotá D.C. o en el correo electrónico fdechirico@cvu.com.co

DEMANDANTE: ENZO FABIO CHIRO, identificado con cedula de extranjera 354..591, quien podrá ser notificado en la Carrera 7 No. 26-10 Piso 14, Bogotá D.C. o en el correo electrónico fdechirico@cvu.com.co

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

APODERADO: Dra. YOLANDA CARDENAS NARANAJO, identificada con C.C. No. 43.503.712 y T.P. No. 74.798 del C.S.J.; quien podrá ser notificada en la Carrera 15 No. 14-24, oficina 205 edificio royal center Duitama, Boyacá y en la carrera 11 Nº 93-72 502, Bogotá D.C. o en el correo electrónico yolocar@gmail.com

DEMANDADO: *VOLVO GROUP COLOMBIAS S.A.S*, identificada con Nit. 900.315.569-6, Dirección de notificación: Calle 25 G No. 96B-63, Bogotá D.C. o en el correo electrónico rafael.villalba@volvo.com

APODERADO: Dra. LINA MARIA LONDOÑO GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía. No. 1.130.615.798 y T.P. No. 227.572 del C.S.J, quien podrá ser notificado en la carrera 7 Nº 71-52 Torre B Piso 10 Oficina abogados, Bogotá D.C

DEMANDADO: *AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S,* identificada con Nit. 860.007.884-6, Dirección de notificación: Carrera 45 No. 127D-38/34, Bogotá D.C. o en el correo electrónico floralba.ruiz@autonal.com

APODERADO: Dr. CARLOS ENRIQUE ANGARITA ANGARITA, identificado con Cédula de Ciudadanía. No. 19.191.614 y T.P. No. 25.709 del C.S.J, quien podrá ser notificado en la carrera 7 Nº 67-02 Oficina 704, Bogotá D.C o en el correo electrónico: carlos@angaritaabogado.com

Para lo pertinente, anexo el enlace que contiene el expediente digital, sin embargo, también le llegará en archivo adjunto.

https://drive.google.com/drive/folders/1HOSYeJ4sMK9rQhkqPMAMRBKRcSbqX7aq?usp=sharing

ENVIO A USTED POR PRIMERA VEZ.

Atentamente,

PEDRO ALEJANDRO NIÑO ROA
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA

Elaboró: Teylor Peña
Revisó: Graciela Rojas
Aprobó: Pedro Niño.

OBSERVACIONES:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL TRIBUNAL

Recibido en la fecha _____ por _____

REVISADO _____

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA

CERTIFICA QUE

En cumplimiento de lo ordenado por el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil**, en sesión de 111 Sala Plena de 28 de mayo de 2018, que el Expediente con Radicado N° **2.020 – 47533** se encuentra completo (Con todas sus piezas procesales que lo conforman) y que el material de audio y/o video, contenido en archivo digital, que se utilizó para el registro de las sesiones de audiencias públicas, y/o anexos de las partes, funcionan correctamente y **NO** contiene material de audio y/o video contenido en medio magnético (DVD-CD, BLUE RAY, USB, etc.).

- El expediente **digital** consta de **mil noventa y uno (1091) folios útiles** vistos en archivos PDF, incluido **un (1*)* video** descritos así**:**

VIDEO	CARPETA	FECHA	DESCRIPCIÓN
1 video	**N° 39**	15 enero 2.021	Audiencia – Sentencia

Correspondientes a los mismos que obran en el expediente de la referencia.

Se firma en Bogotá a los **veintisiete (26) días del mes de febrero del 2.021**.

PEDRO ALEJANDRO NIÑO ROA

Elaboro: Teylor Peña

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ÍNDICE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Ciudad	Bogotá D.C.
Despacho Judicial	**Superintendencia de Industria de Comercio**
Serie o Subserie Documental	**Verbal - Acción de Protección Al Consumidor**
No. Radicación del Proceso	**2.020 - 47533**
Partes Procesales (Parte A) (demandante, denunciante, accionante)	**CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. - ENZO FABIO CHIRICO**
Partes Procesales (Parte B) (demandado, procesado, accionado)	**AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S - VOLVO GROUP COLOMBIA S A S**

EXPEDIENTE FÍSICO	
El expediente judicial posee documentos físicos:	SI____NO **X**
N° de carpetas, legajos o tomos:	**43 CARPETAS**

Nombre Documento	Fecha Creación Documento	Fecha Incorporación Expediete	Orden Documento	Número Páginas	Página Inicio	Página Fin	Formato	Tamaño	Origen	Observaciones
Demanda 2.020 - 47533	19/02/2021	19/02/2021	**1**	136	1	136	PDF	32.945 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Admisorio Demanda	19/02/2021	19/02/2021	**2**	2	137	139	PDF	84 KB	ELECTRÓNICO	
Notificación Demandado Automotora Nacional S.A.S	19/02/2021	19/02/2021	**3**	1	140	141	PDF	131 KB	ELECTRÓNICO	
Notificación Demandado Volvo Group Colombia S.A.S	19/02/2021	19/02/2021	**4**	1	142	143	PDF	131 KB	ELECTRÓNICO	
Recurso Reposición	19/02/2021	19/02/2021	**5**	15	144	159	PDF	4.521 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Recurso Reposición	19/02/2021	19/02/2021	**6**	3	160	163	PDF	1.310 KB	ELECTRÓNICO	
Fijación Fecha Recurso Reposición	19/02/2021	19/02/2021	**7**	1	164	165	PDF	129 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial	19/02/2021	19/02/2021	**8**	50	166	216		15.263 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Contestación Demanda	19/02/2021	19/02/2021	**9**	50	217	267	PDF	15.263 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Contestación Demanda	19/02/2021	19/02/2021	**10**	50	268	318	PDF	15.264 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Traslado Excepciones Previas	19/02/2021	19/02/2021	**11**	6	319	325	PDF	603 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Recurso Reposición	19/02/2021	19/02/2021	**12**	5	326	331	PDF	210 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud Inspección	19/02/2021	19/02/2021	**13**	4	332	336	PDF	186 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Poder Especial	19/02/2021	19/02/2021	**14**	3	337	340	PDF	252 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Poder Especial	19/02/2021	19/02/2021	**15**	5	341	346	PDF	261 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Contestación Demanda	19/02/2021	19/02/2021	**16**	67	347	414	PDF	3.029 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**17**	5	415	420	PDF	934 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**18**	4	421	425	PDF	158 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Resuelve Recurso Reposición	19/02/2021	19/02/2021	**19**	3	426	429	PDF	320 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Abstiene Resolver Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**20**	1	430	431	PDF	176 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Traslado Contestación Demanda	19/02/2021	19/02/2021	**21**	489	432	921	PDF	18.449 KB	ELECTRÓNICO	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ÍNDICE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Ciudad	Bogotá D.C.
Despacho Judicial	**Superintendencia de Industria de Comercio**
Serie o Subserie Documental	**Verbal - Acción de Protección Al Consumidor**
No. Radicación del Proceso	**2.020 - 47533**
Partes Procesales (Parte A) (demandante, denunciante, accionante)	**CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. - ENZO FABIO CHIRICO**
Partes Procesales (Parte B) (demandado, procesado, accionado)	**AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S - VOLVO GROUP COLOMBIA S A S**

EXPEDIENTE FÍSICO	
El expediente judicial posee documentos físicos:	SI____NO **X**
N° de carpetas, legajos o tomos:	**43 CARPETAS**

Memorial Gasto Honorarios	19/02/2021	19/02/2021	**22**	3	922	925	PDF	155 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Pronunciamiento A Dictamen	19/02/2021	19/02/2021	**23**	4	926	930	PDF	656 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**24**	2	931	933	PDF	180 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**25**	2	934	936	PDF	180 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Fija Fecha Audiencia	19/02/2021	19/02/2021	**26**	4	937	941	PDF	184 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**27**	5	942	947	PDF	389 Kb	ELECTRÓNICO	
Memorial Contradicción Dictamen	19/02/2021	19/02/2021	**28**	4	948	952	PDF	675 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Contradicción Dictamen	19/02/2021	19/02/2021	**29**	8	953	961	PDF	478 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**30**	3	962	965	PDF	207 KB	ELECTRÓNICO	
Fijación Fecha Recurso Reposición	19/02/2021	19/02/2021	**31**	1	966	967	PDF	129 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**32**	4	968	972	PDF	372 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**33**	4	973	977	PDF	372 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Descorrer Traslado	19/02/2021	19/02/2021	**34**	3	978	981	PDF	196 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Dictamen Pericial	19/02/2021	19/02/2021	**35**	35	982	1017	PDF	16.797 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud	19/02/2021	19/02/2021	**36**	2	1018	1020	PDF	274 KB	ELECTRÓNICO	
Interrogatorio Parte	19/02/2021	19/02/2021	**37**	1	1021	1022	PDF	10 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Interrogatorio Parte	19/02/2021	19/02/2021	**38**	2	1023	1025	PDF	514 KB	ELECTRÓNICO	
Audiencia 15 enero 2021-47533	19/02/2021	19/02/2021	**39**	4	1026	1030	MP4	3.71 GB	ELECTRÓNICO	
Acta Audiencia	19/02/2021	19/02/2021	**40**	3	1031	1034	PDF	305 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Sustentación RecursoReposición	19/02/2021	19/02/2021	**41**	18	1035	1053	PDF	1.118 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Reparos Recurso Apelación	19/02/2021	19/02/2021	**42**	18	1054	1072	PDF	598 KB	ELECTRÓNICO	
Sustentación Recurso Apelación	19/02/2021	19/02/2021	**43**	18	1073	1091	PDF	1.118 KB	ELECTRÓNICO	
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE:	19/02/2021									

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: 002-2019-00454-01

REF: Proceso verbal instaurado por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR contra Guisepp Ospino Isaza.

En la respectiva liquidación de costas causadas en la segunda instancia, fíjese por concepto de agencias en derecho la suma de dos (2) Salarios Mínimos Legales Vigentes.

CÚMPLASE,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
40b45a10dfe9c72a9ae6a28b8c2610ff2afc5136ac7125576cd6b65ba3f6da30
Documento generado en 26/03/2021 03:47:10 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: 007-2019-00286-01

REF: Proceso ejecutivo instaurado por Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca contra José Aníbal Aguirre Bacca.

En la respectiva liquidación de costas causadas en la segunda instancia, fíjese por concepto de agencias en derecho la suma de dos (2) Salarios Mínimos Legales Vigentes.

CÚMPLASE,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7a3d4135290af2a38db6a1bc5c5909c4328a336d96ffc9c6b8155d111862ecce
Documento generado en 26/03/2021 03:47:09 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Del estudio del plenario se advierte que el presente asunto, aparte de remitirse a este Tribunal para resolver un recurso de apelación concedido en auto del 27 de febrero de 2020 (fs. 116 al 118 archivo PDF `01 cuadernoUno), tiene pendiente uno de queja que también fuera concedido por otro auto de la misma fecha para tramitarse en esta instancia (fs. 28 al 20, PDF `01 cuadernoDos). En consecuencia, por la Secretaría del Tribunal abónese el asunto e impártase el trámite conforme corresponde.

Cúmplase,

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: 11001-3103-030-2016-00563-02

Asunto: Verbal –Simulación

Demandantes: Henry Hernán Ramírez Nieto y Luis Fernando Ramírez Nieto.

Demandados: Jaime Sotomontes Vargas, Nydia Jeannette Ramírez Nieto y Herederos Indeterminados de José María Ramírez Torres y Lilia Graciela Nieto de Ramírez.

La Secretaría imprima el trámite legal que corresponde al recurso de súplica interpuesto por los demandados Nydia Jeannette Ramírez Nieto y Jaime Sotomontes Vargas contra el auto proferido el 18 de diciembre de 2020, mediante el cual fue rechazada de plano la nulidad por estos propuesta, pretextando la causal 6ª del artículo 133 del C.G.P.

Por tanto, surtido el traslado de rigor, ingrese el asunto al Despacho de la Magistrada Clara Inés Márquez Bulla, conforme lo dispuesto en el artículo 332 del Código General del Proceso.

Hora. 4: 10 p.m

CÚMPLASE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Magistrada

(2 autos)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
Magistrada ponente

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiún (2021).

Radicado: 11001 3103 **011 2018 00347 02**

En la fecha ingresa el expediente virtual de la referencia con escrito del apoderado del extremo actor que fue radicado el pasado 2 de marzo de 2021, en el que solicita "*…resolver de fondo el recurso de apelación";* e "*indag[o] por que (sic) razones se prefiere que las decisiones se hagan en forma escrita, y no hacer uso de la oralidad y de las audiencias virtuales que tanto se mencionan en las propias normas legales de época de emergencia sanitaria; es por ello que muy respetuosamente también le solicito al Despacho, que la decisión que se adopten se haga en forma oral y que las partes puedan conocer en forma directa y en audiencia oral las decisiones que adopte el Honorable Tribunal Superior*"

Para solventar las solicitudes formuladas, debemos memorar que mediante providencia calendada 25 de febrero anterior, se declaró desierto el recurso de alzada formulado por la parte actora, por no haber sustentado los reproches concretos que formuló ante el *a quo*, dentro de la oportunidad prevista en el

artículo 14 del Decreto 806 de 2020, decisión que quedó en firme, comoquiera que no interpuso recurso alguno frente a ella.

Aunado a esto, conviene precisar que, el escrito que aduce radicó en el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá D.C., en modo alguno lo relevaba de su deber legal de sustentar la apelación en esta instancia, máxime cuando de forma clara se le indicó en el auto que admitió la alzada que de no hacerlo se declararía desierto.

Sobre este medular aspecto, debemos atender lo dispuesto en el artículo 13 del Código General del Proceso, cuando enseña que "***Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley",*** por lo tanto, el Decreto 806 de 2020, al contener normas procesales, entre ellas, el artículo 14, deben ser aplicadas por los funcionarios judiciales a partir de su vigencia; es decir, desde el 4 de junio de 2020 y por el término de dos años.

También, resulta útil memorar que, el aludido Decreto, se expidió con ocasión de la pandemia, buscando flexibilizar la atención a los usuarios y garantizar el servicio de justicia; entonces, no se trata de una nueva ley procesal, simplemente, modificó la sustentación de los reparos concretos en audiencia, por la presentación de un escrito con el mismo propósito; concediéndose al recurrente el término de 5 días para **sustentar los reproches que ventiló ante el *a quo***; de ese modo se

materializa el derecho de contradicción y defensa como presupuesto de la realización de la justicia.

En este orden, la solicitud del abogado el extremo actor que gira en torno a que se adopten decisiones de segunda instancia en audiencia no es atendible, pues solamente para los casos en que se decreten pruebas se concibió la vista pública.

2º De otra parte, el artículo 625 del Código General del Proceso, concerniente al tránsito legislativo, dispone en el numeral 5º que "*No obstante lo previsto en los numerales anteriores,* ***los recursos interpuestos****, (…),* ***se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, (…)"*****;** para este asunto, la sentencia que se cuestionó fue proferida el **27 de octubre de 2020,** de modo que aplicaba para su resolución lo previsto en el Decreto 806 de 2020, disposición vigente desde el 4 de junio pasado.

3º Asimismo, pierde de vista el peticionario que, la esencia del recurso de apelación no se modificó, con la expedición del Decreto 806 de 2020, pues continua teniendo tres etapas, a saber: **(i) la interposición; (ii) la formulación de reparos concretos ante el *a quo;* y (iii) la sustentación (escrita o en audiencia, según corresponda) ante el superior**; de donde se concluye que la sustentación, contrario a lo razonado por él, debía hacerse en esta instancia, como se le indicó en la providencia que admitió la alzada.

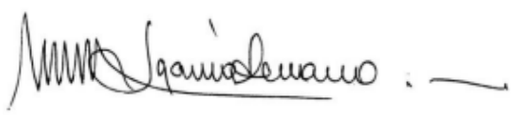
4º Finalmente, en la sentencia SU-148 de 11 de septiembre de 2019, La H. Corte Constitucional estableció que la falta de

sustentación del recurso de apelación ante el Juez de segunda instancia, caso de marras, trae como consecuencia la declaratoria de desierto, porque los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso; así lo imponen; secuela que recogió el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

En este orden, no es posible atender la solicitud del togado, pues nuestro más alto Tribunal Constitucional resolvió sobre este tema; precedente que debemos acoger los demás funcionarios judiciales.

Entonces sin lugar a más disquisiciones, se niegan las peticiones elevadas mediante escrito adiado 2 de marzo pasado, por las razones expuestas.

Por Secretaria de la Sala, COMUNIQUESE al peticionario la respuesta al correo dimagoma@hotmail.com.



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
228a5c0619f12b21cbe4482992517f1e4ca8baee9aaf020bc6301f50263936d9
Documento generado en 26/03/2021 03:11:41 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Radicación: 2018047488-032-000
Fecha: 2021-01-22 17:13 Sec.día: 27593

Trámite :490-PETICIÓN
Tipo doc. :50-SOLICITUD PRESENTACION
Aplica A: --
Remitente: 80856690-JUAN CARLOS SALINAS SILVA
Destinatario :80001-Secretaria Delegatura para Funciones Jurisdiccionales

Anexos: Entrada
Folios: 1
Encadenado: NO
Solicitud: 2018047488-000-000
Teléfono: 5940200

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA MIXTA

Magistrada Ponente
NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Discutido y aprobado en sesión de 23 de marzo de 2021.

Radicación: **2020-00431-00**
Asunto: Conflicto de Competencia de Sala Mixta.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA17-10715 de 2017, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, decídese el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado 22 Laboral del Circuito y el Juzgado 6º Civil del Circuito, ambos de Bogotá, para conocer de la demanda formulada por Vargas & Vargas Abogados Asociados S.A.S contra Odebrecht Serviços No Exterior LTD.

ANTECEDENTES

1. Vargas & Vargas Abogados Asociados S.A.S formuló demanda contra Odebrecht Serviços No Exterior LTD y, pidió, librar orden de apremio contra la ejecutada, por las siguientes sumas: i) cincuenta y ocho mil dólares americanos por concepto de capital, más los intereses de plazo y de mora causados, ii) once mil seiscientos dólares americanos por la cláusula penal, iii) los rubros correspondientes a impuestos, gravámenes y retenciones señalados en la Ley y iv) costas y agencias en derecho. Para el efecto, adjuntó como título ejecutivo el contrato de prestación de servicios profesionales jurídicos ajustado entre las partes.

Sustentó tales súplicas, esencialmente, en que, el 27 de junio de 2018, celebró el aludido contrato, el cual incumplió Odebrecht Serviços No Exterior LTD, pues a la fecha no ha realizado los pagos en los términos allí acordados, aun cuando la convocante ha cumplido a cabalidad con su gestión.

2. El conocimiento de ese escrito introductor fue asignado por reparto al Juez 22 Laboral del Circuito de Bogotá, quien lo rechazó de plano por falta de competencia, por cuanto consideró que el litigio planteado tenía origen en un contrato de prestación de servicios profesionales entre dos personas jurídicas de derecho privado y, por tanto, le correspondía asumirlo a los jueces civiles (Art.2, C.P.L).

Dicho libelo finalmente, fue repartido al Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, el que rehusó asumir el conocimiento y planteó el respectivo conflicto negativo de competencia, esgrimiendo que versaba sobre "causa laboral derivada del contrato de prestación de servicios", siendo competente el juez de esa especialidad para conocer del reconocimiento y pago de honorarios, así como de las clausulas penales, sanciones y multas, pretendidas como retribución de la actividad profesional realizada.

CONSIDERACIONES

1. La colisión aquí suscitada involucra jueces de igual categoría de la jurisdicción ordinaria y de distinta especialidad (Juez Civil y Juez Laboral Circuito), pertenecientes al mismo Distrito (Bogotá), por lo que corresponde definirlo a esta Corporación, por conductode la presente Sala, al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 139 del C.G.P.

2. La demanda, cuyo conocimiento rehúsan los dos juzgadores involucrados en el presente conflicto, versa sobre el pago de los montos relacionados en el "contrato de prestación de servicios profesionales", ajustado entre dos sociedades,esto es, Vargas & Vargas Abogados Asociados S.A.S (contratista) y Odebrecht Serviços No Exterior LTD (contratante), y está enderezada a que ésta última sea condenada a pagarle a la otraestipulante las erogaciones contenidas en dicha convención que presentó como título ejecutivo.

Es claro, entonces, que el conflicto jurídico planteado en el aludido libelo

no tiene origen en un contrato de prestación de servicios personales de carácter privado, habida cuenta que la contratista es una persona jurídica, luegomal podría predicarse frente a ella la prestación personal de un servicio, conforme lopresupone el numeral 6º del artículo 2º del C.de P. Laboral, según el cual "La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:(…) '6º. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones **por servicios personales** de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive' (…)." (negrillas fuera de texto).

Obsérvese, entonces, que litigio propuesto en el escrito introductor está enderezado a lograr la ejecución de un contrato, con el fin de lograr el pago de las sumas a que se obligó la contratante, dentro de un marco de relaciones negociales entre dos personas jurídicas.

Respecto de la competencia de los jueces laborales, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[1], sostuvo: "en efecto, de acuerdo con el artículo 2º del Código Procesal, reformado por el artículo 1° de la Ley 712 de 2001, la jurisdicción del trabajo está instituida para dirimir los conflictos jurídicos que se deriven directa o indirectamente del contrato de trabajo y en la misma forma tiene asignado el conocimiento de los conflictos jurídicos que tengan que ver con el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de naturaleza privada, cualquiera que sea la relación que les de origen, competencia que se le concedió mucho antes de la expedición de las Leyes 362 de 1997 y 712 de 2001, a través de los Decretos 456 y 956 de 1956", y que "Quiso con ello el legislador unificar en una sola jurisdicción el conocimiento y **definición de los asuntos derivados de una prestación personal de servicios de una persona natural a otra de igual condición o jurídica**, bien sea que en dicha prestación se presentara o no el elemento de la subordinación, pues lo primordial era la regulación del trabajo humano en sus diferentes facetas, el cual se convierte en el origen y en el motor de la jurisdicción laboral".

3. Pero es que, además, la controversia materia de la demanda tampoco tiene origen en un contrato de trabajo, ni concierne con un fuero sindical, ni con una organización sindical, ni con la prestación de los servicios de seguridad social, ni con los demás temas a que hace referencia los asuntos enlistados en el precitado artículo 2º.

[1] Sentencia de 26 de marzo de 2004, M.P. Luis Javier Osorio López, Rad. 21124

4. En conclusión, el conocimiento del litigio en comento, será asignado al Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, a quienpor las razones prenotadas le corresponde continuar su trámite, debiéndose comunicar lo decidido al Juez 22 Laboral del Circuito de Bogotá.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Mixta de Decisión,

RESUELVE

Primero.- DECLARAR que al Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá le corresponde conocer de la demanda promovida por Vargas & Vargas Abogados Asociados S.A.S contra Odebrecht Serviços No Exterior LTD, conforme a losmotivos expuestos.

Segundo.- Remitir el expediente al prenombrado despacho judicial, a fin de que imprima el trámite que corresponda a la susodicha demanda. PorSecretaría, cúmplase lo aquí dispuesto y deje las constancias de rigor.

Tercero.- Comunicar esta decisión al Juez 22 Laboral del Circuito de Bogotá. Líbrese la respectiva comunicación.

Hora. 4:15 P.M.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

FERNANDO ADOLFO PAREJA REINEMER
Magistrado

HERNÁN MAURICIO OLIVEROS MOTTA
Magistrado

CLAUDIA PATRICIA GRILLO TRUJILLO.
E.S.D.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
DEMANDANTE: JUAN CARLOS SALINAS SILVA
DEMANDADA: ASEGURADORA SURA.
MEMORIAL.

REF : 2018 - 047488.
EXP: 2018 - 0790

Juan Carlos Salinas Silva, quien actúo como accionante dentro del proceso de la referencia, me permito informar a este despacho que he de presentar acción de tutela en pro del principio de doble instancia constitucional y en cuanto existe un "*Defecto fáctico, en tanto surge cuando la autoridad carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión*".

Mi reclamo lo hago en tanto la ocurrencia del hecho es totalmente ACCIDENTAL, y se enmarca de manera precisa en su definición tal como lo
constata la Real Academia Española,

> **accidente**
> Del lat. accĭdens, -entis.
>
> 1. m. Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.
> **2. m. Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas. Seguro contra accidentes**.
> 3. m. Indisposición o enfermedad generalmente grave y que sobreviene repentinamente. Accidente coronario.
> 4. m. Síntoma grave que se presenta inopinadamente durante una enfermedad, sin ser de los que la caracterizan.
> 5. m. Irregularidad del terreno.
> 6. m. p. us. Pasión o movimiento del ánimo.
> 7. m. Fil. Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su esencia o naturaleza.
> 8. m. Gram. accidente gramatical.
> 9. m. Mús. Cada uno de los tres signos, el sostenido, el bemol y el becuadro, con que se altera la tonalidad de un sonido.
> 10. m. pl. Rel. Figura, color, sabor y olor que en la eucaristía quedan del pan y del vino después de la consagración.

por lo tanto en el presente caso no es viable que la autoridad actúe en contra de lo fáctico y llegar a configurar la pérdida de mi celular como algo diferente a un ACCIDENTE, ya que el hecho de haberse caído de mi camisa

o de mi pantalón, no es otra cosa que un **ACCIDENTE**, incluso si alguien me lo hurto, no se desfigura su definición, puesto que se enmarca perfectamente en la primera definición de la RAE, **"un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas",** incluso en la definición que aporta la señora superintendente del glosario de Fasecolda, no sale de la esfera de lo ocurrido como es: **"acontecimiento inesperado, repentino, e involuntario que pueda ser causa de daños a las personas o a las cosas independientemente de su voluntad".**
Así mismo en la respuesta dada en la sentencia se afirma de las exclusiones esgrimidas dentro del contrato, dando pie a la señora superintendente a asumir una causal que no existe dentro del contrato firmado y me la quiere aplicar siendo esto contrario a los artículos citados por el mismo Despacho, tales como son: 1056 co.co., 1602 c.c., 871 co.co. y 1077 co.co., toda vez que yo allegue todos los documentos peticionados por la aseguradora para la demostración del siniestro, esto bajo la gravedad del juramento, y en ninguna parte se habla que lo sucedido a mí, tal como fue la pérdida involuntaria de mi bien, sea algún tipo de exclusión para las obligaciones de la aseguradora. Es más, acá en ninguna parte se aplica lo estipulado en el art. 871 del cod. de com., donde se habla de como los contratos no se han de regir solamente por lo estipulado en ellos, sino se ha de ir más allá en búsqueda de una equidad natural, ¿pero cúal equidad cuando se le brinda la razón a una multinacional megapoderosa en base a la contestación de una demanda que se dió de manera extemporánea, y además se falla a favor de estos tratando de tergiversar la definición de un concepto preestablecido como es la definición de la palabra ACCIDENTE?.

Debo manifestar que en mi demanda inicial, yo afirmo el hecho de leer lo estipulado como exclusiones contractuales, donde en **ninguna parte** aparece como exclusión la pérdida o el hurto del bien asegurado, y del cual como ya dije anteriormente en cualquier caso, no se ha de configurar mas que en otro término o concepto o palabra, que **ACCIDENTE**, por lo cual me parece contraria la sentencia a la realidad preestablecida y más aún cuando se trata de tergiversar la definición de una palabra, incluso me parece que la señora superintendente se toma facultades más allá, creando y aplicando exclusiones que no aparecen dentro del contrato inicial, tal como afirmar que si lo roban a uno era algo previsible, pues permítame decirle que ergo de lo mismo es que uno compra el seguro.

En realidad señora superintendente ¿no sé qué mas inesperado que un hurto?, aunque en el mismo orden de lo esgrimido en la sentencia de la

corte suprema de justicia, yo no me encontraba a altas horas de la noche en lugares escabrosos, yo me encontraba desarrollando mi vida de manera normal, como lo hace un hombre serio de negocios, tal como lo hace una persona responsable dentro de la sociedad.

Por otra parte la señora superintendente le da valor a apartes de la contestación de la demanda, lo cual es totalmente inviable, toda vez que la demandada contestó la demanda de manera extemporánea y así se le hizo saber a la demandada, que su contestación no tendría valor alguno; caso contrario a lo esgrimido en la sentencia como fundamento de la decisión, incluso en este caso existe un manto de duda en cuanto a si fue; ó qué se cayó el celular por algún descuido mío, o si fue que alguien me lo sustrajo de mi bolsillo, en cualquier caso como he reiterado de manera consecutiva, estos hechos encajan de manera clara en lo determinado en la RAE como ACCIDENTE.

¿Cómo declarar de oficio una excepción que manifiestamente interpone el demandado e incluso le da su propio nombre? Esto no es más que apegarse al escrito de contestación de la demanda y darle el valor y alcance a tal escrito, incluso para sentar una sentencia.

Por lo anteriormente esgrimido he de presentar la acción de tutela en contra de esta decisión, la cual me parece que va en contra del estado social de derecho y de la tan anhelada equidad natural,

Atentamente:

JUAN CARLOS SALINAS SILVA

C.C. 80'856.690.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES

Radicación:2018047488-035-000
Fecha: 2021-02-04 17:18 Sec.día6673
Anexos: No

Trámite::506-FUNCIONES JURISDICCIONALES
Tipo doc::100-100 AUTO DE TRAMITE
Remitente: 80010-GRUPO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES UNO
Destinatario::80000-80000-DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES

Referencia: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 Y ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO-.

Número de Radicación	: 2018047488-035-000
Trámite	: 506 FUNCIONES JURISDICCIONALES
Actividad	: 100 100 AUTO DE TRAMITE
Expediente	: EXP: 2018-0790
Demandante	: JUAN CARLOS SALINAS SILVA
Demandados	: "SEGUROS GENERALES SURA"
Anexos	:

Visto el informe secretarial que antecede, se tiene que mediante correo electrónico radicado el 23 de enero de 2021 (derivado 032) ante esta Superintendencia denominado *"Recurso extraordinario de revisión – nulidad de la sentencia",* el señor Juan Carlos Salina Silva, quien fungiera dentro del plenario de la referencia como parte actora, presentó memorial dirigido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitando que *"se proceda a emitir la NULIDAD DE LA SENTENCIA dada en el proceso 2018047488 ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO, de fecha 10 de diciembre de 2018"* solicitud que es soportada en el numeral 7° del artículo 132 y el numeral 8° del artículo 355 del Código General del Proceso.

En lo que se refiere a la solicitud nugatoria, ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que este Despacho profirió sentencia escrita que resolvió en única instancia, en derecho y de manera definitiva la presente controversia el día 10 de diciembre de 2018 la cual fue notificada a las partes por estado del 11 de diciembre de 2018; es decir, es una decisión judicial que se encuentra ejecutoriada y en firme desde el 16 de diciembre de 2018.

Por su parte, el Código General del Proceso ha determinado ciertos parámetros y oportunidades durante el trámite del proceso para alegar las nulidades previstas de manera taxativa en el artículo 133 procesal y, en ese orden, dispuso que *"Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de la sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella"* (artículo 134 *Ibídem*).

A partir de lo anterior, encuentra el Despacho que la nulidad invocada por el memorialista no se adecúa a los parámetros del Código General del Proceso pues se alegó con posterioridad al fallo que puso fin al proceso y no se refiere a un vicio que nazca en sustento del fallo o a causa de éste, razón por la cual se rechazará de plano dicha solicitud de nulidad.

En todo caso, si en gracia de discusión se atendiera la solicitud nugatoria, encuentra esta Delegatura que tampoco tiene vocación de prosperidad. Ello, dado que, contrario a lo que reprocha el memorialista en lo que respecta a la causal que invoca, en el presente caso, los extremos procesales fueron citados a audiencia el 27 de septiembre de 2018 para agotar exclusivamente la etapa de conciliación prevista en la regla sexta del artículo 372 del Código General del Proceso, citación que propendió porque las partes, en un ejercicio autocompositivo, pudiesen resolver sus diferencias a través del mecanismo de la conciliación.

En ese sentido, contrario a lo manifestado en su escrito, llegada la fecha antes referida, se celebró exclusivamente la etapa de la conciliación, oportunidad en que las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio por lo que la Delegatura, al tratarse de un proceso verbal sumario en el cual no se requería del decreto de pruebas adicionales, ordenó que el expediente ingresara al despacho para proferir sentencia escrita sin que se llevaran a cabo las demás etapas contempladas en el artículo 392 *Ibídem* como lo fueran los interrogatorios a las partes o los alegatos de conclusión, tal como lo dispone el inciso final del parágrafo 3° del artículo 390 del Código General del Proceso y se evidencia a derivado 017 del expediente.

De allí que el supuesto de hecho contemplado en el numeral 7° del artículo 132 de la normatividad adjetiva y que el memorialista aquí invoca no tuvo lugar pues, al no ser necesario el decreto y práctica de pruebas adicionales a las que fuesen allegadas legal y oportunamente por el demandante, debía proferirse sentencia escrita sin agotar todas las etapas previstas en el artículo 392 del Código General del Proceso.

En consecuencia, en razón que la nulidad aquí analizada no atendió con los parámetros exigidos por el artículo 134 del Código General del Proceso, habrá de rechazarse de plano; y, si en gracia de discusión, por las razones expuestas *in extenso* en esta providencia, tampoco gozaría de resolución favorable para su promotor, máxime cuando lo que se evidencia del memorial aquí radicado es la inconformidad del extremo actor con la decisión que en derecho profirió este Despacho a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 procesal por lo que deberá tenerse en cuenta además que *"la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció"* (artículo 285 *Ibídem*).

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 318 *Ibídem* se ordenará que por Secretaría se remita el recurso extraordinario de revisión radicado ante este Despacho al Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil como quiera que, en virtud del artículo 358 de la normatividad procesal, es la autoridad competente para pronunciarse sobre este medio de impugnación.

Con todo, la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia,

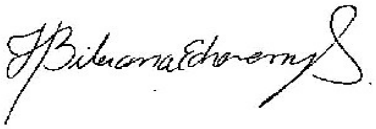
RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR de plano la solicitud de nulidad interpuesta por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el recurso extraordinario de revisión que reposa a derivado 032 del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Civil para lo de su competencia.

TERCERO: Por Secretaría, comuníquese a la parte demandante por el medio más expedito lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



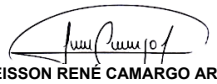
HILDA BIBIANA DEL PILAR ECHEVERRY SOLANILLA
80010-COORDINADOR DEL GRUPO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES UNO

Copia a:

Elaboró:
DANIELA DEL PILAR JAIME RIVERA
Revisó y aprobó:
HILDA BIBIANA DEL PILAR ECHEVERRY SOLANILLA

Superintendencia Financiera de Colombia
DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES
Notificación por Estado

La providencia anterior se notificó por anotación en estado fijado
Hoy 5 de febrero de 2021



JEISSON RENÉ CAMARGO ARIZA
Secretario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Radicación:2018047488-037-000
Fecha: 2021-02-21 17:50 Sec.día20
Anexos: Sí

Trámite::506-FUNCIONES JURISDICCIONALES
Tipo doc::31-31 REMISION DE INFORMACION
Remitente: 80001-Secretaria Delegatura para Funciones Jurisdiccionales
Destinatario::ATM187335-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.

Señores
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Número de Radicación : 2018047488-037-000
Trámite : 506 FUNCIONES JURISDICCIONALES
Actividad : 31 31 REMISION DE INFORMACION
Expediente : EXP: 2018-0790
Anexos : Radicados: 2018047488-032-000, 2018047488-035-000 E7

REFERENCIA: Acción: Protección del Consumidor Financiero. Ley 1480 de 2011

JUAN SALINAS
Vs
"SEGUROS GENERALES SURA"

Respetados señores:

Me permito informarles que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en auto de 4 de febrero de 2021, dispuso "*SEGUNDO: REMITIR el recurso extraordinario de revisión que reposa a derivado 032 del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Civil para lo de su competencia*".

En consecuencia, hago remisión del mencionado escrito para los fines del caso.

Cordialmente,

JEISSON RENE CAMARGO ARIZA
Secretario Delegatura para Funciones Jurisdiccionales

Copia a:

Elaboró:
JEISSON RENE CAMARGO ARIZA
Revisó y aprobó:
JEISSON RENE CAMARGO ARIZA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D. C., veintiséis de marzo de dos mil veintiuno

11001 2203 000 2020 01325 00

El suscrito Magistrado se abstiene de conocer de la "solicitud de ejecución de laudo arbitral" que intenta promover VP Ingeniería S.A.S. E.S.P. contra Turgas S.A. E.S.P., con la que se persigue el recaudo de más de $5.000'000.000, con base en un laudo arbitral. Lo anterior, por cuanto la competencia para conocer, en primera instancia, de los procesos ejecutivos de mayor cuantía corresponde a los jueces civiles del circuito (num. 1º, art. 20, *ibídem*).

El artículo 306 del C.G.P., norma que invocó la ejecutante para dirigir su demanda a este Tribunal, no introduce modificación alguna respecto de los factores generales de competencia previstos en los artículos 15 y siguientes del estatuto procesal en cita, pues simplemente prevé la hipótesis en que, el favorecido con una sentencia de condena solicite **al mismo juez de conocimiento** "que adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada".

Sobre lo que consagra el inciso que recién se transcribió, ha de verse que no fue propiamente el Tribunal del cual forma parte el suscrito Magistrado, la autoridad que profirió **el laudo arbitral** que se allegó como título ejecutivo, y, que la competencia del tribunal arbitral se extingue una vez se profiere el respectivo fallo (num. 3º, art. 105, Ley 1563 de 2012).

Véase, además, que es el mismo artículo 306 (en su inciso final), dispone que "la jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, **de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción**".

Por lo expuesto, y con soporte en lo que preceptúa el artículo 90 (inc. 2º) del C.GP., se **rechaza** la demanda ejecutiva en referencia, y en su lugar se ordena remitir el expediente al Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para que someta esta actuación a reparto entre los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá.

Notifíquese

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 011 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3ffc6a7f8ae32459749d2d0a31ed11f1c71b54612b9920765614 9d127dd4b20e

Documento generado en 26/03/2021 01:35:33 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: **11001-2203-000-2021-00260-00**
Recurso. Extraordinario de Revisión.
Demandante. Interkmp S.A.S antes KMP Consulting S.A.S.
Demandado. KPMG Internacional Cooperative.
Reparto: 15/02/2021

En atención al artículo 358 del C.G.P, y una vez examinado el cumplimiento de los requisitos previos para la procedencia del recurso, es del caso ordenar que por Secretaría, se oficie en forma inmediata a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, con el fin de que remita a esta Corporación el expediente digital del proceso citado en la referencia, con sujeción a los protocolos para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del mismo.

Advertir a la mencionada oficina que si estuviere pendiente la ejecución del fallo opugnado, deberá dar cumplimiento a lo prescrito por el inciso 1º del artículo 358 *ibídem*, esto es, disponer lo pertinente para la digitalización, a costa del recurrente, de la actuación necesaria para el cumplimiento de aquel, en los términos y forma previstos en la norma en cita.

Hora: 4:13 P.M.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

N.E.S.V. Exp. 2021-00260-00

Magistrada

27 de Marzo de 2019.

A: **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.**
SEÑOR: **JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ.**
ASUNTO: **INFORMACIÓN PREVIA PARA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**
E. **S.** **D.**

JUAN CARLOS SALINAS SILVA, mayor de edad, Abogado en ejercicio quien me identifico con cédula de ciudadanía 80'856.690 de Bogotá D.C., y L.T.V. 14.029 del C. S. de la Jud, con domicilio y residencia en esta ciudad, me dirijo a su despacho de la manera más atenta, con el fin de allegar copia de la solicitud para conciliación extrajudicial que he de presentar ante la Procuraduría General de la Nación, toda vez que me siento vulnerado con la decisión tomada por la superintendente Claudia Patricia Grillo Trujillo, el día de 12 de Diciembre de 2018 dentro del proceso 2018 - 047488, expediente 2018-0790.

No siendo otro el motivo de la presente, agradezco la atención prestada y podré ser notificado de cualquier actuación al correo electrónico salinasjuan601@yahoo.com o al móvil 3204015175,

Con el debido respeto:

JUAN CARLOS SALINAS SILVA.

21/01/2021

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
HONORABLES MAGISTRADOS SALA CIVIL.

ASUNTO:	**RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - NULIDAD DE LA SENTENCIA.**
REF:	**2018047488**
EXP:	**2018 0790**
	JUAN CARLOS SALINAS SILVA VS ASEGURADORA SURA.
RECURRENTE:	**JUAN CARLOS SALINAS SILVA.**
RECURRIDA:	**DRA. CLAUDIA PATRICIA GRILLO TRUJILLO - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.**
	SUPERINTENDENTE: JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ.

BOGOTÁ D.C.
E.S.D.

JUAN CARLOS SALINAS SILVA, mayor de edad, vecino y residente de Bogotá D.C., Abogado en ejercicio, actuando a nombre propio, quien me identifico con cédula de ciudadanía 80’856.690 de la misma capital, y tarjeta profesional 327.720 del C. S. de la Jud., me dirijo a este **TRIBUNAL DE REVISIÓN**, de la manera más atenta y respetuosa, con el fin de solicitar se proceda a emitir la **NULIDAD DE LA SENTENCIA** dada en el proceso **2018047488 ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO,** de fecha 10 de diciembre de 2018, e incluso se lleve a cabo lo dispuesto en el artículo 392 del c.g.p., por encontrarse viciada la sentencia anterior, para que así, se evacúe dicho trámite y se erija una nueva sentencia conforme a derecho. Lo anterior lo fundamento en los siguientes…

HECHOS.

1-. El día 13 de Diciembre de 2017, adquirí un equipo Huawei P10 Lite, en el supermercado Alkosto de la carrera 30 con calle 10, por el costo de $669.900 seiscientos sesenta y nueve mil novecientos pesos.

2-. Este equipo venía acompañado de un seguro, el cual en caso de que el daño fuese mayor al 75% se **haría efectivo de manera inmediata**.

3-. El día 8 de Enero de 2018, una vez en Bogotá llegando de Calarcá (Quindío), en el último trayecto de mi ruta se me ha perdido el celular durante un breve descanso o me lo sacaron del bolsillo o no sé en realidad qué sucedió con aquel elemento.
4-. Solicite a Sura se hiciera efectivo el seguro adquirido, a lo cual ellos responden negando el mismo por encontrarse inmerso entre las causales de exclusión?!!!, **las cuales al leer una a una, no se evidencia que sea como ellos lo afirman. NO EXISTE tal cláusula de exclusión.**

5-. Al ser denegadas mis pretensiones de manera directa por parte de la aseguradora y **aún después de presentar un recurso ante la misma**, decido interponer una **acción de protección al consumidor financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia.**

6-. Todo se estaba llevando de manera normal, incluso se llevó a cabo la **audiencia** de conciliación y lo demás versado en el artículo 392 del c.g.p., la cual **fue tramitada por el señor superintendente: Jorge Humberto Tinjacá, el día 27 de Septiembre de 2018, en esta se dejó en suspenso la sentencia,** toda vez que la aseguradora no tuvo ánimo conciliatorio y **se fallaría conforme lo allegado al expediente.**

7-. Siendo el día 27 de Noviembre de 2018, allegué un memorial a la superintendencia financiera solicitando se proclame la decisión a mi caso, pues ya habían pasado 2 meses desde la audiencia.

8-. El día 12 de Diciembre de 2018, recibo un correo electrónico con la decisión proferida por una superintendente diferente a quien evacuó la audiencia establecida en el art. 392 y del c.g.p.

9-. La llegada de la nueva superintendente al despacho infirió de manera directa con la decisión tomada, toda vez que pudo no haber tenido el tiempo suficiente para estudiar el expediente en debida forma y no darse cuenta de mi escrito, donde estoy solicitando conforme a la ley: **"el no tener en cuenta la contestación presentada por la demandada por ser esta EXTEMPORÁNEA, el cual fue avalado en el mismo expediente".**

10-. En ninguna parte del contrato de seguro entre sura y yo, aparece que la pérdida o hurto del bien, sea una exclusión del contrato de seguro, tal como **lo demuestro con la publicidad** allegada con la acción presentada e inmersa en el expediente.

11-. La superintendente desfigura el concepto de accidente, de manera tal que desdibuja la realidad de lo sucedido, producto del mismo le escribí un memorial el día 13 de Diciembre de 2018, en el cual expreso mi inconformidad con la decisión. (Anexo)

12-. La superintendente al desfigurar el concepto de accidente en la presente sentencia, abre paso a una **Jurisprudencia injusta, pues la misma irrumpe en la seguridad jurídica** que tiene toda persona en cuanto el valor de las palabras, no se le puede decir mutuo al hurto o viceversa, tal como no se puede desfigurar el concepto universal de accidente para acomodarlo a un punto de vista subjetivo.
12a-. La superintendente considera que uno puede advertir el momento en que a uno lo van a **atracar**, tal y como lo plasma en su sentencia, a lo cual yo respondo que el seguro lo adquirí con ese fin principalmente, más cuando se habla de una ciudad como Bogotá D.C.

13-. El elemento (celular) se me perdió obviamente a mí, no entiendo en qué otra esfera esperaba la señora superintendente se encontrará el bien, sino en la esfera de dominio del propietario, siendo esta razón absurda para **declararme responsable?!!! y negar el seguro contratado.**

14-. La señora superintendente fundamenta su decisión en la excepción de mérito llamada FALTA DE ACREDITACIÓN DEL SINIESTRO, a lo cual **allegué los documentos requeridos por Sura para el reclamo del seguro, ACREDITANDO DE ESTA FORMA EL SINIESTRO,** entre los anexos relevantes a saber son: ***i.*** denuncia a la

policía nacional, ***ii.*** denuncia a la empresa prestadora del servicio (Claro Colombia), ***iii.*** solicitud del bloqueo del equipo y demás documentos pertinentes.

15-. La señora superintendente fundamenta su decisión en la excepción de mérito llamada FALTA DE ACREDITACIÓN DEL SINIESTRO, *¿como declarar de oficio una EXCEPCIÓN que manifiestamente interpone el demandado e incluso le da su propio ?*

16-. Conforme lo anterior, la superintendente Claudia Patricia Grillo Trujillo, **no aplica lo estipulado en el auto 011** dado por el superintendente inicial Dr: Jorge Humberto Tinjacá García, donde éste afirmaba que: **"NO SE IBA A VALORAR LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, POR SU EXTEMPORANEIDAD EN TANTO A LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA".**

16a-. Acá se evidencia de manera manifiesta la **VÍA DE HECHO** de la superintendente, pues en un error grosero el sustentar su fallo en algo que ni siquiera debió ser tomado en cuenta por su EXTEMPORANEIDAD, sino que además de eso continúa agrandando el error, al no tener en cuenta las pruebas aportadas con la acción de protección al consumidor financiero, aunado a la desfiguración del concepto ACCIDENTE, dando paso a una jurisprudencia absurda.

17-. El día 14 de Febrero de 2019, presenté acción de tutela, en la cual al momento de ser resuelta, se me advierte que este es un mecanismo subsidiario y que lo acorde es la acción administrativa.

18-. De acuerdo a lo ordenado por el juez de Tutela, inicio los trámites pertinentes para llevar avante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia.

19-. El día 28 de Marzo de 2019 se radicó ante la agencia nacional de defensa jurídica del estado, el documento pertinente informando acerca de la conciliación que se iba a solicitar ante la procuraduría general de la nación -De acá en adelante p.g.n.-.

20-. El día 28 de Marzo de 2019, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de Conciliación extrajudicial.

21-. El día 10 de Mayo de 2019, se lleva a cabo la diligencia pertinente a la conciliación extrajudicial en la procuraduría 81 Judicial para asuntos administrativos, la cual anuncia que se ha de dar el fallo en una ocasión posterior tal como lo evidencia copia del acta de aquel día.

22-. En fallo de la señora Procuradora 81 Judicial para asuntos administrativos Yalith Lucía Torres Fernández, se ha decidido que este no es el medio, toda vez que los casos donde los Superintendentes actúen ejerciendo funciones Jurisdiccionales, no es viable la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tal como lo explica el Consejo de estado.

PRUEBAS.

Con el presente RECURSO EXTRAORDINARIO, solicito a este honorable cuerpo colegiado, se decreten y practiquen los siguientes elementos de prueba o medios probatorios:

a-. Interrogatorio de parte.
En este acápite, de ser necesario solicito se evacuen los interrogatorios de:

- La representante y apoderada de SURA para la audiencia de conciliación, la doctora: **Nohora Ramírez Tovar**, identificada con c.c. 55'167.852 y T.P. 86.969.

- **Juan Carlos Salinas Silva,** como actual recurrente.

- El señor superintendente **Jorge Humberto Tinjacá,** quien evacuó la audiencia de conciliación entre SURA y el suscrito, además declaró la **EXTEMPORANEIDAD A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE SURA**.

- La superintendente **Claudia Patricia Grillo Trujillo**, persona quien falló.

b-. Pruebas documentales.

Acá solicito honorables magistrados, se decreten y practiquen las siguientes:

1-. Todo lo inmerso en el expediente 2018 0790, referencia 2018047488. **JUAN CARLOS SALINAS SILVA VS ASEGURADORA SURA.** En esta se encuentra:

- Copia de la factura de compra.
- Copia de mi cédula de ciudadanía.
- Copia del documento de seguros sura, llamado: "condicionado solo daños alkosto"
- Copia de la denuncia presentada a la policía nacional, estación 18 Rafael Uribe Uribe, bajo el número único **11001610253520180099**.
- Copia de la solicitud de bloqueo del equipo a la empresa prestadora del servicio de telefonía Claro).
- Copia de las exclusiones esgrimidas por la aseguradora SURA, extraídas de su página de internet
- Copia del escrito con fecha 15 de Enero de 2018, donde me allego a SURA para solicitar se me haga el pago del seguro contratado.
- Copia de la respuesta dada por SURA el día 18 de Enero de 2018.
- Copia del escrito de fecha 3 de Julio de 2018, donde me opongo a las excepciones presentadas a la contestación de la demanda por ser extemporánea.
- Copia de mi queja presentada a la superintendente de fecha 13 de Diciembre, donde expreso mi inconformidad con la decisión y que he de presentar acción de tutela en su contra.
- Copia de la sentencia.

2-. Copia escrito del 13 de diciembre de 2018, donde advierto a la superintendente que he de iniciar las acciones pertinentes para que esta decisión quede sin piso fundamento alguno, por ser contraria a la realidad y altamente abusiva.

3-. Copia del radicado del 14 de Febrero de 2019, donde por sorteo le ha tocado conocer de la acción de tutela al juzgado 28 laboral del circuito, bajo el consecutivo 2019-00140.

4-. Copia del radicado fechado el 28 de marzo de 2019, donde advierto a la superintendencia financiera de colombia, que he de solicitar audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad ante la procuraduría, pues he de presentar

acción administrativa en contra de lo decidido por la superintendente **Claudia Patricia Grillo.**

5-. Copia de la solicitud de conciliación extracontractual radicada ante la procuraduría el día 28 de marzo de 2019.

6-. El 10 de Mayo se celebra la audiencia previa de conciliación judicial como requisito de procedibilidad de una acción o medio de reparación directa, ante la procuraduría 81 judicial I para asuntos administrativos. **(3)**

6a-. Durante esta, se deja en suspenso el acta y la decisión que se ha de dar conforme a derecho, toda vez que la apoderada de la superintendencia financiera de colombia, arguye que este no es la vía para reclamar lo pretendido.

c-. Por carga dinámica de la prueba.

Todas las que obren en poder tanto de la demandada inicial: ASEGURADORA SURA, como aquellas que reposan dentro del expediente en la superintendencia financiera de Colombia.

Fundamentos y razones de derecho.

La actual nulidad, la presento con fundamento en los artículos 132 y subsiguientes del código general del proceso, fundamentalmente en el numeral 7°, el cual afirma qué: **"Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación".** Pues dicha decisión de la superintendente no solo afecta de forma el proceso, sino que obviamente de fondo tiene efectos perversos y antijurídicos con "su definición" de accidente.

Por otra parte afirmó, que es esta la oportunidad procesal pertinente para presentar el recurso extraordinario de revisión, por llevar intrínseca una nulidad; toda vez que como se ha demostrado con el acervo probatorio, se han presentado de manera previa, una tutela en contra de la decisión tomada por la superintendente financiera, además de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuraduría general de la nación, conforme el fallo del juez de tutela.

La actual solicitud de **NULIDAD** impetrada mediante el recurso extraordinario de **REVISIÓN,** conlleva un interés que va mucho más allá de lo económico, pues lo que en este momento se busca, **es la nulidad completa de esta sentencia**, puesto que al ser proferida por autoridad competente, se convierte en jurisprudencia, y nada más peligroso que dejar una sentencia de este calibre en el limbo y sin ser impugnada de alguna manera, pues como lo demuestro con la **definición de la palabra ACCIDENTE según la R.A.E. e incluso la definición de fasecolda que fue allegada por la misma superintendente, se evidencia que es una sentencia grosera que desvirtúa de manera fehaciente e ilógica el término de accidente**.

Asimismo la presente solicitud de revisión la fundamento en el **artículo 355 del código general del proceso numeral 8°** el cual dice: "existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible de recurso".

COMPETENCIA.

Conforme a la naturaleza de la acción, el juez natural, fuero de las partes, territorialidad y demás factores, considero que es este el cuerpo encargado de dirimir el presente conflicto. Aunado a lo estipulado en el artículo 31 del c.g.p.: "*COMPETENCIA DE LAS SALAS CIVILES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES. Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil: 1… ,* ***2. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales...***".

JURAMENTO.

Juro, no haber presentado alguna otra acción del mismo nivel o similar, fundada en las mismas pretensiones, con los mismos hechos y partes ante ninguna otra autoridad.

JURAMENTO ESTIMATORIO.

Considero que por el desgaste, al SURA no reconocer y admitir lo pactado en el contrato de seguro, por la cantidad de tiempo, por la calidad de las partes y los demás factores inherentes al trámite de esta reclamación como se observa en el expediente, se me debe indemnizar con una suma muy diferente a lo pactado al inicio y aunado a eso, se le debe llamar la atención de manera contundente a este tipo de empresas, las cuales colocan tantos obstáculos para evadir cumplir lo pactado. Indignante.

NOTIFICACIONES.

En este acápite debo incluir a:

1-. El convocante recibirá notificaciones en el correo electrónico: abogado juancarlossalinassilva@gmail.com o en el móvil 3204015175 de preferencia, o en la oficina Calle 12b.

2-. La aseguradora SURA, pues es quien debía responder de manera inmediata al inicio del reclamo por el respectivo seguro contratado, y a causa de su renuencia es que se ha llevado a cabo todo este tedioso proceso, recibirá notificaciones en la sucursal corporativa de Bogotá D.C., ubicada en la carrera 11 N° 93-46.

3-. La superintendencia Financiera de Colombia lo hará en la Calle 7 N° 4-49 Bogotá, D.C. o en el correo electrónico notificaciones_ingreso@superfinanciera. gov.co

Agradezco la atención prestada al actual recurso extraordinario, y podré ser notificado de cualquier decisión, requerimiento o demás, conforme lo expresado en el acápite notificaciones,

Cordialmente:

JUAN CARLOS SALINAS SILVA

A: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ASUNTO: SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAPROCESAL.
CONVOCANTE: JUAN CARLOS SALINAS SILVA.
CONVOCADO: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
DOCTORA: CLAUDIA PATRICIA GRILLO TRUJILLO.
E.S.D.

JUAN CARLOS SALINAS SILVA, mayor de edad, Abogado en ejercicio, vecino y residente en esta ciudad, quien me identifico con cédula de ciudadanía N° 80'856.690 de Bogotá, y licencia temporal vigente 14.029 del C. S. de la Jud., actuando como convocante en la presente petición, me dirijo a su Despacho de la manera más atenta, para solicitar se lleve a cabo **AUDIENCIA EXTRAJUDICIAL DE CONCILIACIÓN** entre las partes en referencia, lo anterior toda vez que me siento vulnerado con la decisión tomada por parte de la superintendente, por lo tanto he de agotar el procedimiento requerido establecido en la ley, con el fin de presentar una eventual acción de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, fundamentando mi petitum en los siguientes:

HECHOS.

1-. El día 13 de Diciembre de 2017 adquirí un equipo Huawei P10 Lite en el supermercado Alkosto de la carrera 30 con calle 10, por el costo de $669.900,

2-. Este equipo venía acompañado de un seguro, el cual en caso de que el daño fuese mayor al 75% se haría efectivo de manera inmediata.

3-. El día 8 de Enero de 2018 llegando de Calarcá (Quindío), a la ciudad de Bogotá, en el último trayecto de mi ruta, se me ha perdido mi celular durante un breve descanso.

4-. Solicite a Sura se hiciera efectivo el seguro adquirido, a lo cual ellos responden negando el mismo por encontrarse inmerso entre las causales de exclusión??!!, **las cuales al leer una a una, no se evidencia que sea como ellos lo afirman. No hay tal cláusula de exclusión.**

5-. Al ser denegadas mis pretensiones de manera directa por parte de la aseguradora y aún después de presentar un recurso ante la misma, decido interponer una acción de protección al consumidor financiero ante la superintendencia financiera de Colombia.

6-. Todo se estaba llevando de manera normal, incluso se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fue tramitada por el señor superintendente Jorge Humberto Tinjacá el día 27 de Septiembre de 2018, en esta se dejó en suspenso la sentencia, toda vez que la aseguradora no tenía ánimo conciliatorio.

7-. Siendo el día 27 de Noviembre de 2018, allego un memorial a la superintendencia solicitando se proclame la decisión a mi caso.

8-. El día 12 de Diciembre de 2018, recibo un correo electrónico con la decisión proferida por una superintendente diferente a quien evacuó la audiencia de conciliación.

9-. La llegada de la nueva superintendente al despacho pudo haber interferido con la decisión tomada, toda vez pudo no haber tenido el tiempo suficiente para estudiar mi expediente.

10-. En ninguna parte aparece que la pérdida o hurto del bien sea una exclusión del contrato de seguro.

11-. La superintendente desfigura el concepto de accidente, de manera tal que desdibuja la realidad de lo sucedido, producto del mismo le escribí un memorial el día 13 de Diciembre de 2018, en el cual expreso mi inconformidad con la decisión. (Anexo)

12-. La superintendente considera que uno puede advertir el momento en que a uno lo van a **atracar**, tal y como lo plasma en su sentencia, a lo cual yo respondo que el seguro lo adquirí con ese fin principalmente, más cuando se habla de una ciudad como Bogotá D.C.

13-. El elemento (celular) se me perdió obviamente a mí, no entiendo en qué otra esfera esperaba la señora superintendente se encontrará el bien, sino en la esfera de dominio del propietario, siendo esta razón absurda para declararme como responsable y negar el seguro contratado.

14-. La señora superintendente fundamenta su decisión en la excepción de mérito llamada FALTA DE ACREDITACIÓN DEL SINIESTRO, a lo cual yo allegue los documentos requeridos por Sura para el reclamo del seguro ACREDITANDO DE ESTA FORMA EL SINIESTRO, entre ellos a saber: *i.* denuncia a la policía nacional, *ii.* denuncia a la empresa prestadora del servicio (Claro Colombia), *iii.* solicitud del bloqueo del equipo y demás documentos pertinentes.

15-. La señora superintendente fundamenta su decisión en la excepción de mérito llamada FALTA DE ACREDITACIÓN DEL SINIESTRO, ¿como declarar de oficio una EXCEPCIÓN que manifiestamente interpone el demandado e incluso le da su propio nombre, y que incluso el anterior superintendente ya se había pronunciado, afirmando que no se iba a valorar la contestación de la demanda?

16-. El día 14 de Febrero de 2019, presentó acción de tutela, en la cual al momento de ser resuelta, se me advierte que este es un mecanismo subsidiario y que lo acorde es la vía administrativa.

PRETENSIONES.

1-. Se deje sin validez la decisión tomada por la señora superintendente CLAUDIA PATRICIA GRILLO TRUJILLO, esto por vulnerar las formas procesales preestablecidas.

2-. Se deje sin validez la decisión tomada por la señora superintendente, toda vez que fundamenta su decisión en un escrito que no tiene peso jurídico tal como lo establece el artículo 97 del código general del proceso.

3-. Se declare lo estipulado en el auto 011, en el cual se evidencia la decisión del señor Superintendente JORGE HUMBERTO TINJACÁ GARCÍA de TENER POR NO CONTESTADA LA DEMANDA, toda vez que se realizó de manera extemporánea. (Anexo)

4-. Se condene a la aseguradora SURA, al pago de lo establecido al momento de la compra del celular, es decir el pago del 75% del bien cuando exista un DAÑO TOTAL.

5-. Se condene a la aseguradora SURA al pago de costas procesales y agencias en Derecho, toda vez que llevo más de un año en los trámites pertinentes para el pago del seguro contratado, lo anterior dentro de la sana crítica.

PRUEBAS

- Copia de la factura de compra.

- Copia de la denuncia presentada a la policía nacional.

- Copia de la solicitud de bloqueo del equipo a la empresa prestadora del servicio de telefonía.

- Copia de las exclusiones esgrimidas por la aseguradora SURA, extraídas de su página de internet

- Copia del escrito con fecha 15 de Enero de 2018, donde me allego a SURA para solicitar se me haga el pago del seguro contratado.
- Copia de la respuesta dada por SURA el día 18 de Enero de 2018.

- Copia del escrito de fecha 2 de Julio de 2018, donde me opongo a las excepciones presentadas a la contestación de la demanda por ser extemporánea.

- Copia de mi queja presentada a la superintendente de fecha 13 de Diciembre, donde expreso mi inconformidad con la decisión y que he de presentar acción de tutela en su contra.

- Copia del radicado del 14 de Febrero del presente año, donde por sorteo le ha tocado conocer de la acción de tutela al juzgado 28 laboral del circuito.

- Todas las que obren en poder tanto de la demandada inicial ASEGURADORA SURA, como aquellas que reposan dentro del expediente en la superintendencia financiera de Colombia.

CUANTÍA.

La presente acción sigue siendo de mínima cuantía, pero aún así es muy importante sentar jurisprudencia sobre este tipo de casos, donde las aseguradoras interponen cualquier cantidad de excusas para no cumplir con lo pactado en el contrato de seguro, y casos en los cuales se ve afectada principalmente personas de escasos recursos; siendo en esta óptica visible la gran desigualdad que existe entre una parte y la otra.

La catálogo en este rango toda vez que pienso que la condena no ha de superar los 40 s.m.l.m.v.

RAZONES DE DERECHO.

Considero que con la decisión tomada por parte de la superintendente, se vulneran formas preestablecidas, tal como el fundamentar su decisión en una excepción de mérito la cual evidentemente es propuesta por la demandada, sin embargo esta excepción es propuesta de forma extemporánea; aunque yendo más allá si se ha de valorar dicha excepción, se

cae de toda lógica lo afirmado, en el fallo, toda vez que yo acredite el siniestro, esto bajo la gravedad del Juramento.

Por otra parte con la decisión de la señora superintendente por tratarse de un proceso de mínima cuantía, el mismo no cuenta con recurso alguno (decisión está que aún encontrándose plasmada en la ley, vulnera lo estipulado en el artículo 31 constitucional), haciendo aún más dispendiosa la tarea del reconocimiento de mis derechos como usuario, no me imagino cuantos pierden sus pleitos y deben renunciar a una verdadera justicia material.
En el mismo sentido expreso que se me vulnera la correcta administración de Justicia por incurrir en "Defecto fáctico:, en tanto surge cuando la autoridad carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión", toda vez que fundamenta su decisión en un escrito que siquiera debió ser valorado. Aunque aún siendo valorado el mismo, no hay razones suficientes para desestimar la obligación que tiene la aseguradora conmigo, el asegurado, puesto que ellos afirman una exclusión que no se evidencia en lo condicionado por ellos. (Anexo)

JURAMENTO ESTIMATORIO.

En este instante considero que lo pertinente es tasar una suma entre $2'000.000 y $4'000.000 millones de pesos, toda vez que ha sido aún mayor el desgaste en el trámite por que se reconozcan mis derechos que lo prometido por la aseguradora en un comienzo, es decir el 75% del valor del bien.

Esto lo afirmo toda vez que el tiempo invertido en desplazamientos, presentación de acciones, cumplimiento de citas, términos y demás, que son inherentes a la responsabilidad de iniciar una acción y no dejarla a la deriva **por más de un año;** siendo algo tan mínimo para una multinacional de estas, como reconocer lo pactado, sin alegar ninguna exclusión, **toda vez que la misma no se registra dentro de las mismas que se hallan estipuladas por la misma aseguradora en su página de internet**, -tal como se evidencia en el anexo impreso aportado con las pruebas-, a la vez es super injusto con el usuario quien deposita su confianza en dichas multinacionales ya que son quienes han de cumplir a la mayor brevedad, sin este tipo de dilaciones y maniobras.

NOTIFICACIONES.

El convocante recibirá notificaciones en el correo electrónico abogado juancarlossalinassilva@gmail.com o en el móvil 3204015175.

La convocada lo hará en la Calle 7 No. 4-49 Bogotá, D.C. o en el correo electrónico notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co

JURAMENTO.

Juro no haber presentado ninguna otra solicitud de conciliación ante ninguna otra autoridad u otra instancia.

Por lo anterior señor Procurador(a) solicito se proceda a convocar a la señora superintendente, para agotar el requisito de procedibilidad y en lo posible finiquitar este traspié en esta misma instancia,

Con el usual respeto:

JUAN CARLOS SALINAS SILVA.
C.C. 80'856.690.
CEL: 320 401 51 75.

Acudo a usted señor(a) Juez, toda vez que este tipo de acciones no tiene recurso y de esa manera se viola el derecho fundamental a la doble instancia esgrimido en el artículo 31 de la constitución nacional, y que de igual manera se encuentra preestablecido en tratados internacionales, siendo en estos días una máxima humana, la cual no puede ser despreciada.

La superintendente interpretó mal mi pretensión, en cuanto solicito se me cancele lo ofertado por ellos, es decir el 75% del valor del bien asegurado, no el 100% como ella lo afirma en el auto 2018047488-020, sentencia esgrimida y notificada el día 12 de Diciembre.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Proceso No. 11001319900120162778**9 <u>03</u>**
Clase: VERBAL
Demandante: WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION
Demandada: EDIFICIO WORLD TRADE CENTER

Comoquiera que lo realmente a decidir aquí es la apelación de un **auto**, este asunto no podía someterse a reparto como "**sentencia**", razón por la cual se ordena que por secretaría se hagan las correcciones correspondientes, tanto en el Sistema de Información de Procesos "Justicia Siglo XXI", como en la carátula del cuaderno de esta instancia.

CÚMPLASE

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
60588cffaa0bff91072eff5709fc2c29ad0c91d764ab328745fb581f6c310153

Documento generado en 26/03/2021 04:04:13 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto, por la apoderada de la demandada MVH Inversiones SAS, contra el auto que prescindió de la declaración del perito Camilo Illera emitido en audiencia del 11 de noviembre de 2020, por la Superintendencia de Industria y Comercio-Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

I. ANTECEDENTES

1.- BR Beauty Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao Ltda., por intermedio de apoderado judicial, demandó a M.V.H. Inversiones S.A.S. para que se declare la infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la marca nominativa *Brasil Cacau,* para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de marcas, de la cual es titular la demandante.

2.- Tras ser admitida la acción y debidamente notificada a la convocada, ésta, además de realizar la réplica, demandó en reconvención a BR Beauty Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao Ltda., por considerar el acaecimiento de actuaciones que se enmarcan dentro del régimen de competencia desleal.

3.- Surtido el respectivo trámite, el 18 de julio de 2019, se llevó a cabo la audiencia de que trata el canon 372 del Código General del Proceso, en la cual se adelantaron las etapas de conciliación, interrogatorios de parte, fijación de litigio y decreto de pruebas.

4.- El 11 de noviembre de 2020, se continuó con la celebración de la audiencia ordenada en el art. 373 del C.G.P., en ella, la Delegatura

prescindió de recibir la declaración de Camilo Illera, perito convocado a esa vista pública para resolver los cuestionamientos pertinentes; consideró la Jueza que, siendo llamado por el extremo pasivo, en calidad de testigo y dada su inasistencia, se debían aplicar los efectos establecidos en el artículo 218 del C.G.P., más no, puede derivarse la carencia de valor de la experticia adosada por la demandante, porque, al contestar la demanda, MVH Inversiones, no lo requirió en ese sentido.

5.- Inconforme con la anterior determinación, la letrada impetró recurso de reposición y en subsidio, el de apelación, para que se accediera a la práctica de esa prueba dada la justificación explicada, o en su defecto, se declare sin valor la experticia aportada por BR Beauty, de conformidad con el art. 228 de la codificación procesal adjetiva, el primero fue negado y el segundo, declarado improcedente, impetrándose la queja.

6.- En proveído del 15 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior, resolvió la queja, declarando mal denegada la apelación, consecuentemente, en la presente decisión, se estudia lo pertinente.

7.- El 18 de diciembre de 2020, el apoderado de MVH Inversiones SAS, remitió escrito con la sustentación del recurso, donde solicita, de manera principal, se apliquen las consecuencias de la inasistencia del perito, estatuidas en el art. 228 del C.G.P. o en su defecto, se tenga en cuenta que el experto no pudo estar presente al inicio de la audiencia por una situación laboral y cuando se conectó, la Jueza no accedió a recibir su declaración tras considerar que ya había emitido un auto; por tanto, pretende que, se reciba esa prueba en las condiciones señaladas en la norma citada.

II. CONSIDERACIONES

8.- El recurso de apelación se circunscribe a debatir la conclusión del *a quo* de considerar que la declaración del señor Camilo Illera, es meramente una prueba testifical, más no, una verdadera contradicción al dictamen pericial rendido por el convocado y aportado por la parte demandante como anexo al escrito introductorio del litigio; se procura en primer término que, no se tenga en cuenta la experticia, dada la inasistencia del perito, o en su defecto, señalar fecha y hora

para su práctica, pero no como un testimonio, sino para los efectos de refutación establecidos en el art. 228 del C.G.P.

Se advierte, desde ahora, que se revocará la providencia apelada, Para argumentar la decisión que se anticipa, se expondrán las siguientes razones:

8.1.- El referido artículo 228 preceptúa: "*La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá* ***solicitar la comparecencia del perito a la audiencia****, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al* ***perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen****. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.*

Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez."

Entonces, las posibilidades que tiene la parte contra la que se aduce un dictamen pericial son: i) solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, ii) aportar un nuevo dictamen o presentar las dos peticiones, cualquiera de éstos eventos, debe hacerse dentro de los momentos procesales señalados por la ley para el efecto, esto es, dentro del término de traslado de la demanda, en la contestación, cuando se corre traslado de las excepciones de mérito o dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia que pone en conocimiento de las partes, la experticia.

Respecto a la prueba documental, el artículo 243 del estatuto procesal vigente, preceptúa: "*Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones,*

etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares."

Igualmente, las oportunidades que tienen los contendientes para aportar al proceso, las pruebas documentales que pretendan sean valoradas por el Juez, son: con la presentación de la demanda, en la contestación y cuando se corre traslado de las excepciones de mérito.

8.2.- Se avizora la necesidad de precisar las solicitudes probatorias, así como el decreto de las mismas y así evitar la confusión suscitada en la providencia impugnada.

Obra en el legajo, un "*Estudio de Mercado- Focus Group-CONFUSIÓN DE MARCA*" suscrito por Camilo Illera y Miguel Alejandro Espinosa, aportado como video y conclusiones escritas, por la parte demandante al momento de la iniciación de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, probanza que fue tenida como ***documental*** (minuto 2:00 continuación de la audiencia 3:08 p.m.) y en la contestación de la demanda, de MVH Inversiones SAS, se solicitó, recibir la declaración de los dos expertos, para que informaran al despacho "*las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen y ejecución al Focus Group, encargado por Vera Abogados S.A. a expensas de BR Beauty, los resultados alcanzados, el estudio utilizado, cómo se eligieron a los 12 participantes, quién diseñó las preguntas, entre otros.*" En el auto proferido el 18 de julio de 2019, el A quo decretó la práctica de la prueba ***testimonial*** de Camilo Illera (minuto 6.41 continuación de la audiencia 3:08 p.m.)

8.3.- BR Beauty en el hecho décimo tercero de la demanda principal, anuncia que aporta un estudio de mercado- focus group" para establecer la confundibilidad entre la marca registrada "BRASIL CACAU" y el signo infractor "CACAU BRASILEIRO".

Y en la contestación de aquella, frente a ese hecho puede leerse: "(…) *Es equivocada la metodología y la conclusión que allí se cita. La metodología de "focus group" es equivocada porque no es estadísticamente representativa (…) y equivocada la conclusión, ya que una expresión carente de distintividad y necesaria, no puede ser tomada como fuente de confusión y asociación* (…)"

El 11 de noviembre de 2020, al inicio de la audiencia, se informó a la Jueza que el experto, por razones laborales, no podía asistir a la misma y le fue solicitado que atendiera tal intervención en el decurso de la vista pública, una vez, le fuera viable al declarante, lograr

conectividad o se señalara nueva fecha y hora para la recepción de esa prueba, el despacho resolvió prescindir de esa prueba testimonial.

8.4.- Entonces, cierto es que la declaración de Camilo Illera fue solicitada como testimonio y en esos términos fue decretado, empero, el Estudio de Mercado- Focus Group-CONFUSIÓN DE MARCA", no fue aportado, ni decretado como una prueba pericial, claramente la Juez aceptó su introducción bajo las reglas del art. 243 del C.G.P., así lo señaló en la audiencia del 18 de julio de 2019, al emitir el proveído: "(…) *documentales, se decretan como pruebas documentales las allegadas con la demanda principal (…) el folio 161 del cuaderno dos, también corresponde a un CD que también contiene un video en el que se muestra una actividad de encuesta con varios estilistas con el propósito de analizar el producto de la parte demandante con el de la demandada* (…) *se anunciaron que se iban a allegar al proceso dictamen pericial de un químico farmacéutico con énfasis en cosméticos, un traductor oficial en portugués y un experto en mercado, (…) en ese orden de ideas se decretan los dictámenes periciales para que la parte demandada los allegue en un término de sesenta días calendario para que los aporten al expediente* (…)"

Es decir, las únicas probanzas periciales decretadas fueron: un químico farmacéutico con énfasis en cosméticos, un traductor oficial en portugués y un experto en mercado, las cuales, deberá allegar el interesado en el término concedido por la Jueza; el Estudio de Mercado- Focus Group-CONFUSIÓN DE MARCA" hecho por Camilo Illera y Miguel Alejandro Espinosa, se introdujo al plexo como prueba documental y así deberá ser controvertida por los litigantes y analizada por la togada a la hora de dirimir la litis. Por ello, no hay lugar a discutir si la declaración del señor Illera, solicitada por MVH Inversiones ha de entenderse como un testimonio o como la contradicción al dictamen en los términos del art. 228 procesal. Se itera, el estudio de mercado es una prueba documental.

8.5. En lo atinente a la inasistencia del tantas veces mencionado declarante, se observa que en el trámite de la audiencia realizada el 11 de noviembre de 2020, no se aportó por la apoderada de la parte demandada la citación al testigo, ni el trámite adelantado ante el empleador; de manera que, los demás contendientes y la Jueza, pudieran revisar con estrictez el cumplimiento de lo reglado en el art. 217 del C.G.P., sólo una vez desatada la queja, se aportó la cadena de correos cruzados entre abogado y testigo; además, debe tenerse en cuenta que si bien el señor Illera no se presentó al inicio de la

audiencia, la abogada dejó claro, desde un comienzo que podría comparecer en el periodo comprendido entre las doce del día y las dos de la tarde y la audiencia se desarrolló durante todo el día hasta las cuatro de la tarde, por ende, se hubiese podido recibir tal probanza en la oportunidad señalada para tal efecto.

Recuérdese que las pruebas son del proceso y "*Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.*"[1] Entonces, sin desconocer las reglas propias para la práctica de cada una de ellas y la forma y oportunidad en la que es viable justificar la inasistencia, el Juez debe propender por ilustrar su propio conocimiento de los hechos que fundan el litigio objeto de resolución, de tal forma que, pueda tener el mayor grado de certeza, por tanto, no era viable prescindir de aquella declaración.

8.6. Corolario de lo anterior, la declaración de Camilo Illera no puede considerarse como una contradicción a un dictamen porque el estudio de mercado- Focus Group-confusión de marca, fue decretado como prueba documental, además, deberá señalarse nueva fecha y hora para la comparecencia del mismo, previa acreditación de la citación en los términos del art. 217 procesal.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil,

RESUELVE

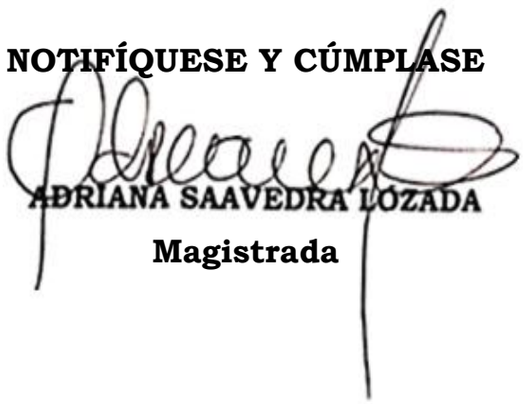
PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por la Superintendencia de industria y Comercio el 11 de noviembre de 2020 dentro del proceso adelantado por BR Beauty Cosméticos contra MVH Inversiones SAS, que prescindió de la declaración de Camilo Illera, conforme a lo argumentado en precedencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Jueza de instancia que señale nueva fecha y hora para la recepción del testimonio de Camilo Illera y la sociedad demandada, deberá acreditar el cumplimiento del art. 217 del C.G.P.

[1] Artículo 164 del C.G.P.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, por no encontrarse causadas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	:	PRADOS DE LA COLINA II P.H.
DEMANDADOS		CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.
CLASE DE PROCESO	:	VERBAL.

Durante el término de ejecutoria del auto admisorio, la parte demandante solicitó la declaración de Lilia Ester Ashook V., Jason Azuero y Jorge Alberto Rodríguez, todos ingenieros, por cuanto el "juez de instancia ha debido interpretar la solicitud de la prueba testimonial técnica en conjunto con la demanda como un todo y no de forma aislada".

En efecto, de los dos primeros fueron solicitados su decreto y práctica con el libelo petitorio[1] y su reforma[2], sin especificar los temas sobre los cuales iban a declarar, quienes, además, elaboraron, junto con Harold Alberto Muñoz M., un informe pericial a nombre de la empresa Ingeoestructuras Ltda.[3].

No obstante, de ninguna de esas declaraciones fue ordenada su práctica en el auto que decretó pruebas del 26 de noviembre de 2020[4]. Pero el a quo se pronunció adversamente sobre ellas en la audiencia del 16 de diciembre siguiente, no solo porque quien las pidió no precisó sobre qué puntos recaerían, sino también por haber declarado otros dos testigos sobre todos los hechos de la demanda, por lo que los limitó en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 212 del CGP[5]. La parte actora insistió en su práctica (sin especificar recurso), "pero acojo lo que su señoría determine"[6], la cual fue confirmada[7].

Por lo tanto, no procede la petición probatoria en segunda instancia, puesto que no fue solicitada de común acuerdo por las partes, no se dejaron de practicar sin culpa de la demandante, todo lo contrario, frente a la negativa de su decreto y práctica pudo formular los recursos de reposición y apelación, lo que no hizo; ni versa sobre hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad para pedirlos en

---

[1] Pdf. 01Demanda. Pág. 14
[2] Pdf. 16ReformaDemanda. Pág. 23.
[3] Pdf. 01Demanda. Págs. 46-324 y pdf. 16ReformaDemanda. Págs. 32-118.
[4] Pdf. 64AutoFijaFechaAudiencia. Págs. 3-5.
[5] Video 69SentenciaParteDos. Min. 38:30.
[6] Ibid. Min. 42:35.
[7] Ibid. Min. 43:50.

primera instancia, ni se trata de documentos que no pudieron aducirse por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria (artículo 327 ibid.).

Motivo por el cual el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: Reconocer personería al abogado Andrés Humberto Vásquez Álvarez, identificado con la T.P. 109.063, del C.S. de la J., para que represente los intereses de la parte demandante conforme al poder conferido.

SEGUNDO: Negar la petición probatoria de la parte demandante.

Notifíquese



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: 001-2019-00814-01

REF: VERBAL DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO- INSTAURADO POR MAPARCOL SAS CONTRA JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA SA.

En la respectiva liquidación de costas causadas en la segunda instancia, fíjese por concepto de agencias en derecho la suma de dos (2) Salarios Mínimos Legales Vigentes.

CÚMPLASE,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
35854f7efcf09d1d885fd25fe67b343b32c22a57079e3366cf455957116f446c
Documento generado en 26/03/2021 03:47:15 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: **José Alfonso Isaza Dávila**

Radicación: 110013199001-2019-29266-01
Demandante: Armando Mario Rojas Chaves y otro
Demandado: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Proceso: Verbal
Trámite: Súplica
Estudiada y aprobada en Sala Dual de 25 de marzo de 2021.

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Decídese el recurso de súplica propuesto por la parte demandante, contra el auto de 15 de febrero de 2021, mediante el cual se declaró la nulidad de lo actuado, a partir del fallo de primera instancia de 4 de agosto de 2020 y se ordenó devolver el expediente al despacho de origen, "*a efectos que proceda a dar cumplimiento al segundo inciso del artículo 61 del Código General del Proceso*". Proveído dictado en segunda instancia por la magistrada que antecede, en el proceso arriba referido.

Para tomar esa determinación, la magistrada consideró que en la etapa de fijación de litigio se estableció que se reclama la garantía legal por cumplimiento de la obligación, contenida en el numeral 6, del artículo 11 de la ley 1480 de 2011, "*de la entrega del bien*", para lo cual se requiere del registro correspondiente, y el incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de beneficio de área suscrito por las partes.

Explicó que, según la naturaleza del contrato de fiducia mercantil inmobiliario, "*el beneficiario de área se vincula a un fideicomiso inmobiliario, para que a la terminación del proyecto el fideicomitente entregue la unidad inmobiliaria y la compañía fiduciaria administradora del fideicomiso mediante escritura pública transfiera el derecho de dominio*". Es un contrato multilateral en el que son partes: la compañía fiduciaria, el fideicomitente y los beneficiarios de área.

En este caso, no se integró el litisconsorcio necesario por pasiva, toda vez que la acción debió dirigirse también contra la compañía fiduciaria, Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del fideicomiso Lote, quien es parte dentro del contrato discutido.

Por lo anterior, estimó que se configuró la nulidad prevista en el numeral 8, artículo 133 del CGP.

En el recurso de súplica el inconforme alegó, en resumen, que dentro de la etapa de saneamiento del proceso, la apoderada de la demandada Acción Sociedad Fiduciaria no presentó reproche alguno, luego debe inferirse que aceptó la falta de vinculación del Fideicomiso Lote en el litigio.

Añadió que lo pretendido por la parte demandante no es la transferencia de dominio de los inmuebles involucrados en el contrato de vinculación, sino la devolución de la totalidad del dinero entregado en su condición de beneficiarios de área. Lo que significa que el responsable de atender lo demandado, es el Fideicomiso Recursos, y no el Fideicomiso Lote, quien no tiene intervención alguna en el manejo de los recursos entregados por los beneficiarios de área, pues se limita a la transferencia de dominio.

Refirió que conforme a lo previsto en el artículo 61 del Código General del Proceso, la integración del litisconsorio necesario, solo es viable en la medida en que la parte ausente deba concurrir para decidir de mérito

el caso. Como acá no se pretende la transferencia del dominio, única responsabilidad del fideicomiso lote, su vinculación no resuelta necesaria.

SE CONSIDERA:

1. Precísase que el auto cuestionado es susceptible del recurso de súplica, por cuanto con el mismo se declaró la nulidad a partir del fallo de primera instancia de 4 de agosto de 2020, de tal manera que encaja dentro de lo regulado por el artículo 331 del Código General del Proceso, que prevé dicho remedio procesal contra los autos dictados por el magistrado sustanciador "*en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto (…) que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación…*", y el precepto 321 del CGP contempla la apelación contra el que resuelve sobre una nulidad (num. 6).

2. Advertido lo anterior, revélase la improsperidad de este recurso, al observarse que fue justificada la nulidad declarada, conforme al numeral 8º, del artículo 133 del Código General del Proceso.

En efecto, del contrato de fiducia mercantil obrante en páginas 73 y siguientes, de la carpeta denominada *4.-ContestacionesDemanda, 9.-Consecutivo8ContestaciónDemandaAcciónSociedadFiduciariaS.A.pdf*, se evidencia que en el negocio fueron parte: la Compañía Fiduciaria (Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera y administradora de dos fideicomisos: Fideicomiso Recursos Atlantic Tower y Fideicomiso Parqueo Link Barranquilla o Fideicomiso Lote), el fideicomitente (Synergy Promotores Urbanos S.A.) y los beneficiarios de área (aquí demandantes). Contrato que se suscribió con el fin de ejecutar el proyecto inmobiliario denominado "*Proyecto Link Barranquilla*", consistente en la construcción por parte del fideicomitente – constructor, de un edificio de oficinas en Barranquilla.

Ahora, del citado contrato emana que el Fideicomiso Lote, se constituyó para "*la administración de los bienes inmuebles destinados al desarrollo del proyecto*", de donde emana que su vinculación al proceso resulta necesaria.

3. Y es que leído ese contrato fiduciario y el contrato de vinculación obrante en la misma carpeta antes citada, páginas 35 y siguientes, emana que el Fideicomiso Recursos se constituyó para recaudar los recursos en dinero de los beneficiarios del área. Terminada la gestión constructiva a los beneficiarios de área les sería transferido el dominio y la posesión de los inmuebles, oficinas, por el Fideicomiso Lote. Lo que significa que para la ejecución del proyecto es necesaria la participación de todas las partes, que por supuesto incluye a ambos fideicomisos, de manera que, si no fueron vinculados, se configuró la nulidad declarada.

En otras palabras, es claro que entre ambos fideicomisos -Fid. Recursos y Fid. Lote- hay una especie de vasos comunicantes que los hacen parte de un conjunto contractual inescindible para el proyecto inmobiliario, en tanto que cada uno tiene una intervención clara y necesaria para el desarrollo del propósito aludido, de tal manera que lo que se decida frente a uno necesariamente va afectar el proyecto en su totalidad, con lo cual es claro que hay una dependencia necesaria.

Por demás, aclárese que el hecho de ser una misma sociedad fiduciaria vocera o administradora de ambos fideicomisos, no subsana la irregularidad, pues claro es que ella tiene que actuar, no como persona jurídica, sino como representante de cada patrimonio autónomo, que en el caso es del Fideicomiso Recursos, parte demandada, porque se le convocó como vocera del otro patrimonio autónomo - Fideicomiso Lote, quien también debía ser parte demandada, en los términos del artículo 53 del Código General del Proceso, concordantes con los preceptos 1234, numeral 4 del Código de Comercio y 54-3 del CGP.

Agrégase que la demanda se admitió contra la Acción Sociedad Fiduciaria S.A., en calidad de representante del patrimonio autónomo Fideicomiso Recursos Proyecto Atlantic Tower, quien contestó la demanda "*única y exclusivamente*" en calidad de vocera y administradora del referido fideicomiso, cual fue requerida, y no como representante del Fideicomiso Lote. Irregularidad que afectó la integración del contradictorio, porque al ser ambos negocios fiduciarios parte del mismo proyecto inmobiliario, es necesaria la comparecencia de ellos para decidir sobre aspectos que interesan a dicho objetivo.

4. En ese orden de ideas, por no haberse integrado el contradictorio, en los términos del artículo 63 del CGP, se configuró la nulidad prevista en el artículo 133-8 del mismo estatuto procesal, declarada por la magistrada que antecede, razón suficiente para denegar el recurso de súplica y condenar en costas al inconforme, (artículo 365-1 del CGP).

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, **deniega** el recurso de súplica interpuesto en este caso.

Condénase en costas a la parte recurrente. Para la valoración el magistrado ponente fija la suma de $600.000 como agencias en derecho (art. 366 del CGP).

Notifíquese.

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADA

FIRMADO POR:

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 018 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
9D6D6A250657E265593426171584CE5F0174CB7E17AB18D7D91EC66FB8B6024F
DOCUMENTO GENERADO EN 26/03/2021 01:16:30 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	:	DIEGO GARCÍA OSPINA
DEMANDADOS		AVORA S.A.S., ARAUJO Y SEGOVIA S.A., SPORAS S.A., Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
CLASE DE PROCESO	:	VERBAL. -protección al consumidor-

El inciso 3° del artículo 14 del Decreto legislativo 806 de 2020 establece que "ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes".

En este caso, el recurso de apelación del demandante fue admitido por auto del 29 de enero de 2021, notificado por estado del día 1° de febrero siguiente, por lo que los 3 días de ejecutoria de esa providencia corrieron el 2, 3 y 4 de ese mes, y los de sustentación los días 5, 8, 9, 10 y 11, sin que la parte apelante allegara "la sustentación de la alzada", como lo informó el secretario de la Sala Civil el día 26 de marzo de 2021, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento del término respectivo

Por lo tanto, se declarará desierta la apelación, toda vez que no se puede señalar que el mismo fue sustentado en primera instancia, por cuanto los argumentos allí esgrimidos, de conformidad con el art. 322 del Código General del Proceso", solo tienen la función de "precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión" y ya la sustentación se "hará ante el superior", en donde "el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada" (incisos 2° y 3° del numeral 3° del mismo canon).

Sobre el punto la Corte Constitucional han precisado que "la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[1] ha sostenido que "el legislador previó como sanción la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisión, al momento de presentar la impugnación en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y (ii) cuando no se presente la sustentación de los mencionados reparos ante el superior." (Sentencia T 195 de 2019, MP. José Fernando Reyes Cuartas).

Y aunque es cierto que la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación ha resaltado que cuando se esgrimen reparos en primera instancia frente a la sentencia ello es suficiente para que el *ad quem* resuelva de fondo la alzada; también lo es que esta discrepancia interpretativa entre las dos Salas del máximo órgano de la Jurisdicción Ordinaria llevó a la Corte Constitucional a proferir el fallo

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC11058-2016 de 11 de agosto de 2016, radicado 1100102030002016-02143-00.

SU 418 de 2019, en el que en su comunicado de prensa plasmó que “para garantizar el derecho a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jurídico, el juez de tutela debía decantarse por la interpretación que directa, sistemática y acorde con su configuración legal, surge de las disposiciones aplicables, por lo que a partir de un recuento del régimen de apelación de sentencias contenido en los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, estableció que el recurso de apelación debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y la consecuencia de no hacerlo así, es la declaratoria de desierto del recurso. Por lo demás, la Corte puso de presente el deber que tenían los jueces de no desnaturalizar los trámites y procedimientos insertos en los procesos judiciales, respaldados en la garantía de materialización de los principios de oralidad e inmediación, entre otros”[2].

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación que DIEGO GARCÍA OSPINA formuló contra la sentencia proferida el 24 de agosto de 2020 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de este trámite, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

---

[2] https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2035%20comunicado%2011%20y%2012%20de%20septiembre%20de%202019.pdf. Consultado: 25/01/2021.

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: **11001-3199-001-2019-57939-01**
Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Martha Isabel Palma Becerra.
Demandado. Ascensores MAC S.A.S.

En firme el auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo que dirimió la primera instancia en el asunto citado en la referencia, sin que las partes hayan solicitado la práctica de pruebas, el apelante deberá sustentar la alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído (C.G.P., Art. 118 Inc. 2°; Decreto 806 de 2020, Art. 14), so pena de declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 322 del C.G.P. Dicha sustentación debe contraerse a los expresos reparos formulados ante el juez de primer grado.

Vencido el aludido plazo, por Secretaría córrase traslado a la parte contraria por el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Los respectivos escritos deberán remitirse al correo institucional de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Culminados los plazos aquí otorgados, ingrésense las diligencias al despacho para el trámite correspondiente.

Hora. 4:00 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Magistrada

N.E.S.V. Exp. 2019-57939-01

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

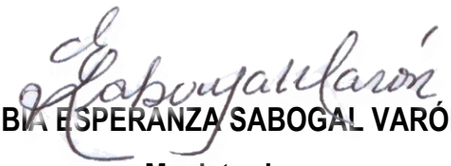
Radicación: **11001-3199-001-2019-83489-01**
Asunto. Verbal.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Hugo Enrique Cordero González y otro.
Demandado. Motomarlin S.A.

NEGAR la solicitud de pruebas presentadas por ambas partes, en tanto no se estructura ninguna de las causales previstas en el artículo 327 del C.G.P. para el decreto de las mismas en segunda instancia, habida cuenta que no fueron pedidas por las partes de común acuerdo; decretadas y no practicadas por un hecho ajeno a la parte; como tampoco versan sobre hechos ocurridos luego de trascurrida la etapa de instrucción; ni la causa de su no aportación obedece a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.

En firme, reingrese el expediente al Despacho.

Hora: 4:11 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

AUTO (1)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

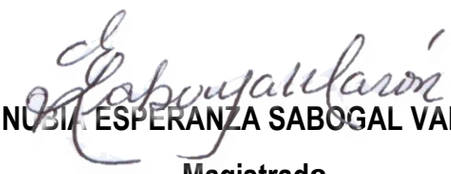
Radicación:	**11001-3199-001-2019-83489-01**
Asunto.	Verbal.
Recurso.	Apelación Sentencia.
Demandante.	Hugo Enrique Cordero González y otro.
Demandado.	Motomarlin S.A.

Respecto del memorial allegado por el apoderado de la parte demandante el día 17 de marzo de 2021, correspondiente a la sustentación de la alzada, aquella debe tener en cuenta que fue presentado de forma prematura, por cuanto el despacho aún no ha ordenado el traslado respectivo.

Una vez en firme los proveídos emitidos en esta fecha, ingrésense las diligencias al despacho para proseguir con el trámite pertinente, esto es, impartir el trámite previsto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Hora. 4:11 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

(2 AUTOS)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTES	:	CIRCUITO DE VIAJE UNIVERSAL S.A.S., y ENZO FABIO CHIRICO
DEMANDADAS		VOLVO GROUP COLOMBIA S.A.S. y AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S. -AUTONAL-.
CLASE DE PROCESO	:	VERBAL.

Con fundamento en el inciso primero del artículo 316 del CGP se aceptará el desistimiento de los recursos de apelación que hicieron los apoderados de la parte demandante y de la compañía Automotora Nacional S.A.S. -AUTONAL-. Lo anterior con fundamento en que "por tratarse de una opugnación y no del derecho material en litigio, la renuncia es viable al margen incluso de que el apoderado judicial de quien la hace tenga o no facultad para el efecto, o haya presentado personalmente el respectivo escrito, pues no es menester al tratarse solo del desistimiento de un recurso y no del derecho objeto de debate"[1], es decir, un mero acto procesal.

No se impondrá condena en costas, por cuanto en el expediente no aparece acreditado que se hayan causado, pues los recursos se encontraban en la fase de estudio de admisibilidad y está carente de prueba que los no recurrentes incurrieran en erogaciones con ocasión de estos[2].

Por lo tanto, el cual el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

Primero: Aceptar el desistimiento de los recursos de apelación que formularon los apoderados de la parte demandante y la compañía Automotora Nacional S.A.S. -AUTONAL-.

Segundo: No condenar en costas a ninguna de las recurrentes.

---

[1] CSJ. SC. Auto del 19 de febrero de 2016. AC828-2016. Radicación n° 11001-31-03-043-2013-00125-01. MP. Luis Armando Tolosa Villabona.
[2] CSJ. SC. Auto del 27 de julio de 2020. AC1629-2020. Radicación n.º 11001-31-03-031-2017-00652-01. MP. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

Tercero: Una vez en firme remitir el expediente al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

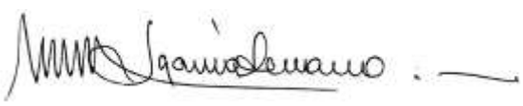
EJECUTIVO N°: 11001 3103 002 2011 00262 01
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DEMANDADOS: CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO Y OTROS

Encontrándose el proceso al despacho con miras a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado Carlos Arturo Gómez Restrepo, contra el proveído del 8 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, se advierte que en el Sistema de Gestión de la Rama Judicial consta que mediante auto calendado 24 de noviembre de 2020, el despacho decretó la terminación del proceso por pago total de la obligación, decisión que fue notificada por estado del día 25 siguiente, por tanto, no hay lugar a resolver la alzada por sustracción de materia.

En consecuencia, se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2939fb4b6025edd0e057ce945d20372c47b31650ddacafe350e4bc0303e7d551
Documento generado en 26/03/2021 04:48:44 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

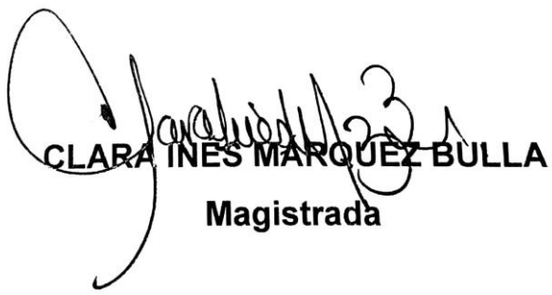
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación 110013103002 2019 00060 01

Revisado el asunto se vislumbra que corresponde a una apelación de sentencia, más no de auto como quedó radicado, por lo que se hace imperativo, previo a proveer lo pertinente, que por secretaría se corrija el acta de reparto y la carátula respectiva.

CÚMPLASE,



CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref: Proceso verbal de Garsa Ltda. contra Jorge Iván García Bahamón.

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandada interpuso contra el auto de 26 de febrero de 2021, proferido por la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso de la referencia para negar la recepción de unos testimonios, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. No se discute que el artículo 212 del CGP le impone a las partes el deber de informar el nombre, domicilio y lugar de residencia de las personas que quieran presentar como testigos, así como enunciar los hechos concretos que pretenden probar con sus declaraciones, para que el juez, en la oportunidad procesal respectiva, ordene su citación (CGP, art. 213).

Sin embargo, es claro que tales requerimientos pueden cumplirse sin apego a expresiones sacramentales, como aquí sucedió, porque el apoderado del señor García no solo indicó el nombre de los testigos y el lugar donde podían ser ubicados, sino que precisó el propósito de la prueba, al señalar que depondrían sobre “los hechos de esta contestación de la demanda” (2020-02-014018-AAA), en la que, en síntesis, se alegó la simulación del contrato de sociedad. Luego constituye exceso ritual exigir la reproducción, en el capítulo de

postulación de medios probatorios, de hechos que ya habían sido mencionados en otro apartado; la simple remisión bastaba.

En este punto es útil recordar que el artículo 212 del CGP no señala cual es la consecuencia jurídica que le sigue a la desatención de esos requerimientos; tampoco lo hace el artículo siguiente, que sólo dispone que "si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente".

No se ve, entonces, la razón para rechazar de plano una prueba testimonial so pretexto de que "en la solicitud deben indicarse concretamente los hechos objeto de prueba" (acta de audiencia de 26 de febrero de 2021; 2021-01-055424-000), porque el recurrente sí enunció de manera breve los hechos que pretende probar con las declaraciones.

3. Puestas de este modo las cosas, se revocará el auto apelado. No se impondrá condena en costas, por la prosperidad del recurso.

Una cosa más. Como en los de recursos apelación interpuestos contra autos, el superior sólo tiene competencia para tramitarlo y decidirlo, condenar en costas y ordenar copias, según lo establecido en el inciso 3º del artículo 328 del CGP, el Tribunal no puede pronunciarse sobre la solicitud de terminación del proceso por caducidad que formuló el demandado, asunto que, por tanto, deberá ser resuelto por la Superintendencia de Sociedades.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, **REVOCA** el auto proferido en audiencia de 26 de febrero de 2021, dentro del proceso de la referencia y, en su lugar, ordena recibir los testimonios de los señores Mercedes Bahamón Artunduaga, Germán Vargas, Edwin Javier Calderón Lozano y José Eugenio Olivera Sánchez.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5a19b584f5978d43ed333531fdf32b34b2f79aeba6ae0c3568128709ceaf3351
Documento generado en 26/03/2021 08:57:17 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO VERBAL
RADICADO No. 11001319900220200013101
DEMANDANTE: SANDRA LILIANA MONROY CÁRDENAS
DEMANDADOS: OXIVIDA AMBULANCIAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN Y OTROS

I. ASUNTO A RESOLVER

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, contra el auto No. 2020-01-311407 proferido el 1º de julio de 2020 por la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria III de la Superintendencia de Sociedades, a través del cual negó la solicitud de medidas cautelares deprecada por dicho extremo procesal.

II. ANTECEDENTES

1. A través de la demanda impetrada, la señora Monroy Cárdenas pretende que se reconozca la existencia de los presupuestos de ineficacia de las decisiones sociales plasmadas en las Actas Nos. 003 y 004, dictadas dentro de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Oxivida y Equipos Médicos S.A.S. (actualmente Oxivida Ambulancias S.A.S. en Liquidación) y, en consecuencia, se le restituya el 33.3% de sus acciones, además, se cancelen las referidas actas en los libros correspondientes.

Solicitó el decreto de las siguientes medidas cautelares: (i) Inscripción de la demanda en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Tunja; (ii) Embargo de la totalidad de las acciones de la sociedad; (iii) Suspensión de cualquier actuación o decisión que afecte los derechos de la actora como socia de la empresa, y (iv) cualquier otra medida que resulte razonable[1].

[1] Archivo digital *"2020-01-255969"*.

2. En la providencia impugnada, la autoridad no accedió a ninguna cautela, con sustento en que *"tras una revisión de las pruebas aportadas con la demanda (…) si bien se allegaron las actas n.° 003 y 004, correspondientes a las reuniones asamblearias en las que se habrían tomado las decisiones controvertidas por la demandante, no fue posible verificar la totalidad de la información contenida en esos documentos. Ello por cuanto las copias allegadas son ilegibles. De ahí que entonces no se puede establecer, por lo pronto, si las reuniones se celebraron en el lugar del domicilio social, si se convocaron en debida forma o si se configuró el quórum requerido para deliberar*"[2].

3. Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, arguyendo que no se valoró la integridad de las pruebas aportadas, con la que se acreditó la apariencia del buen derecho, puesto que se adjuntó un estudio de grafología en el que se concluyó que las firmas presuntamente estampadas por la señora Sandra Liliana Monroy Cárdenas no son de su autoría, lo que resta cualquier legalidad a las mencionadas actas.

De otro lado, reconoció que aquellas se tornan ilegibles al no haber sido escaneadas correctamente y, por ende, pidió que se le concediera la oportunidad para allegarlas de forma comprensible, con el fin de evitar incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto[3].

4. El recurso de reposición se decidió de manera negativa en providencia del 16 de diciembre de 2020, se concedió la alzada interpuesta en subsidio[4].

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

1. Examinado el diligenciamiento, se advierte que el proveído apelado se confirmará, por las razones que pasan a exponerse:

1.1. Por regla general, toda medida cautelar tiene como finalidad la plausibilidad del derecho objeto de la pretensión, lo que comporta un análisis preliminar del juez para determinar si la protección invocada por el actor luce factible o probable, sin que ello signifique, en modo alguno, un prejuzgamiento de los eventuales resultados que sólo podrán definirse durante el curso del proceso.

---

[2] Archivo digital *"2020-01-311407"*.
[3] Archivo digital *"2020-01-324947"*.
[4] Archivo digital *"2020-01-640154"*.

Resulta imperioso destacar que *"la adopción de medidas cautelares presupone la verosimilitud del derecho invocado por quien las solicite. Esto es, la apariencia de ser bueno el mismo, a la vista de las pruebas documentales o de otra clase practicadas y, en general, de todos aquellos datos y argumentos que permitan un juicio inicial, provisional e indiciario, favorable al fundamento de la pretensión"*[5].

1.2. En ese orden de ideas, como el análisis frente a la prosperidad de la acción debe emerger directamente del material probatorio allegado *ab initio,* basta con observar las actas Nos. 003 y 004, que son a las que se contrae precisamente el acápite petitorio, para advertir que son ilegibles, ya que no se puede entender cuál es su contenido, como incluso lo reconoció la misma censurante.

Siendo así las cosas, independientemente de las conclusiones a las que se hubiera arribado en el examen grafológico que practicó el Grupo de Documentología y Grafología del Departamento de Criminalística de la Dirección Nacional CTI, resultaba vital aportar las referidas actas de manera comprensible, para que así pudiera estudiarse lo atinente a la presunta falsificación en la firma de la señora Sandra Liliana Monroy Cárdenas, junto con la información exacta que se plasmó en dichos documentos, ya que sólo después de su lectura podrían corroborarse algunos datos que servirían de soporte a la petición las cautelas, como por ejemplo, en qué lugar se celebraron las asambleas, quien las presidió, en qué términos se efectuó la convocatoria y quienes participaron.

Ante la orfandad de tales elementos de convicción, que ni siquiera se allegaron con la presente impugnación de forma legible, puesto que el acta No. 004 no es clara en su contenido, no resulta viable acceder a las cautelas solicitadas, ni siquiera con el pretexto de la falsedad de las actas, pues lo mínimo que requiere el juzgador para emitir su decidir es conocer qué se dijo en ellas y no simplemente saber si la demandante participó o no en su elaboración.

1.3. Aún más, contrario a lo señalado por la inconforme, desatar negativamente esta petición no constituye un exceso ritual manifiesto, toda vez que, en primer lugar, se resolvió con la totalidad de las pruebas que obran en el informativo, y en segundo, si la demandante es la interesada en que se decreten las medidas, la obligación de aportar los documentos necesarios para sustentar los hechos en los que se funda su acción, recae

[5] Vilar Barona Silvia. Competencia Desleal, Tutela jurisdiccional efectiva. Pág. 1448.

únicamente en ella, sin que pueda esperar a ser requerida por el despacho para tal fin.

2. Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primer grado, sin que se imponga a la recurrente condena en costas por no aparecer causadas, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 365 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada sustanciadora integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C.,

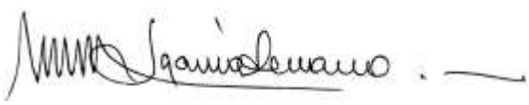
IV. RESUELVE

PRIMERO: **CONFIRMAR** el auto No. 2020-01-311407 proferido el 1º de julio de 2020 por la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria III de la Superintendencia de Sociedades, a través del cual negó la solicitud de medidas cautelares.

SEGUNDO: **SIN CONDENA** en costas.

TERCERO: **ORDENAR** la devolución del expediente a la autoridad de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7f6e672f457e904f7613291732a6000f47aa1ce73ff75f1544344189515ed6d9

Documento generado en 26/03/2021 04:48:41 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Proceso	Verbal
Demandante	Ramón Antonio Crespo Morales
Demandado	Monómeros Colombo Venezolanos S. A.
Radicado	11 001 31 **99 002 2020 00301 01**
Instancia	Segunda –auto-
Decisión	Confirma

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 15 de diciembre de 2020, mediante el cual se rechazó la demanda en el asunto en referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Ramón Antonio Crespo Morales presentó "*solicitud de trámite de prueba anticipada para la obtención de copias de las actas de junta directiva (…) y la impugnación de dichas actas de este órgano societario",* a fin de que se ordenara a la demandada: *i)* expedir copias de las *"actas de junta directiva de las reuniones en las cuales mi poderdante actuó como miembro de este órgano"* y que tengan constancia clara de lo ocurrido.

De igual modo que *"en el evento que las actas no sean fiel reflejo de las deliberaciones y del sentido de las votaciones, se de inició al proceso de impugnación de los contenidos de dichas actas".*

2. Mediante auto del 2 de diciembre de 2020, la Coordinadora del Grupo Jurisdicción Societaria I de la Superintendencia de Sociedades, inadmitió la demanda, so pena de rechazo ordenó subsanar lo siguiente:

i) Incluir acápite de partes e indicar nombre completo, identificación, domicilio, nombre del representante legal de la demandada, dirección física y electrónica de notificación de las partes y del apoderado.

ii) Suprimir las pretensiones 1) y 2) alusivas a ordenar la expedición de copias de actas de junta directiva que tengan constancia de lo ocurrido, dado que no tiene competencia para adelantar pruebas anticipadas.

iii) Señalar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la pretensión alusiva a controvertir "actas" de junta directiva y determinar las decisiones objeto de demanda, demás indicar si se busca la declaratoria de nulidad.

iv) Incluir acápite de pruebas y mencionar las que se pretenden hacer valer.

v) Acreditar conciliación prejudicial

vi) Ajustar el poder a las pretensiones y la facultad para demandar a Monómeros Colombo Venezolanos S. A.

3. En proveído del 15 de diciembre de 2020, esa autoridad administrativa rechazó la demanda porque a pesar de las subsanaciones que hizo el interesado, las pretensiones no se expresaron con precisión y claridad. Para el efecto se dijo:

i) Con respecto a la solicitud de copias de las actas Nos. 405- 415 de las reuniones de la junta directiva, es una solicitud que no se enmarca en las acciones judiciales que puede conocer esa Delegatura.

ii) Se formuló una nueva pretensión indemnizatoria que si bien se puede reconocer en algunos procesos, este no se enmarca en los que tiene competencia.

iii) Si en gracia de discusión se pensara que se enmarca en resolución de conflictos societarios, esa petición no se deriva de declarar responsable a la demandada.

iv) No se formuló juramento estimatorio de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso.

v) El poder no es suficiente dado que no se facultó al apoderado para iniciar ninguna de las acciones judiciales para las que tiene competencia esa Delegatura y tampoco de indemnización de perjuicios.

4. Inconforme con esa determinación la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. El recurso horizontal fue despachado desfavorablemente. Los puntos de inconformidad son los siguientes:

i) la negativa en entregar copias constituye conflicto societario y por tanto es competencia de la Superintendencia de Sociedades; *ii)* la falta de juramento estimatorio no da lugar al rechazo de la demanda sino a su inadmisión; y *iii)* no existe norma que establezca que el poder deba contener facultad para adelantar cada pretensión.

II. CONSIDERACIONES

1. El artículo 90 del Código General del Proceso dispone que el juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, caso en el cual ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente.

2. En el presente asunto, en auto del 15 de diciembre de 2020 la Coordinadora del Grupo Jurisdicción Societaria I de la Superintendencia de Sociedades rechazó la demanda, entre otras por considerar que no tenía competencia para su conocimiento.

Sostuvo que las pretensiones formuladas vía subsanación de la demanda, relativas a ordenar la entrega de copias de actas de junta directiva y su consecuente indemnización no encajaban en ninguna de las reglas que determinan su competencia.

Teniendo en cuenta que la demanda quedó reducida a esas peticiones, surge patente que en estrictez lo que se hizo en el auto atacado fue rechazar la demanda por falta de competencia.

Atendiendo que esa determinación no es susceptible de ningún recurso, esta Magistratura no tiene competencia en segunda instancia para emitir pronunciamiento al respecto (art. 139 del C. G. P).

3. Lo visto trazaría el camino para declarar inadmisible este recurso de apelación sino fuera porque el Juzgador de primer grado también rechazó la demanda por otros requisitos, no se hizo juramento estimatorio y el poder allegado no se ajusta a lo dispuesto en las prescripciones legales.

Si bien no cabe duda que esas últimas determinaciones podrían dar lugar a la inadmisión y posterior rechazo de una demanda, en este caso una vez establecida la falta de competencia de esa entidad sin más miramientos se debió enviar este asunto al juez competente para que surtiera el examen de admisibilidad.

Como eso no ocurrió y en últimas lo que se tiene es un rechazo de demanda por falta de competencia, decisión que por determinación normativa no es objeto de recurso de alzada, examinar si se cumplieron dichos requisitos formales en nada cambiaría esa situación.

Sumando a ello, a pesar de que no se ordenó remisión del expediente al juez competente, la parte interesada no pidió la correspondiente complementación en ese sentido, no dejando más camino en esta instancia que dejar incólume esa determinación.

No se olvide, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, "*únicamente"* en relación con los reparos concretos formulados por el apelante (art. 320 C.G.P).

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil,

RESUELVE

Primero: Confirmar el auto del del 15 de diciembre de 2020, mediante el cual se rechazó la demanda en el asunto en referencia.

Segundo: Sin lugar a condena en costas. Devuélvase el expediente al despacho de origen, previas las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE;

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 007 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5081f3acfa238133c529803a236564f5786f2234d70f304f7471f100953d0506
Documento generado en 26/03/2021 03:27:11 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
BOGOTA, D.C.
SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Bogotá D.C., veintiséis de marzo de dos mil veintiuno

Proceso:	Ejecutivo hipotecario
Demandante:	Cooperativa Multiactiva de Servicios de Cundinamarca
Demandado:	Jaime Vallejo Mesa
Radicación:	11001310300320000043505
Procedencia:	Juzgado 3º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá
Asunto:	Apelación de auto

AI-038/21

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra el auto proferido el 28 de septiembre de 2020 en el asunto del epígrafe.

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial las señoras Marina y Gladys Sánchez Pabón aduciendo la calidad de terceras intervinientes formularon incidente de nulidad con base en los artículos 127 128 y 129 de la ley 1564 de 2012 en consonancia con el artículo 133 numerales 2, 3 y 4 del mismo compendio normativo.

2. El incidente fue rechazado de plano mediante el proveído impugnado, decisión motivada en que quienes alegan la nulidad carecen de legitimación para proponerla pues a las peticionarias se les negó desde el 24 de agosto de 2010 la calidad que alegan.

3. Contra esa decisión se propició recurso de apelación que fue concedido en el efecto devolutivo.

Fundamentos del recurso

Como cimiento de su disenso indica el apelante que el pronunciamiento no es consecuente con lo acontecido a lo largo del proceso *"toda vez que desafortunadamente esta no es la primera*

vez que mi mandantes (sic) han querido incluirse en el proceso y los jueces que han conocido del mismo siempre han negado su inclusión entonces por obvias razones según ustedes mis mandantes no tienen legitimidad".

Agregó, que el despacho debe impartir justicia y para ello aceptar los errores que a lo largo del proceso se han vislumbrado; y reiteró los argumentos de la nulidad que impulsa.

Indicó que: "*No puede desconocer el Juez de segunda instancia que hemos aportado pruebas y hechos nuevos que en el plenario nunca se habían tocado sino hasta el momento que planteamos el incidente de nulidad que hoy nos ocupa; pruebas que deben ser analizadas de manera jurídica e imparcial por el AD-QUEM pues evidentemente el A QUO ha estado cerrado para la observancia de sucesos desafortunados de los que han sido víctimas mis mandantes y con el grave perjuicio de que el bien ha sido rematado acarreando una perdida* (sic) *patrimonial lesiva para mis representadas".*

Consideraciones

1. Preliminarmente ha de memorarse que el artículo 320 de la ley 1564 de 2012 señala: "*El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.*", de allí que el artículo 328 *ídem* circunscriba la competencia del superior e imponga "*pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante competencia para tramitar y decidir el recurso condenar en costas y ordenar copias.*" Y el artículo 322 advierte: "*Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.*". Por lo demás, no puede soslayarse el carácter taxativo del recurso de apelación por virtud del cual sólo son apelables las providencias para las cuales el legislador ha otorgado tal prerrogativa.

Lo anterior para precisar que la determinación materia de apelación en este caso es la adoptada el 28 de septiembre de 2020 que rechazó de plano el reiterado incidente de nulidad incoado por las señoras Sánchez Pabón.

2. Sabido es que la inobservancia o desviación de las formas legalmente establecidas para la regular constitución y desenvolvimiento de un proceso, constituyen verdaderas anormalidades que impiden el recto cumplimiento de la función jurisdiccional, para cuya corrección o enmienda el legislador ha recurrido al instituto de las nulidades procesales, razón por la cual el Código de Procedimiento Civil, tal como quedó luego de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, destinó el Capítulo 2o. del Título XI del libro Segundo, a reglamentar dicha materia, determinando las causales de nulidad en todos los procesos y en algunos especiales. Estructura que, en esencia, se

conservó en el Capítulo II del Título IV de la Sección Segunda del Libro Segundo de la ley 1564 de 2012.

Las nulidades procesales no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como están de un carácter preponderantemente preventivo para evitar trámites inocuos, son gobernadas por principios básicos, como el de **especificidad o taxatividad, trascendencia, protección y convalidación**. Por ello, siguiendo la orientación de restringir en lo posible los motivos de invalidez procesal, el ordenamiento procesal civil consagró todo un sistema a dicho propósito, en cuanto consignó reglas en relación con la legitimación y la oportunidad para alegarlos, dejando al juez la potestad de rechazarlas de plano cuando la solicitud de nulidad se funde en causal distinta de las determinadas en ese capítulo, en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas u *ocurrieron antes de promoverse otro incidente de la misma índole*, o cuando se propone después de allanada. Esto significa, entonces, que las causales de nulidad procesal no pueden ser formuladas por cualquier persona, ni en el momento que discrecionalmente quiera.

3. Ahora bien, de conformidad con el artículo 133 de la ley 1564 de 2012, vigente a partir del 1º de enero de 2016 en este Distrito Judicial, "*El proceso es nulo, en todo o en parte,* ***solamente*** *en los siguientes casos"*[1]*;* lo cual implica que no pueden tenerse como causales de nulidad sino aquellas taxativamente fijadas por el legislador, las que no es posible desligar del hecho o hechos que lo estructuran, sustentan o en que se apoyan, pues "*no es la nominación de la causal de nulidad lo que habilita su estudio, sino la sustentación fáctica que de ella se haga*"[2].

Adicionalmente, el artículo 128 advierte que los incidentes, entre los cuales se encuentra el de nulidad, deberán plantearse *"con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad"*

El artículo 130 *ídem* autoriza al juez para rechazar de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados, se presenten extemporáneamente o *"en contravención a lo dispuesto en el artículo 128"*[3], en concordancia el artículo 132 señala que verificado el control de legalidad en cada fase procesal, los vicios abrogatorios o irregularidades, *"salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas subsiguientes"*

El artículo 135 advierte que quien la alegue "*deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer",* además autoriza el rechazo de plano de la

[1] En idéntica forma se concibió en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
[2] Corte Suprema de Justicia, sentencia de 7 de diciembre de 1999. Exp. C-5037
[3] También así consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil

solicitud de nulidad cuando *"...se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación." (*Se subraya)

4. En el caso presente, asiste razón al juzgador de primera instancia en su decisión, como quiera que el nuevo abogado de las señoras Sánchez Pabón, acude propiciando incidente de nulidad soslayando, de un lado, que la intervención de sus mandantes ya fue rechazada en el proceso, por ende carecen de legitimación para intervenir y para pedir la nulidad de toda la actuación surtida; y de otra parte, ignora que ya en pretérita oportunidad, en abril de 2010, las mismas personas formularon incidente de nulidad edificado en el mismo supuesto fáctico que ahora se arguye; solicitud abrogatoria declarada infundada en auto de 24 de agosto de 2010, decisión confirmada por este Tribunal el 7 de marzo de 2011.

Así mismo se había encausado incidente de nulidad en el curso de la diligencia de remate, el cual fue rechazado de plano en proveído que no fue cuestionado en tiempo.

El litigante no sólo desconoce el marco jurídico procesal del que se hizo remembranza en precedencia, sino que desconoce la fuerza vinculante de decisiones ejecutoriadas.

Finalmente, ningún argumento expuso en sustentación de su recurso frente a la motivación del auto que rechazó de plano el último incidente de nulidad planteado; sus elucubraciones se desviaron a porfiar en la configuración de los motivos de invalidez procesal que invocó. Contrario a su dicho, no se trata de hechos nuevos, sino de los mismos razonamientos que en el pasado las señoras Sánchez Pabón habían esgrimido, enmarcados en otras causales; supuestos que ya fueron estudiados y sobre los que existen decisiones judiciales debidamente notificadas, ejecutoriadas, y que adquirieron firmeza.

4. Suficiente es lo dicho para mantener la decisión cuestionada.

Decisión

En consideración del análisis precedente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C. en Sala Civil de Decisión, **RESUELVE:**

1. **CONFIRMAR** el auto de 28 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

2. Condenar al recurrente en costas, artículo 365 numeral 1º ídem. Como agencias en derecho se señala la suma de $800.000,oo.

Notifíquese y cúmplase,



RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Tribunal Superior de Bogotá, D.C.

Firmado Por:

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADA
Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **15a54c505138f7d2953d53e427febedbbe65e05f8e338c181d209d9ad5b7eeba**
Documento generado en 26/03/2021 10:28:38 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Sustanciadora
MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Asunto: Proceso Ejecutivo Singular de ART Medica S.A.S. contra Cafesalud EPS S.A. y otra.

Rad. 03 2019 00238 01

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra el auto que profirió el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá el 12 de agosto de 2019[1].

I. ANTECEDENTES

1. A través de la providencia apelada la jueza *a quo* negó la orden de apremio, tras considerar que las facturas aportadas no cumplen los requisitos necesarios para prestar mérito ejecutivo, toda vez que no se acompañaron los *"soportes exigidos en los artículos 2.5.3.4.10 y 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016, y definidos en la Resolución 3047 de 2008…, tales como copias de historia clínica, autorización, comprobante de recibido del usuario, orden y/o fórmula médica, entre otros…",* por ende, no es posible predicar la configuración de los requisitos previstos en el artículo 422 del Código General del Proceso.

[1] *Repartido el 12 de enero de 2021*

2. Inconforme el apoderado de la sociedad ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, con fundamento en que las facturas que aportó satisfacen todas las formalidades para prestar mérito ejecutivo, porque contrario a lo que expuso la jueza *a quo,* sí aportó en medio magnético tales documentos (archivos RIPS), *"conforme lo exige la EPS por disposición legal"*; que no resulta exigible el *"artículo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016"* porque los servicios no corresponden a accidentes de tránsito o hechos catastróficos, sino a consultas externas de pacientes con enfermedades reumatológicas. Finalmente, pidió que de no ser posible la lectura de los archivos, se oficie al área de sistemas de la Rama Judicial para conseguir su conversión a un formato que pueda ser verificado por la jueza de conocimiento.

3. En efecto, luego de tramitar tal solicitud por parte del Área de Tecnología y Sistemas de la Rama Judicial, ésta informó que no es posible leer la *"meta data contenida en dichos archivos con el software llamado "validador de RIPS SDS" el cual es de propiedad de la secretaría de salud de Bogotá y solo se instala en equipos autorizados del área, razón por la que dicha área de tecnología no puede responder satisfactoriamente la petición de desencriptar los archivos",* por ende, la jueza resolvió mantener incólume su decisión.

II. CONSIDERACIONES

1. Para resolver, es preciso recordar que el artículo 422 del Código General del Proceso dispone que se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o su causante y constituyan plena prueba contra él; y que tratándose de títulos valores, documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ello se incorpora, éstos sólo producirán efecto en la medida que reúnan las exigencias tanto generales como especiales que la normatividad mercantil señale para el efecto.

2. De igual manera es importante resaltar que si bien las facturas que se emiten por concepto de suministros o servicios médicos correspondientes al Plan Obligatorio de Salud, no son de aquellas típicas que regula el Estatuto de Comercio en sus artículos 772 y siguientes, modificado por la Ley 1231 de 2008, toda vez que su reglamentación se halla, entre otras, en la Ley 1122 de 2007[2], Ley 1438 de 2011 y, en lo concerniente, en el Decreto 780 de 2016 (artículo 2.5.3.4.1. y ss), por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, lo cierto es que ello no impide la obligatoriedad que los documentos presentados cumplan los presupuestos de la norma citada en el párrafo anterior.

Es decir, como es claro que las *"facturas"* presentadas en casos como el presente, no son los títulos valores reglamentados en el Código de Comercio, no es menos cierto que tales instrumentos integrados con otros pueden recoger una obligación con las connotaciones del artículo 422 del Código General del Proceso, caso en el cual se predica la existencia de un título ejecutivo complejo, esto es, una sola unidad, siempre y cuando, de unos y otros emanen las exigencias mínimas establecidas en la citada norma para ser considerada como un título ejecutivo. Así mismo, deben estar ligados por una necesaria relación de causalidad con origen en un mismo negocio jurídico, provenir del deudor y constituir plena prueba en su contra, tal como lo exige el aludido precepto procesal.

3. Conforme a lo anterior, el Despacho advierte que el proveído impugnado se debe confirmar, toda vez que si bien le asiste razón al apelante en el sentido de asegurar que no podía la jueza *a quo* exigir el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Decreto 780 de 2016,

---

[2] *Artículo 13. d) Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes[<1>], pagarán los servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por capitación. Si fuesen por otra modalidad, como pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación. En caso de no presentarse objeción o glosa alguna, el saldo se pagará dentro de los treinta días (30) siguientes a la presentación de la factura, siempre y cuando haya recibido los recursos del ente territorial en el caso del régimen subsidiado. De lo contrario, pagará dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción del pago. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo referente a la contratación por capitación, a la forma y los tiempos de presentación, recepción, remisión y revisión de facturas, glosas y respuesta a glosas y pagos e intereses de mora, asegurando que aquellas facturas que presenten glosas queden canceladas dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la factura.*

habida cuenta que no se trata del cobro de la prestación de servicios médicos por accidentes de tránsito o hechos catastróficos, no ocurre lo mismo con respecto al contenido de la Resolución 3047 de 2008, habida cuenta que tiene por objeto *"definir los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos que deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de tales servicios".*

En efecto, ha de verse que el artículo 12 de la citada norma prevé que son soportes de las facturas, *"como máximo los definidos en el Anexo Técnico Nº5",* el cual se refiere, entre otros documentos, a la *"factura o documento equivalente", "detalle de cargos", "autorización", "epicrisis", "descripción quirúrgica", "comprobante de recibido del usuario";* por ende, como a pesar que la jueza *a quo,* con miras a garantizar el acceso a la administración de justicia del extremo ejecutante intentó, por medio del Área de Tecnología y Sistemas de la Rama Judicial, *"des configurar(sic.) el archivo plano"* conforme lo solicitó el recurrente, sin conseguir un resultado favorable, resulta evidente que los soportes mencionados se encuentran ausentes.

Y es que si bien el artículo 430 del Código General del Proceso le impone la obligación al juez para el evento en que no encuentre procedente la forma en que el demandante solicite librar el mandamiento de pago, hacerlo en la que lo *"considere legal",* no es posible pretender actuaciones encaminadas a encauzar lo solicitado, pues tal carga está en cabeza de quien acude a la administración de justicia.

4. Por consiguiente, las anteriores consideraciones resultan suficientes para confirmar la decisión apelada.

En consecuencia, se

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto el auto que profirió el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá el 12 de agosto de 2019.

SEGUNDO. **ABSTENERSE** de imponer condena en costas.

TERCERO. **DEVOLVER** las diligencias al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE,



República de Colombia

Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**11001-3103-003-2019-01072-02**
Asunto.	Protección al Consumidor.
Solicitud:	Aclaración Decisión fijó Agencias en Derecho
Demandante.	Municipio de Une
Demandado.	Banco Popular.

Decídese la solicitud de aclaración del valor de las agencias en derecho fijadas por la Magistrada Ponente en la sentencia de segunda instancia, proferida el 25 de enero de 2021, petición formulada por los extremos de la litis, dentro del proceso citado en la referencia.

Para resolver dicha solicitud bastan las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El ordenamiento jurídico procesal autoriza, de manera excepcional, la aclaración, la adición y "la corrección de errores aritméticos y otros" de las providencias, con el propósito de que el juez que la dictó subsane los defectos o deficiencias de orden material contenidos en ellas (artículos 285, 286 y 287 C.G.P.).

La aclaración brinda al juzgador la oportunidad de explicar conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de su decisión o influyan en ella.

De ahí que la jurisprudencia haya precisado que aquella resulta viable frente a frases o enunciados inentendibles "por su oscuridad, por la imprecisión de sus términos, por su mala redacción que induzca a comprensiones diferentes, por lo inapropiado del lenguaje utilizado de tal suerte que su interpretación genere duda, por el uso de términos que distorsionen la capacidad técnica de un vocablo para indicar una acción o un efecto, o para calificarla"[1], es decir, procede únicamente cuando "se refiere a deficiencias meramente idiomáticas -o bien a imprecisiones terminológicas- que imposibilitan la inteligencia de lo decidido, no a supuestas equivocaciones cuya consideración obligaría al sentenciador, so pretexto de una aclaración, a volver sobre su propia decisión"[2].

Mientras que la corrección permite enmendar, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, los yerros aritméticos en que se incurra en la providencia, como también en los que tienen génesis en la omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidos en su parte resolutiva o influyan en ella, facilitando así subsanar tales deficiencias.

2. En el caso en estudio, aunque la determinación respecto de la cual versa la aclaración (valor de las agencias en derecho) está contenida en la sentencia, lo cierto es que se trata de una decisión de ponente (Artículo 35 del C.G.P.), en tanto versa sobre el monto de las agencias de derecho, el que, conforme se asentó en el fallo, fue fijado por la Magistrada Sustanciadora del asunto.

Esa petición fue formada tempestivamente; empero, la razón en que está fundada consiste en un yerro al momento de fijar el monto de la condena en costas, pues, fue señalado en letras el valor de *"un millón de pesos"* y en números el de *"($2.500.000)",* circunstancia que pone de relieve su improcedencia, habida cuenta que no se trata de precisar el alcance de las expresiones consignadas en la resolución adoptada en el numeral segundo de la sentencia, sino de enmendar un error númerico, tratándose, entonces, de una corrección.

---

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 11 de agosto de 2008, exp. 2005-00611-01 (M.P. Ruth Marina Díaz Rueda).
[2] CSJ, Cas. Civ., auto N° 059 de 25 de julio de 1990, citado en proveído de 26 de octubre de 2007, exp. 2006-01862-00 (M.P. Pedro Octavio Munar Cadena).

Ciertamente, el monto de las agencias fue tasado por la suscrita Magistrada Sustanciadora en la cuantía de un millón de pesos, pero por un lapsus calami se consignó en números el valor de $2.500.000.oo., motivo por el cual procede corregir en ese sentido la decisión.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

1º NEGAR la aclaración del fallo proferido el 25 de enero de 2021, dentro del proceso citado en la referencia, por los motivos expuestos.

2º CORREGIR de oficio el numeral segundo de la precitada sentencia, el cual quedará así: "**SEGUNDO. CONDENAR** en costas de esta instancia a la parte apelante, incluyendo como agencias en derecho a favor de la contraparte la suma de un millón de pesos ($1.000.000.oo), monto fijado por la magistrada ponente."

Hora. 4:12 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora. 4:15 p.m.

Radicación: **11001-3199-003-2019-04100-01**
Asunto. Verbal.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Municipio de Maní.
Demandado. Banco BBVA Colombia S.A.

En firme el auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo que dirimió la primera instancia en el asunto citado en la referencia, sin que las partes hayan solicitado la práctica de pruebas, el apelante deberá sustentar la alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído (C.G.P., Art. 118 Inc. 2°; Decreto 806 de 2020, Art. 14), so pena de declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 322 del C.G.P. Dicha sustentación debe contraerse a los expresos reparos formulados ante el juez de primer grado.

Vencido el aludido plazo, por Secretaría córrase traslado a la parte contraria por el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Los respectivos escritos deberán remitirse al correo institucional de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Culminados los plazos aquí otorgados, ingrésense las diligencias al despacho para el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

MAGISTRADA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Bogotá D. C., veintiséis de marzo de dos mil veintiuno

Proceso:	Impugnación de Hábeas Corpus
Accionante:	Rafael Uribe Niego
Accionados:	Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros.
Radicación:	11001310300320210011501

Se decide la impugnación presentada por el agente oficioso de Rafael Uribe Nieto, contra la decisión tomada el 23 de marzo de 2021 por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá.

ANTECEDENTES

1. El abogado Nicolás Alejandro Villa Calvano, en nombre de Rafael Uribe Nieto, manifestó que éste soporta prolongación ilegal de la libertad. Como sustento fáctico narró:

1.1. El señor Rafael Uribe Nieto fue sentenciado el 15 de agosto de 2014, por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín, a una pena privativa de libertad de 9 años y 2 meses (110 meses) por los delitos de *"concierto para delinquir agravado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fuga de presos, falsedad material en documento público e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena; negándose la suspensión de la condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria"*

1.2. El citado ciudadano ha estado privado de la libertad del 11 al 27 de diciembre de 2013, y posteriormente, del 15 de marzo de 2014 a la fecha.

1.3. Actualmente se encuentra a órdenes del Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el radicado No. 05001-60-00-0002014-00219-00, N.I. 2565.

1.4. A la fecha de formulación del habeas corpus, conforme a lo manifestado por el Consultorio Jurídico Estructura 3 COMEB del INPEC, se puede verificar que el señor Uribe Nieto ha cumplido con 110 meses y 18 días de privación de la libertad.

1.5. No se ha tenido en cuenta que es beneficiario de las 3/5 partes de la pena impuesta, esto es 66 meses; pese a solicitarse el juez que vigila la pena no accedió a ello.

1.6. Por haberse cumplido la totalidad de la pena impuesta, está el agenciado privado ilegalmente de la libertad.

2. Pide que se conceda el amparo y, en consecuencia, se ordene la libertad inmediata del señor Rafael Uribe Nieto.

3. Le correspondió por reparto esta acción constitucional al juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá y la admitió mediante auto del 23 de marzo de 2021, allí dispuso vincular al Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín, Fiscalía 27 Especializada, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, al Centro de Servicios Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, al Jefe de la Oficina Jurídica del Centro de Servicios de Paloquemao, al Centro de Reclusión Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá -COMEB-, a COMEB Cárcel La Picota de Bogotá, y a la Policía Nacional (Dirección de Investigación Criminal, DIJI) y a la Procuraduría general de la Nación.

3.1. El INPEC contestó, en resume que, revisado el Sistema Integrado de Información Penitenciaria y Carcelaria -SISIPEC WEB- el señor Uribe Nieto presentó fecha de captura el 15 de marzo de 2014 y fecha de ingreso a La Picota el 9 de junio de 2016. Ingresó a la EPC Ibagué el 8 de febrero de 2016, INPEC prisión hospitalaria.

A la fecha no ha recibido boleta de libertad, y el habeas corpus no procede para solicitudes de redención de penas, teniendo en cuenta que existen otros mecanismos alternativos para esos trámites.

3.2. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol contestó que al 24 de marzo de 2021 figuraba negativo para circulares a nivel internacional.

3.3. El Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad contestó que el señor Uribe ha estado privado de la libertad del 11al 27 de diciembre de 2013 (17 días), y del 15 de marzo de 2014 a la fecha.

Respecto a la redención de la pena al 19 de marzo de 2021 se le han reconocido 22 meses y 27 días, por lo que el accionante Uribe Niego ha descontado a la fecha un total de "84 meses y 26 días", por lo que sumadas las redenciones arroja un total de 107 y 23 días, por manera que a la fecha no cumple con la totalidad de la condena por lo que no esta privado ilegalmente de la libertad.

Explicó que sobre la petición de libertad condicional fue resuelta desfavorablemente el 18 de septiembre de 2020, y los recursos ordinarios contra esa decisión fueron definidos así, el 11 de diciembre de 2020 por ese juzgado; y la alzada por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín el 24 de febrero de 2021, confirmando la negativa del subrogado penal.

Además, las peticiones de redención de la pena y libertad deben ser elevados ante el juez natural y resuelto por este.

A su respuesta adosó copias de las providencias respectivas.

3.4. El Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento manifestó que no encontró proceso alguno contra Rafael Uribe Nieto.

4. El Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá el 24 de marzo de 2021 denegó el amparo, tras considerar que: Ante la solicitud de libertad por pena cumplida, la misma se atendió el 19 de marzo de 2021, en la que resolvió el juez respectivo *"Negar la libertad por pena cumplida al condenado Rafael Uribe Nieto (...)",* decisión que se apoyó en que para la citada data, el condenado había cumplido entre tiempo físico y redimido 107 meses y 18 días, lo que no alcanzaba para cumplir la pena impuesta de 110 meses, *"siendo que se le han realizado cómputos desde el 15 de marzo de 2014 fecha de la captura, aunados los 17 días que permaneció detenido en los albores del proceso (que según el mismo accionante revela, coinciden las fechas), llevando como tiempo físico 84 meses y 21 días y, a quien se le ha reconocido redención de pena por concepto de trabajo, incluyendo aquellas que hizo en resoluciones 262 y 263 de 19 de marzo de 2021 y que suman un total de 22 meses y 27 días. (...)";* advirtió que cualquier inconformidad con tal decisión debe plantearse a través de los medios judiciales ordinarios.

IMPUGNACIÓN

El agente oficioso del condenado impugnó la citada decisión bajo los siguientes argumentos que se resumen así: i) indebida contabilización de términos habida cuenta que no se tuvieron en cuenta los tiempos de redención de la pena, aunado a que hay problemas aritméticos; ii) No hubo pronunciamiento del INPEC de los tiempos de redención de la pena; iii) No están incluidas 488 horas de redención de pena; iv) por último, el auto del 19 de marzo de 2021, mediante el cual se negó la libertad, fue notificado hasta el 24 de marzo del año en curso.

CONSIDERACIONES

1. La Constitución Nacional cuando consagra como derecho fundamental la "libertad" en su artículo 28 estatuye que: *"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (...)".*

2. Recordemos que el *hábeas corpus* es un derecho fundamental, que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente (Artículo 30 de la Constitución Política).

Así cuando la libertad se restringe injustamente por una autoridad, se provee al afectado del mecanismo de *hábeas corpus: "Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas".*

Acción cuya definición se concibe en el artículo 1º de la ley 1095 de 2006, así: *"El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine."*

3. Prosiguiendo el examen, tenemos que el *hábeas corpus* en tanto acción constitucional y derecho fundamental que

tutela la libertad personal se edifica o se estructura básicamente en dos eventos, cual lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:

> *"En cuanto a lo que constituye el objeto de este mecanismo de protección, el hábeas corpus es a la vez garantía de inviolabilidad de la libertad personal, derecho fundamental y acción constitucional destinada a ser ejercida en cualquiera de los siguientes eventos: i) cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.*
>
> *En los casos a que hace referencia la segunda hipótesis, es decir, cuando la privación de la libertad está respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben formularse dentro del proceso penal respectivo y haciendo uso de los recursos legales existentes. Solamente se justificaría la procedibilidad de la acción de hábeas corpus cuando la decisión judicial constituya una auténtica vía de hecho o cuando contra la misma no proceda recurso de apelación*[1]*.*
>
> *Además, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, si bien el hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional– de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas."*[2] (Destacado a propósito)

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, acerca de esta acción pública señaló: *"La acción de habeas corpus es un remedio excepcional y especial para proteger la libertad cuando no existan otros medios al interior de la actuación procesal."*[3] La misma Corporación, en providencia del 31 de agosto de 2007, con ponencia del Magistrado Mauro Solarte Portilla, precisó:

> *"Cuando la privación de la libertad ha sido dispuesta por autoridad competente, con el cumplimiento de las formalidades legales y por motivos definidos previamente en ella, y además del cumplimiento de estas exigencias, no se está frente a situaciones de prolongación indebida de esta privación, cualquier petición de libertad que implique la modificación de las condiciones procesales preexistentes, o el reconocimiento de la materialización de una garantía o un derecho, o la declaración de*

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-10 de 1994
[2] Sala de Casación Penal, 30 de agosto de 2012. M.P. Julio Socha Salamanca expediente #39804. Reiterado por esa Corporación entre otras, en decisión de habeas corpus de 14 de junio de 2017 AHP3802-2017 Rad. 50488. MP. Eugenio Fernández Carliaer
[3] Proceso No. 33368, sentencia 18 de enero de 2010, M. P. Alfredo Gómez Quintero.

una causal de improcedibilidad de la acción, deben ser tramitadas al interior del respetivo proceso judicial.
Plurales han sido los pronunciamientos de esta corporación donde se ha dicho que la acción constitucional de hábeas corpus no es un mecanismo sustitutivo del procedimiento ordinario, ni tiene el carácter de instancia adicional de las legalmente establecidas, a la cual el interesado pueda acudir caprichosamente cuando considere que su detención es ilegal, o que tiene derecho a la libertad, o cuando sus pretensiones han sido negadas por los funcionarios que vienen conociendo del asunto."

Y es que cuando la privación de la libertad tiene venero en la orden de autoridad competente, satisfechas las formas de ley y por los motivos fijados previamente en ella, y además del cumplimiento de estas exigencias, no se está frente a situaciones de prolongación indebida de esta privación, cualquier petición de libertad que implique la modificación de las condiciones procesales preexistentes, o el reconocimiento de la materialización de una garantía o un derecho, deben ser tramitadas dentro del proceso judicial respectivo.

Ciertamente el Hábeas Corpus no puede ser subsidiario o residual, entendido ello como que su ejercicio no se condiciona al agotamiento de otros medios de defensa judicial, pero no significa tal comprensión que la acción constitucional de amparo de la libertad personal se convierta en un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo de los procesos penales ordinarios legalmente establecidos, como para que a través de ella sea posible controvertir las decisiones relativas a la libertad del imputado, acusado o condenado en el curso del proceso penal.

4. En el caso sometido a examen debe resaltarse que a voces del artículo 1º del Decreto 700 de 2017: "*Acción de habeas corpus. La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional a que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, darán lugar a la acción de habeas corpus bajo los parámetros y el procedimiento establecido en el artículo 30 de la Constitución Política y en la Ley 1095 de 2006 que la desarrolla."* Por lo que al amparo de éstas directrices, a las cuales se hizo referencia *ut supra*, es que se debe examinar la procedencia del *habeas corpus* rogado.

En primer lugar, no puede predicarse que el accionante se encuentre privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, su detención obedece a orden de autoridad judicial, del Juzgado 5º Penal del

Circuito Especializado de Medellín, que lo condenó a pena privativa de libertad.

Tampoco se ha prolongado ilegalmente su detención, pues véase que se encuentra a disposición del Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Bogotá, quien ha atendido y resuelto sobre las solicitudes elevadas por el señor Rafael Uribe Nieto.

Aunado a lo anterior, el 19 de marzo de 2021 el Juzgado encargado de controlar la pena respondió la petición presentada por el señor Uribe Nieto, en ese sentido, profirió tres decisiones: (i) en la que le reconoció 2 meses de redención de pena por trabajo; (ii) en la que reconoció *"el* ***Tiempo Físico y redimido*** *a la fecha de 107 meses y 18 días"* y, (iii) negó la libertad por pena cumplida; providencias todas ellas respecto de las cuales proceden los *"recursos de reposición y apelación",* como bien se anuncia en el inciso final de todas ellas.

Conforme se admite en el escrito de impugnación, esas decisiones le fueron notificadas al condenado el 24 de marzo del año en curso, y contra ellas bien podía formular los recursos de ley anunciados por el Juez que vigila la pena; y sustentarlos en los reproches que por la senda subsidiaria y excepcional de la acción constitucional viene a plantear.

5. En lo que atañe al argumento de falta de pronunciamiento del INPEC, es de precisar que la citada entidad dio respuesta ante el *a quo*; además, el Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad lo requirió en sus recientes autos a fin de obtener los últimos certificados de conductas y estudios.

6. Se recaba, al Juez Constitucional de Hábeas Corpus, no le es dable entrar a examinar si se cumplen los presupuestos legales, para de ello inferir la viabilidad de libertad deprecada, pretermitiendo las instancias competentes para ello, porque entonces se le daría a esta acción un carácter alterno o paralelo a los procedimientos judiciales y el Juez de amparo se convertiría en una instancia adicional a las legalmente establecidas, lo cual desnaturaliza y desfasa la función Constitucional y legal concedida[4].

7. Así las cosas, como la privación de la libertad del aquí accionante fue dispuesta dentro del proceso penal seguido

[4] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal AHP3228-2017 MP José Luis Barceló Camacho

en su contra por autoridad competente, con el cumplimiento de las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la legislación penal y tampoco se está frente a situaciones de prolongación ilegal o indebida de esa privación, cualquier petición de libertad que modifique las condiciones procesales preexistentes deberá formularse y definirse dentro del proceso penal a fin de que el Juez natural emita la decisión que en derecho corresponda y, en caso de ser adversa, el peticionario pueda hacer uso de los recursos de ley.

8. En este orden de ideas, se **confirmará** la providencia impugnada.

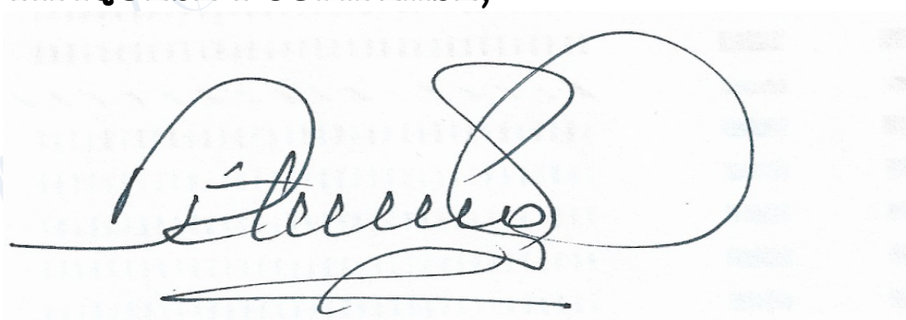
DECISION

Habida cuenta de lo consignado *ut supra*, la suscrita Magistrada, en uso de sus atribuciones constitucionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 24 de marzo de 2021 por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión a los intervinientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADA
Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **62ecce88bfb0da24b007ba490ba626ab282c3d28790570746f85e2bdc56c5cc8**
Documento generado en 26/03/2021 03:55:53 PM

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Ordinario 04-2016-00747-02

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Sería del caso entrar a resolver la apelación del auto, empero, al ingresar al link del expediente enviado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, se observa que no existen archivos, por ello, se requiere al aludido despacho, para que en el término de un (1) día, envíe la copia digital del legajo, previa verificación del acceso y contenido.

CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	VERBAL
DEMANDANTE	**:**	RAQUEL DUARTE NAVIA
ACCIONADO	**:**	EMGESA S. A. E.S.P.
RADICACIÓN	**:**	110013103 005 2014 00155 01
DECISIÓN	**:**	**CONFIRMA**
APROBADO Y DISCUTIDO	**:**	(25) de marzo de 2021
FECHA	**:**	veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

I. OBJETO

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 18 de agosto de 2020 por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá.

II. ANTECEDENTES

1. RAQUEL DUARTE NAVIA presentó demanda contra EMGESA S.A. E.S.P. para que se hicieran las siguientes o similares declaraciones:

1.1. Declarar que la demandante sufrió lesión enorme en la compraventa celebrada con la sociedad EMGESA S.A. E.S.P. y contenida en la escritura pública No. 3701 del 1° de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría 11 del Círculo de Bogotá.

1.2. Ordenar a EMGESA S.A. E.S.P. que complete y pague la diferencia que pericialmente resulte entre el valor que canceló a la accionante y el justo precio que se determine en el proceso.

1.3. Disponer que sobre esa diferencia se paguen intereses a la tasa legal, desde la presentación de la demanda y hasta cuando se realice su cancelación, al tenor de lo previsto por el artículo 1948 del Código Civil.

1.4. Condenar a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho.

2. Las anteriores pretensiones se fundaron en la versión de los hechos que a continuación se compendia:

2.1. Por Resolución No. 321 del 1° septiembre de 2008 el Ministerio de Minas y Energía declaró de utilidad pública la zona requerida para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico el Quimbo y afectó a los inmuebles como de utilidad pública, área en la cual se encuentra el predio denominado El Altillo, de propiedad de RAQUEL DUARTE NAVIA, ubicado en el departamento de Huila, municipio del Agrado, vereda Yaguilga, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 202-2131 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón-Huila.

2.2. EMGESA fue beneficiaria de esa declaratoria, por lo que era titular de la primera opción de compra de los bienes raíces que necesitara y estuvieran en esa franja, entre ellos, 63.97 hectáreas del lote de mayor extensión de propiedad de la actora, afectado por la declaratoria de utilidad pública e interés social, por lo que desde el 4 de junio de 2009 no pudo volver a explotar económicamente su heredad, ante la negativa de los entes financieros para otorgarle préstamos, pues carecían de garantía real.

2.3. EMGESA ejerció la opción de compra, de donde si RAQUEL DUARTE NAVIA no enajenaba esa parte de su predio, sería sometido a expropiación, según lo autoriza el artículo 18 de la Ley 56 de 1981 y 39 y siguientes del Decreto 2024 de 1982. Y de no aceptar el precio y las condiciones fijadas por EMGESA, perdería los beneficios tributarios que le eran concedidos si transfería voluntariamente la propiedad, por lo que después de transcurridos casi cinco años de la afectación decidió vender en los términos consignados en la escritura pública No. 3701 del 1° de noviembre de 2013, suscrita en la Notaría 11 del Círculo de Bogotá y registrada el 9 de enero de 2014 bajo el folio de matrícula inmobiliaria No.

202-68141 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón-Huila.

2.4. Según lo consignado en la Escritura Pública de compraventa, el precio acordado fue SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($622.322.037.00), los cuales se pagarían así: i) $62.232.203.00 consignados, a satisfacción de la vendedora, el 23 de octubre de 2013 y el saldo dentro de los 30 días siguientes a la data de la escritura pública, siempre y cuando no fuera rechazada por la Oficina de Registro Público. Cantidad que efectivamente fue recibida por la señora RAQUEL DUARTE NAVIA.

2.5. La Lonja de Propiedad Raíz del Huila y Caquetá avaluó las 63,97 hectáreas que compró EMGESA a la demandante en UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($1.519.290.576) moneda corriente, el 18 de junio de 2013, de donde surge que el precio que pagó EMGESA a la propietaria es inferior a la mitad del justo precio que debió cubrir al momento de la celebración del contrato de compraventa.

3. **La actuación surtida**

3.1. La demanda se admitió por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto calendado 1° de abril de 2014, en el cual también se dispuso la notificación y traslado a la demandada. (fls.77 y 78, Cd.1)

3.1.1. Posteriormente el apoderado del extremo activo sustituyó la demanda, adicionándola en los medios probatorios, acto que se admitió en proveído de 27 de mayo de 2014. (fls.96 y 99 Cd.1)

3.2. Notificada la demandada**,** se pronunció oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo excepciones.

3.2.1. Como defensas de mérito alegó la parte demandada las que denominó: (i) "*Deber de probar*"*; (ii)* "*Inexistencia de los elementos estructurales de la acción*"*; (iii)* "*Ineficacia del inventario forestal"; y (iv) Ineficacia del avalúo comercial corporativo.*

4. Evacuada la etapa probatoria, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante Acuerdo No. PSAA15-10410, se remitió el proceso al Juzgado Cuarenta y Siete Civil de Circuito de esta ciudad, Despacho que citó a las partes a la audiencia del artículo 373 del Código General del Proceso. Posteriormente dictó sentencia por escrito, en la que resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la actora.

II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

5. Para arribar a la anterior decisión, el *a quo* tuvo en cuenta los siguientes fundamentos:

5.1. En primer lugar se ocupó de la figura de la lesión enorme, señalando que era una institución que permitía, en relación con los contratos de compraventa, corregir la grave desigualdad que llegara a resultar para una de las partes en su celebración, ya que por ser conmutativos se entendía que la cosa debe valer lo que se da por ella, de manera que debía demostrarse que el desequilibrio era enorme para su configuración, esto es, que "haya existido por encima de los límites previstos por el legislador", los que se hallaban en el artículo 1947 del Código Civil.

5.2. A continuación, indicó los elementos estructurales de la lesión enorme, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, deteniéndose en la exigencia de que tal debe ser enorme, para señalar que, en la demostración del justo precio, la prueba pericial era determinante. Luego, reseñó que en la cláusula segunda de la escritura pública No. 3701 del 1° de noviembre de 2013, suscrita en la Notaría 11 del Círculo de Bogotá, se hacía constar que el precio había sido concertado por las partes contratantes, recogiendo el acuerdo sobre el aspecto económico de la compraventa. Que dicho instrumento daba cuenta de que el precio pagado a la demandante fue la suma de $622.322.037, reputándose perfecta la venta.

5.3. Que, en cambio, el dictamen adosado con la demanda contenía "serios inconvenientes para su objetivo". Así, en el acápite 1.2. denominado TIPO DE INMUEBLE se indicó que el lote sería inundado por

la hidroeléctrica del Quimbo, lo que modificaba radicalmente su destinación y por supuesto su valor, de donde su caracterización como finca agropecuaria, lo que sirvió de base del valor dado al inmueble, soslaya la consideración que inicialmente plasmó de su finalidad para inundación. Que, así no lo hubiera vendido la demandante, tampoco podía explotarlo por la afectación de bien de utilidad pública, aspecto que era de conocimiento de la vendedora, como lo enunció en el libelo.

5.4. Agregó que el aporte del inventario de árboles y riqueza maderable del predio por la parte activa, *se excluyó del material probatorio en el proceso,* pero que se mencionaba para destacar que en acatamiento de disposiciones ambientales, el predio debía sostener la riqueza maderable, lo que también descartaba la explotación agropecuaria de la finca.

5.5. Entonces, advirtió que la cuantía del predio se pretendió demostrar con un informe que reconoce, en sí mismo, que el bien desde su enajenación no podía destinarse a ninguna actividad comercial, por lo que "*pretender inflar su valor con rentas que no iba a percibir, entraña serios problemas para la estructuración del precio del inmueble, derribando de paso, el resto de la fundamentación probatoria del mayor valor del bien*", en tanto que no podía fundarse ni en su riqueza en maderas ni en su explotación ganadera y agrícola, actividades que no eran factibles ni al momento del concepto, ni en el de su venta, de donde no se podía partir de éstas para incrementar el valor del inmueble.

5.6. Añadió que dicha prueba pericial también tenía falencias técnicas, como, por ejemplo, la imposibilidad de calcular las cifras del volumen comercial de árboles, al omitir una constante de la fórmula para ese efecto de conformidad con el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009 de la CAM; el haber calculado el valor de la hectárea teniendo en cuenta todo el inmueble y los predios del sector, desconociendo la vocación que tenía el bien raíz litigioso, posibilidades económicas reconocidas por la Lonja de Propiedad Raíz del Huila, las que no pueden ser homogéneas, lo que impedía tratarlas comercialmente de la misma manera. Que anotó la parte pasiva que en el área comprada había más de 20 hectáreas en reserva forestal, por lo que correspondía a la parte actora, en cuanto a demostrar el valor real del bien y de allí derivar una posible lesión enorme desvirtuar el cuestionamiento, empero, que, el Informe allegado "*no corresponde a*

simple vista a las características y condiciones del terreno y pone en entredicho sus conclusiones".

5.7. Seguidamente se refirió al dictamen rendido por el perito designado por el juzgado, para destacar que en él se anotó que el predio estaba inundado, por lo que tuvo en cuenta su valor histórico para actualizarlo, incluyendo el importe de un aljibe, para determinar su precio en la cantidad de $977.677.487.00 moneda corriente, dictamen que no ofrece la certeza requerida para fijar la cuantía del inmueble y la desproporción en el precio que se canceló, en tanto que se limitó a realizar la actualización del valor contenido en la escritura pública.

5.8. Concluyó que al no haberse probado el precio del inmueble al momento de la negociación en uno diferente al de la venta, no se había acreditado que la vendedora hubiera recibido menos de la mitad del que justamente tenía el bien para el 1° de noviembre de 2013, por lo que tal no devenía lesivo, lo que llevaba al fracaso de la acción y a la prosperidad de la excepción titulada "*Inexistencia de los elementos estructurales de la acción",* al igual que la denominada "*deber de probar",* atendiendo la falta de idoneidad del medio de prueba presentado, así como la de "*ineficacia del avalúo corporativo".* En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al extremo actor.

III. LA APELACION

6. Admitido el recurso de apelación bajo el régimen previsto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, la demandante sustentó oportunamente el recurso con fundamento en los siguientes reparos:

6.1. Cuestionó la valoración del *a quo* respecto del avalúo comercial elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz del Huila y Caquetá, por desconocer que la estimación del precio del inmueble debía hacerse considerando la destinación que tuvo y tenía al momento del avalúo, como efectivamente se había realizado por dicha entidad en su dictamen.

6.1.1. Sostuvo que la posición sentada en la sentencia llevaba al absurdo de considerar que quien quisiera enajenar un predio debía avaluarlo de acuerdo con el uso que va a darle el comprador, desconociendo el uso que se le da al predio para el momento de la venta.

6.1.2. No se tuvo en cuenta que el inmueble del litigio, al momento del avalúo, tenía un uso principal de explotación agropecuaria, mecanizada, altamente tecnificado y forestal protector según el Esquema de Ordenamiento Territorial, como fue reconocido en el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz del Huila y Caquetá.

6.2. Señaló que otra circunstancia que daba cuenta del yerro cometido por el fallador de primer grado era la labor que encomendó al perito cuya experticia fue decretada de oficio. A aquel se le ordenó establecer el valor del bien a 1° de noviembre de 2013, ejercicio que resulta contrario a la postura asumida por el *a quo*, pues si hubiera sido coherente con sus considerados realmente habría peticionado que se avaluara el inmueble una vez inundado.

6.3. Criticó que se reconociera en la sentencia que la finca contaba con árboles pero que, a su vez, negara que aquella se podría explotar agropecuariamente, cuando lo cierto es que, como lo valoró la Lonja del Huila, se trata de un beneficio a la hora de avaluar un bien.

6.4. Agregó que carecía de sustento fáctico y jurídico la afirmación contenida en el fallo de que el predio no se podía explotar en ganadería o agricultura para el momento en que se realizó el avalúo y el negocio de compraventa del inmueble.

6.5. Alegó que carecía de precisión el reproche técnico que se hizo al avalúo de la Lonja del Huila en la sentencia, respecto de la aplicación de la fórmula establecida en el "*acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009 de la CAM*" y el desconocimiento de los diferentes usos que tenía el bien raíz. Por el contrario, la experticia se había realizado teniendo en cuenta "*los diferentes tipos de terrenos del área diferenciados por clases: clase III - VI y VII, las cuales estuvieron basadas en investigación de precios que se hizo*", por lo que era falso señalar, como se hizo en la sentencia, que a todas las hectáreas se les había otorgado el mismo valor.

6.5.1. Tampoco se tuvo en cuenta que para calcular el valor del predio se habían adoptado los valores encontrados en la investigación directa, considerando la afectación del predio por la venta de la mejor parte de la finca.

6.6. Por último, señaló que, si bien a la experticia decretada de oficio por el Despacho no se le dio ningún valor debido a sus falencias técnicas, lo cierto es que tampoco se otorgó la oportunidad para contradecirla por medio de otro dictamen, como tampoco se accedió a la petición de citar a los peritos de la Lonja del Huila para esclarecer las dudas que pudieran existir respecto del dictamen, lo que evidencia que el *a quo*, antes que *"(…) esclarecer los hechos objeto de la controversia*", prefirió "*proferir sentencia con la inexistencia de dictamen pericial por la pésima gestión que hizo el auxiliar de la justicia, y restarle todo valor al avalúo comercial que hizo la Lonja del Huila con argumentos que no tienen ningún fundamento*".

7. Por su parte, el apoderado de la demandada solicitó confirmar la sentencia apelada.

IV. CONSIDERACIONES

1. Conforme con los reparos formulados por la parte recurrente, el fallo de segunda instancia se centrará en analizar si efectivamente existió indebida valoración del avalúo elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz del Huila y Caquetá.

2. En primer lugar, resulta relevante precisar que a dicho medio de prueba se le reconoció en el trámite de la primera instancia el carácter de prueba documental –dictamen técnico—. Así se extrae con claridad de la providencia en la que se decidió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra del auto que dio trámite a la objeción grave propuesta por la demandada. En dicha providencia se revocó la decisión impugnada, por considerar que la objeción por error grave resultaba improcedente, por no tratarse de un dictamen pericial[1].

3. Ahora bien, en relación con lo que atañe a la valoración de dicha prueba, le asiste razón al apelante cuando objeta las diversas manifestaciones que hiciera el *a quo* respecto de que dicho avalúo tenía como fundamento unas premisas falsas, pues consideraba las actividades de explotación económica que se podían realizar en el bien, cuando lo cierta era que aquellas no podían adelantarse debido a su declaración de utilidad pública.

[1] Fl. 320, Cuaderno 1.

3.1. Esa premisa resulta errada por las siguientes razones: i) la declaratoria de utilidad pública no supone que cesen las posibilidades de explotación económica del predio; y, ii) el avalúo de los inmuebles afectos al desarrollo de este tipo de proyectos debe hacerse considerando su valor comercial.

3.2. En relación con los efectos de la declaratoria de utilidad pública de un predio, debe precisarse que aquellos se encuentran definidos en la Ley 56 de 1981 (arts. 9 al 11). Ninguna de esas normas prevé que el predio no se pueda continuar explotando, sin perjuicio de que, una vez adquirido por la empresa desarrolladora del proyecto, su uso quede definitivamente restringido a aquel vinculado a su declaratoria de utilidad pública. En concreto los efectos de dicha decisión, son[2]: i) la limitación al derecho de dominio, referida al término durante el que está vigente la opción a favor de la empresa propietaria del proyecto adquiera el predio; ii) la enajenación forzosa del predio –expropiación—, en aquellos eventos en que no se llegue a un acuerdo para realizar su venta; y, iii) el no reconocimiento o pago de mejoras a los predios que sean posteriores a la fecha de declaratoria de utilidad pública.

3.3. De otra parte, se hace necesario explicar que la misma Ley 56 de 1981 establece que "*[p]ara determinar los valores que se han de pagar a los propietarios de los predios y de las mejoras, que se requieran para el desarrollo de los proyectos*" se integrará una comisión conformada por un representante de la empresa del proyecto, un representante designado por los propietarios de los predios afectados y un representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (art. 10). Esta comisión tiene por función principal elaborar el "manual de valores unitarios" (art. 11), con el cual "*la entidad propietaria del proyecto procederá a determinar los avalúos comerciales de los predios, aplicando los valores, normas y procedimientos establecidos en aquél*" (art. 20 del Decreto 2024 de 1982).

3.4. Como se evidencia, la finalidad de dicho ejercicio es la de determinar el valor comercial de los predios, lo que supone, ciertamente el reconocimiento de los predios como unidades productivas. Muestra de ello es la explicación que hizo sobre la Metodología contenida en el Manual de

[2] Ministerio de Minas y Energías. Concepto de 15 de noviembre de 2016. No. 2016076996.

Valores Unitarios del Proyecto Hidroeléctrico Coquimbo el apoderado de la demandada[3]. Aquel explicó que de acuerdo con dicha metodología:

"*…se calcula el valor de terreno a partir de las mediciones topográficas realizadas por Emgesa, las características topográficas del predio, clasificándose en topografía suave, media, acentuada y fuerte. A su vez, para cada una de estas áreas, se asignan los puntajes que varían de acuerdo con las siguientes características a evaluar:*

- *Aptitud (Sin riego, riego por bombeo o riego por gravedad);*
- *Aguas (Abundantes, suficiente, escasa, sin agua);*
- *Vías de acceso al predio (fluvial, caminos, carreteables y carreteras);*
- *Uso (Lagos y estanques, cultivos, tierras en descanso, pastos limpios, pastos arbolados, pastos enmalezados, bosques, matorrales y arbustos, playas, etc.).*

(…)

Posteriormente se identifican y avalúan los cultivos, maderables y bosques existentes en el predio por su cantidad, estado en el que se encuentran y demás.

Finalmente se totaliza el valor calculado del terreno con el valor de los cultivos, maderables y bosques inventariados, obteniéndose el valor total del predio.

La metodología fijada por la Comisión Tripartita garantizó que mediante las características de los inmuebles y la realidad del mercado inmobiliario para la época de negociación de los mismos, se llegara a determinar su valor comercial de manera objetiva".

3.5. La descripción realizada de la metodología empleada para definir los valores de los predios afectos al proyecto refuerza lo señalado previamente, de que para su avalúo debían considerarse las alternativas de explotación del inmueble. Esto permite descartar las razones esbozadas en ese sentido por el *a quo*, pues no es cierto que la determinación del precio del inmueble debiera hacerse considerando,

[3] Fl. 280, Cuaderno 1.

exclusivamente, el uso al que se ve afectado el predio con el desarrollo del proyecto que dio lugar a su declaratoria de utilidad pública.

4. Con todo, el desacierto de la sentencia impugnada en ese punto no supone la revocatoria de la decisión, pues las falencias de la prueba técnica allegada para demostrar la lesión enorme impiden acceder a las pretensiones. Un análisis detenido del avalúo elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz del Huila y Caquetá[4] pone en evidencia que dicho medio de prueba carece de un sustento técnico sólido, lo que resta totalmente su valor probatorio.

4.1. Las falencias detectadas respecto de dicho avalúo son las siguientes: i) no se otorgan razones valederas para descartar el avalúo determinado a través del método de comparación o de mercado; y, ii) no se aplicó adecuadamente el método de capitalización de ingresos o rentas para determinar el valor del predio.

4.1.1. A través del método de mercado se establecieron dos valores para el predio. El primero, que se denominó "*investigación directa*", se calculó teniendo en cuenta los valores del Manual de Valores Unitarios del Proyecto Hidroeléctrico Coquimbo. Este ejercicio arrojó total del terreno de $792.268.450. El segundo, que es el fruto de la "*investigación indirecta*", se obtuvo a través de "*una encuesta con personas idóneas y conocedoras del mercado inmobiliario, ya que en la misma zona se han hecho avalúos resientes (sic) pero en predio de diferentes condiciones agrológicas y socioeconómicas*". A partir de las encuestas se obtuvo como valor total del terreno la suma de $733.671.930.

4.1.2. Como conclusión del estudio de mercado, en el documento se señaló que "*analizando los valores obtenidos en las investigaciones, adoptamos los valores encontrados en la INVESTIGACIÓN DIRECTA, los cuales se ajustaran por que (sic) dichos valores son tomados del manual de Valores Unitarios con fecha marzo de 2010 y se valorara la afectación del predio restante, pues se vende lo mejor de la finca y el acceso directo a aguas abundantes*".

4.1.3. Al analizar esos resultados, se advierte que las razones para descartarlos no son justificadas. El ejercicio realizado, que utilizó la

[4] Fls. 10 a 35, Cuaderno No. 1.

metodología de mercado, arrojó unos valores del terreno que resultaban confiables. Según lo establece la Resolución 620 de 2008 del IGAC[5], las encuestas que se realizan en estos casos solo pueden usarse "*para comparar*" (art. 11), cotejo que en este caso arrojaba como resultado que los valores definido en Manual de Valores Unitarios del Proyecto Hidroeléctrico Coquimbo (investigación directa) sí resultaban ajustados a la realidad del mercado, pues presentaban precios similares—una diferencia de tan solo $58.596-520— a aquellos que se hallaron con fundamento en los conocimientos y opinión de expertos en el mercado inmobiliario (investigación indirecta).

4.1.4. Por el contrario, el valor del predio hallado a partir del método de capitalización de ingresos o rentas arrojó un valor $1.519.290.576, el cual se desviaba en 207% al compararlo con el valor obtenido en la investigación indirecta, sin que en el informe se hubiera plasmado una explicación razonable sobre esa diferencia, como tampoco de la decisión de decidirse por aquella cifra totalmente alejada de los otros datos recaudados.

4.1.5. Según se plasmó en el avalúo, las razones para preferir el resultado obtenido a través del método de capitalización de ingresos o rentas, fueron las siguientes: i) que se venda la mejor parte de la finca; ii) se pierde la posibilidad de construcción de futuros sistemas de riego; iii) los valores de compra determinados en el Manual de Valores Unitarios no estaban actualizadas; iv) no se tiene en cuenta la oferta de predios afectados por la especulación; v) la desmembración de la finca, disminución de terrenos planos y reorganizar nuevamente potreros; y, vi) no tener la cuantificación de los árboles, razón por la cual no se valoran directamente y se toma como un mayor valor de terreno.

4.1.6. No se observa que dichas razones justifiquen la decisión de apartarse de unas cifras obtenidas a través del método de mercado que, de acuerdo con el ejercicio adelantado, resultaban adecuadas. El solo hecho de que se vendiera la mejor parte de la finca no explicaba abandonar la estimación por el método de mercado, máxime cuando dentro de los cálculos que se hicieron se diferenciaron distintas clases de

[5] "*Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997*".

predios que permitían establecer un mejor valor unitario para aquellas áreas de mejor calidad.

4.1.7. La circunstancia de que los montos determinados en el Manual de Valores Unitarios no se encontraran actualizados tampoco aparecía como un motivo relevante para abandonar el resultado obtenido a través del método de mercado, pues lo cierto es que la investigación indirecta, realizada para el tiempo en que se elaboró el avalúo, mostraba que dichos precios no habían perdido su vigencia, a lo que debe agregarse que la normativa aplicable establece que "[*l]os valores unitarios asignados en el manual tendrán vigencia durante la adquisición de los predios del respectivo proyecto*" (Art. 20, Decreto 2024 de 1982).

4.2.1. A ello debe agregarse que el método de capitalización de ingresos o rentas no se aplicó adecuadamente. Muestra de ello es: i) que no se indicó de dónde se obtuvieron los datos para establecer los ingresos y costos que se tuvieron en cuenta para desarrollar el avalúo; ii) el avalúo no se hizo a partir de rentas que asociadas exclusivamente al inmueble; y, iii) no se acompañó ningún soporte del ejercicio realizado.

4.2.2. De acuerdo con el artículo 16 de Resolución 620 de 2008 del IGAC, cuando se utiliza el método de capitalización de rentas o ingresos "*[e]s necesario realizar la investigación de los contratos que regulen la posibilidad de generar rentas o ingresos, tales como los de arrendamiento, para bienes comparables*". No obstante lo anterior, en el avalúo aportado no existe ninguna mención a los contratos que fueron verificados a efectos de establecer las rentas que sirvieron al cálculo del precio determinado bajo dicha metodología. Se trata de datos usados sin ninguna explicación de su origen, lo que impide otorgarles credibilidad a dichos cálculos, máxime cuando no se cumple con la metodología establecida al respecto. Algo similar ocurre con los costos, pues se desconoce cuáles son los soportes que sirvieron para determinar los montos plasmados en el avalúo de la Lonja del Huila.

4.2.3. Más grave aún resulta que dicho método se haya empleado sin considerar que "*[l]as rentas a tener en cuenta para el cálculo del valor comercial de la propiedad deben estar asociadas exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la actividad económica que en él se realiza*" (num. 5, art. 16, Resolución 620 de 2008 del IGAC). La ganadería

no constituye una renta asociada exclusivamente al inmueble, lo que impide considerarla para el avalúo del predio bajo esta metodología. Particularmente, tratándose de avalúos en zonas rurales, se hace referencia a que se deben tener en cuenta los cultivos "*su tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y cuando se refiera a bosques es necesario determinar claramente si éste es de carácter comercial cultivado o protector*", que no las actividades de ganadería que se desarrollan en el predio, pues aquellas no cumplen con la condición de "*estar asociadas exclusivamente al inmueble*".

4.2.4. Finalmente, no se puede pasar por alto que el avalúo presentado carece de soportes. A pesar de que a aquel se le haya reconocido el valor de prueba documental, su valor demostrativo supone que se haya acompañado de dichos anexos que dan cuentan, entre otros aspectos, que el ejercicio de valuación se fundó en datos ciertos y extraídos de una fuente confiable. En ausencia de esos soportes, no resulta viable otorgarle credibilidad a los valores determinados en el avalúo, pues se trata de una conclusión que no es posible establecer si se ha alcanzado en forma fiable.

5. Además de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que, tratándose de la acción de lesión enorme, la prueba idónea para demostrar que la compraventa de un inmueble no se efectuó por el justo precio es una prueba pericial, en tanto que para esa determinación se requieren conocimientos especializados, los que debe brindar un experto. Al respecto, dijo la Corporación citada:

> *"Como es suficientemente conocido, la lesión enorme como vicio objetivo que afecta determinados negocios jurídicos como el de compraventa de inmuebles, tiene lugar, si la propone el vendedor, 'cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende', de acuerdo con el texto del artículo 1947 del Código Civil. Y para la fijación de ese justo precio, la prueba técnica judicial se muestra como el medio probatorio más idóneo a efectos de establecer, con criterios de suficiente certeza, el precio de mercado que para la fecha del negocio tenía el inmueble objeto de la venta, concepto dentro del cual deben comprenderse no sólo el dictamen pericial rendido*

conforme a lo dispuesto en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino aquellas otras modalidades de dictámenes que, por virtud de lo dispuesto desde el artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, luego sustituido por el artículo 10 de la Ley 446 de 1998, han venido a enriquecer aquel tradicional elemento de convicción, como lo son las experticias que cualquiera de las partes, en las oportunidades probatorias legalmente previstas, allegan al proceso, a fin de que sean valoradas judicialmente, previa, por supuesto, la necesaria contradicción. Sin embargo, en todas esas pruebas técnicas deben estar presentes y consiguientemente examinarse por parte del juzgador, la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos en que se basan los peritos o expertos, así como su competencia e idoneidad, sin perjuicio de que otros elementos probatorios que obren en el expediente contribuyan a moldear la convicción a que llegue el fallador en punto del valor justo que hubo de tener la contraprestación dineraria respectiva"[6].

6. Desde esa perspectiva, es claro que la accionante no trajo al proceso el medio de prueba adecuado para demostrar el justo valor de la cosa transferida en virtud del contrato de compraventa celebrado con la demandada, pues, como ella misma lo señaló al momento de reponer el auto que decretó la objeción por error grave, el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz del Huila no era una prueba pericial. De donde le corresponde a dicho sujeto asumir los efectos adversos de no haber acudido al medio de prueba idóneo para acreditar el supuesto de hecho de la norma cuyo efecto persiguió a través de la presente acción, pues las falencias de la documental traída al proceso impiden que, a través de dicho medio de convencimiento, se reconozca la existencia de lesión enorme.

7. Así las cosas, dado que, en punto a la lesión enorme en el contrato de compraventa, recae en quien la alega la acreditación del desequilibrio en la prestación contractual, por lo que le corresponde aportar la prueba que resulta más idónea, esto es, la prueba técnica, el hecho de que aquella carezca de valor demostrativo resulta suficiente para confirmar la decisión apelada, pues se abren paso las excepciones cuya prosperidad fue reconocida en dicha providencia, esto es, la de "*inexistencia de los*

---

[6] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de junio de 2014. No. SC7720-2014. M. P. Jesús Vall de Rutén Ruiz.

elementos estructurales de la acción", al igual que la denominada "*deber de probar".*

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de agosto de 2020 por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante.

La Magistrada sustanciadora fija como agencias en derecho la suma de $ 2.000.000.

NOTIFÍQUESE,

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
Magistrada

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA
Magistrado

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 018 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f777c9a57b31e007b218c3e341ba7d44db4ca47e9dad1bc94b4c3e08f513eb42
Documento generado en 26/03/2021 10:02:08 AM

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora. 4:00 p.m.

Radicación: **11001-3103-006-2018-00107-01**
Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Nubia Esperanza Riaño Acero.
Demandado. Sociedad Compañeros Unidos Para el Progreso S.A en Liquidación.

En firme el auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo que dirimió la primera instancia en el asunto citado en la referencia, sin que las partes hayan solicitado la práctica de pruebas, el apelante deberá sustentar la alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído (C.G.P., Art. 118 Inc. 2°; Decreto 806 de 2020, Art. 14), so pena de declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 322 del C.G.P. Dicha sustentación debe contraerse a los expresos reparos formulados ante el juez de primer grado.

Vencido el aludido plazo, por Secretaría córrase traslado a la parte contraria por el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Los respectivos escritos deberán remitirse al correo institucional de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Culminados los plazos aquí otorgados, ingrésense las diligencias al despacho para el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., marzo veintiséis (26) de dos mil veintiuno (2021)
(Discutido y aprobado en Salas 7, 8 y 9 del 12, 19 y 26/03/2021)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada principal y demandante en reconvención, contra la sentencia proferida en agosto 15 de 2019 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esta capital, dentro del proceso verbal que promovió María Elena Giraldo Sánchez en contra de Luz Jenny Marín Quintero y otros, quienes a su vez formularon demanda reivindicatoria en reconvención

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda principal

Por medio de apoderado judicial, la señora María Elena Giraldo Sánchez pidió declarar que es la propietaria de la cuota equivalente al 50% del inmueble ubicado en la Diagonal 41 sur # 34 C 14 e identificado con folio de matrícula 50S-844782, sobre el cual ejerce posesión irregular y cuyos titulares inscritos son los demandados como adjudicatarios del causante Henry Giraldo Sánchez.

En caso de no prosperar su pedimento inicial, subsidiariamente solicita que, se ordene a los demandados el pago en su favor de la suma de $ 85.488.000 –indexados-, por concepto de las mejoras realizadas al inmueble.

Los hechos que sustentan la petición se sintetizan así:

La señora María Elena Giraldo Sánchez junto con su hermano Henry Giraldo Sánchez, adquirieron en 1985 el inmueble identificado con matrícula 50S-844782, cada uno en proporción del 50%; sin embargo, desde el 30 de abril de 1991 -fecha en que falleció el señor Giraldo- ha ostentado la posesión de la cuota de éste con ánimo de señora y dueña.

Dichos actos posesorios se concentran en la habitación permanente del predio, el pago de servicios públicos domiciliarios e impuestos prediales; además, de la ampliación, modificación y realización de mejoras a todas las zonas del inmueble en un equivalente a 85 mts^2 nuevos construidos por un valor de $ 85.488.000.

Acotó que desde la adquisición del predio ha sido ella quien lo habita y así se ha mantenido desde el fallecimiento de su hermano pues ningún heredero ha vivido allí, como tampoco efectuaron actos de inversión y mejoras.

Agrega que, la esposa e hijos de su hermano -señora Luz Yenni Marín Quintero, José Benhur Giraldo Marín y Juan Camilo Giraldo Marín- hoy demandados, desconocieron su posesión pública y pacífica, iniciando un proceso de sucesión notarial del causante Henry Giraldo, incorporando en el inventario de bienes la cuota del predio que aquí se disputa, siendo adjudicada a los herederos; situación que conoció la señora María Elena Giraldo, el 5 mayo de 2016, cuando solicitó un certificado de libertad y tradición del inmueble.

2.- La defensa

2.1.- José Benhur Giraldo Marín se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones que nombró: *"Ausencia de los presupuestos sustanciales para deprecar la existencia de la prescripción adquisitiva de dominio por parte de la demandante"* e *"Inexistencia de actos de señor y dueño por parte de la demandante respecto del 50% del derecho de dominio y posesión que ha venido ejerciendo el señor José Benhur Giraldo Marín como heredero, ahora en calidad de propietario, con fundamento en el pacto entre el señor Henry Giraldo Sánchez (q.e.p.d) y la demandante".*

Expuso que, desde la compra del inmueble, los comuneros María Elena y Henry Giraldo decidieron que allí podría vivir su madre y un hermano común de aquellos hasta su muerte, hecho que se ha respetado por los herederos del comprador inicial; sin embargo, ello no quiere decir que hayan abandonado el predio, como tampoco, que la demandante lo ha poseído porque su dependencia física atiende a un pacto familiar que se contrajo desde el instante en que se adquirió.

2.2.- Juan Camilo Giraldo Marín refutó el buen suceso de la demanda. Bajo la misma hipótesis fáctica formuló idénticas excepciones de mérito y adicionó las que nominó *"Ausencia de presupuestos legales para usucapir", "Ausencia de los presupuestos sustanciales y legales para deprecar el reconocimiento y pago de mejoras tal y como se encuentran solicitadas dentro de las denominadas pretensiones subsidiarias"* y *"La genérica consagrada en el artículo 283 del Código General del Proceso".*

Complementó que la prescripción alegada, según la demandante, comenzó en el año 1991 cuando regía la Ley 50 de 1936, normativa que exigía 20 años de posesión. De otro lado, aduce que las mejoras reclamadas no son susceptibles de reconocimiento por cuanto nunca fueron registradas, ni se solicitó aval o licencia para llevarlas a cabo.

2.3.- Por su parte, Luz Jenny Marín Quintero también rebatió la prosperidad del pedimento, proponiendo las mismas excepciones que sus hijos formularon.

2.4.- El curador *ad litem* de las personas indeterminadas, se atuvo a lo que llegare a demostrarse en el curso del litigio.

2.5.- Por último, el Fondo de Empleados y Pensionados de la ETB, vinculado oficiosamente por el *a quo*, atendiendo a que en el folio del bien a usucapir se registraba en su favor una garantía hipotecaria, informó que dicha relación de crédito fue con la demandante y afectó el 50% del que es titular; sin embargo, aclaró que está a la espera del trámite de levantamiento que deberá ser impulsado por la señora María Elena Giraldo.

3.- Demanda de reconvención

3.1.- Con demandas independientes vistas a cuadernos 3, 4 y 5, los demandados accionaron en reivindicación respecto de cada una de sus cuotas partes equivalentes al 25%, 12,5% y 12,5% de la totalidad del predio en disputa. Indicaron que mediante escritura pública 5455 del 8 de octubre de 2014 les fue adjudicado el derecho de dominio que procuran hacer prevalecer. Por lo anterior, pretenden la restitución de sus cuotas sin devolución de las expensas alegadas por su demandada, por cuanto es poseedora de mala fe.

3.2.- Al descorrer el traslado de la mutua petición, María Elena Giraldo excepcionó *"Ausencia por parte de la demandante en reconvención* -Luz Jenny Marín Quintero, Juan Camilo Giraldo Marín y José Benhur Giraldo Marín- *de los derechos de dominio, posesión real y material del inmueble a usucapir en la presente acción"* y *"temeridad y mala fe".*

Arguyó que Henry Giraldo aparece como propietario inscrito del 50% del inmueble, sólo para facilitar la adquisición por parte de ella ante la falta de un soporte financiero. Lo que explica, que haya ejercido durante tanto tiempo actos posesorios sin la interferencia de su fallecido hermano, ni la de su familia.

Reitera que la sucesión del señor Giraldo se tramitó de manera oculta y, sólo para poder concretar tal procedimiento notarial, los herederos cancelaron los impuestos que se adeudaban en ese momento.

4.- La sentencia de primera instancia

Al resolver sobre los pedimentos de las demandas, el Juez Séptimo Civil del Circuito la ciudad accedió a la pretensión de usucapión de la demanda principal y, a la par, denegó las de la reconvención.

En tal virtud declaró que María Elena Giraldo demostró ser la poseedora exclusiva de la cuota parte del 50% cuyos titulares inscritos son los demandados, durante los últimos diez años anteriores a la presentación de la demanda como lo soportan los testimonios y demás pruebas arrimadas al proceso.

Desestimó las alegaciones de los convocados en torno a que existía un acuerdo verbal entre la señora María Elena y el señor Henry para permitir que en el inmueble vivieran la progenitora y un hermano común de estos, porque tal circunstancia no fue demostrada. Tampoco fue enervante que, para los años 2000 y 2001 el demandado José Benhur hubiera vivido en el predio, pues ese simple acto no significa dominio y, además acaeció, hace más de 10 años y según la

versión de la demandada Luz Jenny Marín, la estadía de su hijo fue autorizada por la demandante.

Por último, analizó que el descargo de la deuda de adquisición atendió a una relación contractual ajena al ejercicio de la propiedad y, en verdad, no fue positivo y volitivo del señor Henry como tampoco de sus herederos, pues la cancelación por parte de la aseguradora fue un hecho derivado de una prestación contractual. Tampoco consideró como actos de interrupción de la posesión de la demandante el pago de impuestos que realizó la pasiva frente a los años 2011-2014, pues se realizaron el mismo día y con causa exclusiva a juicio de sucesión que promovieron los herederos de señor Henry.

5.- El recurso de apelación

5.1.- La pretensión impugnativa del extremo demandado principal y demandante en reconvención que se aludió en curso de la audiencia de instrucción y juzgamiento y, oportunamente, fue sustentada ante esta Corporación en el marco del artículo 14 del Decreto 806 de 2020, se basó en los siguientes aspectos:

(i). - En los términos del numeral 3 del artículo 375 del C.G.P, la convocante no acreditó la *"explotación económica"* de la cuota del comunero Henry Giraldo Sánchez, hoy propiedad de los convocados, elemento que resultaba indispensable para el acceso a la pretensión de usucapión.

(ii).- Acusó por desacertado la valoración de los testimonios en torno a la validez del acuerdo verbal entre los familiares para permitir que en el inmueble vivieran el hermano y madre común de los dueños iniciales del mismo.

En la sustentación, complementó que las pruebas en su conjunto resultaban insuficientes para acreditar los actos exclusivos de posesión invocados por la promotora.

II.- CONSIDERACIONES

6.- Presupuestos procesales

Cabe acotar, como primera medida, que concurren en esta litis los llamados presupuestos procesales indispensables para su normal desarrollo y no se advierte vicio con la entidad suficiente para anular la actuación, lo que torna viable el fallo de fondo que se reclama de esta Corporación.

7.- Límites al recurso de apelación

Para desatar los reparos, se habrá de recordar que, de conformidad con lo reglado en los artículos 281 y 328 del C.G.P., la competencia del superior se circunscribe por regla general, a los motivos de inconformidad sustentados por el extremo apelante; razón por la cual, en sano respeto al principio de congruencia, el estudio que efectuará el Tribunal atenderá exclusivamente al objeto de la alzada.

En ese orden, dos defectos fueron acusados por la pasiva; el primero, sustantivo, por cuenta de la inaplicación del numeral 3 del artículo 375 del CGP que exigía a la demandante, en su calidad de comunera, demostrar una *"explotación económica"* para hacerse a la usucapión, sin que tal ingrediente normativo hubiera sido tenido en cuenta por el juzgador de instancia; el segundo, uno fáctico, de cara a la inadecuada valoración de los testimonios ya que, según los apelantes, no daban cuenta de los actos posesorios y, en verdad, acreditaban el pacto familiar entre los comuneros iniciales.

8.- Análisis y respuesta a los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia.

8.1- La pretensión principal del juicio propuesta por la demandante María Elena Giraldo Sánchez, fue la adquisición que ella hizo por vía de la usucapión de la cuota parte que, en su momento, correspondió a su hermano Henry Giraldo en el predio ubicado en en la Diagonal 41 sur # 34 C 14, hoy distribuida en sus causahabientes.

La prescripción como "modo" originario de adquirir el derecho de dominio, tiene ocurrencia cuando una persona, de forma real y material detenta un bien susceptible de ganarse por este medio, durante el tiempo y con las condiciones que la misma ley indica, sin que el verdadero propietario ejercite directa o por interpuesta persona el derecho que tiene.

Con sustento en aquel enunciado y como de manera reiterada y homogénea ha construido la jurisprudencia patria, corresponde al interesado como carga procesal, acreditar los siguientes elementos:

a.) Que la cosa objeto de la pretensión usucapiente, sea susceptible de ser adquirida por este medio;
b.) Posesión por el término legal con ánimo de señor y dueño;
c.) La posesión ininterrumpida;
d.) Que el bien cuyo dominio se pretende adquirir, se encuentre debidamente identificado dentro del proceso.

Frente al primer aspecto, encuentra la Sala que la cuota parte del bien que se pretende usucapir se encuentra sin limitación alguna en el comercio humano, es decir, satisface la exigencia de ser susceptible de adquirirse mediante prescripción, pues así lo refleja el histórico de anotaciones del registro de instrumentos públicos del predio en discusión, el que fue adquirido mediante escritura 6200 del 31 de mayo de 1985 por los señores María Helena Giraldo y Henry Giraldo en comunidad -anotación 04-; posteriormente, con instrumento notarial 5455 del 08 de octubre de 2014 -anotación 10-, se efectuó la adjudicación por vía de sucesión de la cuota del fallecido Henry Sánchez en favor de los aquí demandados en porcentajes del 50, 25 y 25%.

Ahora, aun cuando el artículo 779 del C.C. permite la posesión proindiviso, nada obsta para que cualquiera de los comuneros se rebele ante sus homólogos, defendiendo en su nombre el ejercicio posesorio respecto de la integridad del bien común y no, únicamente, frente a la parte que por la división le cupiere. Entonces, si la actitud del poseedor es la de hacerlo en contra de la comunidad, es exclusiva

y contradice sin equívocos o en forma evidente, manifiesta y abierta la de sus demás compañeros, quedando plenamente facultado para adquirir por la vía de la usucapión el excedente del inmueble, ya que su conducta posesoria resulta plena.

De modo tal, que deberá acudir a la probanza de los requisitos arriba anunciados, los que necesariamente serán escrutados con mayor detenimiento por el fallador, a efecto de no confundir la relación física y jurídica que se deriva del derecho de dominio de la cuota, con la de la integridad de la cosa o que, en abuso de una facultad de los comuneros se aproveche la conducta para abanderar una posesión exclusiva.

Ello implica despachar adversamente el requisito que extraña el demandante, nominado *"explotación económica"* y que asoció, en sus palabras, a un *"aprovechamiento económico",* pues a pesar que el numeral 3 del artículo 375 del C.G.P hace alusión a este concepto en modo alguno lo contempla como un requisito sin el cual, se torne inaccesible la declaración de pertenencia. Indica la norma en comento que:

> *"3. La declaración de pertenencia también podrá pedirla el comunero que, con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad."*

La verdadera inteligencia de la norma no apunta a indicar que el único acto posesorio válido para que un comunero pueda adquirir por vía prescriptiva, sea un aprovechamiento económico o explotación mercantil; pensar en tal sentido, limitaría ostensiblemente uno de los medios adquisitivos de dominio, el fin social de la propiedad y reemplazaría el verdadero propósito de la institución.

El aparte que defiende el recurrente, solo procura recabar en la estrictez con que se ha de asumir -de cara a la calificación de los actos de rebeldía contra los comuneros- pues como se dijo, mal podría apalancarse el demandante y estructurar sus actos de señorío, en actividades u operaciones que nunca fueron autónomas y exclusivas sino que se produjeron por la decisión o anuencia de todos los condueños o provino de un mandato legal o administrativo; es decir, externo a la elemento volitivo del prescribiente, siendo entonces ajustado afirmar que el comunero deberá acreditar la posesión material, suficiente, clara y exclusiva por cualquiera de los medios de prueba y con sustento en cualquier acto de disposición.

8.2.- En segundo lugar, se reparó en el hecho de que la prueba recaudada no se infería la afirmación de la demandante y adicionalmente, que sí fue verificado un pacto o acuerdo familiar suscrito entre los comuneros iniciales para que el bien sirviera de vivienda a su progenitora y hermanos comunes, lo que le restaba sustento al éxito de la pretensión de la demanda principal.

Varias son las razones que impiden abrigar tal reparo, pues para la Sala, se encuentra que el acopio probatorio, en contra de la postura de los apelantes, sí demuestra que la posesión de la demandante fue exclusiva y excluyente, en contraposición, con el sustento fáctico de la teoría del caso traído por la defensa de la pasiva.

La demandante alegó ser poseedora a partir de la muerte de su hermano en 1991, hecho corroborado por las señoras Adriana Cepeda Monroy, Alcira Varga Salgado y Soledad Cáceres de Morales, vecinas todas de la misma calle desde hace más de 25 años, que aseveraron en modo homogéneo que, la única dueña que han conocido y a quien bajo dicho papel catalogan es a la demandante y, aunque distinguieron al señor Henry y a sus hijos, no fue bajo la calidad de dueños, sino como familiares de la titular del predio.

Adicionalmente, testificaron que al predio se le han hecho modificaciones, reformas que mejoraron su habitabilidad y valoración pues incrementaron sus áreas, siendo imputadas todas a la dirección de la señora María Elena Giraldo. Por último, aun cuando el pago de servicios e impuestos no son actos suficientes para que se tenga a una persona como poseedor, sí son indicativos porque permiten inferir en conjunto con las demás pruebas el comportamiento de señorío, en ese sentido la narración de la testigo de descargo María Estela Marín Quintero, al informar que *"(…) aquí siempre ha vivido María Elena (…)"* y frente a la interversión del bien, *"(…) Nena* -María Elena- *amplió esto aquí (…) Nena siempre las realizó, pues porque ella siempre estuvo acá y era la que se beneficiaba de todo";* por último, al ser cuestionada sobre si el señor Henry ejerció actos de dueño, adicionó que: *" (…) No, porque ellos tenían su casa en Suba y en esta estaba la mamá y el hermano (…)".*

Los demandados adujeron que desde 1985, María Elena y Henry Giraldo adquirieron en partes iguales el bien con el propósito de amparar a la señora Mariela, madre de los compradores y a su hermano Fernando, en virtud de lo que ellos denominaron "acuerdo familiar"; sin embargo, tal postura se mantuvo en el escenario de las alegaciones, pues no presentaron medido de aprueba alguna que permitiera llegar a esa conclusión.

Con todo, si lo que se pretendía hacer ver, era que los señores Mariela y Fernando (ambos fallecidos) habitaron el bien en nombre de Henry Giraldo, tal postura tampoco tiene respaldo suasivo. Esto es así, según lo adujo la propia demandada Luz Jenny Marín al indicar que *"(…) la casa fue adquirida familiarmente, ¿por qué? Vivian en arriendo, María Elena siempre estuvo con doña Mariela y con Fernando (…)".* Pero por si fuera poco y, en gracia de discusión, la señora Mariela falleció en 03 de septiembre de 2001 (fol. 57 Cd. 3) y el señor Fernando en diciembre 18 de ese mismo año (fol. 56 *ib*), y hasta el año 2014, fecha en que se adelantó la sucesión notarial del señor Henry por parte de los demandados, habían pasado más de 13 años.

Otro punto gravitó en que para el año 2000 a 2001, cuando el convocado José Benhur Giraldo se encontraba validando su bachillerato, residió en el bien base del litigio, hecho que anuncian como un acto de señorío que interrumpió la posesión de la activante; no obstante, fue la señora Luz Jenny Marín, madre del convocado,

quien confesó que para que ello se pudiera efectuar: *" (…) había hablado con María Elena para que* ***le permitiera vivir ahí,*** *que estuviera mientras terminaba de estudiar porque le quedaba más cerca (…)".* Opuesto a un acto de dominio, la autorización indica lo contrario y, en verdad, atribuye reconocimiento de dicha aptitud en favor de la demandante. Con todo, una vez más, ello ocurrió en 2001, por lo que para el 2014 (fecha de la sucesión) y 2016 (radicación de la demanda) pasaron 13 y 15 años respectivamente.

En razón a los interrogatorios y testimonios, hay un punto que llama la atención para la Sala. Pese a que las dos testigos de descargo (cuñada y hermana de la demandada), narraron historias contradictorias frente a quien adquirió el predio y el por qué el señor Henry terminó siendo condueño, una vez más, la señora Luz Jenny confesó que quien lo adquirió fue la demandante, dándole mayor soporte a la teoría de la activa. Afirmó que*: "(…) El pago inicial lo hizo Fernando y María Helena (…)"* y las cuotas *"(…) por eso digo que María Elena, por estar en una empresa fija pagaba las cuotas y ellos* [Henry y Fernando] *daban lo del diario (…)"*, situación que refleja la documental anexa con las contestaciones a la demanda de reconvención

Por último, a pesar que en 2014 los demandados promovieron un trámite sucesoral por vía notarial que se plasmó en la escritura pública 5455 (fols. 217 a 228), tal situación en nada varió la situación de hecho de la demandante frente a la casa, por cuanto incluso, al momento de la diligencia de inspección judicial, continúa habitando la totalidad del mismo y los demandados jamás le han reclamado le entrega, es decir, nunca se interrumpió la convicción de la actora respecto a que es ama y señora de la totalidad del predio.

Además, si bien los enjuiciados adujeron haber sido quienes pagaron el impuesto predial para los periodos 2010 a 2014 (fols. 208 y 212 a 214), lo cierto es que tales desembolsos al fisco, no se dieron para esos años, sino que el pago se ajustó en un solo instante, esto fue el 17 de julio de 2014 y su motivación, conforme así fue narrado por el demandado José Benhur Giraldo, fue poder llevar a cabo el trámite de sucesión, pues es un requisito legal para su adelantamiento.

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para concluir la falta de acierto en los reparos de los recurrentes y el ajustado escrutinio probatorio de la sentencia de instancia, pues como se indicó, la demandante logró probar con suficiencia y robustez, los presupuestos de la acción por ella invocada además que el título invocado por los demandados es posterior a la fecha de la posesión alegada por la demandante. Por lo anterior, se confirmará la decisión de primer grado y, por cuenta de la regla prevista en el numeral 3 del artículo 365 del C.G.P, se impondrá condena en costas al extremo apelante.

III.- DECISIÓN

La Sala Quinta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, en agosto 15 de 2019; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en este fallo.

SEGUNDO: Condenar en costas de instancia a la parte demandada y apelante. La Magistrada Ponente fija por concepto de agencias en derecho la suma de $1.500.000. Liquídense.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
[Ausencia Justificada]



CLARA INES MARQUEZ BULLA
Magistrada
[con aclaración de voto]

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación 07-2016-00376-01 Verbal de María Elena Giraldo Sánchez contra Luz Jenny Marín Quintero

Con el debido respeto que siempre he profesado a las señoras Magistradas integrantes de la Sala de Decisión, me permito consignar a continuación las razones por las cuales aclaro mi voto, respecto a la indebida aplicación del trámite del recurso de apelación regulado en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el presente asunto.

Es indudable que la pandemia que nos afecta hizo imperativa la declaratoria de emergencia sanitaria; y, por ende, la expedición de la normativa declarativa de su desarrollo, como la que nos ocupa. Pese a ello, es claro que la situación del estado de excepción no permite el desconocimiento de la constitución, ni de la ley. En consecuencia, se incorpora en la Legislación Colombiana ya existente.

Revisado el Decreto Legislativo 806 de 2020, aunque indica que se adoptará *"... en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición...",* no creó un régimen especial de transición. Lo que conlleva que para su aplicación deba ajustarse al Código General del Proceso.

En efecto, tal precepto modificó por un término de dos años el trámite del recurso de apelación en asuntos civiles regulado en el Estatuto en cita. Por ende, se trata de una norma procesal, que entró en vigor desde el 4 de

junio de 2020[1], por lo que predomina respecto de la disposición que disciplina el decurso de ese medio de impugnación, toda vez que el artículo 624 del Código General del Proceso indica:

"...Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir…".

En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido constante en sostener sobre la irretroactividad de los actos legislativos, como el que contempla la memorada regla que:

"…uno de los fundamentos esenciales del ordenamiento jurídico es el de considerar que las leyes y actos administrativos rigen hacia el futuro. En este sentido se encuentra el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal que establece que «la Ley no obliga sino en virtud de su promulgación, ... Asimismo, se observan los artículos 17 y 19 de la Ley 153 de 1887, los cuales disponen como regla general el principio de irretroactividad con el fin de mantener la seguridad jurídica y la protección del orden social. Como bien lo ha precisado esta Corporación «el efecto retroactivo y la regla que lo prohíbe, se contrapone del efecto general e inmediato de la ley, según el cual la ley sólo rige para el porvenir, esto es, sus disposiciones únicamente se aplican desde el momento en que comienza su vigencia y hacia el futuro…"[2].

Sin embargo, no debe pasarse por alto que la disposición en comento, esto es, el inciso final del artículo 624 del Código General del Proceso, regula que la nueva ley procesal no tiene aplicación inmediata, ya que en tratándose de *"…**los recursos interpuestos**, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos**, se decretaron las pruebas, se*

[1]Según el artículo 16 de la Decreto Ley 806 de 2020.
[2]Consejo de Estado. Sentencia de14 julio de 2011, expediente 85/2009-00032-02.

iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones…" –resalta la Sala-.

En estas condiciones, la inaplicación de dicha preceptiva se revela nítida en lo relativo a los recursos planteados en vigencia de la ley procesal anterior, pues, precisamente, al amparo de aquella norma, si el medio de impugnación se inició bajo el imperio de una determinada norma, debe continuar su decurso al tenor del procedimiento establecido por esta disposición hasta tanto culmine su trámite. Vale decir, no cambian las reglas procesales de actuaciones que ya estaban en curso. Desconocer estos principios desemboca en que las partes pueden verse afectadas al modificarles las reglas que observaron cuando formularon sus reparos. Sin temor a equivocación, es una vulneración al debido proceso estipulado en el artículo 29 de la Carta Magna.

Desde esa perspectiva, las prescripciones contenidas en el Decreto 806 de 2020 sobre el trámite de la alzada no son de recibo para los recursos de esa naturaleza que tuvieron su génesis antes que entrara en vigencia la mencionada disposición, pues a voces del Alto Tribunal Civil, *"…cuando una norma posterior modifica los requerimientos relativos al nacimiento o finalización de una situación jurídicamente relevante, en línea de principio, no puede alterar las situaciones que están consolidadas en el pasado, ni violentar los derechos adquiridos, so pena de atentar contra la seguridad jurídica y someter a la sociedad a una situación permanente de incertidumbre…"*[3].

Con tal criterio, también se acompasa lo consagrado en el inciso final del artículo 624 del Código General del Proceso, ya reseñado, es decir, los casos excepcionales en que se aplica una ley procesal derogada a determinados actos procesales en curso, los cuales son imposibles de seccionar porque no se han consumado cuando entra en vigor la nueva norma.

Memórese que respecto de ese tópico, desde antaño, la honorable Corte

[3] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 12 de febrero de 2018, expediente 11001311001820080033101.

Suprema de Justicia ha enseñado:

"…según la ley colombiana, las normas procesales tienen aplicación inmediata aun respecto de los procesos pendientes. Pero si bien es un principio de carácter general, tolera algunas concesiones, toda vez que la misma ley ha exceptuado, rindiendo con ello culto a la doctrina que distingue los actos procesales consumados de los no consumados, algunas situaciones, así: "Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la vigente al tiempo de su iniciación". Estas excepciones están significando, entonces, que la ley antigua tiene, respecto de ellas, ultractividad; de suerte tal que si una actuación, una diligencia o un término, ha empezado a tener operancia y no se han agotado cuando adviene la ley nueva, ellas y él terminarán regulados por la antigua. Salvedades que se muestran imperiosas y plenamente justificadas en aras del orden procesal…"[4].

En pronunciamiento más reciente, la Alta Corporación insistió en que:

"…los términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación»[5]*. Para los eventos antes mencionados, que representan actuaciones judiciales caracterizadas por su unidad, autonomía e independencia, no hay posibilidad de fraccionar el acto procesal con el fin de dar cabida a la nueva ley, porque éste constituye un todo inescindible que se rige, desde que se formula hasta que se decide, por la ley anterior, sin que pueda sacrificarse su integralidad para admitir que una es la normatividad que ampara su inicio y otra diferente la que debe atenderse para su resolución…"* [6].

Las directrices precedentes, conllevan a concluir que si la alzada que nos ocupa se planteó cuando no había entrado en vigencia el Decreto 806 de 2020, lo propio era tramitarla bajo los lineamientos del Estatuto Adjetivo Civil y no al amparo de la previsión contemplada en aquel acto legislativo,

---

[4]Corte Suprema de Justicia. Autos del 17 de mayo de 1991 y del 9 de mayo de 2002, expediente 2002-0066-01.

[5] Debe advertirse que el sentido de esa misma regla se hace expreso en los artículos 699 del Código de Procedimiento Civil, 17 del Decreto 2272 de 1989 y 140 del Decreto 2303 de 1989.

[6]Auto de 20 de septiembre de 2010, expediente 11001-02-03-000-2010-01226-00.

en virtud del fenómeno de ultractividad, "…[d]*e donde emerge entonces que si el acto procesal comenzó a desarrollarse en el tiempo previo a la entrada en vigencia de la ley modificatoria, la norma aplicable seguía siendo la anterior…*"[7].

Puestas así las cosas, en el *sub-lite* no era dable impartir a la opugnación el curso señalado en el aludido decreto legislativo, sino convocar a la audiencia prevista en el artículo 373 del Código General del Proceso, dado que al haberse iniciado el memorado recurso bajo el imperio de este ordenamiento, es el llamado a seguir rigiéndolo, con sustento en el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

De acuerdo con lo discurrido, estimo que las anteriores consideraciones debieron ser tenidas en cuenta para tramitar la apelación de la referencia.

En los términos esbozados en precedencia, dejo aclarado mi voto.

Fecha *ut supra,*



CLARA INES MARQUEZ BULLA
Magistrada

[7]Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de mayo de 2008, expediente 11001020300020070077600.

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

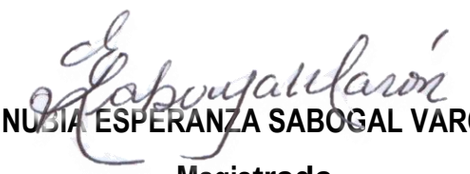
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora: 4:25 p.m.

Radicación: 11001-3103-007-2018-00457-01
Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Constru ALV Ingeniería S.A.S.
Demandado. Agrupación Manzana 18 Lote A Urbanización Multicentro III Etapa Bochica IV PH.
Reparto. 03/03/2021

ADMÍTASE, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación propuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 26 de enero de 2021, dictada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso declarativo impetrado por Constru ALV Ingeniería S.A.S contra la Agrupación Manzana 18 Lote A Urbanización Multicentro III Etapa Bochica IV PH.

En firme, reingrese el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CIVIL

Correo: des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Radicado: (007) 2020 00089 01

Bogotá, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref.: PROCESO DE PERTENENCIA DE DAMASO CHINCHILLA GORDILLO Y OTRA CONTRA HONORATO MANRIQUE LAGOS Y OTROS.

I. ASUNTO

Corresponde al Tribunal decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra la providencia proferida el 29 de julio de 2020 por el Juzgado 7º Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se rechazó la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. El juez a-quo el 29 de julio de la pasada anualidad, resolvió rechazar la demanda por no haber sido subsanada en debida forma, toda vez que, no se aportaron los certificados, de que trata el numeral 5 del articulo 375 del Código General del Proceso, y el catastral.

2. El demandante inconforme con la decisión del a-quo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 29 de septiembre de 2020, del que se ocupa actualmente el despacho.

III. CONSIDERACIONES

Dada la trascendencia e importancia de la demanda, la norma adjetiva exige una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento, pero si deja de reunirse alguno de ellos puede el juez no admitirla e inclusive rechazarla si oportunamente no subsanan los defectos. Las causales de inadmisión y rechazó de la demanda están específicamente determinadas, razón por la cual la decisión que en cualquiera de esos sentidos se adopte debe corresponder a uno o a varios de los eventos dispuestos por el legislador y que están consagrados en el artículo 82, 83, 84 del Código General del Proceso.

El artículo 90 ibidem, establece que "*se señalará el defecto que adolezca la demanda para que el demandante la subsane en el término de cinco (5) días, so pena, de rechazo*".

Estima el recurrente que el juez de primer grado se equivocó al rechazar la demanda, porque no se aportó el certificado de que trata el núm. 5º del art. 75 del C.G.P., como quiera que en la citada norma no se estableció que dicho documento tenga el carácter de especial, y citó la jurisprudencia contenida en "*Sentencia 58 de 13 de Abril de 2011 de la Corte Suprema de Justicia"* y el auto proferido por este Tribunal el 19 de diciembre de 2017 en el proceso No. 033-2002-00854, de donde se desprende que con sólo allegar un certificado de libertad y tradición en donde conste quienes son los propietarios, se cumple el requisito exigido, y dicho documento obra a folio 10 y 11 del expediente.

En cuanto a la segunda causal de inadmisión, argumentó que no se podía exigir el certificado catastral, porque esa información tiene el carácter de clasificada según la Unidad Administrativa de Catastro, y como lo manifestó en escrito de subsanación con la demanda allegó el recibo de impuesto predial escaneado, donde se refleja el valor del bien.

En el caso en estudio, revisada la demanda se observa que fue inadmitida en auto de 7 de julio de 2020, entre otras causales para que: "*1. Adósese el certificado especial del inmueble o lote pretendido en usucapión, toda vez que se trata de un documento que debe y puede ser aportado como anexo de la demanda conforme al numeral 5 del art. 375 del C.G.P.*", 2. "*Apórtese el certificado catastral del inmueble o lote pretendido en usucapión donde se vea reflejado el avalúo para el presente año (2020), lo anterior para los efectos del art, 26.3 del C.G.P., además se trata de un documento que debe ser aportado por la parte actora".*

Adentrándonos en el caso en estudio, respecto a la primera causal de inadmisión, se advierte que de acuerdo con lo estatuido por el numeral 5° del artículo 375 del Código General del Proceso, a la demanda debe acompañarse "*un* ***certificado*** *del registrador de instrumentos públicos en donde conste las personas que figuren como* ***titulares de derechos reales principales sujetos a registro****, o que no aparece ninguna como tal".*

Dicha certificación está destinada a cumplir múltiples funciones, entre ellas: dar cuenta de la existencia del inmueble; permitir que se establezca quién es el propietario actual; proporcionar información sobre los titulares inscritos de derechos reales principales contra los cuales ha de dirigirse la demanda[1].

Ahora bien, ha de clarificarse que el certificado de tradición y libertad del predio, lo emite las oficinas de Superintendencia de Notariado y Registro, que contiene el número de identificación del predio, además contiene información sobre los dueños y la construcción; en tanto que, otro es el documento exigido por el numeral 5º del art. 375 del C.GP., pues se trata de una certificación que expide el

[1] La Corte Suprema de Justicia, respecto al certificado especial ha dicho; *los datos que allí se consignan sirven para demostrar si el predio pretendido realmente existe, como también para saber si es susceptible de ser ganado por prescripción*» (CSJ SC, 4 Sep. 2006, Rad. 1999-01101-01).

registrador, a solicitud del interesado, en donde el funcionario público precisa cual es la situación jurídica del predio, resaltando quienes son los titulares del derecho de dominio, y huelga decir, que para obtenerlo existe un "*protocolo de solicitud y certificado especial para pertenencia*", que puede ser consultado en la página web de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad.

En síntesis, no se equivocó el juez de conocimiento, cuando pidió el cumplimiento de la disposición legal contenida en el numeral 5 del artículo 375 del Código General del Proceso, por la simple razón que con la demanda además de presentar el folio de matrícula inmobiliaria del bien a usucapir, debe como anexo adjuntarse el certificado expedido por el registrador, en donde *consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registro,* documento que se obtiene mediante la solicitud ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad respectiva.

Por último, se advierte que la jurisprudencia citada por el inconforme no es aplicable al caso en estudio, como quiera que las mismas hacen relación, la primera al hecho que no se puede inadmitir la demanda para exigir un certificado de tradición y libertad, cuando el predio no tiene asignado un folio matriz, caso en el cual debe presentar el certificado especial, esto es, que indique que no aparece ningún titular del derecho de dominio; en tanto que la segunda, hace mención a la imposibilidad de requerir el certificado del núm.. 5º del art. 375 del C.G.P., cuando el proceso había comenzado en vigencia del art. 407 del Código de Procedimiento Civil, pues dicha norma, solo pedía como anexo, el certificado de libertad y tradición del bien.

Con relación al segundo punto de inconformidad, se advierte que le asiste razón al apelante, como quiera que, con la demanda presentó el recibo de impuesto predial para el año 2020 escaneado, documento que da cuenta el valor del predio a

efectos de determinar la cuantía del proceso, por tanto, no era indispensable como se señaló el certificado catastral, pues dicho requisito se cumplió con el citado anexo.

Así las cosas, se confirmará el auto apelado, en el sentido de indicar que se imponía el rechazo de la demanda, porque no se subsanó el numeral 1° del auto que inadmitió la demanda

Por lo expuesto, **el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ., D.C.,**

IV. DECISION

Primero: Confirmar el auto de 29 de julio de 2020, proferido por el Juez 7° Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo: Sin lugar a condena por concepto de costas procesales por no aparecer causadas.

Tercero: Devuélvase el expediente al lugar de origen.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
b05842d7c5e740b01da0ad8302eb2af3d37bde1c8610eb2044db21a1d81e6110
Documento generado en 26/03/2021 03:47:11 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
Magistrada ponente

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiún (2021).

Radicado: 11001 3103 **011 2018 00347 02**

En la fecha ingresa el expediente virtual de la referencia con escrito del apoderado del extremo actor que fue radicado el pasado 2 de marzo de 2021, en el que solicita "*…resolver de fondo el recurso de apelación";* e "*indag[o] por que (sic) razones se prefiere que las decisiones se hagan en forma escrita, y no hacer uso de la oralidad y de las audiencias virtuales que tanto se mencionan en las propias normas legales de época de emergencia sanitaria; es por ello que muy respetuosamente también le solicito al Despacho, que la decisión que se adopten se haga en forma oral y que las partes puedan conocer en forma directa y en audiencia oral las decisiones que adopte el Honorable Tribunal Superior*"

Para solventar las solicitudes formuladas, debemos memorar que mediante providencia calendada 25 de febrero anterior, se declaró desierto el recurso de alzada formulado por la parte actora, por no haber sustentado los reproches concretos que formuló ante el *a quo*, dentro de la oportunidad prevista en el

artículo 14 del Decreto 806 de 2020, decisión que quedó en firme, comoquiera que no interpuso recurso alguno frente a ella.

Aunado a esto, conviene precisar que, el escrito que aduce radicó en el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá D.C., en modo alguno lo relevaba de su deber legal de sustentar la apelación en esta instancia, máxime cuando de forma clara se le indicó en el auto que admitió la alzada que de no hacerlo se declararía desierto.

Sobre este medular aspecto, debemos atender lo dispuesto en el artículo 13 del Código General del Proceso, cuando enseña que "***Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley",*** por lo tanto, el Decreto 806 de 2020, al contener normas procesales, entre ellas, el artículo 14, deben ser aplicadas por los funcionarios judiciales a partir de su vigencia; es decir, desde el 4 de junio de 2020 y por el término de dos años.

También, resulta útil memorar que, el aludido Decreto, se expidió con ocasión de la pandemia, buscando flexibilizar la atención a los usuarios y garantizar el servicio de justicia; entonces, no se trata de una nueva ley procesal, simplemente, modificó la sustentación de los reparos concretos en audiencia, por la presentación de un escrito con el mismo propósito; concediéndose al recurrente el término de 5 días para **sustentar los reproches que ventiló ante el *a quo***; de ese modo se

materializa el derecho de contradicción y defensa como presupuesto de la realización de la justicia.

En este orden, la solicitud del abogado el extremo actor que gira en torno a que se adopten decisiones de segunda instancia en audiencia no es atendible, pues solamente para los casos en que se decreten pruebas se concibió la vista pública.

2º De otra parte, el artículo 625 del Código General del Proceso, concerniente al tránsito legislativo, dispone en el numeral 5º que "*No obstante lo previsto en los numerales anteriores,* ***los recursos interpuestos****, (…),* ***se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, (…)"*****;** para este asunto, la sentencia que se cuestionó fue proferida el **27 de octubre de 2020,** de modo que aplicaba para su resolución lo previsto en el Decreto 806 de 2020, disposición vigente desde el 4 de junio pasado.

3º Asimismo, pierde de vista el peticionario que, la esencia del recurso de apelación no se modificó, con la expedición del Decreto 806 de 2020, pues continua teniendo tres etapas, a saber: **(i) la interposición; (ii) la formulación de reparos concretos ante el *a quo;* y (iii) la sustentación (escrita o en audiencia, según corresponda) ante el superior**; de donde se concluye que la sustentación, contrario a lo razonado por él, debía hacerse en esta instancia, como se le indicó en la providencia que admitió la alzada.

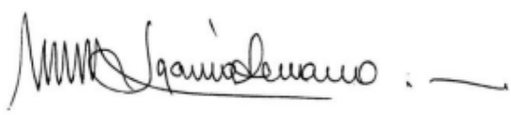
4º Finalmente, en la sentencia SU-148 de 11 de septiembre de 2019, La H. Corte Constitucional estableció que la falta de

sustentación del recurso de apelación ante el Juez de segunda instancia, caso de marras, trae como consecuencia la declaratoria de desierto, porque los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso; así lo imponen; secuela que recogió el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

En este orden, no es posible atender la solicitud del togado, pues nuestro más alto Tribunal Constitucional resolvió sobre este tema; precedente que debemos acoger los demás funcionarios judiciales.

Entonces sin lugar a más disquisiciones, se niegan las peticiones elevadas mediante escrito adiado 2 de marzo pasado, por las razones expuestas.

Por Secretaria de la Sala, COMUNIQUESE al peticionario la respuesta al correo dimagoma@hotmail.com.



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
228a5c0619f12b21cbe4482992517f1e4ca8baee9aaf020bc6301f50263936d9
Documento generado en 26/03/2021 03:11:41 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Sala Civil

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref: Proceso divisorio de Edgar Guillermo Chamorro Delgado contra Andrés Solarte Astudillo y otros.

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra el auto de 12 de marzo de 2020, proferido por el Juzgado 13 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia, para rechazar la demanda por no haberse corregido ciertas falencias advertidas en la providencia que se abstuvo de admitirla, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Como la apelación del auto que rechaza la demanda comprende la del que negó su admisión (CGP, art. 90, inc. 5), es necesario resaltar que el juez se equivocó al exigir que se aportaran los certificados de existencia y representación legal de las sociedades demandadas (doc. 1, p. 60), puesto que, como lo afirmo el recurrente, esos anexos solo puede reclamarse "cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarlo" (CGP, art. 85).

Por consiguiente, como esa información está disponible en la página https://www.rues.org.co/ , no podía el juez de primer grado requerir la prueba en cuestión. A manera de ejemplo, consultada en esa ciberpágina la existencia y representación legal de las sociedades El Ferretero S.A.S, en liquidación, y Concrelab Ltda., a través de la secretaría de este Tribunal Superior, se pudo advertir que la primera fue constituida mediante la escritura pública No. 6604 de 21 de diciembre de 2001, otorgada en la Notaría 4ª de Pasto, y matriculada en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 2 de enero de 2002, siendo su representante legal el señor Luis Carlos Mejía España, mientras que la segunda nació a la vida jurídica a través del instrumento público No. 260 de 4 de marzo de 1974, autorizado por el

Notario 15 de Bogotá, e inscrita el 4 de abril de ese año, con representación legal del señor Luis Miguel León Marchena.[1]

2. Pero sea lo que fuere, como en los juicios divisorios existe litisconsorcio necesario, puesto que –por ley- el proceso debe involucrar a todos los comuneros (CGP, art 406, inc. 2), el juez debió darle trámite a la demanda que presentó el señor Chamorro, habida cuenta que, así no obraran los certificados de existencia y representación legal de las sociedades, le correspondía, en el auto admisorio, integrar dicho litisconsorcio, como lo dispone el artículo 90 de esa codificación.

3. Así las cosas, se revocará el auto apelado para que el juez expida el auto admisorio, que el Tribunal no profiere para garantizar el derecho de defensa de los demandados, quienes pueden recurrirlo. Sin costas.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **revoca** el auto de 12 de marzo de 2020, proferido por el Juzgado 13 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia. El juzgador deberá pronunciar la admisión de la demanda.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

[1] https://www.rues.org.co/Expediente

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

01f0566a51ceec8b4253ab4d9e28100f960a24b29b1b04650cb1f9232f4e3134

Documento generado en 26/03/2021 11:46:15 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., marzo veintiséis (26) de dos mil veintiuno (2021)
(Discutido y aprobado en Salas 7, 8 y 9 del 12, 19 y 26/03/2021)

Se Decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia anticipada proferida en diciembre 13 de 2019, por el Juzgado 48 Civil del Circuito de esta capital.

I.- ANTECEDENTES

1.- Situación fáctica

El Banco Davivienda S.A. otorgó al señor Guillermo de Jesús Penagos un crédito para la adquisición de vivienda por la suma de $ 48.000.000 bajo la modalidad UPAC con un sistema de amortización anual de 180 cuotas mensuales, el que según afirma el demandante, terminó cancelando en $186.764.556,13, porque la enjuiciada omitió dar aplicación a las directrices indicadas en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional[1] desconociendo el principio de la buena fe contractual.

2.- Pretensiones

El demandante, Guillermo de Jesús Penagos, por medio de apoderado judicial requirió que se declare que el Banco Davivienda S.A. incumplió el contrato de mutuo, ante la ausencia de aplicación de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, al omitir dar revisión y adecuación constitucional del crédito que le fue otorgado para adquisición de vivienda.

3.- La defensa

La entidad bancaria demandada opugnó el buen suceso de las pretensiones en su contra, en su defensa propuso las excepciones que nombró: *"Ausencia de legitimación en la causa de la parte pasiva para ser demandada", "Cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Banco Davivienda S.A.", "Inexistencia de exceso en el cobro de intereses",*

[1] *Sentencias C-383/99, C-955 y C-1140/00*

"El interés máximo liquidado a los créditos objeto de la litis no fue determinado por el demandado Banco Davivienda S.A", "No existe cobro excesivo de intereses de mora", "Validez y eficacia de los cobros imputables al crédito", "Licitud de los pagos realizados conforme al contrato de mutuo e inexistencia de sumas canceladas en exceso", "La actividad financiera es reglada", "Imposibilidad de aplicar retroactivamente los fallos de la Corte Constitucional por la demandante", "Ausencia de Anatocismo", "Ausencia de pago de lo no debido" y *"Excepción genérica".*

Expuso que, desde el año 2000 efectuó con Central de Inversiones S.A una venta de cartera dentro de la cual se incorporó, entre otras, la obligación suscrita con el demandante; de modo tal que, por cuenta de dicha negociación, quien ostentaba la calidad de acreedora era tal compañía y no la convocada por lo que cuestiona su legitimación en la causa por pasiva. De otro lado, arguyó que la administración del crédito se acompasó paulatinamente con las disposiciones judiciales y reglamentarias que sobre la materia fueron proferidas

4.- Sentencia de primera instancia

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 278 del C.G.P., se profirió sentencia anticipada, toda vez que el fallador encontró acreditada la falta de legitimación en la causa por activa; por tanto, se denegaron las pretensiones. Para arribar a tal conclusión, el juez *a quo*, en suma, expuso que:

Si bien en la pretensión única de la demanda se indicó *"incumplimiento de contrato",* de su interpretación integral, se infería sin duda alguna, que tal manifestación descansaba en la falta de revisión al crédito por parte de la entidad bancaria porque a juicio del demandante, las condiciones excesivamente onerosas que afectaron el mutuo conllevaron a la necesidad de intervención Estatal.

Por tanto, al procurarse la revisión del contrato para establecer si por cuenta de las condiciones imprevisibles, se afectó al deudor y, reestablecer el equilibrio económico del contrato -si hubo exceso- la acción se enmarcaba en el texto del artículo 868 del estatuto mercantil; sin embargo, ella solo procede cuando el contrato no ha terminado, aspecto que no se apreciaba en el asunto, pues por confesión del promotor, el crédito fue cancelado con antelación a la radicación de la reclamación judicial. En ese orden, hubo una ruptura en el interés actual para obrar del demandante que sobrellevaba a su falta de legitimación.

5.- El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, fue recurrida por el demandante quien ante el juez de primer grado efectuó sus reparos concretos y, frente al

Tribunal, en el marco de la regla prevista en el artículo 14 del Decreto legislativo 806, los sustentó debidamente, así:

5.1.- Increpó el entendimiento que el juez cognoscente tuvo de la demanda pues, en su sentir, nunca solicitó la aplicación de la teoría de la imprevisión, sino la revisión del contrato por la falta de reliquidación de la obligación y la devolución de lo pagado en exceso ante el incumplimiento de la entidad a las órdenes de jueces constitucionales, acorde con las sentencias C-955/00 y C-700/00, pues en ellas se derogó el sistema de financiación utilizado por el banco.

II.- CONSIDERACIONES

6.- Presupuestos procesales

Cabe acotar, como primera medida, que concurren en esta litis los llamados presupuestos procesales indispensables para su normal desarrollo y no se advierte vicio con la entidad suficiente para anular la actuación, lo que torna viable el fallo de fondo que se reclama de esta Corporación.

7.- Límites del recurso de apelación

Para desatar los reparos, se habrá de recordar que, de conformidad con lo reglado en los artículos 281 y 328 del C.G.P., la competencia del superior se circunscribe por regla general a los motivos de inconformidad sustentados por el extremo apelante; razón por la cual, en sano respeto al principio de congruencia, el estudio que efectuará el Tribunal atenderá exclusivamente al objeto de la alzada.

8.- Análisis a los reparos propuestos contra la sentencia de primer grado

8.1.- Antes de iniciar el estudio de los cargos en concreto, la Sala abordará si hubo o no, desafuero del juzgador de instancia al interpretar la demanda. Al respecto se debe indicar que, son diversos y reiterados los pronunciamientos efectuados por nuestra Corte de cierre en torno a que i.-la calificación de las acciones, ii.- la determinación del cuerpo normativo que las regula o iii- el sistema de responsabilidad que le es aplicable, son tarea oficiosa propia del juez y no de las partes, por tanto, la variedad entre lo indicado en una pretensión y lo resuelto, en verdad, no compromete el principio de la congruencia al responder a la conducta esperada de un juez proactivo y comprometido con la realidad que representa el litigio puesto a su conocimiento y no, únicamente, con una formalidad que puede llegar a ser desajustada.

Así lo ha estimado la Corte Suprema: *" (…) De la interpretación que hace el juez de la demanda surgen, entonces, dos cuestiones prácticas:* ***a)*** *Una de naturaleza procesal, que exige que el juez se pronuncie sobre las*

pretensiones y excepciones ejercidas por los litigantes, sin que le sea dable salirse de tales contornos; lo que da origen a cuestiones de indiscutible trascendencia como la acumulación de pretensiones, la litispendencia, la non mutatio libelli, (…) ***b)*** *La otra de tipo sustancial, que está referida a la acción (entendida en su significado de derecho material) y no se restringe por las afirmaciones de las partes sino que corresponde determinarla al sentenciador. Por ello, la congruencia de las sentencias no tiene que verse afectada cuando el funcionario judicial, en virtud del principio da mihi factum et dabo tibi ius, se aparta de los fundamentos jurídicos señalados por el actor.*

La causa petendi corresponde únicamente a los hechos en que se soportan las pretensiones, pero no a los fundamentos de derecho que se señalan en la demanda, los cuales pueden ser muy breves o, inclusive, estar equivocados, sin que ello constituya una irregularidad proceso o conlleve a la pérdida del derecho sustancial. (…)" (SC780-2020)[2]

Tesis que con antelación ya había sido planteada por esa misma corporación, de cara al análisis del alcance y límites del principio de la congruencia en contraposición con la actividad de calificación e interpretación que del juicio lleva a cabo el fallador, así:

" (…) En razón del postulado "da mihi factum et dabo tibi ius" los jueces no quedan sujetos a las alegaciones o fundamentos jurídicos expresados por el actor, porque lo que delimita la acción y constituye la causa petendi no es la fundamentación jurídica señalada en la demanda –la cual puede ser muy sucinta y no tiene que coincidir con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso, sino la cuestión de hecho que se somete a la consideración del órgano judicial. (…) En ese sentido, sólo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones constituyen la causa petendi, pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción (…)" (SC13630-2015)[3]

Puede concluirse, por tanto, que una cosa es la delimitación del litigio y la fijación del mismo, aspectos que atienden al resorte exclusivo de las partes mediante la proposición de sus hechos y la base de lo pretendido; y, otra distinta es la calificación del instituto jurídico que rige el caso, ya que tal atribución se relega del trabajo de parte y se enmarca en la actividad propia del juez al ser quien lleva a cabo el discernimiento decisorio.

Traído al caso concreto, si el demandante se equivoca en la elección del tipo de la acción sustancial que rige el caso, pues del sustrato fáctico se infiere con claridad que apunta en sentido contrario, invoca una norma que no es ajustada al caso u omite la correspondiente, es el juez quien, con el protagonismo que las modernas legislaciones procesales le

---

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de marzo 10 de 2020. Exp. 180013103001-2010-0005301. M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez.
[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de cotubre 7 de 2015. Exp. 734113101001-2009-00042-01. M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez.

asignan, tiene el deber de readecuar la controversia al instituto que corresponde, sin que ello, en modo alguno, vulnere el debido proceso y la igualdad de las partes.

Véase que, pese a que en la pretensión única se adujo un *"incumplimiento de contrato",* tal situación, *per se*, no implica que el juez deba atarse indisolublemente a ello cuando del estudio integral, comprensivo y consiente de la demanda, como ficción jurídica indivisible, se colija que el objeto de la reclamación judicial camina por una senda distinta o de mejor aplicación para la resolución efectiva del litigio.

Es que no puede obviarse que ese presunto *"incumplimiento"* a que refirió la pretensión, se encadenó a que se había omitido la *"revisión del crédito"* en los términos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional para los mutuos administrados bajo el sistema UPAC, pues en efecto, tales intervenciones constitucionales, como bien lo expuso el promotor en los fundamentos jurídicos de su pretensión, procuraban reajustar una condición imprevista que alteró el equilibrio de los contratos afectando a los deudores, pues la liquidación de las Unidades generó un incremento excesivo en el valor final del crédito siendo del caso modificarlo a otro que reajustara la distorsión económica del mismo.

Ese examen, consistente en si había lugar a re-liquidar el crédito para aplicarle una unidad de conversión más benévola y la imputación de la diferencia a título de alivio, comporta el re-equilibrio del negocio que el demandante, insistentemente acusa, no efectuó la entidad bancaria acreedora; de allí que en forma reiterada -incluso en su apelación- afirme que solicitó la revisión del contrato para, a partir de su estudio, estimar si había ocurrido un pago en exceso -alteración de la base del negocio-.

Por tanto, pese a que se aludió a la expresión "*incumplimiento*"*,* itera la Sala, en modo alguno se procuró un juicio de responsabilidad contractual, pues de ello no dan cuenta ni los fundamentos de la demanda como tampoco el sustento normativo en que se soportó, sino, como se viene acotado, a un escrutinio de *"revisión"* de las condiciones iniciales del negocio para verificar que si, por cuenta de anomalías en el sistema de financiación imprevistas para el deudor, era precisa la adecuación de su estructura en beneficio del deudor, siendo entonces aplicable por la naturaleza del mutuo -comercial- y las condiciones del negocio -de tracto sucesivo- la regla prevista en el artículo 868 del C. Co.

De allí, que el juicio interpretativo efectuado por el *a quo* a partir del fundamento fáctico, jurídico y normativo indicado por el propio demandante, no anduvo desatinado y, por el contrario, se ajusta afirmativamente con el caso y las facultades oficiosas propios de la actividad judicial, aspecto que impide el éxito del reparo.

8.2.- Vemos entonces que la declaración de falta de legitimación por activa, tampoco fue imprecisa, pues del precepto en cita -868 del C. Co- se desprende la necesaria presencia de *(i)* un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida del que se deriven aún prestaciones de

futuro cumplimiento y *(ii)* la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores al perfeccionamiento del referido negocio jurídico, que alteren el valor u onerosidad de esa futura prestación, en grado tal, que resulte excesivamente gravosa o ruinosa para el obligado demandante.

Y es que como ya lo ha asentado en reiterados pronunciamientos la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para la prosperidad de la revisión contractual *"(…) todos los expositores están de acuerdo en que ella no tiene cabida, ni puede aplicarse sino a los contratos en ejecución, pero no a los ya cumplidos, porque entonces el acto jurídico ya no existe, de suerte que por más que pudiera ampliársela no se podría llegar a la revisión del contrato por ministerio de justicia, puesto que la teoría solo se inspira en la idea del equilibrio contractual (…)"*[4], tesis acogida por esta Sala, entre otros, en sentencia de diciembre 19 de 2017[5].

Por tanto, el examen de revisión peticionado no podía tener éxito, como quiera que, según lo expresado en el interrogatorio de parte del convocante, el préstamo fue cancelado en 2013 antes de la presentación de la demanda, hecho que se verifica en el dictamen pericial por él arrimado en donde se indica que la relación de deuda finalizó en febrero de 2013 (fol. 165) y en la anotación 22 del folio del bien hipotecado, que registra la cancelación del gravamen en mayo 27 de 2013 (fol. 21-22), mientras que la reclamación judicial ocurrió en diciembre 13 de 2013 (fol. 31).

8.3.- Así las cosas, encuentra el Tribunal que no anduvo desacertado el trabajo interpretativo del juez cognoscente, como tampoco el ejercicio de análisis jurídico y probatorio del asunto frente a la legitimación del activante, siendo del caso confirmar la sentencia impugnada. Como natural consecuencia y de conformidad con la regla prevista en el artículo 365.1 del C.G.P, ante el fracaso del medio impugnativo se condenará en costas de instancia el extremo apelante.

III.- DECISIÓN

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala Quinta de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia anticipada proferida por el Juzgado 48 Civil del Circuito de esta capital, en diciembre 13 de 2019; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en este fallo.

---

[4] *Corte Suprema de Justicia, Sentencia de octubre 29 de 1936, gaceta XLIV pág. 455.*
[5] *Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, Sentencia de diciembre 19 de 2017, Exp. 110013103003-2016-000135-01, M.P. Dra. Adriana Saavedra Lozada.*

SEGUNDO: Condenar en costas de instancia al extremo recurrente. La Magistrada Ponente fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (01) salario mínimo legal mensual vigente. Liquídese en su oportunidad.

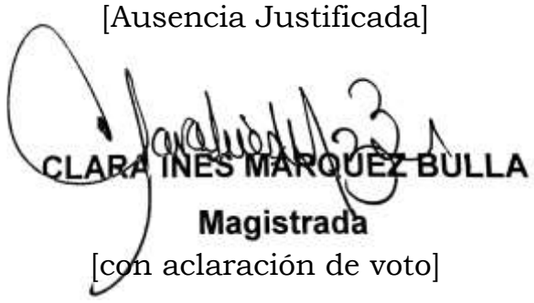
TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
[Ausencia Justificada]



Magistrada
[con aclaración de voto]

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación 11001-3103-14-2013-00762-01. Declarativo de Guillermo de Jesús Penagos Gucaneme contra Banco Davivienda S.A..

Con el debido respeto que siempre he profesado a las señoras Magistradas integrantes de la Sala de Decisión, me permito consignar a continuación las razones por las cuales aclaro mi voto, respecto a la indebida aplicación del trámite del recurso de apelación regulado en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el presente asunto.

Es indudable que la pandemia que nos afecta hizo imperativa la declaratoria de emergencia sanitaria; y, por ende, la expedición de la normativa declarativa de su desarrollo, como la que nos ocupa. Pese a ello, es claro que la situación del estado de excepción no permite el desconocimiento de la constitución, ni de la ley. En consecuencia, se incorpora en la Legislación Colombiana ya existente.

Revisado el Decreto Legislativo 806 de 2020, aunque indica que se adoptará *"... en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición...",* no creó un régimen especial de transición. Lo que conlleva que para su aplicación deba ajustarse al Código General del Proceso.

En efecto, tal precepto modificó por un término de dos años el trámite del recurso de apelación en asuntos civiles regulado en el Estatuto en cita. Por ende, se trata de una norma procesal, que entró en vigor desde el 4 de

junio de 2020[6], por lo que predomina respecto de la disposición que disciplina el decurso de ese medio de impugnación, toda vez que el artículo 624 del Código General del Proceso indica:

"...Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir…".

En ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido constante en sostener sobre la irretroactividad de los actos legislativos, como el que contempla la memorada regla que:

"…uno de los fundamentos esenciales del ordenamiento jurídico es el de considerar que las leyes y actos administrativos rigen hacia el futuro. En este sentido se encuentra el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal que establece que «la Ley no obliga sino en virtud de su promulgación, ... Asimismo, se observan los artículos 17 y 19 de la Ley 153 de 1887, los cuales disponen como regla general el principio de irretroactividad con el fin de mantener la seguridad jurídica y la protección del orden social. Como bien lo ha precisado esta Corporación «el efecto retroactivo y la regla que lo prohíbe, se contrapone del efecto general e inmediato de la ley, según el cual la ley sólo rige para el porvenir, esto es, sus disposiciones únicamente se aplican desde el momento en que comienza su vigencia y hacia el futuro…"[7].

Sin embargo, no debe pasarse por alto que la disposición en comento, esto es, el inciso final del artículo 624 del Código General del Proceso, regula que la nueva ley procesal no tiene aplicación inmediata, ya que en tratándose de *"…**los recursos interpuestos**, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos**, se decretaron las pruebas, se*

[6]Según el artículo 16 de la Decreto Ley 806 de 2020.
[7]Consejo de Estado. Sentencia de14 julio de 2011, expediente 85/2009-00032-02.

iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones…" –resalta la Sala-.

En estas condiciones, la inaplicación de dicha preceptiva se revela nítida en lo relativo a los recursos planteados en vigencia de la ley procesal anterior, pues, precisamente, al amparo de aquella norma, si el medio de impugnación se inició bajo el imperio de una determinada norma, debe continuar su decurso al tenor del procedimiento establecido por esta disposición hasta tanto culmine su trámite. Vale decir, no cambian las reglas procesales de actuaciones que ya estaban en curso. Desconocer estos principios desemboca en que las partes pueden verse afectadas al modificarles las reglas que observaron cuando formularon sus reparos. Sin temor a equivocación, es una vulneración al debido proceso estipulado en el artículo 29 de la Carta Magna.

Desde esa perspectiva, las prescripciones contenidas en el Decreto 806 de 2020 sobre el trámite de la alzada no son de recibo para los recursos de esa naturaleza que tuvieron su génesis antes que entrara en vigencia la mencionada disposición, pues a voces del Alto Tribunal Civil, *"…cuando una norma posterior modifica los requerimientos relativos al nacimiento o finalización de una situación jurídicamente relevante, en línea de principio, no puede alterar las situaciones que están consolidadas en el pasado, ni violentar los derechos adquiridos, so pena de atentar contra la seguridad jurídica y someter a la sociedad a una situación permanente de incertidumbre…"*[8].

Con tal criterio, también se acompasa lo consagrado en el inciso final del artículo 624 del Código General del Proceso, ya reseñado, es decir, los casos excepcionales en que se aplica una ley procesal derogada a determinados actos procesales en curso, los cuales son imposibles de seccionar porque no se han consumado cuando entra en vigor la nueva norma.

Memórese que respecto de ese tópico, desde antaño, la honorable Corte

[8] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 12 de febrero de 2018, expediente 11001311001820080033101.

Suprema de Justicia ha enseñado:

"…según la ley colombiana, las normas procesales tienen aplicación inmediata aun respecto de los procesos pendientes. Pero si bien es un principio de carácter general, tolera algunas concesiones, toda vez que la misma ley ha exceptuado, rindiendo con ello culto a la doctrina que distingue los actos procesales consumados de los no consumados, algunas situaciones, así: "Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la vigente al tiempo de su iniciación". Estas excepciones están significando, entonces, que la ley antigua tiene, respecto de ellas, ultractividad; de suerte tal que si una actuación, una diligencia o un término, ha empezado a tener operancia y no se han agotado cuando adviene la ley nueva, ellas y él terminarán regulados por la antigua. Salvedades que se muestran imperiosas y plenamente justificadas en aras del orden procesal…"[9].

En pronunciamiento más reciente, la Alta Corporación insistió en que:

"…los términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación»[10]*. Para los eventos antes mencionados, que representan actuaciones judiciales caracterizadas por su unidad, autonomía e independencia, no hay posibilidad de fraccionar el acto procesal con el fin de dar cabida a la nueva ley, porque éste constituye un todo inescindible que se rige, desde que se formula hasta que se decide, por la ley anterior, sin que pueda sacrificarse su integralidad para admitir que una es la normatividad que ampara su inicio y otra diferente la que debe atenderse para su resolución…"* [11].

Las directrices precedentes, conllevan a concluir que si la alzada que nos ocupa se planteó cuando no había entrado en vigencia el Decreto 806 de 2020, lo propio era tramitarla bajo los lineamientos del Estatuto Adjetivo Civil y no al amparo de la previsión contemplada en aquel acto legislativo,

---

[9]Corte Suprema de Justicia. Autos del 17 de mayo de 1991 y del 9 de mayo de 2002, expediente 2002-0066-01.

[10] Debe advertirse que el sentido de esa misma regla se hace expreso en los artículos 699 del Código de Procedimiento Civil, 17 del Decreto 2272 de 1989 y 140 del Decreto 2303 de 1989.

[11]Auto de 20 de septiembre de 2010, expediente 11001-02-03-000-2010-01226-00.

en virtud del fenómeno de ultractividad, "…[d]*e donde emerge entonces que si el acto procesal comenzó a desarrollarse en el tiempo previo a la entrada en vigencia de la ley modificatoria, la norma aplicable seguía siendo la anterior…*"[12].

Puestas así las cosas, en el *sub-lite* no era dable impartir a la opugnación el curso señalado en el aludido decreto legislativo, sino convocar a la audiencia prevista en el artículo 373 del Código General del Proceso, dado que al haberse iniciado el memorado recurso bajo el imperio de este ordenamiento, es el llamado a seguir rigiéndolo, con sustento en el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

De acuerdo con lo discurrido, estimo que las anteriores consideraciones debieron ser tenidas en cuenta para tramitar la apelación de la referencia.

En los términos esbozados en precedencia, dejo aclarado mi voto.

Fecha *ut supra,*



CLARA INES MARQUEZ BULLA
Magistrada

[12]Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de mayo de 2008, expediente 11001020300020070077600.

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora.4:16 p.m.

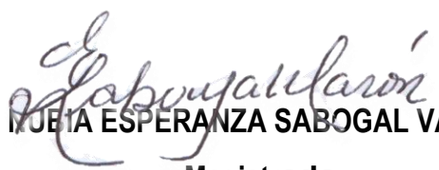
Radicación: 11001-3103-015-2018-00500-01

Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Sandra Carvajal Ossa.
Demandado. Luis Alberto Fuentes González y otro.
Reparto. 11/03/2021

ADMÍTASE, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación propuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 25 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso declarativo de simulación impetrado por Sandra Carvajal Ossa contra Sandra Milena Riatiga Jaimes y Luis Alberto Fuentes González.

En firme, reingrese el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA CIVIL

Correo: des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Radicación: (015) 2018-00575-01

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref: PROCESO VERBAL DE CARLOS JULIO RUIZ MARTINEZ CONTRA ANTONIO PIETRO PETRONI Y OTROS.

Realizado el examen preliminar de que trata el artículo 325 del C.G.P., encuentra el despacho que el recurso de apelación promovido por el demandante contra el auto proferido el 2 de julio de 2020 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, será **inadmitido** porque contra la providencia recurrida, no procede ese medio de impugnación, como se explica a continuación.

Revisado el expediente de la referencia se observan las siguientes actuaciones:

i) El 11 de marzo de 2019, se admitió la demanda verbal de restitución de tenencia de bien inmueble en favor de Carlos Julio Ruiz Martínez contra Antonio Petroni, Rafael Giovanetti y Marina Gamez de Giovanetti

ii) El 3 de julio de 2019, se reconoció personería al apoderado judicial del señor Antonio Petroni, dispuso tenerlo por notificado y tener por contestada la demandada.

iii) el 18 de diciembre de 2019, se notificó la apoderada judicial de los señores Alfredo Giovannetty Lacotoure, quien contestó la demanda sin proponer excepciones.

iv) el 24 de enero de 2020, el apoderado judicial del demandante solicitó se declarará la pérdida de competencia, porque el término del art. 121 del C.G.P., había vencido el 15 de noviembre de 2019, sin haberse prorrogado el plazo para proferir sentencia.

v) el 13 de febrero de 2020, se negó la solicitud porque la actuación se encontraba convalidada, como quiera que no fue alagada oportunamente, porque el término venció el 15 de noviembre de 2019, y la misma fue alegada el 24 de enero de 2020, cuando se habían surtido otras actuaciones judiciales.

vi) el 19 de febrero de 2020, la parte demandante presentó incidente de nulidad para que se invalidará todo lo actuado en el proceso a partir del 15 de noviembre de 2019, con fundamento en el inciso 6º del art. 121 del C.G.P., en concordancia con el art. 90 y el numeral 1º del art. 133 Ibidem.

vii) el 2 de julio de 2020, se dispuso que el memorialista debía estarse a lo resuelto en el inciso final del auto de 13 de febrero de ese año, mediante el cual se resolvió la misma petición de pérdida automática de competencia.

Luego de efectuado ese recuento, se advierte que la providencia recurrida es la de "*estarse a lo resuelto*", decisión que no se encuentra incluida en el listado de los autos que son susceptibles del recurso de apelación, de conformidad con el art. 321 del Estatuto Procesal Vigente, ni ésta contemplado en norma especial.

En mérito de lo expuesto**, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala Civil,**

RESUELVE:

Primero: Inadmitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto de 2 de julio de 2020, proferido por el Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá

Segundo: Disponer la devolución del expediente al Juzgado de origen.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
66207fdb0e899eacc3fda99af47ef4ecdb25b087d9baf6e89e8ce4cbd814bc5a
Documento generado en 26/03/2021 03:47:13 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN : **11001310301620070008803**
PROCESO : **EXPROPIACIÓN**
DEMANDANTE : **EAAB**
DEMANDADO : **OLGA GAITÁN CUBIDES**
ASUNTO : **APELACIÓN AUTO**

Declárese inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha 6 de febrero de 2020, por medio de la cual el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá resolvió reconocer "*a los señores PATRICIA MARÍA ELVIRA AMAYA GAITAN; LUISA ALEJANDRA MARÍA DEL PILAR AMAYA; MARÍA LUISA MARCELA GAITÁN JARAMILLO; JOSÉ ARTURO CAJIAO GAITAN; FRANCISCO JAVIER CAJIAO GAITÁN, ; MARÍA LUISA CAJIAO GAITÁN; FELIPE MANUEL JOSÉ CAJIAO GAITÁN; SANTIAGO CAJIAO GAITÁN; NATALIA CAJIAO GAITÁN Y CARLOS JOSÉ ANTONIO AMAYA GAITÁN, en su condición de herederos de la señora OLGA GAITÁN CUBIDES, como sobrinos de ésta.*

De conformidad a los documentos obrantes del folio 23 al 38, se acepta la CESIÓN de los derechos litigiosos que hacen los herederos de OLGA GAITÁN CUBIDES, en cabeza del señor FRANCISCO JAVIER CAJIAO GAITÁN.

Previamente a ordenar la entrega de dineros, acredítese en legal forma, que los mismos les fueron adjudicados (en la sucesión de Olga Gaitán) a los arriba mencionados".

Al efecto, debe memorarse que el ordenamiento jurídico patrio acogió un criterio de taxatividad para establecer los autos que son apelables, señalando el artículo 321 del Código General del Proceso un

catálogo de decisiones pasibles de dicho recurso, que no puede ser desconocido por el operador judicial.

Téngase en cuenta que de la lectura del precepto citado, no aparece enlistado el proveído que, por vía de alzada, cuestionó el apoderado de la parte demandada, advirtiéndose, entonces, que el legislador no autorizó, en modo alguno, la revisión en segunda instancia de la providencia que dispone reconocer a determinadas personas en condición de herederos de uno de los extremos en litigio, ni la decisión que suspende la entrega de dineros hasta tanto se acredite a quienes se les adjudicó dicho patrimonio en la sucesión de la persona fallecida. De ahí que anduvo desafortunada el *a quo* al emitir decisión del 3 de julio de 2020, mediante la cual se concedió el mecanismo de impugnación secundario.

Sobre el particular, cumple precisar que únicamente es apelable el auto que "*niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros*", de conformidad con el numeral 2° del artículo 321 de la ritualidad civil, y, en el caso en concreto, el juez de primer grado, al reconocer como herederos de Olga Gaitán Cubides a los recurrentes y, subsecuentemente, aceptar la cesión de derechos litigiosos que éstos hicieron a favor de Francisco Javier Cajiao Gaitán, habilitó a aquéllos para continuar la actuación, sin modificar la relación jurídica material, quedando con los mismos derechos, cargas y obligaciones adjetivas que su antecesora, en los términos del canon 68, *ibídem*.[1]

Así las cosas, al no encontrarse dentro de aquellas determinaciones susceptibles de alzada la aquí censurada, es claro que ésta no puede ser objeto de examen por esta senda procedimental.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.,** en Sala de Decisión Civil,

[1] Ver STC1561-2016

RESUELVE:

Primero: Declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por la parte demandada en contra del auto proferido el 6 de febrero de 2020, dictado por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo: En firme este proveído, remítanse las diligencias al Despacho de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE,



JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Correo: *des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co*.

Radicación: 016-2013-00535-01

PROCESO VERBAL DE AIG INSURANCE COMPANY CHINA CONTRA SERLOGISTICA OTM SAS.

Bogotá DC, veintiséis (26) de dos mil veintiuno (2021)

Como quiera que el proceso se encontraba suspendido por encontrarse en consulta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, habiendo llegado la interpretación prejudicial, corresponde reactivar el trámite del presente asunto, por tanto. Se; **Dispone**

Primero: Reanudar el trámite del presente proceso, el cual se encontraba suspendido por virtud de la interpretación prejudicial adelantada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Segundo: Poner en conocimiento de las partes la interpretación judicial emitida por la citada Corporación, en el asunto de la referencia, por el término de tres (3) días.

Para tal fin, Secretaria al momento de notificar por estado esta providencia, deberá adjuntar dicho concepto.

Tercero: Disponer que de conformidad con lo dispuesto por 14 del Decreto 806 de 2020, en concordancia con los artículos 9° del citado decreto y 110 del Código General del Proceso, ejecutoriada esta providencia, el apelante cuenta con el término de cinco (5) días para sustentar el recurso de apelación, vencido éste, se surtirá el traslado de la misma a la otra parte por cinco (5) días.

Los escritos de sustentación deberán ser remitidos a los correos: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co., con copia al des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f512181ff6685563abbccedaee62a7d3b5b3f2f50b9b5181dda009051bc957b8

Documento generado en 26/03/2021 03:47:12 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Proceso No. 11001310301720190040401
Clase: VERBAL – REIVINDICATORIO.
Demandantes: BÁRBARA INÉS RAMÍREZ RODRÍGUEZ y otros.
Demandado: VÍCTOR MANUEL GRANADOS RAMÍREZ.

Comoquiera que la parte demandante, dentro de la oportunidad señalada en el penúltimo inciso del artículo 14 del Decreto n.° 806 de 2020 (cinco días siguientes a la ejecutoria del auto que admitió su alzamiento, cuyo plazo feneció el 8 de marzo de 2021, por su habilitación que tuvo lugar en proveído de 23 de febrero hogaño[1]), no sustentó el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia virtual de 19 de enero de 2021 proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, se declara DESIERTO su alzamiento, de conformidad con el evocado precepto, en concordancia con los artículos 322 (*in fine*[2]), 327 (inciso final) y 328 (inciso primero) del CGP y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia SU418 de 2019) y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC13242/2017 de 30 de agosto). Sin costas por no aparecer causadas (art. 365. 8, *ib.*).

Ejecutoriado este proveído, regresen las diligencias al despacho para resolver lo pertinente.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

---

[1] Notificado por estado electrónico n.° 30 de 24 de febrero de 2021, consultable en el siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2233156/63620601/E-30+FEBRERO+24+DE+2021.pdf/8f127838-1898-4f57-9c91-459d7fcc698e (pág. 2).

[2] Norma según la cual "***el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado***". (Negrillas y subrayas fuera de texto).

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
647c3bdae0d0d024fff3bac3e7d71bcdd8f4a2d4a0ee527ef7a64c71959a4767
Documento generado en 26/03/2021 10:47:21 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

N. Radicación:	11001-22-03-000-2021-00357-00
Demandante:	JUAN CARLOS SALINA SILVA
Demandado:	ASEGURADORA SURA

Al no haber sido subsanada la demanda de revisión, dentro del término legal concedido en el auto anterior, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del art. 383 del C.P.C. se dispone su RECHAZO.

Notifíquese,

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: RICARDO ACOSTA BUITRAGO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	**:**	Bancolombia S.A.
DEMANDADO	**:**	Bryan Andrés Rodas Morales
CLASE DE PROCESO	**:**	Ejecutivo para la efectividad de la garantía real.
MOTIVO DE LA ALZADA	**:**	Apelación de auto

ASUNTO.

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto de fecha 27 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esta ciudad, mediante el cual dispuso declarar terminado el proceso de la referencia por desistimiento tácito.

ANTECEDENTES.

Bancolombia S.A. inició demanda ejecutiva para la efectividad de la garantía real en contra de Bryan Andrés Rodas Morales, con el fin de obtener el recaudo de $3.011.081,73 y $196.768.759,56. El 12 de septiembre de 2016, el Juzgado 19 Civil del Circuito libró mandamiento de pago en los términos pretendidos por la actora (f. 90 01CuadernoDigitalizado). El 27 de julio de 2017 se ordenó seguir adelante con la ejecución (fs. 192 y 193 id.).

El 25 de enero de 2018 se aprobó la liquidación de crédito allegada por la ejecutante (f. 207 ib.) y el 27 de febrero de 2020, por solicitud del

demandado (f. 208 id.), el juez de ejecución terminó el proceso por desistimiento tácito (f. 209 id.).

Inconforme con tal decisión Bancolombia S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

LOS RECURSOS.

El abogado censor alegó que se desconoció que "había una situación que dependía del Despacho y no de la parte, cual es la del despacho comisorio".

La contraparte solicitó que se mantenga la providencia.

El 1º de diciembre del 2020, la falladora de primera instancia mantuvo la decisión insistiendo en que se debía sancionar la inactividad de la parte y concedió la alzada. Durante el término previsto por el artículo 322 C.G.P núm. 3°, la parte no agregó nuevos argumentos a su impugnación.

El asunto se radicó en el Tribunal el 18 de febrero de 2021.

CONSIDERACIONES.

Sobre el tema materia de decisión, el artículo 317 del C.G.P. consagró dos eventos que habilitan la terminación anormal del proceso por desistimiento tácito, señalando en el numeral segundo: *"Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes."*

De igual forma, precisó las reglas que se deben observar para dar aplicación al desistimiento por esa causal, entre las que se destacan, para el caso objeto de análisis, que: *"(…) b) Si el proceso cuenta con*

sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años; c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo; d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas (…)".

Bajo las anteriores directrices, del estudio y revisión de la actuación surtida en el *sub judice,* sin lugar a mayor discusión, encuentra el Tribunal que procedía la aplicación del desistimiento tácito, pues la última actuación, en el trámite principal, data del 25 de enero de 2018, notificada por estado el 26 de febrero siguiente, en la cual se aprobó la liquidación de crédito adicional aportada por la ejecutante.

Y, en lo referente a las medidas cautelares, bien pronto se observa que no le asistió razón al censor, como quiera que desde que se libró mandamiento de pago, el 12 de septiembre de 2016, se ordenó el embargo del inmueble dado como garantía real, que se hizo efectiva el 24 de octubre siguiente (f. 99 ib.). El 29 de noviembre del mismo año se dispuso su secuestro, para lo cual se comisionó a los jueces municipales y/o al Inspector de Policía de la zona respectiva (f. 109). El 15 de febrero de 2017 la Inspectora 18E Distrital de Policía devolvió la comisión, el 31 de mayo siguiente se solicitó elaborar nuevamente el despacho comisorio (f. 172), que fue ordenado nuevamente en auto del 9 de junio (f. 175) y retirado el 10 de julio (f. 176), sin que conste actuación adicional.

Entonces, no es cierto que se encontrara pendiente una actuación por parte del Despacho pues este libró nuevamente el despacho comisorio, conforme lo solicitó la ejecutante, sin que a la fecha de la terminación hubiera acreditado su diligenciamiento, ni hubiere informado al juez lo actuado ante el comisionado para hacer efectiva la diligencia en aras de mostrar cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, que permitiera interrumpir los términos, como señala la

norma, ni lo hizo al momento de impugnar la providencia. Téngase en cuenta que, si bien se encontraba sin materializar una medida cautelar, lo cierto es que no se demostró que esto obedeciera a una dilación del juzgado, como comitente, o de la autoridad comisionada al momento de realizar la diligencia de secuestro, por lo que el impulso del trámite hacia tal objetivo era de su exclusivo resorte.

En esas condiciones, tampoco existía actividad que el juez pudiera promover de oficio, ni para el trámite principal ni en el de cautelas como ha quedado evidenciado.

Sin lugar a disquisiciones adicionales, se confirmará la decisión apelada.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto de fecha 27 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esta ciudad, según las consideraciones realizadas.

SEGUNDO.- Se condena en costas a la parte apelante ante el fracaso del recurso. Se fijan como agencias en derecho la suma de ½ SMLMV.

TERCERO.- Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D. C. veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref: VERBAL de PERTENENCIA de DORA PATRICIA RODRÍGUEZ CALDERÓN contra ANA CLEMIRA SIMBAQUEBA CALDERÓN, JOSÉ ORLANDO CALDERÓN y HEREDEROS INDETERMINADOS DE ARACELI CALDERÓN DE RODRÍGUEZ. Exp. 019-2017-00492-03.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y aprobado en Sala de Decisión de 10 de marzo de 2021.

Decide el Tribunal el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia dictada en audiencia pública el seis (6) de julio de dos mil veinte (2020), en el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.- Dora Patricia Rodríguez Calderón entabló demanda verbal de pertenencia contra Ana Clemira Simbaqueba Calderón, José Orlando Calderón y herederos indeterminados de Araceli Calderón de Rodríguez, así como todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble, pretendiendo que: (i) se declare que adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el inmueble ubicado en la Carrera 69 K No. 71-

65/67/71 de Bogotá, identificado con el folio de matrícula No. 50C-841006 y (ii) se ordene la inscripción de la sentencia en el mismo (fl, 91 c, 1 expediente digital).

2.- Las súplicas se edifican en los siguientes hechos que en seguida se compendian (fls, 88 a 90 ibidem).

2.1.- Refiere que ocupa el inmueble desde el año 1975. Aparece como titular del derecho de dominio Araceli Calderón -madre de la convocante- quien falleció el día 26 de diciembre de 2002-, de tal manera que desde el 27 del mismo mes y año Dora Patricia Rodríguez Calderón ejerce sobre dicha propiedad actos de señora y dueña de manera exclusiva y excluyente, realizando todo tipo de construcciones, mejoras, pagando los impuestos, servicios públicos y evitando perturbaciones de terceros, eventos que han sido continuos e ininterrumpidos, sin que nadie le hubiera reclamado mejor derecho.

2.2.- Agrega que el bien objeto de usucapión cuenta con dos locales los cuales ha dado en arrendamiento a JOS IMPRESORAS S.A.S. y a ELCY ADRIANA VIZCAINO, al tiempo aclara que si bien es cierto sobre dicho predio aparece registrada una medida cautelar dentro de la sucesión de Araceli Calderón Rodríguez, adelantada por el Juzgado 22 de Familia de Bogotá, radicado con el número 2012-0936, conforme se desprende de la anotación 6 del folio de matrícula del predio, también es verdad que a la fecha de la presentación del libelo introductor que nos ocupa no se ha realizado ningún secuestro, en tanto que la actora no ha solicitada ser reconocida como heredera en dicha causa como quiera que desconoce como dueños a todo aquel que se crea con derechos sobre el bien objeto de la litis.

2.3.- Indica que con anterioridad entre las mismas partes y por similar causa se inició un proceso de pertenencia el cual le correspondió por reparto al Juzgado 6° Civil del Circuito de Bogotá, radicado con el número 2006-00201, en el cual en primera instancia se accedió a las pretensiones de la demanda, pese a ello, en razón de la apelación interpuesta por los demandados, tal determinación fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el día 29 de julio de 2009.

3.- El demandado José Orlando Calderón y las demás personas indeterminadas se notificaron a través de curador ad litem (fl, 168 vto ibidem), quien contestó la demanda sin presentar medio de defensa alguno (fls, 169 ejusdem), entre tanto Ana Clemira Simbaqueba Calderón se enteró por conducta concluyente (fl, 166 ídem), guardando silencio.

4.- El día 20 de septiembre de 2019, se citó a las partes a la audiencia pública de que trata el 372 del C.G.P., al tiempo que se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y se programó fecha y hora para realizar la inspección judicial al inmueble, oportunidad en la que se identificó el predio, se interrogó a la demandante y se escucharon algunos testimonios, en tanto que en la vista pública prevista en el artículo 373 ibidem, se continuó con la diligencia de posiciones que absolvió el demandado, posteriormente, se escucharon los alegatos de conclusión y se dictó sentencia en la cual se accedió a las pretensiones de la demandante, determinación que no compartió la parte demandada por lo que interpuso el recurso de apelación.
.

4.1.- Repartido el asunto al Despacho del Magistrado sustanciador, se ordenó devolverlo a fin de que se reconstruyera la parte inicial de la audiencia de instrucción y juzgamiento habida cuenta que allí se recaudó el interrogatorio de parte al demandado, sin que haya quedado en la grabación la toma del juramento al mismo, razón por la cual la Juez dando aplicación a lo previsto en el artículo 126 del C.G.P. en diligencia evacuada el 26 de enero de la presente anualidad, procedió a recepcionar nuevamente el mismo subsanando la falencia advertida en precedencia, oportunidad en la que declaró reconstruido el informativo y dispuso remitirlo a esta Corporación con el propósito de resolver la alzada, que ahora se analiza.

EL FALLO CENSURADO

5.- La Juez a quo después de memorar la demanda y la actuación, inicia sus consideraciones planteando el problema jurídico y reseñando las pruebas que fueron recaudadas dentro del plenario, seguidamente se refirió a la prescripción adquisitiva y a la posesión, señalando que quien pretenda beneficiarse de la usucapión debe exteriorizar el corpus y ánimus domini.

Señala que los testimonios recaudados en las audiencias establecidas en los artículos 372 y 373 del C.G.P. dan cuenta de los actos de posesión realizados por la demandante, en especial el arrendamiento de locales, reconociéndola como dueña y ser la persona que ha realizado las mejoras y arreglos efectuados al bien, además de ser ella quien paga los servicios públicos y, en general, ha desplegado los actos posesorios de forma libre e ininterrumpida sin que nadie le hubiere reclamado mejor derecho sobre el bien.

Adiciona que en del interrogatorio de parte formulado a Ana Clemira Simbaqueba Calderón -hermana media de la demandante- confesó que vivió en el inmueble con sus hijas hasta cuando murió su madre, fecha en la cual el bien no estaba totalmente construido, luego de ese suceso se fue de esa vivienda y se desentendió del predio, no volvió a pagar ningún impuesto, ni tampoco contribuyó con las mejoras realizadas al mismo.

Indicó que en cuanto a la afirmación realizada por Ana Clemira Simbaqueba Calderón, en punto de la pérdida del tiempo de posesión por haber la demandante iniciado con anterioridad otro proceso de pertenencia en el que le fueron negadas las pretensiones de la demanda, tal planteamiento no puede ser acogido en razón a que no existe dentro del ordenamiento jurídico una norma que establezca tal circunstancia, en tanto que el art. 94 del C.G. del P, prevé la interrupción de la prescripción extintiva de derechos, la cual no resulta aplicable a la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio.

Concluyó que la demandante probó los supuestos facticos y jurídicos necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda, ya que acreditó la posesión sobre el inmueble de manera quieta, pacifica e ininterrumpida por el tiempo requerido -10 años- para acceder a la usucapión, de tal modo que nada impide declarar que DORA PATRICIA RODRIGUEZ CALDERÓN adquirió por la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio el inmueble objeto de la litis.

EL RECURSO DE ALZADA

6.- Inconforme con lo expuesto, la parte demandada interpuso recurso de apelación alegando que anduvo desafortunada la Juez de primer grado ya que no reparó que dentro de la demanda se pidió la prescripción ordinaria y al mismo tiempo la extraordinaria, recayendo en el mismo error presentado en el 2006, cuando se falló la primera demanda, tramitada en el Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, en el que se accedió a las pretensiones de la demanda, siendo revocado por el Tribunal Superior de Bogotá.

Afirma que como sucedió en ese momento, la demandante desconoció a sus dos hermanos, descartando lo estipulado en el artículo 783 del Código Civil, si pretendía una "posesión regular" y, al invocar la sucesión a título universal estaba admitiendo su condición de comunera en la universalidad denominada herencia, porque fallecida la titular del dominio sobre el inmueble, la posesión de la herencia se adquiere, aunque el heredero lo ignore.

Manifiesta que la titular del dominio sobre el inmueble era Araceli Calderón de Rodríguez desde el año 1995, como se desprende del folio de matrícula del inmueble objeto de usucapión, quien ejerció la posesión material hasta el día de su muerte, esto es, 26 de diciembre de 2002 fecha en la cual se defirió la herencia a favor de sus hijos sobrevivientes Ana Clemira Simbaqueba Calderón, José Orlando Calderón y Dora Patricia Rodríguez Calderón, recalcando que según la sentencia de aprobación de la partición y adjudicación de bienes proferida en el Juzgado 22 de Familia de Bogotá tramitada por los dos primeros, la última no compareció a ese litigio, razón por la cual se entendió que repudiaba la herencia y, en consecuencia, se entiende no haberla poseído jamás.

Alega además que las mejoras sobre el inmueble que la convocante dice haber realizado, no fueron hechas con dineros propios, sino con lo recibido por los arrendamiento que produce el bien, los cuales hasta la fecha ascienden a un total de $3'330.000.oo M/Cte -mensuales para ambos locales-, de igual manera los servicios públicos no fueron pagados por ella, sino que dichas facturas fueron canceladas por los arrendatarios.

Añade que la demandante como heredera de la propietaria del bien, no es poseedora sino tenedora del inmueble que hace parte de los activos de la sucesión de Araceli Calderón y cuya adjudicación fue inscrita el 4 de julio de 2018 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá a nombre de Ana Clemira Simbaqueba Calderón y José Orlando Calderón. Tampoco la posesión fue quieta y pacífica, ya que en el hecho 4º afirma que ha tenido que defenderlo "…contra perturbaciones de terceros, desde el 27 de diciembre del 2002", aclarando que no son alteraciones, sino que José Orlando ejerció su derecho como heredero pidiendo una rendición de cuentas de los dineros que ha recibido la actora por los cánones de los locales comerciales.

6.1.- Así mismo, por auto adiado 3 de marzo de la presente anualidad se ordenó correr el traslado previsto en el inciso 3° del artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

6.2. A través de escritos enviados por correo electrónico a la Secretaría de este Tribunal la parte demandada -apelante- sustentó en debida forma su recurso de alzada y, en oportunidad la convocantex se pronunció al respecto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, como son demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer y competencia concurren en la litis, además como no se observa causal de invalidez que anule la actuación se impone una decisión de mérito, con la consideración adicional referida a que en el evento de ser interpuesta la alzada por ambas partes, la Sala está revestida de la competencia para resolver sin limitaciones, empero, no es el caso de autos.

2.- Con miras a desatar la apelación formulada por el extremo actor, debe decirse que este recurso se endereza a que el Superior revise la actuación del juzgador de primera instancia, pero inmerso siempre dentro del criterio dispositivo, por lo que es al apelante a quien le corresponde

determinar el ámbito dentro del cual ha de moverse el ad-quem al momento de tomar la decisión.

3.- Desde esta perspectiva el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar en primer lugar, si incurrió en error la Juez de primer grado al estudiar la prescripción extraordinaria a pesar que en la demanda se pidió la ordinaria y, en segundo término, corresponde establecer si la demandante en verdad ejerció actos de posesión exclusivos y excluyentes respecto de los herederos de Araceli Calderón de Rodríguez y José Orlando Calderón, o si por el contrario, tales actos fueron en beneficio de la sucesión y en tal razón las pretensiones de la demanda estaban llamadas a no prosperar, ya que existe una comunidad entre los extremos de la litis. A tales aspectos se contrae el reparo realizado al fallo de primer grado.

4.- La figura de la prescripción cumple dos funciones trascendentales en la vida jurídica, una adquisitiva y otra extintiva, según lo pregona el artículo 2512 del Código Civil; la ***adquisitiva*** *es un modo de adquirir la propiedad de los bienes ajenos que se encuentran en el comercio, por haberse poseído conforme a las exigencias legales; mientras que la* ***extintiva*** *es una forma de extinguir los derechos o acciones de otra persona, pero por no haberse ejercido durante cierto tiempo y siempre que se den los restantes requisitos de ley.*

5- Se encuentran legitimados en la causa por activa para invocar la acción de pertenencia las siguientes personas: a) quien haya poseído el bien por cinco años continuos ó 3 años continuos cuando se trata de vivienda de interés social y tenga justo título - prescripción ordinaria - (artículo 2528 del C.C. y artículo 51 de la ley 9ª de 1989); ***b) quien haya poseído materialmente el bien por diez años y demás requisitos exigidos por el legislador - prescripción extraordinaria - (artículo 2531 ibídem) ó 5 años si de vivienda de interés social se trata;*** *c) el acreedor en favor de su deudor, a través de la acción oblicua, a pesar de la renuencia o renuncia de éste -artículo 375, numeral 2º C. G. del P.-; y, d) el comunero que con exclusión de los otros condueños haya poseído por más de diez años todo o parte del predio, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo de los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad (artículo 375, numeral 3º ejúsdem).*

En este contexto, de forma preliminar advierte esta Corporación que es incuestionable que la clase de prescripción invocada por la actora es por la vía extraordinaria adquisitiva de dominio, en razón a que en la pretensión primera de la demanda se solicitó: "Que se declare por la vía de la prescripción extraordinaria que la señora ***DORA PATRICIA RODRÍGUEZ CALDERÓN*** *es propietaria del inmueble…" (derivado 01demanda pdf, exp. Digital) y, si bien es cierto, en el encabezado del introductor se literalizó que: "presento a su Despacho* ***DEMANDA EXTRAORDINARIA DE PERTENENCIA `POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA...",*** *la verdad es que el acápite correspondiente a las pretensiones es claro y contundente en señalar la clase de prescripción invocada y, si bien en otro aparte del libelo postulatorio, al inicio concretamente, se hizo mención a la ordinaria, ello obedece a un error de digitación, de ahí que dicho cuestionamiento de la parte convocada no cuenta con la entidad suficiente para presuponer categóricamente que la actora pretendía la reconocimiento de la usucapión con justo título, por ende, el yerro endilgado a la sentencia de primer grado por este aspecto no ésta llamado a prosperar.*

6.- Entonces, decantado lo anterior, se tiene que cuando se promueve la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, la actora se encuentra en el imperativo de acreditar los siguientes supuestos: ***1) Posesión material en el demandante; 2) que la posesión se prolongue por el término de diez años –art. 2531 de Código Civil modificado por la Ley 791 de 2002 art. 5° -; 3) que la posesión se cumpla en forma quieta, pacífica, continua e ininterrumpida; y, 4) que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por ese fenómeno.*** *Estos elementos deben ser concurrentes, lo cual se traduce en que la ausencia de uno de ellos elimina la estructuración de dicha figura jurídica.*

Posesión material en la demandante y término de prescripción

7.- La posesión puede definirse como el poder de hecho que tiene una persona sobre una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. Esta se encuentra integrada por dos elementos, ***el corpus y el animus****; el primero se trata del elemento externo, material y objetivo que se traduce en hechos positivos tales como el corte de madera, construcción de edificios, cerramientos, plantaciones*

o sementeras, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión -artículo 981 del C.C.-; mientras que el segundo es el intencional, subjetivo, interno o acto volitivo que escapa a la percepción de los sentidos pero que se puede presumir ante la existencia de los hechos externos que son su indicio.

8.- En lo que atañe al tema de la prescripción, establece artículo 2532 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la ley 791 de 2002, que: "[e]l lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción, es de diez (10) años contra toda persona y no se suspende a favor de los enumerados en el artículo 2530.", presupuesto jurídico aplicable al caso concreto habida cuenta que la convocante se reputa poseedora desde el día 27 de diciembre de 2002 (hecho 4°, derivado 01 pag. 3 pdf), es decir, en la misma data en la cual fue promulgada la precitada legislación -publicada en el diario oficial No. 45.046-.

9.- Ahora, en tratándose de sucesión a título universal, ha decantado la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de justicia ordinaria que el heredero es el continuador de la personalidad del de cujus, por lo que éste tiene la misma posesión que detentaba el difunto, la cual continúa pura y simplemente en la persona de aquél, de manera que al diferirse la herencia constituye punto de apoyo suficiente para que el sucesor prosiga con la posesión que detentaba su antecesor y, por ese camino logre adquirir la cosa por prescripción.

Sin embargo, también ha dicho que en estos casos el heredero no ejerce la posesión de manera exclusiva y excluyente sino que lo hace precisamente con ánimo de heredero, es decir, su derecho lo ejerce a nombre de la sucesión y, si quiere ganar por prescripción un bien que pertenece a la masa sucesoral debe probar que lo posee de forma inequívoca, pública y pacíficamente, no como heredero y sucesor del difunto, sino que lo ha poseído para sí, como dueño único sin reconocer dominio ajeno, ejerciendo como señor y dueño exclusivo actos de goce y transformación de la cosa.

Al respecto, indicó:

"... desde el momento en que al heredero le es deferida la herencia entra en posesión legal de ella, tal y como lo preceptúa el artículo 757 del Código Civil; posesión legal de la herencia, que, debido a

establecimiento legal, se da de pleno derecho, aunque no concurran en el heredero ni el animus, ni el corpus. Sin embargo, se trata de una posesión legal que faculta al heredero no solo a tener o a pedir que se le entreguen los bienes de la herencia, sino también a entrar en posesión material de ellos, esto es, a ejercer su derecho hereditario materialmente sobre los bienes de la herencia, los cuales, por tanto, solamente son detentados con ánimo de heredero o simplemente como heredero".

"…si el heredero, alega haber ganado la propiedad por prescripción de un bien que corresponde a la masa sucesoral, debe probar que lo posee, en forma inequívoca, pública y pacíficamente, no como heredero y sucesor del difunto, sino que lo ha poseído para sí, como dueño único, sin reconocer dominio ajeno, ejerciendo como señor y dueño exclusivo actos de goce y transformación de la cosa. Pero como además del desconocimiento del derecho ajeno al poseer la cosa como dueño, vale decir, con exclusividad, es necesario que concurra otro elemento para usucapir, cual es el que se complete el mínimo de tiempo exigido, el que para el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria, es de 20 años. Por lo tanto, en este evento debe entonces el heredero que alegue la prescripción extraordinaria, acreditar primeramente el momento preciso en que pasó la interversión del título de heredero, esto es, el momento en que hubo el cambio de la posesión material que ostenta como sucesor o heredero, por la posesión material del propietario del bien…"1.

9.1.- Desde esta perspectiva, emprende el Tribunal el estudio de los medios de prueba que se adosaron al libelo genitor con el propósito de determinar si en verdad la demandante intervirtió su título de posesión respecto del bien raíz sucesoral, para comportarse como señora y dueña del inmueble objeto del litigió y si esa posesión fue exclusiva y excluyente de cara a los demás herederos de la sucesión de Araceli Calderón de Rodríguez y, si la misma se prolongó por el término necesario para ganarlo por prescripción extraordinaria de dominio.

9.2.- En este contexto, lo primero que debe advertirse es que según se evidencia del certificado de defunción Araceli Calderón de

---

[1] *Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia. del 24 de junio de 1997, citada en sentencia del 21 de febrero de 2011. Exp. No. 05001-3103-007-2001-00263-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Reiterada en sentencia de 28 de noviembre de 2013, M.P. Margarita Cabello Blanco, exp: No 11001 31 03 013 1999 07559 01.*

Rodríguez falleció el día 26 de diciembre de 2002 (derivado 05 anexo registro civiles, exp. digital), en tanto que, en el hecho cuarto de la demanda se adujo que la demandante desde el 27 siguiente, viene ejerciendo actos de posesión sobre el inmueble a nombre propio, sin que nadie le haya reclamado mejor derecho sobre el mismo (derivado 01 demanda, exp. digital).

Así mismo, se tiene que en interrogatorio de parte formulado a Ana Clemira Simbaqueba Calderón, está confesó que cuando su madre murió ella ya no habitaba en el predio objeto de pertenencia, en tanto que su hermana Dora Rodríguez Calderón no la dejaba entrar a la casa y le decía que el inmueble era de ella; así mismo, indicó que no ha pagado impuestos y nunca le ha pedido cuentas a la convocante, igualmente afirmó que tampoco inició ninguna clase de acción para que se le permitiera su ingreso y que no ha invertido ni un solo peso en el predio objeto de controversia (min 35:30 video 2017-492.2, carpeta inspección judicial, ibidem).

Por su parte, José Fernando Calderón Rodriguez también confesó que la actora siempre ha pregonado ser la única señora y dueña ya que siempre ha dicho que la mamá -Araceli Calderón de Rodriguez- le había dejado la casa a ella -demandante- y, aunque inicialmente adujo que vivió en el predio desde el año 2000 hasta el 2012, entró en contradicción ya que posteriormente expresó que la actora no les permitía el ingreso a la casa y constantemente cambiaba las guardas, aspecto que los motivó en el año 2012, a presentar el juicio de sucesión al cual no compareció Dora Patricia Rodríguez Calderón -repudiando la herencia-.

Así mismo, en interrogatorio que absolvió la demandante está coincidió con el demandado al afirmar que no se hizo parte en la sucesión de su señora madre habida cuenta que ella no detenta el predio en calidad de heredera sino en calidad de poseedora, pues sus hermanos no cuentan con ningún derecho en el bien.

9.3.- En este contexto, surge indiscutible que la demandante en pertenencia acreditó la interversión de su título de posesión a título universal al de poseedora exclusiva y excluyente de los demás herederos de Araceli Calderón de Rodríguez -aquí demandados-, en razón a que el día siguiente al deceso de su progenitora desconoció públicamente el derecho de la pasiva sobre el bien objeto del litigio, tal como se deprende de la prueba de

confesión a la que se acaba de hacer alusión, a tal punto que no inició y, menos aún, compareció al juicio de sucesión que promovieron los demandados, ya que desde el 27 de diciembre de 2002 detenta el predio con ánimo de señora y dueña.

Puntualizado lo anterior, se adentrará la Sala en el estudio de los demás elementos de convicción a fin de determinar si la posesión se ha prolongado por el tiempo necesario para adquirir el predio objeto de controversia por este modo.

*10.- El medio probatorio a que más acude el usucapiente para efectos de demostrar la posesión material y que se haya prolongado por el tiempo antes reseñado, no es otro que el testimonio, por ser el más eficaz e idóneo para darle convicción al juzgador acerca de los hechos materiales o positivos ejecutados por aquél, así como con qué intención realiza todos esos actos; por eso el sentenciador al practicar ésta y en ejercicio del principio de inmediación de la prueba es su deber conducir de la mano al testigo para que con el interrogatorio que le proponga, relate todos y cada uno de los pormenores que sus sentidos han percibido respecto al hecho de la posesión alegada en la demanda, o exigirle, cuando advierta que se trata de un testigo sospechoso, que haga un recuento sucinto pero detallado de esos acontecimientos, pues es muy común que el declarante por diversas circunstancias falsee la verdad, es por lo que el legislador dispuso como talanquera unos requisitos de forma y fondo que el testimonio debe reunir para que el juzgador pueda apreciarlos y darles valor probatorio; esos supuestos se encuentran compendiados en el artículo 221 del C. G. del P., y entre los de fondo está, entre otros, la exactitud, la claridad, la precisión, que sea completo, que no se contradiga con otros medios de prueba y que explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió cada hecho o mejor como lo dice la disposición que de "**la razón de la ciencia de su dicho**".*

Sobre este tópico ha dicho la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil que: "La experiencia demuestra, de una parte, que existen testigos que adrede y por motivos inconfesables falsean la realidad de los hechos, y de otra, que aún tratándose de testigos de buena fe, los fenómenos de percepción, memorización y declaración que ocurren en todo testimonio se pueden ver afectados por factores ajenos a la voluntad del declarante, que comprometen seriamente la fidelidad de su relato. De ahí que con el propósito de asegurar en lo

*posible la veracidad del testigo y la fidelidad de su declaración, las legislaciones señalan requisitos de forma y de fondo a que tiene que sujetarse la prueba testimonial para que quede revestida de eficacia probatoria. De los últimos cabe destacar, por la incidencia que tienen en la credibilidad que haya de dársele a la declaración, el que la doctrina llama '**razón de la ciencia del testigo', la cual consiste en la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, tiempo y modo como el testigo tuvo conocimiento del mismo, pues sólo así puede adquirir el juez el convencimiento de si el testigo está o no diciendo la verdad…"**[2]*.

Por ello, tiénese dicho que el sentenciador debe observar si el testigo expresa de manera razonada las circunstancias de tiempo, modo y lugar como acontecieron los hechos sobre los cuales depone, en forma tal que no aparezca improbable o imposible la ocurrencia de ellos y, adicionalmente, estudiar que de su misma declaración no exista contradicción grave, como tampoco entre ésta con otras declaraciones, o entre unas y otras con relación a otro u otros medios de prueba que obren en el proceso.

*En desarrollo de estas pautas, es por lo que el artículo 176 ibídem dispone que la prueba debe ser valorada en conjunto por el fallador, por manera que si de esta ponderación emerge que los elementos de convicción concuerdan en los aspectos más importantes del debate deben admitirse, y si, por el contrario, no tienen esa coincidencia han de desestimarse por estar desprovistos de fuerza probatoria. Y aunque es obvio que con este sistema de valoración no se le puede exigir a cada uno de los declarantes que en su testimonio exponga con absoluta precisión todos y cada uno de los detalles, pues es apenas natural que puedan presentarse pequeñas diferencias que en nada afectan, sí debe forzosamente desecharse en aquellas situaciones en las que no hay la debida explicación de la razón de la ciencia de su dicho, como cuando la versión se apoya en lo que el deponente dice haber escuchado de otra persona - testimonio de oídas o -**ex auditu**-, o se incurre en graves contradicciones, y éstas recaen sobre un hecho trascendental del litigio, o las circunstancias narradas, en forma manifiesta, no son coincidentes o resultan imposibles.*

11.- Ahora bien, al proceder a examinar la Corporación en su conjunto las pruebas vertidas en el proceso encuentra que

---

[2] *C.S.J., Casac.8 de marzo de 1972*

éstas logran demostrar el supuesto analizado, es decir, que la parte actora ha detentado la posesión material de forma exclusiva y excluyente desde el 27 de diciembre de 2002, por más de 10 años, como se verá a continuación:

En efecto, nótese que el testigo Carlos Arturo Simbaqueba Pérez -hermano de crianza de las partes - afirmó que conocen a la demandante de toda la vida ya que cuando su madre murió, su padre, hermanos y él se fueron a vivir con Araceli Calderón de Rodríguez-, agregó que las únicas personas que habitaban el predio fueron la citada hasta el día de su muerte junto a Dora Patricia Rodríguez Calderón a quien reconoce como única señora y dueña, ya que es la persona que ha detentado materialmente el predio sin reconocer dominio ajeno en los demandados, pues es la que ha realizado todas las mejoras, remodelando completamente los dos locales del primer piso, pintado, cambio los pisos y, en general, ha efectuado todo tipo de reparación locativa con dineros propios de su trabajo y los frutos que el inmueble ha producido, sumado a que es la persona que ha dado los locales en arrendamiento, paga impuestos, sin que tenga conocimiento que alguien le haya reclamado el predio por ostentar mejor derecho.

Así mismo, la deponente Elcy Adriana Vizcaino Ortiz expresa que es arrendataria de uno de los locales que funciona en el primer piso desde el año 2014, reconociendo a Dora Patricia Rodríguez Calderón como única propietaria de la casa objeto de usucapión, agregó que a los demandados no los conoce y nunca antes los había visto, sabe y le consta que la convocante es la persona que paga los impuestos, realiza todo tipo de mantenimiento en la casa y no tiene conocimiento que alguna persona haya ido a reclamarle el predio.

Por su parte, el declarante Alirio Daza Chitiva indica que conoce a la actora desde hace más o menos de 15 a 20 años, que es el maestro de obra que ella siempre lo contrata para hacer las reparaciones de la casa, agrega que fue él la persona encargada de remodelar los locales que están en el primer piso de la casa, cambió las baldosas, pintura del inmueble, en tanto que en la actualidad se encuentra instalando el cielo raso en el tercer piso, en general, ha realizado todo tipo de mantenimiento en el bien por cuenta de la actora, pues es ella la que lo ha contratado y ha pagado por sus servicios; los contratos celebrados han sido verbales, adiciona que no conoce a los

demandados, como tampoco que alguna persona le haya reclamado el predio a Dora Patricia Rodríguez Calderón.

Igualmente, las deponentes Hilda Quitora Ramírez y Luz Marina Fernández afirman que conocen a la demandante, la primera hace 40 años, la segunda no precisó la época exacta, sin embargo, fueron coincidentes en indicar que la única persona a la que reconocen como dueña del predio objeto de usucapión es Dora Patricia Rodríguez Calderón, siendo ella la que ha efectuado las reparaciones de la casa, instalación de la marquesina del tercer piso, cambio del sistema eléctrico, remodelado los baños, cambio de baldosas, es la que paga los servicios públicos y los impuestos, lo da en arrendamiento, comportándose como una verdadera propietaria, en tanto que no les consta que otra persona le haya reclamado el inmueble.

Así mismo, también obran pruebas documentales que dan cuenta de algunos impuestos prediales a nombre de Dora Patricia Rodríguez (derivado 08 y 14, exp. digital), copias de los últimos contratos de arrendamiento que suscribió la convocante con Elcy Adriana Vizcaino Ortiz y la persona jurídica JOS IMPRESORES S.A.S., así como los recibos de pago de los cánones realizados por la primera arrendataria citada a la aquí demandante (derivado 28 ibídem).

12.- Con el anterior panorama procesal, al analizar en conjunto el acervo demostrativo fácil se llega al convencimiento que se encuentran acreditados los elementos axiológicos necesarios para el buen suceso de la acción invocada por Dora Patrícia Rodríguez Calderón, por razón que confluyen todos los presupuestos sustanciales, dado que se encuentra plenamente identificado el inmueble y la demandante acreditó que lo ha poseído por espacio de 15 años de forma pública, pacífica e ininterrumpida, de manera exclusiva y excluyente sin reconocer domino ajeno en cabeza de ninguna persona ni derecho de herederos a sus hermanos -convocados-, actos por los cuales estima la Sala tienen como respaldo el comportamiento y la intención de quienes se creen propietarios.

13.- Desde esta perspectiva, es evidente que los reparos expuesto por los demandados no pueden tener acogida en esta oportunidad, pues como se advirtiera en precedencia la convocante no poseía

el bien a título universal para la sucesión de Araceli Calderón de Rodríguez, sino que en verdad los actos que aquella ejecutó los hizo a titulo personal y con desconocimiento de los demandados, aspecto sobre el cual existe prueba de confesión como se advirtió en el nomenclador 9°, deriva de lo anterior que tales alegaciones no cuentan con ningún respaldo jurídico.

13.1.- Igualmente, no desconoce la Sala que el demandado José Orlando Rodríguez Calderón en su interrogatorio indicó que (i) la explotación económica del predio se dio por acuerdo entre las partes; (ii) que él habitó en el fundo desde el año 2000 hasta el 2012 y (iii) que los vecinos también lo reconocían como dueños; sin embargo, al expediente no se arrimó ni un solo medio de prueba que respaldaran tales aseveraciones, de tal modo que resultan insuficientes las meras manifestaciones efectuadas por la parte convocada, por razón que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba suficiente de lo que afirme, tal como lo ha precisado la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil:

"es verdad que, con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad, así y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de veces... que 'es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga... que se expresa con el aforismo onus probando incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el Juez" [3].

13.2.- En tal sentido, no sobra recordar que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; y que le incumbe a las partes probar los supuestos de facto de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, regla de conducta que le indica a los contendientes la carga de acreditar ya sus pretensiones, ora sus excepciones según corresponda. En consecuencia, en este

---

[3] *Sent. de 12 de febrero de 1980 Cas. Civ. de 9 de noviembre de 1993. G.J. CCXXV, pag. 405*

caso en particular nótese que le correspondía a la parte demandada demostrar que en verdad entre las partes existió ese acuerdo para la explotación económica del predio, pero como así no ocurrió, debe asumir las consecuencias de su desidia y, es que en realidad se aplicó a efectuar afirmaciones inocuas, pero en realidad no arrimó ni una sola probanza que permitiera desvirtuar las allegadas por la parte contraria, resultando intrascendente si las mejoras realizadas lo fueron con los dineros que recibía la convocante por arrendamiento, pues lo que ha este asunto interesa es que aquélla desconocía el derecho que los demandados ostentaban sobre el predio (artículos 164 y 167 del C. G. del P.).

El principio de la necesidad de la prueba le indica al juzgador el deber de tomar toda decisión judicial con apoyo en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (artículo 164 C. G. P.), esto es, que los medios probatorios para poder ser valorados deben aportarse en los términos señalados de manera taxativa por el legislador, contrario sensu, su apreciación cercenaría el derecho de defensa y de contradicción de la contraparte.

Mientras que el principio de la ***carga de la prueba*** *(artículo 167 C.G.P.) le impone a las partes la obligación de probar los supuestos de hecho en que edifica la demanda, las excepciones, el incidente o el trámite especial, según el caso, o sea, que consiste en lo que a cada parte le asiste interés en probar, de modo que si el interesado en suministrarla no lo hace, o la allega imperfecta, se descuida o equivoca su papel de probador, necesariamente, ha de esperar un resultado adverso.*

14.- Colofón de lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia apelada y, en consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte recurrente ante la improsperidad de la alzada de acuerdo con lo previsto en el numeral 3° del artículo 365 del C.G.P.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1.- CONFIRMAR *la sentencia dictada en audiencia pública el seis (6) de julio del año dos mil vente (2020) en el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la ciudad, por las razones expuestas en este fallo.*

2.- CONDENAR *en costas de esta instancia a la parte recurrente. Tásense.*

2.1.- *De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5º del AcuerdoPSAA16-10554 de 2016, en la liquidación de costas causadas en segunda instancia, inclúyase como Agencias en Derecho el monto correspondiente a dos (2) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la anualidad que avanza. Para la elaboración de la misma síganse las reglas previstas en dicha norma.*

NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

Adriana Ayala Pulgarín.
ADRIANA AYALA PULGARÍN

Magistrada

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, el 23 de julio de 2019 nugatorio de la nulidad propuesta dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario impetrado por Negocios e Inversiones Financieras SAS contra Constructora Reserva del Cerro S.A.

I.- ANTECEDENTES

1.- A solicitud del apoderado de Negocios e Inversiones Financieras SAS se inició proceso ejecutivo hipotecario en contra de Constructora Reserva del Cerro S.A., correspondiendo el trámite por reparto, al Juzgado Veinte Civil del Circuito, entidad que en proveído del 20 de mayo de 2015 libró el mandamiento de pago por la suma de $1.700.000.000, más los intereses moratorios, con base en el pagaré 17082012.

2.- El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Girardot, en cumplimiento del despacho comisorio 055, el 25 de julio y 5 de septiembre de 2016, llevó a cabo la diligencia de secuestro de los bienes inmuebles con folios de matrícula inmobiliaria 307-81217, 307-81218, 307-81219, 307-81220, 307-81221, 307-81222, 307-81223, 307-81224, 307-81225, 307-81226, 307-81227, 307-81228, 307-81229, 307-81230, 307-81231, 307-81232,

307-81233, 307-81234, 307-81235, 307-81236, 307-81237, 307-81238, 307-81239, 307-81240, 307-81241, del Subconjunto Reserva del Cerro.

3.- Encontrándose el proceso con auto de seguir adelante la ejecución, la parte demandada, mediante apoderado judicial, presentó incidente de nulidad argumentando la indebida notificación de la sociedad demandada, por cuanto al haberse devuelto el citatorio enviado a la dirección que aparece en cámara de comercio, se debió proceder a el emplazamiento; además, la casa 20 de la Manzana D del barrio Pozo Azul de Girardot, no es de propiedad de la Constructora demandada.

4.- En audiencia del 23 de julio de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, previo a la práctica de la prueba testifical e interrogatorios de parte, resolvió la nulidad propuesta, negando su prosperidad tras considerar que, se demostró que desde 2016, el Representante Legal de la ejecutada conocía de la existencia del proceso ejecutivo y obtuvo copia del mismo, por lo que en principio habría convalidación del presunto vicio; además, conforme a la legislación procesal, la notificación a las empresas debe hacerse en la dirección que parece registrada en Cámara de Comercio, deber que cumplió el ejecutante, pero la correspondencia fue devuelta porque la empresa no funciona allí; entonces, como al extremo pasivo le asiste la obligación de notificar en cualquiera de las direcciones de su contraparte, procedió a enviar el citatorio y el aviso a la dirección de los bienes dados como garantía hipotecaria, donde fueron recibidos sin inconformidad alguna. De la prueba testimonial concluyó que quienes recibieron los sobres con las notificaciones eran cuidanderos designados por César Cuervo, socio de la Constructora demandada; la misma persona que recibió una comunicación fue quien atendió la diligencia de secuestro del predio hipotecado.

5.- Inconforme con la anterior determinación, el apoderado de la parte ejecutada, interpuso recurso de apelación para que sea revocada por el Tribunal y en su lugar, se decrete la nulidad deprecada desde el acto mismo de la notificación del mandamiento ejecutivo. Arguye que con la prueba testifical se demostró que el predio donde se recibió la notificación,

no es de propiedad de la demandada y su prohijada nunca fue enterada de la existencia de la ejecución en su contra, como la comunicación enviada a la dirección registrada en Cámara de Comercio fue devuelta, debió hacerse el emplazamiento.

II. CONSIDERACIONES

6.- El recurso de apelación se circunscribe a cuestionar la negación de la nulidad propuesta por la demandada, fundamentada en la causal de indebida notificación a la sociedad ejecutada.

Se advierte, desde ahora, que se confirmará la providencia apelada. Para justificar la decisión que se anticipa, se expondrán las siguientes razones:

6.1.- Sabido es que el acto de la notificación tiene trascendental importancia en todos los trámites judiciales, por cuanto con el se garantiza el acceso efectivo a la administración de justicia y el debido proceso (Art. 29 Constitucional) concretado en el derecho de defensa y contradicción, del demandado.

Para ello, la legislación procesal[1] y comercial han fijado reglas que permiten la publicidad necesaria del lugar de ubicación, domicilio, notificación y cuenta electrónica de las empresas y comerciantes con registro mercantil en Colombia, quienes deben inscribir en la Cámara de Comercio en donde funciona su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. "*En este supuesto el lugar donde se debe realizar la notificación es en la dirección que estas personas tengan registrada, pue para eso se privilegia ese lugar para el cumplimiento de dicha diligencia. Si así no se procede. Y se notifica en un lugar distinto podría engendrarse la nulidad* (…)"[2] Aunado a ello, es deber de las personas naturales o jurídicas, registrar todo cambio que se haga al respecto, por la incidencia que tal modificación tiene frente a terceros.

[1] Artículo 291 numerales 2 y 3 del Código General del Proceso.
[2] CANOSA Torrado Fernando. Las Nulidades en el Derecho Procesal Civil. 6ª Edición. 2009. Ediciones Doctrina y Ley. Pág. 478.

Ahora, el estatuto procesal adjetivo, respecto a la notificación de su contraparte, impone al demandante: "*La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado*."

6.2.- En el sub judice, la sociedad Negocios e Inversiones Financieras SAS, inició los actos de notificación del proceso ejecutivo hipotecario, remitiendo primigeniamente a la Constructora Reserva del Cerro S.A., la citación para notificación personal a la Carrera 20 No. 39-33 oficina 204 de la ciudad de Bogotá, la cual, conforme al certificado emitido por la Cámara de Comercio, coincide con la registrada por la empresa ejecutada como lugar a donde deben enviarse las comunicaciones de índole judicial, empero, esa documental fue devuelta por la transportadora postal, porque allí, ya no funciona la demanda.

El Representante Legal de la Constructora Reserva del Cerro S.A., en el interrogatorio de parte rendido el 23 de julio de 2019, explicó que, desde hace más de cinco años, se cerró la oficina por la situación económica y dado que no han fijado un nuevo domicilio, no se ha efectuado la modificación en el registro mercantil, también adujo que, aunque ya no desarrollan el objeto social en esa dirección, no se informó tal circunstancia al acreedor hipotecario.

Es decir, tal y como lo exige el artículo 291 del C.G.P., la demandante privilegió la notificación al extremo pasivo en la dirección inscrita en el registro mercantil, resultando infructuosa, por la razón explicada.

Luego de ello, como la ejecutante conocía la información de los predios dados en garantía hipotecaria, procedió a realizar el enteramiento a su contraparte, en la dirección de los bienes que son de su propiedad. Aquí, es importante dilucidar la conformación del proyecto inmobiliario, por cuanto tal y como se evidencia de la diligencia de secuestro practicada por comisionado, los días 25 de julio y 5 de septiembre de 2016, la prueba testifical, el interrogatorio de parte al Representante Legal de la demandada y las fotografías visibles en los folios 15 a 20 del cuaderno

del incidente, se trata de 200 lotes, algunos de ellos en construcción, otros no, encerrados por un muro, con única puerta de acceso, encontrándose a la entrada, la denominada casa 20 de la Manzana D Barrio Pozo Azul del municipio de Girardot.

Los bienes inmuebles objeto de hipoteca en favor de la ejecutante, corresponden a los folios de matrícula inmobiliaria 307-81217, 307-81218, 307-81219, 307-81220, 307-81221, 307-81222, 307-81223, 307-81224, 307-81225, 307-81226, 307-81227, 307-81228, 307-81229, 307-81230, 307-81231, 307-81232, 307-81233, 307-81234, 307-81235, 307-81236, 307-81237, 307-81238, 307-81239, 307-81240, 307-81241, sin embargo, tal y como lo explican los testigos Adriana María Guzmán Camelo, Enrique Martínez Flórez y el propio Representante Legal de la Constructora, la citada casa 20 de la Manzana D, también es parte del lote de mayor extensión, adquirido por la demandada. En las declaraciones de Miguel Alfonso Millán y Ricardo José Goyeneche adujeron que la señora Guzmán y su esposo se encontraban en el predio por decisión de César Cuervo, aseveración que se confirma con lo declarado por la mentada pareja y lo referido por el señor Jairo Sánchez (Representante) quien claramente dijo que Guzmán y Martínez no tenían vínculo con la Constructora, sino con César Cuervo, quien, a su vez, según se infiere del certificado de existencia y representación, es el Suplente del Gerente de la demandada.

Así las cosas, para esta colegiatura, resulta diáfano que, el trámite de las comunicaciones enviadas a los predios objeto de garantía hipotecaria, cumplieron con estrictez lo estatuido en la Ley procesal, esto es, remitirlas a una de las direcciones informadas por la actora, con la significancia que tiene por tratarse del inmueble dado en garantía, donde fueron recibidas bajo la presunción[3] de ser entregadas a quien atendió la única puerta de acceso a todos los predios.

[3] Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción

Además, previo al envío de las comunicaciones, se practicó la diligencia de secuestro sobre la totalidad de los bienes ubicados en Girardot y el señor Jairo Sánchez Mosquera, explicó en el interrogatorio de parte que, en el 2015 o comienzos de 2016, por una visita que le hizo la DIAN debió ir al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá a tomar copia simple de la demanda ejecutiva para aportarla a esa entidad, es decir, previo a la notificación practicada en el predio objeto de hipoteca, la sociedad demandada ya conocía de la demanda adelantada en su contra y permaneció silente.

6.3.- Así las cosas, concluye el Tribunal que la ejecutada, no logró demostrar que se hubiesen configurado los presupuestos fácticos para la concreción de una nulidad por indebida notificación, en consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación.

II.- DECISIÓN

Por mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. **RESUELVE**

PRIMERO: Confirmar el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, en audiencia del 23 de julio de 2019 dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario impetrado por Negocios e Inversiones Financieras SAS contra Constructora Reserva del Cerro S.A., atendiendo lo argumentado en precedencia

SEGUNDO: Se condena en costas a la sociedad ejecutada. Fíjense como agencias en derecho por la alzada, la suma de Un millón de pesos ($1.000.000). Oportunamente, liquídense.

TERCERO: Devolver oportunamente el proceso al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	11001-3103-021-2019-00774-01
Asunto:	Divisorio *ad valorem*
Recurso:	Apelación Auto
Demandante:	María Fernanda Aristizabal Rodríguez.
Demandada:	Beatriz García Avendaño y otro.
Reparto:	14 de enero de 2021.

Decídese el recurso de apelación formulado por el extremo demandante frente al auto de 13 de febrero de 2020, proferido por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso divisorio promovido por María Fernanda Aristizábal Rodríguez contra Beatriz García Avendaño, está última, además, en representación del menor Gabriel Aristizábal García.

ANTECEDENTES

1. El *a quo* rechazó la demanda encaminada a obtener la división *ad valorem* del predio identificado con matrícula 50C-1286968, porque sobre él existe medida de embargo, gravamen que, a su juicio, mientras subsista imposibilita el curso del proceso divisorio, dado que al momento del remate éste no podría llevarse a cabo, quedando así, paralizado el trámite.

2. Oportunamente el extremo demandante recurrió esa decisión en reposición con apelación subsidiaria, alegando, en lo medular, que no existe sustento

legal que impida admitir la demanda incoada por la razón pretextada por la funcionaria de primera instancia, resultando, en su criterio, prematura la orden consistente en adosar un certificado de libertad y tradición donde conste la cancelación del embargo inscrita en el inmueble objeto del litigio, en tanto que para agotar la etapa inicial del proceso divisorio, circunscrita a establecer si procede o no lo división ello no es necesario, siendo, por demás, un exceso ritual manifiesto.

Igualmente, relievó que incluso el artículo 409 del Código General del Proceso, permite la preventiva de inscripción de la demanda pese a la existencia de otras cautelas respecto del bien.

Además, relievó la imposibilidad a la cual estaba compelido para aportar el documento en donde constara el levantamiento de la cautela, siendo muy corto el plazo concedido de 5 días, viendo, incluso comprometidas prerrogativas fundamentales con la determinación censurada.

Finalmente, puso en conocimiento la terminación del proceso ejecutivo por el cual fue inscrita la referida cautela, adjuntando incluso copias como sustento de su manifestación.

3. La determinación fue mantenida -9 de marzo de 2020- y, consecuentemente, concedido el recurso de alzada.

CONSIDERACIONES

1. Por sabido, se tiene que en la comunidad ninguno de los condóminos está obligado a permanecer en indivisión; por ello el legislador, para hacer efectiva tal prerrogativa, consagró el proceso divisorio en los artículos 406 y s.s. del C.G.P., cuyo propósito es obtener, ya la división material del predio cuando sea susceptible de ella, ora la venta en pública subasta, y en ambos casos, definir la forma como se deben distribuir los derechos de cada integrante y, por contera, coposeedores.

2. Como la censura fue enfilada contra el rechazo del escrito incoativo y, por ende, comprende el auto que negó su admisión (inciso quinto del artículo 90 del C.G.P.), el Tribunal examinará la legalidad de la causal invocada por el funcionario cognoscente, aspecto toral del disenso.

Tanto la inadmisión como el rechazo de la demanda únicamente proceden en las puntuales hipótesis reguladas en el citado artículo 90, siendo completamente inaceptable que, aparte de los requisitos contenidos en esa norma, el operador judicial invoque otros que la ley no contempla.

Por tanto, el juez está autorizado para rechazar el escrito introductor, cuando el interesado no subsana en tiempo las falencias que motivaron la inadmisión del mismo, siempre que tal determinación obedezca a causas legales y no a su simple capricho.

Y es que justamente la principal obligación del juez al recibir una demanda radica en analizar liminarmente si existen causales que ameritan un rechazo de ésta por cualquiera de los factores que consagra la ley, o si hay una razón para inadmitirla.

3. Pues bien, los cánones 82 a 84, 90 y 406 del C.G.P., no prevén expresamente que la vigencia del embargo del predio cuya división reclama la demandante en el registro inmobiliario, comporte la inadmisión de la demanda y, su consecuente rechazo, en caso de no aportar el certificado donde conste el levantamiento de ese gravamen.

Entonces, al no estar prevista en el cuerpo normativo aplicable al caso la inadmisión por esas precisas circunstancias, tampoco era viable el rechazo dispuesto por la oficina de origen, pues como lo ha sostenido este Tribunal, "*los efectos adversos a los justiciables sólo pueden tomarse sobre la base de la vigencia de normas que, con precisión, las impongan frente a las omisiones*" estatuidas por el legislador[1]. Recuérdese

[1] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, autos de 12 de septiembre de 2014 y 9 de julio de 2015, exp. 07-2014-00378-01 y 38-2015-00411-01, reiterados en proveído de 31 de julio de 2017, exp. 01-2015-26124-01.

que las causales de inadmisión y rechazo de la demanda en el proceso civil son eminentemente taxativas[2].

Y es que incluso, como emerge del expediente, cuando la juez de primera instancia inadmitió la demanda -proveído notificado el 26 de noviembre de 2019-[3], no requirió a la promotora del trámite para que aportará el memorado documento y, tan solo, procedió a ello, el 21 de enero de 2020, imponiendo la carga anotada al extremo demandante, sin fundamento normativo alguno y, con la consecuente advertencia de su rechazo.

4. Ahora, en lo que atañe al argumento enarbolado por la funcionaria circunscrito a la imposibilidad de dar curso al trámite divisorio ante la vigencia de la prenombrada preventiva, valga traer a colación que la doctrina ha precisado que "no es obstáculo para decretar la división que esté embargado o inscrito el derecho de uno o varios de los comuneros"; que "intentada la demanda de división y demostrada la existencia de la comunidad y el derecho en ella de todos los comuneros actuantes, sin que aparezca pacto de indivisión entre ellos, es necesario decretar la partición y realizarla, con la salvedad de que lo que en ella corresponda o haya de corresponder al comunero demandado por los derechos en litigio quedará afecto a las resultas del mismo, pues sólo sobre esa parte puede entenderse que produce efectos (…). Si la división es ad valorem, lo afectado (…) será la suma que haya de corresponder al comunero demandado y nada más"[4] .

Así mismo, se ha sostenido que "el embargo y registro sobre los derechos del comunero no impiden que se efectúe y se registre en la respectiva oficina la partición de un bien común; pero el embargo y el registro de la demanda continuarán vigentes sobre la parte del inmueble que se adjudique a esos comuneros, es decir, se transforman de abstractos (sobre la cuota indivisa) en concretos (sobre la parte determinada que a

---

[2] Corte Constitucional, sentencia C-833 de 2002.
[3] Folio 117 documento denominado "01ExpedienteCuadernoPrincipalDigitalizado".
[4] MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil – Parte Especial. Bogotá: Editorial ABC, 8a ed., 1983, pág. 145.

ese comunero se adjudique. De esta manera se respeta el embargo o el registro de la demanda, sin desconocer el derecho de los otros comuneros a efectuar la partición"[5]

5. Siendo ello así, la decisión fustigada será revocada, por lo que la oficina de primer grado deberá pronunciarse nuevamente respecto de la admisibilidad del escrito introductor, claro está, atendiendo las pautas consignadas en la motivación de este proveído, las que además propende por garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, así como el objeto del procedimiento civil, esto es, la efectividad del derecho sustancial.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- REVOCAR el auto emitido el 13 de febrero de 2020 por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá en el asunto de la referencia y, en su lugar, disponer que el juez de primer grado decida nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda divisoria, claro está, atendiendo la motivación de este proveído.

Segundo.- Oportunamente, **devolver** la actuación a la oficina de origen, para lo de su cargo.

Sin costas de la instancia, por no aparecer causadas.

Hora: 4:00 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

[5] DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil – El Proceso Civil. Parte Especial. Tomo III, Vol. II. Medellín: Diké, 8a ed., 1994, pág. 791.

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA CIVIL

Radicación: 024-2018-00254-01

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Dual de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref.: PROCESO VERBAL DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL SOLAR SA CONTRA SEGUROS DEL ESTADO.

ASUNTO

Decide la Sala dual el recurso de súplica formulado por la demandada Inversiones Constructora Polo Norte SAS contra la decisión proferida por la Magistrada Sustanciadora, el 25 de febrero de 2021, que declaró inadmisible el recurso de apelación por ella interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia.

ANTECEDENTES

1. En el presente evento en providencia del 25 de febrero de los corrientes la magistrada sustanciadora, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Constructora Polo Norte, porque no se cumplieron con los requisitos del art. 322 del C.G.P. para su concesión, como quiera que la sentencia de primer grado se profirió en audiencia del 13 de marzo de 2020, en ella su apoderado judicial manifestó que

presentaría los reparos dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia, lo que no sucedió, como quiera que una vez se levantó la suspensión de los términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura (1 de julio de 2020), ese plazo venció el 3 de ese mes y año y el memorial fue presentado hasta el 8 de julio.

2. Inconforme con esa determinación interpuso el recurso de súplica argumentando, que el Decreto 806 de 2020 modificó "*momentáneamente*" el artículo 322 del CGP, en el sentido que amplió los términos para manifestar los reparos a la decisión de tres (3) a cinco (5) días, para la sustentación del recurso de alzada, y agregó que solo obtuvo el CD de la audiencia el 7 de julio de 2020, pues para esa data acudió al Internet, porque estaba acostumbrado a revisar los procesos de manera presencial.

CONSIDERACIONES

El artículo 331 del Código General del Proceso, consagra que el recurso de súplica "***procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Sustanciador en el curso de la segunda o única instancia***…" (Negrillas añadidas).

Téngase en cuenta, que el objeto de súplica es la decisión que declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la demandada Inversiones Constructora Polo Norte SAS, porque no manifestó los reparos a la decisión dentro del término previsto en el art. 322 del C.G.P., por lo que se procederá a su estudio.

Sea lo primero precisar, que el decreto 806 de 2020 implementó las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, con el fin de agilizar el trámite de los procesos, para lo cual modificó el recurso de apelación contra sentencias en los procesos civiles y de familia, en lo que hace relación a los términos con los que

cuentan en segunda instancia las partes para solicitar pruebas, y sustentar la alzada, además estableció que la decisión se emitiría por escrito; sin introducir modificaciones al contenido del inciso 1º del numeral 3º del art. 322 del C.G.P., por tanto, cuando se apela un fallo, el recurrente deberá ante el a-quo precisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión y sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior, *al momento de interponer el recurso en la audiencia, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización.*

De tal suerte que el recurso de apelación de sentencias, se surte en dos momentos específicos, el primero ante el Juez de conocimiento, manifestando los reparos a la decisión, y el segundo, ante el superior con la respectiva sustentación.

En el caso en estudio, revisado el expediente digital se observa que la decisión de primera instancia fue proferida en audiencia celebrada el 13 de marzo de 2020 por la Juez 24 Civil del Circuito de Bogotá, y que con ocasión de la pandemia por la Covid-19, el Consejo Superior de la Judicatura decretó la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de ese año[1], por tanto, una vez reanudados los mismos el 1 de julio de la pasada anualidad, el apelante debía presentar los reparos a la decisión a más tardar para el día 3 de ese mes y año, como quiera que el plazo establecido en el art. 322 del C.G.P., no fue reformado por el Decreto legislativo 806 de 2020 como erróneamente lo argumentó el inconforme.

Así las cosas, del examen preliminar efectuado por la Magistrada Sustanciadora, al evidenciar que el apoderado judicial de la demandada Inversiones Constructora Polo Norte

[1] Mediante Acuerdos Nos. PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura dispuso suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, medida prorrogada por Acuerdos PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581 todos de 2020. **Los términos fueron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.**

SAS., no presentó los reparos contra la decisión emitida en primer grado dentro de los 3 días previstos en el art. 322 del C.G.P., lo declaró inadmisible.

Ante este panorama, se confirmará la decisión emitida por la Magistrada Ponente.

En virtud de lo expuesto el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Dual de Decisión**,

RESUELVE

Primero: Confirmar la decisión del 25 de febrero de 2021, proferida por la Magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Sin lugar a condena por costas procesales por no aparecer causadas las mismas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
Magistrado

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 018 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7b0129060d6f7c19a674e22296b317ea35fc973b4f36d1ef3fcf01efc1d88c75
Documento generado en 26/03/2021 03:15:02 PM

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Radicado: 11001 310 30 24 2019 00668 01 Procedencia: Juzgado 24 Civil Circuito.
Proceso: Verbal, Parroquia el Santísimo Redentor ***Vs.*** Urbanizaciones La Victoria Limitada y personas indeterminadas
Asunto: **Apelación auto que rechazó demanda de pertenencia.**

Se resuelve el recurso de apelación subsidiario interpuesto por la demandante Parroquia el Santísimo Redentor contra el auto de 19 de noviembre de 2019, alzada concedida el 17 de julio de 2020 y recibida en el Despacho el 12 de enero de 2021.

ANTECEDENTES

1. Parroquia el Santísimo Redentor demandó a Urbanizaciones La Victoria Limitada para que se declare que adquirió por la vía de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el inmueble ubicado en la diagonal 82 Bis No. 85-20, Manzana G, de la Urbanización la Española en Bogotá, que forma parte del predio de mayor extensión identificado con la matricula inmobiliaria No. 50C-578409; que, en consecuencia, se inscriba la sentencia ante la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Centro de esta ciudad; y que se ordene abrir folio de matrícula inmobiliaria para el predio pretendido en usucapión; y se condene en costas a la parte vencida.

En sustento, adujo que posee el predio descrito y alindado en la demanda desde el 18 de junio de 1969, en forma *"real, material, pública, pacifica, tranquila e ininterrumpida"*; que *"ha ejercido hechos positivos"* entre los que menciona mejoras, pago de impuestos y servicios públicos; y que actualmente edifica la Parroquia el Santísimo Redentor.

2. La *a quo* rechazó el libelo, tras considerar que el inmueble *"es un bien baldío"*, según consta en *"las anotaciones 379 y 382 del presunto bien de mayor extensión al cual pertenece"*, de las que se extrae que es de propiedad del Bogotá Distrito Capital y del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, luego no puede ser objeto de la declaratoria de pertenencia por enmarcarse dentro de los supuestos contemplados en numeral 4 del artículo 375 Cgp.

3. Inconforme, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. En apoyo, adujo que el aludido bien no es del dominio del estado; que no se trata de un bien baldío; y que debe admitirse la demanda que instauró, por cuanto: *i*. según el certificado especial de pertenencia que aportó, el predio *"pertenece únicamente a la Urbanización Victoria Ltda."; ii*. la información catastral del inmueble señala que *"no se encuentra incluido como bien de uso público o fiscal"*; *iii.* la anotación 379 del certificado de tradición corresponde a la anulación de una escritura en un proceso penal en el que el Instituto de Crédito Territorial actuó como agente de la Superintendencia Bancaria, lo que no muestra que el referido instituto sea el dueño del predio; y *iv*. la anotación 382 obedece a *"una cesión obligatoria de toda constructora"*, de la que se infiere que el predio no es del estado.

4. El Juzgado de primera instancia resolvió mantener incólume su decisión. Para ello, y tras señalar que pese a la anotación 382 del folio de matrícula otra documental indica que el bien no pertenece al Distrito Capital de Bogotá, señaló que de la anotación 379 se colige que existió una toma de posesión regulada en la Ley 66 de 1968 y que el bien *"pasó a manos de la Superintendencia Bancaria, la cual nombró como agente especial para dicho efecto al Instituto de Crédito Territorial"* y en la actualidad pertenece al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

CONSIDERACIONES

1. De entrada se advierte que el auto materia de impugnación será revocado, habida cuenta que, por las específicas particularidades del presente caso, resultó prematura la conclusión a la cual arribó el Juzgado de primera instancia en cuanto a la naturaleza del inmueble de mayor extensión en el que afirmó la parte demandante se encuentra el predio que se pretende adquirir por prescripción.

2. En efecto, aunque en la anotación 382 del Certificado de Tradición de Matrícula del bien de mayor extensión aportado con la demanda (50C-578409), de fecha 28 de octubre de 2019, se encuentra registrada la Escritura Pública 5087 de 5 de octubre de 2007 y en la 'especificación' se anotó *"0133 declaratoria de propiedad pública sobre zonas de cesión obligatoria gratuita (modo de adquisición)"*, lo cierto es que también se allegaron documentos que en principio dan cuenta de que ese inmueble, y el predio específico materia del proceso, no tiene calidad de bien público y que el derecho de dominio sobre el mismo se encuentra en cabeza de un particular.

Es de ver, sobre el punto, *i.* que en la página 3 del archivo del expediente virtual denominado '02Anexos', que corresponde a los anexos de la demanda, se encuentra 'certificado especial de pertenencia pleno dominio' expedido por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Bogotá Zona Centro, en el cual se indicó que el citado bien corresponde a la Urbanización la Victoria Ltda. y que se determinó *"de esta manera la existencia de pleno dominio y/o titularidad de derechos reales en mayor extensión a: Urbanización la Victoria Ltda."*; y *ii.* que en las páginas 111 a 112 del mismo archivo, se encuentra copia de la respuesta que el 18 de

marzo de 2014 emitió el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público frente a petición radicada por el representante legal de la acá demandante, en el que se indicó que el predio específico objeto de la pretensión de este proceso (Diagonal 82 Bis N° 85-20) *"no se encuentra incluido como bien de uso público o fiscal en el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario del Sector Central del Distrito Capital, a cargo de* [esa autoridad]*"*.

Además, de la anotación 379 del folio de matrícula a que se ha hecho mención (de fecha 19 de julio de 1991) no se logra observar elemento del que pueda colegirse que el bien pertenecía al Instituto de Crédito Territorial, pasando luego el dominio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tras la liquidación de esa entidad y del Inurbe.

Lo anterior, comoquiera que tal anotación daría cuenta, a lo sumo, de que se canceló un registro anterior, y de que existió o existe una intervención de la entonces Superintendencia Bancaria al titular del bien, cuyo agente especial fue el Instituto de Crédito Territorial, pero no acreditaría que existió liquidación del intervenido y que la propiedad del bien hubiere pasado a tales entidades.

Ahora, el juez de primer grado señaló que de la referida anotación se podía extraer que Urbanización y Constructora La Victoria S.A. fue objeto de la medida de toma de posesión regulada en la Ley 66 de 1968, y que por tanto, la administración, manejo y existencia paso a la Superintendencia referida; sin embargo, y de tener por cierto que se presentó una toma de posesión, en parte alguna de esa normatividad se establece que la medida de toma de posesión conlleva la transferencia del derecho de dominio de los bienes del intervenido.

Así las cosas, es claro que el rechazo de la demanda, y su confirmación en sede de reposición, se apoyaron en afirmaciones que a estas alturas del proceso, apenas en la calificación de la demanda, no se encuentran plenamente corroboradas, pues no existe certeza de si el inmueble de mayor extensión, y el predio específico sobre el cual recae la presente acción, son de propiedad de una entidad de derecho público o son bienes fiscales o de uso público.

Cabe acotar que si bien el numeral 4 del artículo 375 Cgp establece que el juez de conocimiento debe rechazar la demanda o declarar la terminación anticipada del litigio cuando advierta que la pretensión recae sobre *"bienes de uso público, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho público"*, para proferir esas decisiones debe estar acreditada por completo la naturaleza pública, y en el estado actual del presente trámite no es dado concluir, de manera fehaciente, que el bien de marras tiene esa calidad, pues, itérase, junto con la demanda se aportaron documentos que en principio dan cuenta de lo contrario, y en ese sentido, para determinar que el inmueble es público resultaría perentorio acometer y adentrarse en un debate probatorio más profundo, efectuando las citaciones a que haya lugar.

Es imperioso poner de presente que lo anterior en manera alguna descarta que de las implicaciones probatorias que se deriven de la totalidad de los documentos aportados en las eventuales etapas procesales subsiguientes y de los demás medios de persuasión que se recauden a lo largo del trámite, cuya estimación deberá ser materia del análisis conjunto que en su momento el *a quo* habrá de acometer para emitir la decisión a que en derecho haya lugar, se logre acreditar el carácter imprescriptible del inmueble, máxime que, como ya se indicó, el trámite puede culminarse

anticipadamente cuando se advierte y pruebe tal naturaleza.

En suma, se revocará el auto apelado, y se ordenará la devolución del expediente al *a quo*, a fin de que este provea como corresponde.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **REVOCA** el auto apelado, proferido el 19 de noviembre de 2019 por el Juzgado 24 Civil del Circuito.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Rdo. 11001 31 03 024 2019 ***00668*** *01*

Firmado Por:

GERMAN VALENZUELA VALBUENA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 019 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f240919056933e335e0846219b569a1b95f13883cc184ed8ec24d5adaf65a03b
Documento generado en 26/03/2021 04:11:13 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: **José Alfonso Isaza Dávila**

Radicación: 110013103028-2015-00456-03
Demandante: Campo Elías Riaño Castellanos
Demandado: Pedro Rodríguez Rodríguez
Proceso: Ordinario
Trámite: Apelación sentencia
Discutido en Sala de 25 de marzo de 2021

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Decídese el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia anticipada de 6 de marzo de 2020, proferida por el 29 Civil del Circuito en este proceso ordinario de Campo Elías Riaño Castellanos contra Pedro Rodríguez Rodríguez y personas indeterminadas.

ANTECEDENTES

1. Pidió el demandante se declare que adquirió por prescripción extraordinaria, el inmueble ubicado en la carrera 101D # 139 – 87, con matrícula inmobiliaria 50N-20379638, cuyas demás características se anotaron.

2. El sustento fáctico se resume en que el actor ingresó al predio en julio de 2004 por compraventa verbal que celebró con el propietario (demandado), pero a pesar de haber pagado el precio no fue otorgada la

escritura pública, sin embargo, desde ese momento ejerció posesión pacífica, pública e ininterrumpida.

3. Por fuera de término, el demandado presentó escritos de contestación a la demanda, excepciones previas y demanda de reconvención, motivo por el cual, en auto de 14 de febrero de 2017, no fueron tenidos en cuenta[1], además el rechazo de la reconvención fue confirmado en segunda instancia (2 de diciembre de 2016)[2].

La curadora *ad litem* de las personas indeterminadas respondió el libelo introductor del litigio sin formular excepciones[3].

Blanca Lilia Sánchez Benítez, esposa del demandado, concurrió al proceso y fue considerada como parte demandada, sin que su memorial de coadyuvancia a la parte demandada haya sido tenido en cuenta por extemporáneo, conforme a auto de 20 de septiembre de 2019.[4]

4. El juzgado denegó las pretensiones de la demanda, ordenó cancelar la medida cautelar practicada y condenó en costas al demandante.

Para esa decisión consideró, en resumen, con base en las pruebas hasta entonces practicadas, entre esas, las copias de un proceso declarativo entre las partes que se surtió previamente, el cual culminó con sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, de 8 de agosto de 2016, que declaró la nulidad de la promesa de compraventa verbal entre ellas, se ordenó a Campo Elías Riaño Castellanos restituir el predio en cuestión más $45.083.848,37, mientras que Pedro Rodríguez fue condenado a cancelar $15.659.632,80 por concepto de mejoras y $33.230.270,54 como devolución del precio.

---

[1] Folios 113 a 115, *pdf*: 01Cuadernoprincipal.
[2] *Pdf*: 01CuadernoTribunal.
[3] Folios 96 y 97, *pdf*: 01Cuadernoprincipal, y folios 18 y 19, *pdf*: 02Cuaderno1tomol.
[4] Folios 89 a 82 y 94, *pdf*: 02Cuaderno1tomol.

Anotó que en cumplimiento de esa sentencia, el aquí demandante restituyó el predio el 12 de agosto de 2015, es decir, pocos meses después de presentada la demanda de pertenencia. Invocó la sentencia SC-5231 de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, para concluir que para este asunto se presenta cosa juzgada formal y material relativa, pues como la sentencia del Tribunal en ese otro asunto ordenó que Campo Elías Castellanos restituyera el predio a Pedro Rodríguez, la eventual prosperidad de la acción de pertenencia haría inoperante esa orden judicial.

Agregó que para la prosperidad de la prescripción adquisitiva era indispensable ejercer posesión, por el tiempo legal, después de proferida la referida sentencia de 8 de agosto de 2016, requisito que evidentemente no se cumple para el caso concreto.

EL RECURSO DE APELACIÓN

En sus inconformidades contra el fallo de primera instancia, el actor presentó los siguientes reparos:

a) No operó la cosa juzgada, puesto que el proceso que cursó en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá fue por una de resolución de una promesa de compraventa, cuya sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones, pero el superior revocó para decretar la nulidad absoluta de ese contrato; mientras que este asunto se trata de una pertenencia, de allí que la jurisprudencia de la sentencia SC-5231 de 2019 no sea aplicable, en la medida en que no hay identidad de partes, hechos, pretensiones ni fundamentos.

b) Se acreditó la posesión sobre el predio entre 2004 y 2017, pues el demandante construyó el inmueble, hizo mejoras, pagó impuestos, lo arrendó y vive allí con su familia.

c) El actor ingresó al predio de buena fe, dado que en virtud de la promesa de compraventa, el demandado entregó voluntariamente el inmueble, quien además contestó la demanda fuera de término.

El demandado descorrió oportunamente el traslado del recurso[5].

CONSIDERACIONES

1. Ausente los reproches en torno a los presupuestos procesales o la validez de la actuación, limitada la competencia del Tribunal a los puntos objeto de recurso vertical, el debate se centra en dilucidar si fue acertada la sentencia anticipada apelada, que denegó las pretensiones de la demanda, conforme a las normas sustanciales y procesales respectivas.

Y la respuesta a ese interrogante es que no hay la excepción de cosa juzgada, en cuanto a los requisitos de la triple identidad que consagra el artículo 303 del CGP, que es la hipótesis apta para dar lugar a la sentencia anticipada prevista en el artículo 278, inciso 3º, numeral 3; pero sí opera otra hipótesis de fallo antelado, cual es la de no haber más pruebas que practicar (numeral 2º ibid.).

De ahí que lo anotado es independiente de la suerte que debe correr el presente proceso de pertenencia, es decir, que la anterior conclusión de ninguna manera conlleva a pensar o considerar que sí están probados los elementos de la prescripción adquisitiva para su prosperidad, cuestión que luego se explica.

2. Cumple recordar que, como ha sentado la jurisprudencia[6], la sentencia anticipada o antelada tiene su razón de ser (*ratio iuris*) en la

[5] PDF: 09MemorialNoApelante.

economía y celeridad procesal, en pro de una justicia eficiente y rápida, en las hipótesis previstas en la ley y conforme a las cuales sea innecesario adelantar todas las etapas del proceso para que el juez decida la contienda litigiosa, esto es, evitar el desgaste procesal, sin desmedro de preservar las garantías fundamentales del debido proceso, pues la administración de justicia "*debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento*" (artículo 4 de la ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea eficiente y que "*[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley*"[7] (artículo 7 ibidem).

Varias reglas generales y especiales del actual estatuto procesal prevén las sentencias adelantadas, pues además de las hipótesis comunes previstas en el artículo 278 del CGP, se contemplan otras, *verbi gratia*, la terminación anticipada del proceso de pertenencia para bienes públicos o imprescriptibles (art. 375) y la sentencia de plano de filiación (art. 386), entre otras.

El citado precepto 278, en su inciso 3º ordena al juez que en cualquier fase del proceso "*deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial*", cuando se encuentre probada algunas de las excepciones previstas en el numeral 3º, entre ellas *la cosa juzgada*, aparte de otros eventos contemplados en los numerales 1º y 2º, relativas al acuerdo las partes o cuando no hay pruebas por practicar.

Tales supuestos, por cierto, son imperativos por cuanto imponen que se pretermitan algunas etapas del respectivo procedimiento.

---

[6] Corte Suprema de Justicia, sentencia SC4548-2018, de 22 de octubre de 2018, Rad. 11001-02-03-000-2016-02283-00.
[7] La Corte Suprema de Justicia ha considerado viable la sentencia anticipada en varias ocasiones, entre esas, SC12137-2017 y SC18205-2017.

Pero desde luego que, como también anotó la Corte[8] , "*para omitir las etapas faltantes en pos de la sentencia anticipada, que puede ser escrita u oral, según la etapa en que halle el asunto, debe estar enlazada la litis, constituido el «proceso» en el sentido técnico de la teoría procesal, vale decir, que deben estar superadas las etapas mínimas de notificación a la parte demandada del auto admisorio (o mandamiento de pago) y descorridas las excepciones, con garantía de contradicción y defensa recíproca de las partes, para que se acate el principio de bilateralidad de la audiencia (****auditur ex altera pars****), propio del debido proceso*".

3. En este asunto, el *a quo* consideró viable la sentencia anticipada con fundamento en que estaba acreditada la cosa juzgada, bajo el marco de un análisis de un caso anterior suscitado entre las mismas partes.

Aquí el demandado no contestó en oportunidad la demanda, sin embargo, la juez decretó de oficio la solicitud de copias del litigio de Pedro Rodríguez contra Campo Elías Castellanos y Jaime Sanabria, que cursó en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, cuyas sentencias de primera y segunda instancia fueron aportadas al proceso (folios 155 a 194, *pdf* 01Cuadernoprincipal).

De esas providencias, de 11 de junio de 2015 y 8 de agosto de 2016, se puede extraer que la demanda estaba dirigida a obtener la resolución de la promesa de compraventa, que los dos primeros celebraron sobre el predio que aquí es pretendido en pertenencia, por incumplimiento del demandado, o en subsidio, por mutuo disenso tácito o, en su defecto, se proceda a acción reivindicatoria del predio con las subsecuentes restituciones.

Los hechos discutidos de ese litigio giraron en torno a la celebración de la promesa de compraventa entre Pedro Rodríguez y Campo Elías

---

[8] En la citada sentencia SC4548-2018.

Castellanos el 24 de diciembre de 2004, pero con el inconveniente de faltar el documento escrito y firmado de ese contrato preparatorio que sirviera de prueba, aunque fue dilucidado que ese día se entregó el inmueble al promitente comprador, quien comenzó a usarlo inmediatamente. En audiencia de 13 de agosto de 2013 el allí demandante desistió de la acción en contra de Jaime Sanabria Parada, toda vez que este último solo era un mandatario del señor Campo Elías.

Las excepciones del demandado en aquel asunto -aquí demandante- se fundaron en que él -promitente comprador- no incumplió, sino que pagó el precio, aunque el contrato de promesa no fue suscrito.

El juzgado de primera instancia en aquel proceso resolvió que no era posible la resolución del contrato de promesa, por ser un acto inválido, en la medida en que faltó la solemnidad de figurar por escrito, requisito indispensable para su validez conforme a la ley, pero decidió que la acción reivindicatoria sí prosperaba, por cuanto el allí demandante es el propietario del inmueble, y el demandado confesó que era poseedor, había identidad entre el inmueble pretendido y el poseído, además se trataba de una cosa singular reivindicable y dispuso las restituciones mutuas, para lo cual trató al demandado como poseedor de buena fe.

La apelación del demandado en ese proceso consistió, básicamente, en que sí se celebró la compraventa, aunque de manera verbal, motivo por el que la reivindicación es improcedente dado que su posesión provino de ese vínculo contractual, además de que faltó un pronunciamiento sobre el pago del precio, omisión que generaría enriquecimiento injusto de su contraparte, y se debían reconocer mejoras porque el terreno estaba sin construir, sin que sea viable que el propietario reciba frutos dado que fue el contratante incumplido.

En la segunda instancia de entonces, el Tribunal consideró que la posesión derivó de una relación contractual que, aunque imperfecta, irradió efectos para los contratantes, motivo por el cual debe ser

aniquilada para retrotraer sus consecuencias, entre estas el señorío que se propició en favor del demandado. Precisó que la reivindicación es inoperante, porque primero debe destruirse el lazo contractual, pues las cosas deben deshacerse como surgieron. Agregó que tampoco era viable la resolución por incumplimiento o el mutuo disenso tácito, en la medida en que esas acciones implican la existencia de un convenio válido, que no hay, pues la promesa de compraventa no obró por escrito. Sin embargo, halló viable la nulidad absoluta oficiosa precisamente por no cumplirse esa solemnidad, declaración que dio lugar a que ordenara al demandado, aquí demandante, restituir el inmueble, junto con los frutos civiles, a favor del alá demandante, mientras que este último debía devolver el dinero que recibió como parte del precio y el valor de las mejoras del predio.

4. Como puede observarse, carece de base la excepción de cosa juzgada de aquella sentencia frente a lo aquí pretendido, por falta de los requisitos previstos en el artículo 303 del Código General del Proceso -antes 332 del CPC-, conforme al cual la sentencia ejecutoriada de un "*proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes*"; regla completada con el inciso segundo que explica la identidad jurídica de partes para eventos de sucesión *mortis causa* o por acto entre vivos.

Norma de la cual fluye que son tres los elementos que estructuran la cosa juzgada entre los dos procesos: *a)* identidad jurídica de partes; *b)* identidad de objeto, vale decir, de pretensiones; *c)* identidad de *causa petendi* o de los hechos.

La identidad jurídica de partes es innegable, pues demandante y demandado fueron partes contrincantes en el litigio anterior, más cuando al margen quedó Jaime Sanabria Parada por el desistimiento de la demanda por parte de Pedro Rodríguez.

Empero, no concurren la identidad de objeto ni de causa, en la medida en que el anterior proceso, resuelto en forma definitiva por la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de 8 de agosto de 2016, versó exclusivamente sobre la validez de la promesa de compraventa verbal celebrada entre las partes, relación contractual sobre la cual declaró la nulidad absoluta y procedió a las restituciones mutuas.

Se ve, pues, que hay cierto grado de relación entre ambos pleitos, pero los supuestos fácticos y la pretensión son distintos a la demanda de pertenencia aquí esgrimida, dado que no involucra pretensiones respecto del contrato de promesa en sí mismo, sino que exhortó la prescripción adquisitiva extraordinaria, la cual no requiere justo título para ser invocada, además que está sustentada en una alegada posesión sobre el predio.

La jurisprudencia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC5231 de 2019, no es aplicable para declarar probada la excepción de cosa juzgada por la explicada triple identidad, toda vez que los argumentos expuestos en esa providencia partieron del supuesto fáctico de dos litigios de pertenencia suscitados entre las mismas partes, respecto de un tiempo de posesión que había sido analizado en ambas ocasiones, situación que es disímil al caso que aquí se estudia.

5. Sin embargo, las anotadas circunstancias no son óbice para la emisión de la sentencia anticipada, aunque no por cosa juzgada, que no la hay en términos reales, pero sí por otro de los supuestos por los cuales es viable proferir ese tipo de providencia, que acaso fue el que quiso invocar el juzgador de primera instancia, y que concierne a cuando no hay pruebas por practicar o que no se requiere practicar más pruebas (artículo 278, numeral 2, del CGP).

Esto porque con las pruebas practicadas hasta el momento en que el juzgado dictó la sentencia antelada, hay claridad sobre la situación litigiosa, de atender que de las decretadas en auto de 14 de febrero de 2017, la mayoría se practicó en diligencia de 22 de agosto de 2017, como fueron la inspección judicial, interrogatorios y testimonios, además se recibieron las pruebas trasladadas del Juzgado 1º Civil del Circuito, obrantes en el proceso 2011-00733-00[9]. Y así, lo que en verdad vio la funcionaria de primer grado fue que no había más pruebas por practicar, por estar clara la situación sustancial debatida.

6. Precisado lo anterior, cumple recordar que el artículo 2512 del Código Civil define la prescripción como el "*...modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales*".

Y por lo que atañe con los requisitos para la procedencia de la pretensión de pertenencia, desde hace mucho tiempo se ha sostenido que son los siguientes: 1) cosa u objeto susceptible de adquirirse por prescripción; 2) posesión de la cosa por el término legal respectivo; y 3) que la posesión no haya sido interrumpida.

Sobre el segundo requisito, el artículo 2532 del Código Civil, que había sido modificado por la ley 50 de 1936, exigía para la prescripción extraordinaria una posesión por el tiempo de veinte años, norma vigente hasta el **27 diciembre de 2002**, cuando fue modificada por la ley 791, que redujo ese lapso a diez años.

En este asunto, el demandante adujo, en el hecho primero de su libelo, que es poseedor del predio tema del litigio desde el julio de 2004, aunque se precisó que en realidad ingresó al inmueble en desarrollo de

[9] Folios 312 a 363, *pdf*: 01Cuadernoprincipal.

una promesa de compraventa que celebró con el demandado el 24 de diciembre de 2004, conforme a las pruebas trasladadas aportadas por el Juzgado 1º Civil del Circuito, momento a partir del cual considera que ha ejercido una posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por un término superior a 10 años.

Sobre el particular, si bien la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, del proceso 2011-00733-00 tramitado en el referido juzgado no configura cosa juzgada como otra decisión sobre pertenencia, cual se expuso antes, en todo caso sí desvirtúa plenamente la pretensión de este asunto, sin necesidad de acudir a otros elementos de juicio. Eso porque la cuestión sustancial relacionada con el bien, fue definida en esa otra actuación mediante dicha providencia, cuya fuerza de cosa juzgada en cuanto a dejar sin efectos el aludido negocio jurídico de promesa y ordenar la restitución del predio, produce efectos para lo aquí pretendido, pues impide cualquier posibilidad a la demanda de pertenencia aquí invocada.

Y es así porque si allá se deshicieron los efectos de la promesa y, consecuentemente, se ordenó la restitución del predio a su dueño, aquí demandado, aflora evidente que ninguna base pudo quedar para la supuesta posesión que ahora se pretende invocar en esta pertenencia, sencillamente porque dicha posesión, cuando menos, se interrumpió con aquella decisión.

7. De ahí que, sin necesidad de practicar más pruebas, aflora seguro que esa sentencia anterior tiene efectos de cosa juzgada frente a lo aquí pretendido, pero no por la identidad de sus elementos, sino porque la situación que juzgó llevó a una verdadera interrupción de la prescripción, en tanto que dejó sin efectos la promesa invocada como fuente de la posesión y ordenó la restitución consecuencial del inmueble. De donde emana que no puede tener base la situación sustancial de poseedor que alega aquí el pretendido usucapiente.

8. En resumen, como ninguno de los reparos de la parte demandante pueden derribar la sentencia de primera instancia, se confirmará, aunque se modificará el numeral primero en el sentido de que esa providencia se dicta con apoyo en la causal de sentencia anticipada de no haber más pruebas que practicar (artículo 278, inciso 3º, numeral 2º, del CGP). Costas a cargo del apelante, conforme al art. 365, numeral 8º, del CGP, porque de todas maneras pierde el recurso.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil Cuarta de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia de fecha y procedencia anotadas, con la modificación de que la sentencia anticipada es porque no hay más pruebas por practicar, acorde con las precisiones de la parte motiva.

Condénase en costas del recurso al apelante. Para su valoración, conforme al art. 366 del CGP, el magistrado sustanciador fija la suma de $2.000.000, como agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
Magistrado

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
Magistrada

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 018 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
752605e70bb160544f1fa06bef4c002449fa8e367e7ca7f579d2e5b3748211d6
Documento generado en 26/03/2021 09:03:48 AM

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

REF. 110013103 029 2005 00539 02

Por cuanto liquidación de costas practicada por la secretaría no fue objetada, se imparte su aprobación.

Notifíquese;

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 007 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2b770dcfd39daab2e5971e27a183e7584e0fdd7dfa814e7a3327f90b848834fd
Documento generado en 26/03/2021 01:07:17 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., marzo veintiséis (26) de dos mil veintiuno (2021)
(Discutido y aprobado en Salas 7, 8 y 9 del 12, 19 y 26/03/2021)

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandado contra la sentencia proferida por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, en octubre 06 de 2020, dentro del juicio que promovió en su contra el señor Helmer Mauricio Peña.

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

Con escrito presentado mediante procurador judicial, el señor Helmer Mauricio Peña Pedraza solicitó a la jurisdicción que hiciera en su favor y en contra de la señora Noralba Elisa Garzón Lara, las siguientes declaraciones:

1.1.- Que la convocada rinda cuentas comprobadas al accionante, respecto de los dineros recibidos para la administración de los vehículos tipo taxi del enjuiciante, por $ 705.118.240 por los automóviles de Cartagena y $ 320.688.400 por los de Riohacha.

1.2.- Como consecuencia, se declare que la demandada, en su calidad de administradora, está en la obligación de pagar a su adversario la suma que corresponda de las cuentas que debe rendir.

2.- Fundamentos fácticos

2.1.- En septiembre de 2008, los señores Peña y Garzón, entablaron una relación comercial consistente en la adquisición de cinco cupos para los vehículos tipo taxi identificados con placas UAR-013, UAR-027, UAR-028, UAR-076 y UAR-077 que funcionarían en la ciudad de Cartagena y, respecto de los cuales, la demandada recibiría por concepto de administración $ 16.666, pagando al propietario $ 92.000 por día laborado. Pese a que fueron cinco (5) vehículos, solo se suscribieron contratos escritos respecto de dos (2).

2.2.- En noviembre de 2012, se entregaron otros 5 taxis para su funcionamiento en Riohacha, los identificados con placas SQX-433, SQX-440, SXW-525, SXW-526 y SXW-527. En este caso, la demandada recibiría diariamente por la administración de cada taxi $ 8.000, mientras que el propietario obtendría $ 70.000.

2.3.- Pese a los múltiples requerimientos que se le hicieron a la administradora para que discriminara los conceptos de los dineros que consignaba al propietario, jamás lo llevó a cabo.

2.4.- En noviembre de 2012, la señora Garzón informó al señor Peña que los automóviles de Cartagena dejaron de funcionar y requerían ser reemplazados, aspecto que, pese a los perjuicios causados al demandante, fue acatado por lo que en julio de 2013 se adquirieron los taxis TES-013, TES-015, TER-995, TER-996 y TER-997. En mayo de 2015, indicó al demandante la necesidad de cambiar los automotores de Riohacha.

2.5.- La relación de administración tuvo una vigencia de enero de 2009 a junio de 2015 para Cartagena y enero de 2012 a mayo de 2015 para Riohacha; sin que en ese periodo la encargada haya satisfecho las prestaciones a su cargo, incluso porque ninguno de los vehículos se encuentra en funcionamiento por su deterioro.

3.- La defensa

3.1.- La demandada se opuso al buen suceso de lo pretendido. Basó su defensa proponiendo excepciones de mérito que nombró así: *"Falta de legitimación en la causa por activa", "La señora Noralba Garzón Lara no tiene la obligación de rendir cuentas al demandante", "Inexistencia de contratos para los vehículos UAR028, UAR076, UAR077, SQX433, SQX440, SXW525, SXW526, SXW527, TES013, TES015, TES995, TER996 Y TER997"* y *"Prescripción".*

Sostuvo que, entre las partes jamás existió una relación negocial de administración que habilitara al demandante para exigirle la rendición de cuentas; por cuanto, solo se aportaron dos contratos que corresponden a un préstamo que se le hizo al demandante para la financiación de los cupos de los carros, los cuales se pagarían con el producto del trabajo.

4.- La sentencia de primera instancia

Mediante fallo proferido en octubre 06 de 2020, la juez de primer grado accedió a todas las pretensiones formuladas en la demandada tras considerar que, a partir de la confesión de la demandada en su interrogatorio de parte, existió una relación de administración con el demandante de la que no se han rendido cuentas.

En torno a los argumentos de la defensa sustentados en que solo se habían aportado dos contratos, lo que impedía rendir cuentas respecto de dos taxis y no de la totalidad de vehículos, indicó que por no atender a un contrato solamente, su existencia podía ser acreditada por cualquier medio de prueba, situación que ocurrió con la cadena de correos electrónicos que acompañó con la demanda en el que la convocada daba cuenta de la gestión y encargo de todos los vehículos, documentos que no fueron reprochados por la convocada.

5.- El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, fue recurrida por la demandada quien reparó ante el *a quo* y en la oportunidad prevista en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020 sustentó al Tribunal los siguientes puntos de disenso:

(i).- Insistió en que no debía rendir cuentas por la administración de los taxis, especialmente por aquellos en los que no se suscribió un contrato escrito, pues en su sentir, además de tal situación, no logró corroborarse la existencia de un vínculo negocial que impusiera el encargo de administración.

(ii).- Estima que las pretensiones de la demanda no fueron claras, pues a partir de los contratos adjuntos al libelo, se edificó que las cuentas debían ser impartidas desde 2009 hasta mayo de 2015; sin embargo, el demandante en su interrogatorio indicó que para 2012 unos vehículos fueron chatarrizados.

(iii).- Considera que no se probó el encargo, pues la simple cadena de correos electrónicos resultaba insuficiente; además, no comparte que, según lo declaró el convocante, se sobreentendía la administración de los restantes vehículos por la mera suscripción de los dos primeros contratos.

(iv).- Reafirmó que la acción se encuentra prescrita porque se exigen cuentas en 2017 de un presunto encargo iniciado en 2009. De otro lado cuestiona que si, según el demandante, la administración no fue ajustada, en 2012 hubiera reinvertido para la adquisición de nuevos vehículos ante la chatarrización de los existentes.

(v).- De no prosperar sus recursos, solicita que se ordene al demandante que le devuelva a la enjuiciada la papelería que, en su momento, le hizo llegar. De otro lado, que se reconsidere el monto que por agencias en derecho se fijó por encontrarlas sobreestimadas.

II.- CONSIDERACIONES

6.- Presupuestos procesales

La demanda reúne los requisitos formales, no contiene una indebida acumulación de pretensiones y su trámite se sujetó al rito establecido en la

codificación adjetiva, está demostrada la capacidad para ser parte y comparecer al proceso tanto de la parte activa como de la pasiva. Por consiguiente, no existe impedimento alguno para decidir de fondo.

7.- Análisis de los reparos motivo de la impugnación

Con la limitación que impone el artículo 328 del CGP, por cuanto la única parte que recurrió fue la convocada, procede la Sala al estudio de los puntos de disenso propuestos contra la sentencia de primer grado, los que en términos generales cuestionan la prescripción de la acción judicial y la inadecuada valoración de los medios de prueba que, en sentir del recurrente, impedían concluir la existencia de un acto o negocio jurídico que motivaran la necesidad de rendir cuentas, anunciándose desde ahora que, por las razones que entran a explicarse, la sentencia de primer grado será confirmada.

7.1- De la prescripción.

La inconformidad de la parte demandada, radica en que el actor esperó mucho tiempo para interponer la demanda, si en cuenta se tiene que la presunta administración inició en el año 2009 y culminó en 2015, por lo que resulta inusual que el actor haya esperado hasta el 2017, para iniciar la acción judicial.

Acorde con el artículo 2535 del C. C. el término extintivo del derecho de acción que gobierna el presente asunto es el decenal, pues a pesar que en algunos casos se impone un término especial para demandar las desavenencias que surjan en la ejecución de algunos negocios jurídicos o contratos, lo cierto es que, para el caso de la acción ejercitada, corresponde el plazo genérico de diez años.

En ese orden, si la gestión acusada se mantuvo vigente entre 2009 a 2015 como lo aceptaron los litigantes, la interposición de la demanda judicial el 9 de julio de 2017 (fl- 298) debe ser considerada como oportuna, pues el lapso extintivo acaecería en el año 2025, sin que la falta de presentación inmediata afecte su materialización.

7.2.- De la demostración del deber de rendir cuentas.

7.2.1.- De los medios de comprobación resulta evidente, la existencia de dos contratos escritos de administración respecto de dos de los cinco primeros taxis que funcionaron en Cartagena, estos son, los automotores de placas UAR-013 y UAR-027, en los que, sin duda, la pasiva actuó en calidad de vendedora y ejerció la administración de ellos. Esta realidad también nos permite inferir que, entre los contendientes, sí se presentó una concertación comercial encaminada a que el demandante adquiriera taxis para ser administrados por la pasiva, obteniendo como contraprestación un pago por cada vehículo que diariamente rodara; tal y como lo advierte la propia demandada al aceptar tal suceso en su interrogatorio de parte.

Sin embargo, lo que no es cierto es el dicho de la pasiva en relación a que ya rindió las cuentas por su gestión y que remitió al señor Helmer Mauricio Peña la documentación que soportaba los gastos y erogaciones de esos dos automotores, pues tal aseveración no cuenta con respaldo documental, pericial, oral o de cualquier medio de prueba que así lo permita acreditar, pese a que la señora Garzón Lara adujo ser comerciante y profesional en la materia no aportó registro de tales operaciones.

7.2.2- En relación con los otros vehículos, es decir, los tres restantes que inicialmente se adquirieron en Cartagena identificados con las placas: UAR-028, UAR-076, UAR-077 que posteriormente -junto a los dos iniciales UAR-013 y UAR-027- fueron reemplazados por otros cinco vehículos nuevos debido a su proceso de chatarrización (TES-013, TES-015, TER-995, TER-996 y TER-997), más los cinco adquiridos para su funcionamiento en Riohacha (SQX-433, SQX-440, SXW-525, SXW-526 y SXW-527), la demandada insiste en que jamás tuvo obligación de administrarlos, porque nunca se firmó un contrato en ese sentido, como sí lo hizo con los primeros, ya que tan solo estableció una relación comercial y de amistad con el demandante

En materia comercial, los contratos consensuales[1] tienen un valor significativo en el tráfico negocial, debido al dinamismo y velocidad en que se ajustan las relaciones con efectos económicos entre comerciantes y quienes esporádicamente ejecutan actos de comercio.

Tal forma de contratar no es extraña en la administración de negocios ajenos bajo la modalidad de mandato, en el que se delega un encargo en nombre propio, pero por cuenta ajena, la que no exige solemnidad alguna para su perfección; por tanto, para la validez jurídica del negocio cuyas cuentas se busca que se rindan por la pasiva, no se requiere de documento que lo soporte, pues por su naturaleza puede ser demostrado sin restricción probatoria alguna.

Aclarado lo anterior, es pertinente examinar los medios de prueba allegados para demostrar la obligación de la pasiva para rendir cuentas; en primer lugar, se encuentra la versión ofrecida por la señora Cristina Ortiz Forero –ex esposa del demandante Helmer Peña- quien relató que a su nombre se registró la propiedad de dos taxis; empero, jamás indicó que la administración de la pasiva recayó solo sobre esos dos vehículos, pues adujo tener seguridad que, en la ciudad de Cartagena se habían adquirido cinco, y tenía conocimiento de otros más; además, confirmó que la convocada era la administradora de todos ellos.

De otro lado, el demandante aportó con el libelo, la prueba de una cadena de correos electrónicos cruzados con la señora Noralba Garzón, en el período comprendido desde el año 2010 hasta el 2015, de los que se desprende con suficiente claridad -a partir de su valoración conjunta- que, realmente entre las partes sí existió una relación de administración que los ató, comprendiendo a los primeros cinco taxis de Cartagena y los que

[1] Aquellos que se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades, y pueden demostrarse sin restricción probatoria alguna.

entraron a reemplazarlos después de su chatarrización, como la de los otros cinco que funcionaban en Riohacha.

Sobre el punto es preciso resaltar que, en innumerables mensajes, la señora Garzón rinde informes de gastos causados por los taxis, indica gestiones administrativas de los mismos, hace balances de ingresos periódicos de los taxis y de las consignaciones efectuadas al convocante, dispone de estrategias de trabajo para mejorar la utilidad de la explotación económica de los vehículos, hizo requerimientos al propietario para poder adelantar actividades propias de los automotores, puso en conocimiento inconvenientes como averías y siniestros, respondía a los requerimientos que el señor Peña reiteradamente le hacía por la poca productividad o demora en la puesta en marcha de los taxis y, entre otros, contrario a lo expuesto por la pasiva en su interrogatorio, no se refería respecto al demandante como un amigo al que le estaba haciendo un favor, sino como un cliente con el que estaba comprometida para la gestión de sus negocios en Cartagena y Riohacha y por la cual cobró gastos de *"administración"* (fols. 130 a 140 expediente digital).

También se advierte que fueron reiterados los inconformismos del promotor frente a los informes propios de cada ejercicio, pues en su sentir, estimaba una utilidad demasiado baja para el modelo de negocios y un excesivo gasto en reparaciones y costos básicos de los carros, sin encontrar explicación alguna. En especial, desde el 2013, hubo una tendencia a requerir de la administradora la discriminación de los costos operacionales para cada uno de los automotores de servicio público; sin embargo, por más que la señora Garzón respondía diciendo que ella tenía todos los datos pormenorizados en su poder o que pronto efectuaría dicho análisis carro por carro, tal informe no fue remitido, aspecto que se ratificó en el interrogatorio de parte de la enjuiciada en el que afirmó que ella no rindió cuentas porque no tenía la obligación de brindarlas.

Aunado a ello, se advierte que el lenguaje directo e indirecto de las comunicaciones en nada se compadecía a una relación de amistad o de un simple favor que hacía la demandada. A partir de exigencias con un componente de mando, se aprecia que el convocante reclamaba resultados, no pedía favores, y la enjuiciada se excusaba y comprometía a la mejoría para mantener su reputación y buen nombre comercial, como conservar indemne la relación con su cliente.

Ahora en orden a precisar la idoneidad de la prueba, por tratarse de correos electrónicos provenientes del propio demandante, ha de tenerse en cuenta que el artículo 247 del CGP dispone que los mensajes de datos serán valorados así, cuando sean aportados en el formato en que consolidaron su cadena de creación-emisión-recepción; sin embargo, *"(…) la simple impresión en papel de un mensaje de datos* [captura] *será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos"*. Esas pautas genéricas, precisamente, están condensadas en el canon 244 *ib* que, en lo que atañe a documentos privados *"en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen (…)"* se presumen auténticos en su contenido y forma, mientras

no se quebrante tal beneficio suasivo por quien se afecta con el mismo; disposición que se acompasa con el artículo 246 y, a su vez, descansa en la remisión efectuada por el articulo 10 de la Ley 527 de 1999.

De allí que, en lo que a la documental vista de folios 25 a 285 del expediente digital refiere, se debe presumir auténtica en su contenido y firma porque la pasiva, pese a tener la oportunidad y herramientas para controvertirla, ninguna censura llevó a cabo frente a su eficacia demostrativa y validez formal al juicio, mediante el ejercicio de la tacha o desconocimiento del mismo bajo las reglas previstas en los artículos 270 y s.s. de la Ley 1564 de 2012.

En ese orden, la relación causal está acreditada y por tanto, ante la ausencia de cuentas rendidas, la convocada está llamada a satisfacer su obligación, sin que tampoco altere tal orden, el hecho que se hubieran chatarrizado unos vehículos y, como consecuencia, hubo un interregno de tiempo en el que no hubo explotación económica por imposibilidad material, ya que precisamente de ello versará la rendición requerida y, con todo, no puede obviarse que durante ese periodo hubo gestión para el proceso de cancelación de matrículas y la apertura de las nuevas para los vehículos que entrarían a reemplazar los salientes.

7.3.- De las pretensiones de apelación subsidiarias y la condena en costas.

7.3.1.- Solicitó el recurrente que de fracasar su medio impugnativo se ordenara al convocante a la devolución de toda la papelería que años atrás le fue entregada; sin embargo, tal aspiración se relega por completo del tema del proceso pues jamás fue objeto de excepción. Adentrarse en tal escenario sería una clara afrenta al principio de la congruencia. Con todo, no pude obviarse que la demandada, como comerciante que es, debe tener en su poder los papeles mercantiles que respalden contablemente sus transacciones y operaciones.

7.3.2.- Tampoco resulta válido calificar si el monto que por agencias en derecho se pactó resultó excesivo, pues de conformidad con lo reglado en el numeral quinto del artículo 366 del C.G.P, ese aspecto *"(…) solo (…)"* podrá controvertirse mediante la impugnación del auto que le imparta aprobación a la liquidación de costas y no, contra la sentencia que las estime.

7.3.3.- Por último, ante el fracaso del recurso de apelación, corresponde condenar en costas de instancia a la recurrente de conformidad con el numeral primero del artículo 355 de la Ley 1564 de 2012.

DECISIÓN

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala Quinta de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en audiencia efectuada virtualmente en octubre 06 de 2020, por el Juzgado 30 Civil del Circuito de esta capital, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia al extremo demandado. Para dicho efecto, la Magistrada Ponente fija por concepto de agencias en derecho la suma de dos (02) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

TERCERO: Ejecutoriado, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
[Ausencia Justificada]



CLARA INES MARQUEZ BULLA
Magistrada

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN : **11001310302920180030701**
PROCESO : **EJECUTIVO**
DEMANDANTE : **COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**
DEMANDADO : **FAUSTO CAMILO MORENO Y OTROS**
ASUNTO : **APELACIÓN AUTO**

Declárese inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha 14 de octubre de 2020, por medio del cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución Sentencias resolvió, entre otras cosas, inadmitir "*la presente demanda únicamente respecto de la ejecutada ZILIA NORHA VASQUEZ DE MORENO (q.e.p.d.), para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsane lo siguiente: a) Dese estricto cumplimiento al artículo 87 del Código General del Proceso, manifestado la parte actora que existe o no proceso de sucesión en curso de la causante ZILIA NORHA VASQUEZ DE MORENO (q.e.p.d.) en caso afirmativo, deberá dirigirse la demanda contra los herederos reconocidos en aquel y los indeterminados* (…)"

Al efecto, debe memorarse que el ordenamiento jurídico patrio acogió un criterio de taxatividad para establecer los autos que son apelables, señalando el artículo 321 del Código General del Proceso un catálogo de decisiones pasibles de tal recurso, que no puede ser desconocido por el operador judicial.

Téngase en cuenta que de la lectura del precepto citado, no aparece enlistado el proveído que, por vía de alzada, cuestionó el apoderado de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, advirtiéndose, entonces, que el legislador no autorizó, en modo

alguno, la revisión en segunda instancia del proveído que dispone inadmitir la demanda, luego de haberse decretado una nulidad, tras advertirse que una de las ejecutadas había fallecido antes de presentarse el pliego introductor. De ahí que anduvo desafortunada el *a quo* al emitir la decisión del 3 de febrero de los corrientes, mediante la cual se concedió el mecanismo de impugnación secundario.

Sobre el particular, cumple precisar que, tras escrutarse escrito contentivo del recurso, no se advierte que la inconformidad del censor se dirija contra la resolución que decretó la invalidación de la actuación, pues fue el mismo abogado de la parte actora quien, en "*memorial radicado el 9 de junio de 2020 informó* (…) *al despacho sobre el fallecimiento de la señora ZILIA NORHA VÁSQUEZ DE MORENO"*, -punto sobre el cual no hay discusión-; por el contrario, su disenso está enfocado a que el juzgado de primera instancia debió, "*previo a inadmitir la demanda* (…) *requerir a los demás demandados con el fin de saber quiénes son los herederos determinados de la demanda. Es importante para el proceso que el Despacho previo a* ***inadmitir la demanda únicamente respecto de la ejecutada ZILIA NORHA VÁSQUEZ DE MORERO (Q.E.P.D.)*** *requiera a los otros demandados para que informe si tienen conocimiento de los otros herederos de la señora ZILIA NORHA VÁSQUEZ DE MORENO (Q.E.P.D.). En especial al señor FAUSTO CAMILO MORENO, quien aparentemente por los apellidos, él es hijo de la señora* ***ZILIA NORHA VÁSQUEZ DE MORENO (Q.E.P.D.)*** *y por lo tanto debe saber si tiene hermanos maternos, si conoce quien es el esposo de la fallecida etc. En ese sentido, el señor FAUSTO CAMILO MORENO podrá informar al Despacho con mayor certeza y precisión el nombre de los demás herederos y si existe actualmente un proceso de sucesión de la causante ZILIA NORHA VÁSQUEZ DE MORENO* (…) *razón por la cual solicitamos al Despacho requerir a los demás ejecutados dentro del proceso para que informen si tienen conocimiento de los herederos determinados de la señora ZILIA NORHA VÁSQUEZ DE MORENO*"; argumentación que, de ninguna manera, critica la determinación que dispuso declarar "*la nulidad de toda la actuación surtida dentro de las presentes diligencias a partir del auto 21 de agosto de 2018*", como se dispuso en el numeral 1° del auto dictado el 14 de octubre de 2020, sin que tampoco se hubiesen exteriorizado reparos, en concreto, respecto de esa decisión.

Así las cosas, al no encontrarse dentro de aquellas providencias susceptibles de alzada el proveído aquí rebatido, es claro que éste no puede ser objeto de examen por esta senda procedimental.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C**., en Sala de Decisión Civil,

RESUELVE:

Primero: Declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por la parte ejecutante en contra del auto proferido el 14 de octubre de 2020, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución Sentencias de Bogotá.

Segundo: En firme este proveído, remítanse las diligencias al Despacho de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE,



JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: 11001-3103-030-2016-00563-02
Asunto: Verbal –Simulación
Demandantes: Henry Hernán Ramírez Nieto y Luis Fernando Ramírez Nieto.

Demandados: Jaime Sotomontes Vargas, Nydia Jeannette Ramírez Nieto y Herederos Indeterminados de José María Ramírez Torres y Lilia Graciela Nieto de Ramírez.

Decídese el recurso de reposición, y el subsidiario de queja, interpuestos por los demandados Nydia Jeannette Ramírez Nieto y Jaime Sotomontes Vargas contra el auto proferido el 18 de diciembre de 2020, mediante el cual fue denegado el extraordinario de casación propuesto frente a la sentencia dictada el 30 de octubre de 2020, dentro del proceso citado en la referencia.

ANTECEDENTES

1. La providencia censurada negó la concesión del recurso de casación impetrado por los demandados Nydia Jeannette Ramírez Nieto y Jaime Sotomontes Vargas frente al fallo de segundo grado, argumentando, en síntesis, que el interés de los recurrentes está contraído al valor del inmueble objeto de la negociación cuya simulación se depreca, pues, de salir avante la pretensión, el patrimonio del

demandado quedaría reducido a la cuantía del bien simuladamente obtenido y, en caso contrario, la frustración del demandante, concernirá a ese monto[1].

De ahí que y, ante la falta de aporte de algún medio probatorio que diera cuenta de ese interés económico, el justiprecio del predio en disputa quedó establecido con base al avalúo catastral para la anualidad de "2014" –visible a folio 273 Cdno. 1-, esto es, en la suma de **$245.906.000,** actualizándose año por año conforme a los reajustes contemplados en los distintos decretos proferidos sobre el particular, arrojándose un monto final para el año 2020 de $302.433.363, sin que dicho valor igualara o sobrepasara los 1.000 S.M.L.M.V. para el momento de la emisión del fallo -$877.803.000- exigidos por el legislador en el artículo 338 del C.G.P., como interés para recurrir en casación y, tampoco, en caso de incrementarse en un 50% o de duplicarse ese *quantum.*

2. Inconformes con dicha determinación, Nydia Jeannette Ramírez Nieto y Jaime Sotomontes Vargas propusieron reposición con apelación subsidiaria o, en defecto de éste último, el de queja frente a esa determinación, pretextando, por una parte, que el despacho no tuvo en cuenta el año 2020 en la actualización efectuada y, por la otra, que los avalúos *"en éste país y en ésta ciudad no se ciñen estrictamente a los decretos emitidos para tal efecto*", siendo, a su modo de ver, el monto liquidado por el despacho "excesivamente" inferior al valor real del avalúo catastral señalado para cada año por la Secretaría de Hacienda y, aún más, respecto al de carácter comercial.

Bajo esos argumentos y, luego de efectuar un nuevo cálculo, apoyados en los formularios de liquidación expedidos por la referida entidad, adosados con su escrito de opugnación, concluyeron que el valor estimado del inmueble objeto de la litis para el año 2020 ascendía a $458.103.000, suma que aumentada en un 50% arroja el valor de $687.154.500, el que tampoco, según su criterio, es el precio real del predio, siendo necesaria la realización de un avalúo y, por ende, el otorgamiento de un término

[1] Corte Suprema de Justicia -Sala Civil AC 1552 de 2020 , M.P. Luis Alfonso Rico Puerta.

razonable para su presentación dadas la condiciones actuales derivadas por la pandemia.

Finalmente, solicitaron en caso de no acoger sus anteriores peticiones, la concesión del recurso de queja y, consecuentemente, ordenar la expedición de copias para el trámite correspondiente.

CONSIDERACIONES

1. El Código General del Proceso, en su artículo 338, regula lo atinente a la cuantía del interés para acudir en casación, estableciendo que si las pretensiones son esencialmente económicas dicho recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1.000 S.M.L.M.V., excluyendo de esa exigencia únicamente a las "sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y, las que versen sobre el estado civil"; así mismo, autoriza determinar el susodicho interés con los elementos de juicio que obren en el expediente, además, si el recurrente estimare necesario podrá aportar un dictamen pericial para tal fin.

El interés para recurrir en casación se traduce en el perjuicio que la sentencia le irroga al censor para la fecha de su emisión , aspecto en torno al cual la Corte Suprema de Justicia ha explicado que aquel "(…) está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe hacerse para el día del fallo; aunque, cuando la "sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma". Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su interés para recurrir en casación estará definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella sólo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido interés estará dada por la desventaja que le deriva la decisión. En ese orden de ideas, entonces, cuando el fallo fue favorable al actor, y el de segunda instancia lo revoca, ha sido criterio constante

de la Sala que el interés para recurrir en casación se circunscribe al "beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisión de segundo grado» (CSJ AC, 5 sep. 2013, Rad. 00288-00)"[2].

2. En el *sub júdice* ninguna duda circunda en cuanto a que el interés económico se traduce en el justiprecio del predio disputado en el juicio, gravitando la censura en el criterio utilizado para determinar el valor del mismo, el que según el dicho de los recurrentes, no es el correcto al existir divergencia entre los valores tasados por el despacho y los certificados por la Secretaría de Hacienda, pero que con todo, tampoco está de acuerdo con el resultado de estos últimos, debiéndose practicar un dictamen pericial para establecer el valor comercial del inmueble, deprecando, adicionalmente, un término prudencial para adosar el mismo atendiendo la contingencia derivada por la pandemia.

Pues bien, tal y como fue explicado en el auto censurado, los pretensos recurrentes no aportaron ningún medio de prueba que otorgara la convicción en punto del precio del inmueble objeto de la litis, existiendo únicamente el avalúo catastral para el año 2013, siendo éste tenido como punto de partida para efectuar la actualización desde el año 2014 hasta el año 2020.

Sobre el particular, nótese que si bien a folios 238 y 239 del Cuaderno N° 1 de la actuación obra el pago del impuesto de los años gravables 2014 y 2015, en dicha documental no consta el valor del "AUTOAVALÚO (Base Gravable)", resultando ser entonces el medio más idóneo para determinar el interés económico el del año gravable de 2013 -folio 237 ibídem-, viéndose entonces avocado el despacho a realizar su actualización conforme a los porcentajes de variación demarcados ´por el Departamento Nacional de Planeación, tal y como fue expuesto en el auto de 18 de diciembre de 2020, pues, como ya fue dicho, los interesados ninguna prueba trajeron al plenario para demostrar que el justiprecio del inmueble era mucho mayor al catastral.

[2] Reiterada en auto AC1698 DE 2015 de la CSJ -Sala Civil de 27 de marzo de 2015 –M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

Ahora bien, volviendo al auto confutado, comporta aclarar que aun cuando el despacho citó el Decreto 2718 de 2014 al realizar el reajuste del año 2014, correspondiendo ciertamente al Decreto 3055 de 2013, esa imprecisión ningún efecto ostenta para invalidar los cálculos allí contenidos, en tanto que el porcentaje aplicado es del 3,0% arrojándose los mismos montos aludidos en el proveído censurado.

3. Por otra parte, aunque con el presente recurso los interesados han aportado de manera extemporánea, los avalúos catastrales liquidados por la Secretaría de Hacienda, vislumbrándose las diferencias anotadas por los censores, lo cierto es que con todo, los valores incluidos en estos últimos tampoco alcanzan para cumplir con los 1.000 S.M.L.M.V exigidos por el legislador como interés mínimo para promover el recurso extraordinario de casación, en tanto que para el año gravable 2020 el valor catastral fue tasado por esa oficina en $458.103.000, como incluso lo aceptan los inconformes en su escrito.

Y es que los interesados en el trámite del recurso extraordinario de casación estaban llamados a aportar un dictamen pericial de considerarlo necesario, como lo prevé el artículo 339 del C.G.P. y, si advertían algún tipo de obstáculo para ello, en razón a las circunstancias derivadas a causa de la pandemia, como lo son las medidas restrictivas de cuarentena, entre otras, debieron así expresarlo al momento de la formulación, dentro del plazo legal para su interposición –Art. 337 C.G.P.- y, poner tal aspecto oportunamente en consideración del despacho, luciendo, por demás, tardíos los argumentos ahora presentados en ese sentido, sin que pueda renovarse ese término dada su naturaleza perentoria –Art. 117 ibídem-.

4. En ese orden de ideas, quedan sin sustento los argumentos de la censura, resultando suficientes las consideraciones de precedencia, para concluir que la censura no está llamada a abrirse paso, manteniéndose incólume el auto recurrido, ordenándose en consecuencia la expedición de copias para que se surta el recurso de queja ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- **MANTENER** lo resuelto en el auto proferido el 18 de diciembre de 2020, por los motivos explicitados en las consideraciones de este proveído.

Segundo.- En consecuencia, **CONCEDER** el subsidiario de queja, y **ORDENAR** que a consta de los impugnantes, dentro de término de cinco (5) días, (Art. 353, Inc. 2° y Art. 324 del C.G.P) se expidan copias de las siguientes piezas procesales: la demanda introductoria del litigio y su admisión, la contestación junto con sus anexos, la sentencia de primer grado y toda la actuación surtida en esta instancia, con miras a que se surta el recurso de queja ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Hora: 4:15 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
(2 autos)

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: **11001-3103-031-2015-00689-01**

Asunto. Lesión Enorme.
Recurso. Casación.
Demandante. Guillermo Herrera y Cia. Ltda.
Demandado. Inversiones Andes R.V. S.A.S. y otro.

Decídese sobre la calificación de la caución prestada y la suspensión integral del cumplimiento de la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2020, por esta Corporación, dentro del proceso verbal citado en la referencia.

Para resolver,

SE CONSIDERA

1. El artículo 341 del C.G.P prevé que la parte interesada podrá solicitar, junto con el recurso de casación, que se suspenda el cumplimiento de la sentencia objetada, suministrando para el efecto la caución necesaria para cubrir los eventuales perjuicios que se generen con ocasión a dicha medida.

A su vez, establece la norma en cita que una vez prestada aquella *"(…) Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. En caso contrario, la denegará"*.

2. En el *sub-júdice*, se profirió sentencia de segunda instancia el 21 de septiembre de 2020, dentro del proceso por lesión enorme incoado por Guillermo Herrera y Cia. Ltda. contra Inversiones Andes R.V. S.A.S Nancy Tatiana Villamil Percipiano, María Nohemí Moreno Suárez, Dorian Francisco Rodríguez Díaz y José Libardo Campo Vanegas.

Inconforme con la decisión, el extremo pasivo presentó recurso extraordinario de casación, solicitando igualmente fijar caución para la suspensión del cumplimiento de la sentencia.

Concedida la alzada se ordenó al interesado otorgar la garantía por la suma de $400'000.000 ante entidad bancaria o de seguros, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esa providencia (2 dic. 2020).

Dicha carga fue cumplida por el recurrente, quien allegó tempestivamente la póliza judicial No.15-41-101015813, en los términos pretextados, es decir, por el monto ordenado e indicando como asegurado al acá demandante.

Así, el Despacho considera que el pago de los eventuales perjuicios, incluidos los frutos civiles, que eventualmente puedan generarse con la suspensión del fallo, queda garantizado con la póliza constituida. Por ende, se dispondrá la suspensión integral del cumplimiento de la sentencia dictada por esta Corporación el 21 de septiembre de 2020, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de casación interpuesto.

Por lo expuesto se,

RESUELVE

PRIMERO.- **ACEPTAR** la caución presentada por la parte recurrente, a través de la póliza judicial No.15-41-101015813, expedida por Seguros del Estado S.A..

SEGUNDO.- En consecuencia, **DECRETAR** la suspensión del cumplimiento de la sentencia de 21 de septiembre de 2020.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

N.E.S.V. Exp. 2015-00689-01

(2 autos)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación: **11001-3103-031-2015-00689-01**
Asunto. Lesión Enorme.
Recurso. Casación.
Demandante. Guillermo Herrera y Cia. Ltda.
Demandado. Inversiones Andes R.V. S.A.S. y otro.

Con ocasión al memorial de 18 de diciembre de 2020, enviado por la demandada, circunscrito a la solicitud de corrección aritmética de la sentencia proferida en esta instancia, que aduce haber presentado el 26 de octubre pasado, se advierte que una vez revisado el plenario no se encontró la petición a la que se hace referencia. Así, el requerimiento que se evidencia es el de aclaración, sobre el cual ya se resolvió mediante auto de 26 de octubre de 2020, por lo que se debe estar a lo allí dispuesto.

No obstante, se ordena a la secretaría revisar si hay algún memorial presentado por la demanda referente a la petición pretextada y en la fecha indicada, de encontrarse ingresar de manera formal las diligencias al despacho para resolver lo corresponda.

Por otra parte, téngase en cuenta el pago de las expensas realizada por la parte interesada para la expedición por secretaría de copia completa del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del C.G.P.

Hora: 4:00 P.M.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
(2 autos)

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref: EJECUTIVO SINGULAR de la persona jurídica AZ INMOBILIARIA S. en C. S. contra FARMASANITAS S.A.S. Exp.2015-00617-01.

MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS.

Discutido y aprobado en Sala de Decisión de 17 de marzo de 2021.

Decide la Corporación el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada FARMASANITAS S.A.S. contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintisiete (27) de Agosto de dos mil veinte (2020), por el Juzgado Treinta y dos (32) Civil del Circuito de la Bogotá, por la cual se ordenó continuar adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.- El 10 de abril de 2015 (fl. 32 c.1) la sociedad AZ INMOBILIARIA S. en C. S., a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva contra la persona jurídica FARMASANITAS S.A.S. pretendiendo se libre mandamiento de pago por la suma de $252'771.940.oo correspondiente a diez (10) cánones de arrendamiento adeudados entre el 25 de junio de 2014 y marzo de 2015, más el monto de $75'831.582,oo por concepto de la cláusula penal pactada en el contrato base del recaudo.

2.- Las súplicas se apoyan en los fundamentos de facto que a continuación se sintetizan (fls, 28 a 30 c.1):

2.1.- El día 25 de mayo de 2012, Farmasanitas S.A.S. en calidad de arrendataria celebró contrato de arrendamiento con la sociedad AZ INMOBILIARIA S. en C. S., en condición de arrendadora, por un término inicial de duración de dos (2) años, con una mensualidad de $22'000.000,oo respecto del local comercial que hace parte del predio ubicado en la calle 96 No. 11A-61 de la ciudad de Bogotá D.C, destinado al uso y funcionamiento de actividades administrativas y comerciales de las empresas que integran el grupo empresarial denominado ORGANIZACIÓN SANITAS

INTERNACIONAL, acordando un incremento anual del IPC del año inmediatamente anterior más 5 puntos, en cada una de sus prorrogas anuales.

2.2.- Que con comunicación adiada 4 de abril de 2014 el arrendador le informó a Farmasanitas S.A.S. que el canon para el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2014 y 25 de mayo de 2015 ascendía a la suma de $25'277.194,oo. El contrato se ha venido prorrogando automáticamente, sin que por parte de la demandante se haya acordado su terminación, ni tampoco la entrega del bien.

2.3.- Agrega que la ejecutada entró en mora de los cánones de arrendamiento desde el mes de junio de 2014, razón por la cual en repetidas ocasiones se han enviado requerimientos reconviniéndolo para el pago de los mismos, sin embargo, no se ha obtenido solución a los dineros adeudados.

3.- La ejecutante se notificó por conducta concluyente de acuerdo con lo establecido en el canon 330 del C.P.C., oportunidad en la que se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo las excepciones de mérito que denominó: "Inexistencia del título ejecutivo", "Inexistencia de la obligación en cabeza de Farmasanitas", "Cobro de lo no debido - no existe sustento de las obligaciones reclamadas", "Excepción de contrato no cumplido", "Prejudicialidad - actualmente cursa proceso ordinario en relación con la existencia de las obligaciones reclamadas" y "Compensación". (fls. 282 a 302. c.1).

4.- Mediante proveído del 19 de noviembre de 2015 se fijó fecha para la audiencia de que trata el artículo 430 del C.P.C, la cual se llevó a cabo el 16 de agosto de 2016, oportunidad en la que se declaró fracasada la etapa de la conciliación, se interrogó a las partes, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, se escucharon algunos testimonios y se suspendió el proceso por prejudicialidad de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 170 C.P.C. hasta tanto se defina sobre la terminación del contrato de arrendamiento que cursa en el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá.

4.1.- El 22 de julio de 2019 (fl. 58 c.3) la ejecutante presentó demanda acumulada, pretendiendo los cánones causados desde abril de 2015 y hasta mayo de 2017, los cuales asciende a la suma de $750.058.572,oo (fl. 51 y 59 c.3), en auto adiado 6 de septiembre de 2019, se libró la orden de apremio, se suspendió el pago a los acreedores, se dispuso el emplazamiento en los términos del artículo 540 del C.P.C. y se ordenó la notificación por estado de la ejecutada, quien en oportunidad propuso los medios de defensa que denominó: "Falta de legitimidad en la causa por activa", "Falta de legitimidad en la causa por pasiva", "Abuso del derecho a litigar - mala fe en la presentación de la demanda acumulada", "prescripción y caducidad", la innominada o genérica y las demás propuesta en la demanda primigenia, las cuales no se vuelven a relacionar por ser innecesario (fls. 396 a 429. c.3).

4.2.– Finalmente, en audiencia realizada el 27 de agosto de 2020, en la demanda acumulada se adelantó la fase de la conciliación, interrogatorio de las partes, decretó de pruebas, posteriormente se declaró precluida la etapa probatoria para las dos demandas, se escucharon los alegatos de conclusión y se dictó sentencia, en la cual se declararon no probadas las excepciones de mérito y se ordenó continuar adelante con la ejecución en la forma dispuesta en las órdenes de pago emitidas al interior de la causa, decisión que no compartió la parte convocada, por lo que interpuso la alzada de ahora se analiza.

II. LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO

5.- Luego de encontrar reunidos los presupuestos procesales, el Juez a-quo refiere que concurren los requisitos exigidos por el artículo 488 del C.P.C., pues se está de cara a una obligación clara, expresa y exigible, como lo es el contrato de arrendamiento, que consta en documento proveniente del deudor y que constituye plena prueba en contra de la demandada dado que no fue tachado ni redargüido de falso, así como tampoco se desconoció su contenido.

Continúa argumentando que en el contrato claramente se estipuló el valor del canon, el término de duración el cual fue modificado por acuerdo bilateral entre las partes a través de otro sí, así como la destinación realizada al inmueble, en tanto que la causa petendi se limita a la mora en el pago de los cánones de arrendamiento y la cláusula penal por incumplimiento, mientras que la demandada alega en su favor la terminación unilateral de ese negocio jurídico con justa causa, puesto que básicamente amenaza ruina, como consecuencia de una construcción vecina o colindante.

Posteriormente, adicionó que se trata de una convención de tipo comercial que no se encuentra regulado dentro de ese estatuto, razón por la cual de acuerdo a lo previsto en el art. 822 ibidem, se hace necesario acudir al canon 1990 del C.C., concluyendo que aun cuando es verdad que existe la posibilidad de dar por terminado en contrato de arrendamiento por el mal estado de la cosa arrendada, la cual presuntamente se da a partir de una construcción colindante, no existe al interior del plenario ninguna evidencia concreta que determine que la edificación amenazaba ruina, por consiguiente, según lo preceptuado en el artículo 1602 del C.C el procedimiento adecuado para dar por terminado el contrato necesariamente debía acudirse al proceso de restitución de tenencia previsto en el inciso 2º del artículo 426 del C.P.C., sin que dentro del expediente exista noticia que la demandada haya optado por adelantarlo.

Así mismo, adujo que de acuerdo con el artículo 2006 ibidem, para que opere la restitución se debe desocupar la cosa completamente y dejarla a disposición del arrendador, entregando las llaves, en tanto que la parte arrendadora no estaba de acuerdo con la entrega, razón por la cual debió

inexorablemente acudirse ante el operador judicial para que dirimiera ese conflicto, de ahí que las excepciones no están llamadas a prosperar.

De igual manera indicó que los medios de defensa propuestos en contra del libelo acumulado tampoco están llamados a prosperar, pues en el caso examinado no está probado que la demandante haya abusado del derecho, ni en su actuar se verifica la mala fe alegada , adicionalmente no existe certeza que a favor de la convocada exista un crédito que deba ser asumido por la ejecutante para que proceda la compensación, sumado a la circunstancia que dentro de este asunto tampoco se acreditó que la acción ejecutiva se encuentre prescrita.

III. LA IMPUGNACIÓN

6.- La parte ejecutante FARMASANITAS S.A.S (hoy DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S.) presentó recurso de apelación, sin que en esa oportunidad haya expuesto sus reparos concretos, sin embargo, dentro del término previsto en el artículo 322 del C.G.P. presentó escrito contentivo de los mismos. la cual se edifica en torno a los siguientes puntos, a saber:

(i).- La sentencia se fundó en erradas valoraciones fácticas y jurídicas respecto de la supuesta existencia de un título ejecutivo, como quiera que no se puede desconocer la realidad del negocio causal en tanto que de las pruebas recaudadas quedó plenamente demostrado la inexistencia de la obligación, por ende, no puede ser exigible, ya que la relación contractual base de los cánones reclamados está terminada por justa causa imputable por los incumplimientos de la demandante, lo que conlleva a colegir que el documento báculo ejecución no cumple las exigencias del artículo 488 del C.P.C. vigente para la época en la que se interpuso la misma.

(ii) Indebida valoración probatoria de los medios recaudados al interior del plenario y con los cuales se sustentan las excepciones propuestas, ya que existe certeza sobre la amenaza de ruina que afectaba el inmueble, en tanto que su mal estado impedía hacer uso de mismo, según da cuenta la experticia técnica de evaluación de las estructuras del predio elaborado por POCH Ingeniería el día 27 de mayo de 2014, el cual no fue cuestionado no controvertido por AZ Inmobiliaria S en C. S., así como tampoco se arrimó ninguna probanza que desvirtúe las conclusiones a las que se arribó en ese trabajo, ni al estudio realizado por Salud Ocupacional Sanitas, sumado a que existe prueba de confesión en punto que el inmueble no cumplía la norma urbanística, sin que haya documento alguno que permitan establecer que el arrendador adoptó las medidas para detener los daños del predio, omitiendo su propia diligencia y de lo cual se puede concluir que incurrió en una de las causales generadoras de culpa.

Aduce que se desconoció que la terminación del contrato fue con justa causa, lo cual era suficiente para truncar el cobro

ejecutivo como quiera que se acreditó, entre otros, con las confesiones del representante legal de AZ Inmobiliaria que éste no hizo ninguna clase de advertencia a Farmasanitas acerca de las condiciones en las que se realizaron las ampliaciones en el Inmueble, ya que las obras de expansión de cuatro pisos -edificio de oficinas- efectuadas en el patio o jardín de la casa fueron desarrolladas sin licencia de construcción aprobada para esos fines por las autoridades administrativas competentes, además que no cuenta con cimentación profunda que permita soportar adecuadamente la carga viva y muerta de la edificación, y dichas obras se ejecutaron por personas sin conocimientos técnicos constructivos.

(iii).- El juez de primer grado desconoció la realidad sobre la entrega del inmueble al fundarse en la supuesta obligación de Farmasanitas de iniciar un proceso de restitución a la luz de lo previsto en el canon 426 del C.P.C.-, aplicable a este asunto atendiendo la fecha en que se suscitó la controversia-, aun cuando está demostrado que la ejecutada entregó a la demandante el bien dado en arrendamiento en junio de 2014, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 2006 del C.C., ya que le comunicó formalmente no solo la terminación por justa causa, también la hora y fecha en la que se haría la entrega del inmueble, sin que hayan comparecido a recibirlo, razón por la cual se libró comunicación dejándole a disposición las llaves del mismo.

Agrega que la terminación unilateral es viable en la medida que tan solo se requiere una norma legal que así lo permita o que entre los contratantes se haya pactado la cláusula resolutoria expresa, aspecto que se cumple en este caso según se desprende del texto de la estipulación decimocuarta, máxime cuando la ley prevé dicha posibilidad, por ende, no resultaba necesario ni obligatorio que diera inició un proceso judicial para obtener la terminación de la convención suscrita entre las partes (derivado No. 37 exp. digital).

6.1.- Así mismo, por auto adiado 10 de febrero de la presente anualidad se ordenó correr el traslado previsto en el inciso 3° del artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

6.2. A través de escritos enviados por correo electrónico a la Secretaría de este Tribunal la parte demandada -apelante- sustentó en debida forma su recurso de alzada y, en oportunidad la ejecutante se pronunció al respecto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, como son demanda en forma, capacidad para ser parte y para comparecer y competencia concurren en la litis, además como no se observa causal de invalidez que anule la actuación se impone una decisión de mérito,

con la consideración adicional referida a que en el evento de ser interpuesta la alzada por ambas partes, la Sala está revestida de la competencia para resolver sin limitaciones, empero, no es el caso de autos.

2.- Con miras a desatar la apelación formulada por la parte demandada, debe decirse que este recurso se endereza a que el Superior revise la actuación del juzgador de primera instancia, pero inmerso siempre dentro del criterio dispositivo, por lo que es al apelante a quien le corresponde determinar el ámbito dentro del cual ha de moverse el ad-quem al momento de tomar la decisión.

3.- Desde esta perspectiva, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar: (i) si el contrato base de la acción ejecutiva contiene una obligación, clara, expresa, actualmente exigible, proveniente del deudor, (ii) si dentro de esta causa aparece demostrado el incumplimiento contractual por parte de la persona jurídica convocante, pues es este, el fundamento medular de las excepciones planteadas, o si por el contrario, el mismo no cuenta con soporte jurídico y, (iii) finalmente si el juez de primer grado equivocó su decisión incurriendo en una indebida valoración probatoria. En esos aspectos gira la inconformidad de la apelante.

De la acción ejecutiva

4.- Es evidente que el proceso ejecutivo es tal vez el único que se inicia con una providencia de fondo y no simplemente con una decisión formal, por lo tanto el operador judicial al examinar el título que el demandante aduce, debe verificar que la obligación sea explícita y determinada en el mismo en cuanto a su naturaleza y elementos, que se pueda reclamar su cumplimiento bien porque la obligación sea pura y simple o porque el plazo expiró o por que la condición a la cual estaba sometida se cumplió, amén de que el mismo provenga del deudor y constituya prueba en su contra, concluyendo así que éste reúna las exigencias legales. Resulta evidente entonces, que el control de la legalidad que debe ejercer el Juez en este tipo de contención va más allá de la revisión de las simples formalidades, pues al librar la orden de pago resuelve sobre el derecho sustancial invocado, constatando las exigencias que se predican del título adosado.

El aspecto medular de todos los procesos de ejecución, sin excepción alguna, se encuentra establecido en el artículo 488 del C.P.C. vigente para la época en la que se presentó la demanda- hoy canon 422 del Código General del Proceso, preceptiva que, en forma clara, categórica y por demás, obligatoria, exige que con la demanda compulsiva se allegue documento apto al fin pretendido, o sea idóneo para impulsar ese cobro coercitivo.

Bajo la cardinal aserción consistente en que en esta clase de procesos su base la configura la existencia de un derecho cierto y la correlativa prestación a cargo de una persona, tiénese dicho que la obligación a cargo del demandado, además de constituir plena prueba contra el mismo,

por no haber duda sobre la autenticidad del documento debe ser exigible y expresar con claridad en qué consiste.

Según lo han expresado la jurisprudencia y la doctrina, para que la obligación se ajuste a los presupuestos requeridos por la ley que la regula, deben estar completamente expresados en el título los términos esenciales de la misma, tales como el contenido y las partes vinculadas a él, de suerte que per se resulte inequívoca e inteligible. De ahí que, en torno a los conceptos de claridad y expresividad y exigibilidad de la obligación, se tenga por averiguado que ésta carece de tales exigencias cuando es equívoca, ambigua o confusa, por no tener la suficiente inteligencia para distinguir en forma palmaria el contenido o alcance del objeto o de la prestación, o cuando solo ostenta expresiones implícitas y presuntas, como también cuando está sometida al cumplimiento de una condición.

4.1.- De lo hasta aquí referido puede afirmarse, en compendio, que para incoar la acción ejecutiva es menester aducir con el acto introductorio un título, el cual forzosamente debe estructurar a cabalidad los presupuestos tanto generales como especiales previstos por la ley para ello.

En lo que atañe con la ***claridad*** *en el documento, consiste en que por sí solo se extracte el alcance de las obligaciones que cada una de las partes se impuso, para que el juzgador no tenga que acudir a razonamientos u otras circunstancias aclaratorias que no estén consignadas allí o que no se desprendan de él, esto es, que el título sea inteligible, es decir que la redacción se encuentre estructurada en forma lógica y racional; que sea explícito, lo cual significa que las obligaciones aparezcan consignadas de manera evidente; y, exista precisión y exactitud, en cuanto al número, cantidad y calidad objeto de la obligación, así como de las personas que intervinieron en el acuerdo. Así que la obligación no será clara cuando la redacción del documento sea ininteligible e inextricable, es decir, cuando su lectura es muy intrincada y confusa.*

La ***expresividad*** *significa que en el documento debe consignarse lo que se quiere dar a entender, así que no valen las expresiones meramente indicativas, representativas, suposiciones o presunciones de la existencia de la obligación, como de las restantes características, tales como partes, plazos, monto de la deuda etc., salvo el caso de la confesión ficta, y en este caso, únicamente de las preguntas asertivas formuladas en el interrogatorio escrito que admitan prueba de confesión; por consiguiente, las obligaciones implícitas, que están incluidas en el documento, sin que estén expresamente declaradas no pueden ser objeto de ejecución.*

Mientras que la ***exigibilidad*** *supone que la obligación puede pedirse y cobrarse sin tener que esperar plazo o condición alguna que la enerve temporalmente.*

Consecuente con lo anterior, el mandamiento se produce siempre y cuando se acompañe a la demanda un documento que preste mérito ejecutivo, es decir, que reúna las características mencionadas y se

constate la fuerza ejecutiva e idoneidad que le permita constituirse en el fundamento de la orden de pago que se deba proferir.

4.2.- Ahora bien, el documento puede ser cualquier instrumento con el que se pretenda probar, demostrar o justificar una cosa ó una representación de un hecho. Al referirse a documento, no se habla de una singularidad, sino, que puede tratarse de una pluralidad de documentos que en su conjunto o integridad conforman o constituyen uno sólo, definido en la doctrina como título ejecutivo complejo, y al no acompañarse alguno de ellos, el título complejo pierde su esencia y deja de ser título ejecutivo, pues el o los preteridos acompañar son necesarios para su conformación, por ende, no presta mérito ejecutivo y no hay lugar a librar mandamiento ejecutivo.

A este tipo de proceso se debe aportar desde el inicio el título completo, pues ya trabada la contención no es posible optar por el decreto de prueba oficiosa para superar la falencia probatoria que se detecte en el mismo, menos aún en el curso de la segunda instancia.

4.3.- En este contexto, se tiene que como báculo de la ejecución se aportó un contrato de arrendamiento suscrito por A.Z. INMOBILIARIA S. EN C.S. en calidad de arrendador y FARMASANITAS S.A.S. –hoy DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S., en condición de arrendataria, en el cual el primero concedió el uso y goce al segundo del inmueble ubicado en la Calle 96 No. 11ª-61 de esta ciudad, destinado al funcionamiento y desarrollo de las actividades y administrativas y comerciales de las demás empresas que integran la Organización Sanitas Internacional, pactándose inicialmente como valor del canon mensual de arrendamiento la suma $22'000.000.oo, en tanto que como término de duración se convino por un periodo de dos (2) años, contados a partir del 25 de mayo de 2012.

De igual forma, nótese que en libelo introductor se adujo que de acuerdo con los incrementos para el periodo mayo 2014 a mayo de 2015, el valor mensual del arrendamiento ascendía a la suma de $25.277.194,oo. –hecho 2.2. fl, 30, derivado 1, ibídem).

Desde esta perspectiva, surge indiscutible que en principio, la obligación demandada es clara, expresa y exigible, por ende, podía demandarse ejecutivamente, sin embargo, no puede pasar inadvertido para la Sala, dos conductas desplegadas por la parte convocante que denotan una deslealtad procesal, la primera de ellas es que con el libelo genitor no se arrimó el otrosí firmado entre las partes el 16 de noviembre de 2012, a través del cual modificaron las cláusulas cuarta y octava del negocio jurídico reseñado, con el propósito de ampliar el termino de duración del mismo a cinco (5) años y, el segundo, permitiendo el subarriendo, ya que de este documento tan sólo se tuvo noticia cuando la parte convocada presentó las excepciones de mérito (fl, 69 ibídem), así mismo, nada se dijo en los hechos del introductor en punto de la presunta terminación del contrato aducida por la aquí ejecutante, ni menos aún, se arrimaron las comunicaciones cruzadas entre las partes.

5.- Entonces, cumplidas como efectivamente están las condiciones para que resultara procedente la orden de apremio, por cuanto el documento cumple las condiciones previstas en el art. 488 del C.P.C. –vigente para la época en la que se presentó la demanda, es procedente adentrarse en el estudio de los medios de defensa formulados por la demandada.

La censura y los hechos exceptivos

6.- Sentadas las anteriores premisas, se procede a la confrontación de los hechos, las pretensiones, las excepciones y los medios de prueba arrimados al proceso, en particular, se iniciara el estudio de la que se denominó contrato no cumplido, bajo el entendido que la A.Z. Inmobiliaria S. en C.S. tenía la obligación de permitir el uso y goce del inmueble, en tanto que durante la ejecución de ese negocio jurídico se evidenció que el predio presentaba fallas estructurales, razón por la cual no se consideraba apto para el uso para el cual fue otorgada la tenencia, ya que la arrendadora no adelantó las gestiones tendientes a la estabilidad del inmueble, lo que produjo la terminación unilateral del contrato con justa causa por parte del arrendatario el día 3 de junio de 2014, por lo que en sentir de la convocada, se puede colegir que los cánones reclamados por esta vía no se causaron, ni menos aún, se puede endilgar incumplimiento a la pasiva. En lo antes anotado radica el aspecto medular de los medios de defensa aquí invocados.

6.1.- Sabido es que en nuestra legislación las normas que regulan los contratos son normas supletorias de la voluntad de los contratantes, siempre y cuando éstos al celebrar sus convenciones jurídicas cumplen todas las prescripciones legales exigidas para su formación y respeten el orden público y las buenas costumbres; es así que el artículo 1602 del Código Civil determina que un acuerdo de voluntades celebrado legalmente se constituye en ley para los contratantes, quienes imperativamente quedan obligadas a cumplir las prestaciones acordadas.

La hermenéutica del contrato consiste en determinar su sentido, las obligaciones que de él surgen o también investigar y fijar el significado de las manifestaciones de voluntad, con el propósito de establecer el contenido del negocio jurídico; en esta tarea existen dos métodos: el subjetivo y el objetivo; el primero de ellos se inspira en la teoría de la autonomía de la voluntad o de la voluntad interna o sicológica, que conduce a investigar y descubrir la voluntad real de quienes participaron en la convención, mientras que el segundo, se basa en la interpretación del texto contractual según sus términos literales, dando prelación a éstos sobre la posible volitividad de los intervinientes o sobre sus reservas mentales.

Dispone el artículo 1618 del Código Civil, que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras, de donde deviene que el legislador acogió el método subjetivo, esto es, que impuso la búsqueda de la voluntad real o verdadera de los contratantes y, descubierta esa voluntad real, ella tendrá primacía sobre lo literal de las palabras, por tal motivo el juzgador en esa labor de hermenéutica jurídica debe orientarse en este sentido, tornándose las

restantes reglas de interpretación en subsidiarias, a las cuales se debe acudir cuando le resulte imposible desentrañar lo querido por los contratantes.

Hay lugar a la interpretación de los contratos cuando las declaraciones de voluntad plasmadas sean inextricables u oscuras, pero esta tarea debe ubicarse dentro de la legalidad, conforme a las normas que a cada uno de ellos los rige y la intención de las partes, pues la naturaleza jurídica de éstos la determina las disposiciones respectivas que lo gobiernan, según sus elementos propios, sus calidades intrínsecas y objetivos perseguidos, pero en manera alguna las que los contratantes a su arbitrio quieran darle o el juzgador motu proprio le asigne.

Generalmente el contrato se celebra y elabora como una unidad jurídica y para conocer la real voluntad de los contratantes sólo basta con apreciar sus estipulaciones en forma coordinada y armónica; empero, en algunos eventos las partes se apartan de esa regla y esas prestaciones se aíslan unas de otras y se presentan como entes autónomos o cuando por sí solas carecen de vida propia o independiente, se corre el riesgo de quebrar esa unidad, disgregar sus efectos propios o hacerle producir consecuencias no queridas o contrarias a las que de su conjunto realmente se infieren.

Acerca de este tópico la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil ha dicho: "Tiene aceptado la doctrina del derecho que, aún prescindiendo de los contratos atípicos, o sea de aquellos pactos cuyo contenido es tan particular que no pueden asimilarse a ninguno de los contratos tipos, una convención jurídica ajustada entre las partes puede presentar combinadas prestaciones correspondientes a diversos contratos típicos. Y ha dicho que estas uniones de contratos pueden ser: a) unión con dependencia unilateral o bilateral, en la cual los distintos contratos que aparecen unidos son queridos como un todo, estableciéndose entre ellos una recíproca dependencia en el sentido de que el uno se subordina al otro y otros; b) unión simplemente externa, que es la que corresponde a aquella en la que los distintos pactos, independientes unos de otros y por tanto autónomos, aparecen unidos externamente sin que haya subordinación o dependencia de los unos respecto de los otros; y c) unión alternativa, caracterizada por la existencia de una condición que enlaza los distintos contratos en forma que si el suceso positivo no acaece o acaece el negativo, se entiende concluido uno u otro"[1].

6.2.- El contrato se define legalmente como "el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar hacer o no hacer alguna cosa" (artículo 1495 del C.C.); y su interpretación debe hacerse de manera sistemática a voces de lo contenido en el artículo 1622 del Código Civil que literaliza: "[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrá también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte."6.2.- En este contexto, se tiene que el contrato objeto de controversia es netamente comercial, en la medida que las dos personas jurídicas están dedicadas a esa actividad, en tanto que, el objeto

---

[1] *(Jurisprudencia y Doctrina, t., XIII, No. 155, pág.942)*

del ese negocio jurídico celebrado entre las partes, como ya se advirtió, consistió en el arrendamiento de un inmueble para que la demandada y el grupo empresarial al cual hace parte desarrollara su objeto social, de ahí que este asunto necesariamente debe regirse por los artículos 518 y s.s. del Código de Comercio, sin embargo, se tiene que dichas normas no regulan en su integridad ese convenio, razón por la cual se hace necesaria la remisión al Código Civil por expresa disposición de lo establecido en el canon 822 del C.Co.

6.3.-Bajo este entendido, se tienen que dentro de las obligaciones del arrendador está la de mantener en estado de servir el predio de tal modo que puede destinársele para el fin dado en arrendamiento -num 2º del art. 1982 del C.C., de lo anterior se desprende que dentro de esas obligaciones se encuentra la de efectuar toda clase de reparaciones para mantener la cosa en buen estado, incluso las locativas si es que los daños se produjeron por fuerza mayor, caso fortuito o por la mala calidad de la cosa –art. 1985 ibídem-.

Igualmente, dispone el artículo 1990 ejusdem que: "El ***arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento*** *y aún a la rescisión del contrato, según los casos, si* ***el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada****, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato;* ***y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato****, pero sin culpa del arrendatario.*

Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial, o si la cosa se destruye en parte, el juez o prefecto decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta."

7.- Entonces, definido en marco jurídico que regentan la presente controversia corresponde a la Sala analizar las cláusulas del contrato a fin de establecer rcon total claridad las obligaciones de cada uno de los contratantes, con el propósito de determinar cuál de las dos partes incumplió el convenio.

*7.1.- En este sentido, se tiene que la cláusula séptima de la convención objeto de debate literaliza: "****OBLIGACIONES: A) DE EL (sic) ARRENDADOR:*** *a) Entregar a* ***EL ARRENDATARIO*** *el inmueble objeto del presente contrato. b) Mantener el inmueble en condiciones normales que sirvan para su uso.* ***B) DE EL (sic) ARRENDATARIO:*** *a) Pagar el canon de arrendamiento en los términos acordados. b) Destinar el bien para el objeto indicado. c) Mantener y conservar el inmueble, salvo el deterioro por el uso normal. d) Realizar oportunamente el pago de los servicios públicos y a presentar mensualmente copia de los recibos que acrediten el pago…e) Restituir el inmueble en el estado que le fue entregado, salvo el deterioro normal por el uso y conforme al Parágrafo de la Cláusula Décima Primera del presente contrato…." (negrilla y subrayado propio del texto original) –fls, 64, pdf cuaderno 1, derivado, exp. digital).*

*7.2.- Por su parte, en la estipulación decimocuarta de ese negocio jurídico, se acordó que: "**TERMINACIÓN:** Se dará terminación al presente contrato por las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b) Incumplimiento de las partes de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la cláusula décima sexta…Por las demás causas legales."*

7.3.- Desde esta perspectiva, surge indiscutible que las obligaciones de los contendientes en esta causa se reducen, por un lado, para el arrendador a entregar el uso y goce de la cosa dada en arrendamiento y mantener el inmueble en condiciones normales que sirva para su uso, realizando las reparaciones a que hubiere lugar, incluso las locativas que por deterioro del predio se hubiere ocasionado por fuerza mayor, caso fortuito o por la mala calidad de bien y, por otro lado, para el arrendatario era pagar el canon de arrendamiento en la forma y tiempos debidos, los servicios públicos y conservar la cosa en buen estado, entre otras.

7.4.- De este modo, lo primero que debe dejarse en claro es que cursó pacificó en esta contienda que la parte ejecutada cumplió sus obligaciones hasta 11 de junio de 2014, pues frente a este tópico no existe controversia, contrario sensu, la disputa gira en torno a los cánones de arrendamiento presuntamente causados a partir del 12 siguiente y hasta el vencimiento del término inicialmente pactado en el pluricitado negocio jurídico, es decir, 12 de mayo de 2017, ya que para la convocada dichos emolumentos no se causaron por incumplimiento contractual de la convocante, pues en su sentir, el inmueble amenazaba ruina con ocasión de una construcción vecina colindante que originó daños en la estructura de la edificación levantada en el predio, razón por la cual se originó la terminación anticipada por justa causa.

8.- En este contexto, emprende el Tribunal el análisis de las probanzas arrimadas al plenario a fin de establecer si el incumplimiento enrostrado a la demandante dentro de esta causa efectivamente se verifica, o si por el contrario, dicha circunstancia no aparece acreditada.

8.1.- En tal sentido, se tiene que el día 27 de mayo de 2014, la representante legal de Farmasanitas S.A.S.-hoy Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S.- envió comunicación a la demandante en la cual le puso de presente la situación acaecida en el inmueble objeto de arrendamiento con ocasión de la demolición del predio colindante, según dicha misiva presentaba algunos daños importantes en los muros, así mismo, le dio a conocer que había solicitado a la sociedad POCH COLOMBIA S.A., firma de ingeniería y a SALUD OCUPACIONAL SANITAS S.A.S. realizaran visita de inspección a las instalaciones y estudio respectivo de la afectación del predio con ocasión de las labores de construcción y el riesgo que dicha situación aparejaba para los más de 100 empleados que asistían diariamente a ese lugar, oportunidad en la que se le dio a conocer las conclusiones a los que arribó en dichos estudios.

En ese mismo legajo se literalizó: "…tal como ustedes lo pudieron verificar al momento de realizar la visita con el fin de suscribir el Acta de Vecindad, la cual fue proyectada en conjunto con el propietario del inmueble, y que a la fecha entendemos no ha sido suscrita por parte de ustedes, actualmente el inmueble está siendo ocupado diariamente por más de cien (100) trabajadores de nuestra empresa, por lo que las labores de demolición y excavación, en concordancia con las conclusiones técnicas del estudio, ***representan una grave amenaza para la integridad física de las personas que diariamente laboramos en el inmueble desde hace aproximadamente dos (2) años mucho antes de la iniciación de las obras de construcción."***

Y a reglón seguido agrega. "Dadas estas condiciones y como quiera que en las reuniones que tuvimos con ustedes previamente al inicio de las obras, ya habíamos conversado de este tema, obteniendo como respuesta que no se cuenta con planos, memorias de cálculo, estudio de suelos, ni registro alguno que dé cuenta de las diferentes etapas de construcción que se ha surtido en el inmueble y en general respecto de las condiciones sismo resistente del mismo, de manera muy respetuosa y formal, ***les informamos sobre el riesgo inminente de la ocurrencia de un eventual siniestro que se presenta en el inmueble arrendado actualmente, con el fin de que asuma los riesgos y responsabilidades a que haya lugar como propietario y arrendador del mismo****" (fl, 74 a 76 c, 1, exp. digital).*

Así mismo, nótese que también obra misiva adiada 3 de junio de 2014 dirigida a la convocante, en la que la aquí ejecutada le informó su decisión de dar por terminado el contrato de arrendamiento con justa causa y consecuente entrega de inmueble la cual se haría efectiva el 12 de ese mismo mes y año, permitiéndose invocar los cánones 1982, 1990, 1991 y 1992, determinación que sustentó así: "Desde los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, ya la sociedad constructora de la obra vecina, en reuniones que sostuvieron con ustedes y en la que asistieron funcionarios de nuestra compañía, había manifestado preocupación por las condiciones estructurales del inmueble arrendado. Como medida de precaución, solicitaron planos, licencias, de construcción y demás documentación del inmueble. Sin embargo, ustedes manifestaron no contar con documento alguno relacionado con la construcción del inmueble." (fl, 98, c, 1 pdf derivado 1), oportunidad en la que reiteró, los estudios a los que se hizo referencia en la comunicación anterior determinaban que el bien no era apto para ser ocupado.

En respuesta a dicha misiva, la persona jurídica AZ Inmobiliaria S. en C.S., se opuso a la terminación unilateral manifestando que la causal invocada no se configura habida cuenta que según informe técnico rendido por el ingeniero civil Daniel Rojas Mora, el predio no presenta las deficiencias a las que ya se ha hecho referencia, negándose a recibir el inmueble y afirmó que el contrato continuaría vigente (fls, 178 y 179 ídem), de igual forma, la ejecutada dio contestación a la comunicación a la que se acaba de hacer mención, afirmando que el profesional no había ingresado al inmueble para realizar el informe que se adjuntó a la misma, razón por la cual desconoce las conclusiones a las que arribó (fls, 103 y s.s ibidem).

De igual forma, también obra estudio de suelo realizado por POCH Ingeniería en el que se concluyó que la edificación en controversia fue construida en varias etapas con diferentes sistemas constructivos que necesariamente no son compatibles entre sí, ya que la construcción actual se realizó con anterioridad a la norma NSR 10 por lo tanto se estima que no cumple con la misma, en tanto que la conformación actual de la edificación es vulnerable ante un sismo, al no existir planos, memorias de cálculo, estudio de suelos, libro de obra, ni registro alguno de la conformación estructural, en tanto que el tipo de suelo existente en el sector provoca fácilmente asentamiento diferencial, que se agrava con motivo de las excavaciones profundas, pudiendo colapsar de manera súbita, lo que no permitiría la evacuación de las personas que laboran en el lugar, adiciona que es altamente peligroso habitar la edificación durante el tiempo de construcción del inmueble vecino debido a que genera vibraciones sobre la estructura actual que ésta difícilmente será capaz de resistir, por ende, dentro de las recomendaciones se plasmó realizar un estudio para repotenciarla y no usarla o habitarla dado el estado de incertidumbre que presenta.

Así mismo, existe acta de entrega adiada 12 de junio de 2014, en la que se dejó constancia que luego de esperar al arrendador desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. sin que éste haya comparecido, oportunidad en la que se dejó constancia el estado en el cual se realizaba la misma (fls, 92 a 94 ibídem).

También reposa comunicación de Planeación Distrital en la cual se acredita que tiene bajo custodia el expediente ON 52315 contentivo de la licencia de construcción 3470 del 10 de julio de 1970, respecto del predio objeto de arrendamiento, sin que exista evidencia documental de alguna otra (derivado 03201500617), así mismo, se arrimó copia contentiva de la misma, de la cual se desprende que la autorización para realizar la edificación tan solo lo fue para una casa de dos plantas, en tanto que la existente consta de 4 plantas (derivado 42 ibidem).

En misiva emitida por el Curador urbano No. 5 de esta ciudad, se certificó que el día 23 de octubre de 2019, se radicó solicitud de licencia de construcción en las modalidades de obra nueva y ***demolición total*** *para el predio ubicado en la calle 96 No. 11ª-61 con folio de matrícula 50C-457806 (derivado 28), en tanto que los demás funcionarios homólogos Nos. 1 y 3, afirmaron que en esas oficinas no se ha adelantado ninguna solicitud para expedición de licencia de construcción (derivados 29 y 44, exp. digital).*

De igual forma, existe prueba de confesión en punto que no cuentan con los planos estructurales, ni memorias de construcción, empero, aclaró que los mismos si existieron los cuales le fueron robados al ingeniero que lo construyó, en tanto que las ampliaciones realizadas en el año 1994 -construcción del piso 3 y 4- no contaron con licencia de construcción y que durante el 27 de mayo de 2014 y 3 de junio de esa misma anualidad no se realizó ningún tipo de estudio para verificar el estado de la construcción, solo que contacto al ingeniero y la arquitecta que realizaron la construcción,

quienes concluyeron que los movimientos registrados en el inmueble eran los normales a causa de la excavación de la construcción vecina (min 3:00 a 26:00 audiencia 432 C.P.C.).

Así mismo, el deponente Héctor Arellano Díaz, Ingeniero Comercial, encargado del área inmobiliaria de Farmasanitas S.A.S. para la época de la ocurrencia de los hechos, afirmó que luego de iniciada la construcción colindante la casa empezó a tener unos movimientos constantes, aparecieron fisuras, las puertas se descolgaron y bloquearon, que el día dispuesto para la entrega del inmueble no se hizo presente ninguna persona por parte de la inmobiliaria, levantándose un acta y se realizaron unos filmaciones de las condiciones en las que se daba por entregado el predio en cuestión, que el espíritu de Farmasanitas S.A. hoy Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S., era ocupar el inmueble por largo tiempo, ya que las inversiones que se realizan son de gran envergadura, pues debe hacerse adecuaciones para acomodarlo a las necesidades del arrendatario, en tal sentido, se hicieron obras de adecuaciones de baños, cambios de piso, entre otros, en tanto que AZ Inmobiliaria S.A.S., no se hizo presente a fin de establecer los daños en el predio entre el 27 de mayo y 3 de junio de 2014,

Por su parte, Viviana Andrea Vera Cachopo - Ingeniera Civil, directora de Construcción y Mantenimiento de la demandada, coincidió con el anterior testigo, pero adicionó que el estudio recomendado por POCH Ingeniería no se realizó por dos razones fundamentales, primero, porque no le correspondía a la arrendataria sino al arrendador y, segundo, porque dichos estudios patológicos se tardan aproximadamente seis meses, en tanto que el riesgo era inminente y se trataba de salvaguardar las vidas humanas que laboran en el lugar, sumado a la circunstancia que para hacer dichos estudios se requiere desocupar el primer piso y sería necesario hacer perforaciones, para poder intervenir todo el área estructural.

Igualmente, el deponente Carlos Andres Betancourt Beltrán coincidió con los anteriores, pero además afirmó que el ingeniero Daniel Rojas nunca ingresó al predio objeto de controversia, en tanto que luego de levantada el acta de entrega, se acercaron a AZ Inmobiliaria S. en C.S. con el propósito de radicar la misma y entregar las llaves del inmueble, pero estas últimas no fueron recibidas allí, de ahí que en ese instrumento se indicó que las misma quedaban a disposición de la actora en las oficinas de Farmasanitas S.A.S.

Así mismo, German Garzón Salcedo indicó que fue contratado por la parte demandante para la recuperación del inmueble el 15 de junio de 2018, quien adujo que el inmueble no presenta ninguna falla estructural, sin embargo, de un lado no aparece ningún estudio técnico que así lo soporte, en tanto que causa extrañeza si él fue contratado para recuperar el inmueble por la humedad que presentaba, instalar baterías sanitarias y demás aspectos de acabados, porque tan solo un año después se solicita licencia de construcción para obra nueva y demolición total de la construcción existente, sumado a la circunstancia que el testigo no tuvo conocimiento directo de los

hechos materia de controversia ya que su conocimiento lo obtuvo por lo que le comentó la parte convocante.

De igual forma, Jhon Alexander Martínez Díaz atestiguó respecto de la recuperación que hiciera la parte demandante del inmueble en mayo de 2017, así mismo, afirmó que el mismo llevaba mucho tiempo desocupado aspecto que era conocido por el representante legal de la ejecutante.

Desde esta perspectiva, de todos los medios de prueba analizados en conjunto surge indiscutible que en verdad el edificio amenazaba ruina, puesto que como lo evidencian los estudios, técnicos realizados, los testimonios escuchados y la prueba de confesión efectuada por la parte demandante, las ampliaciones del predio para los pisos 3 y 4 se adelantaron sin licencia de construcción y ante el levantamiento de la construcción vecina o colindante el predio empezó a presentar daños importantes, que no lo hacían habitable, tal como quedó acreditado.

Así mismo, también está suficientemente establecido que el arrendador no se preocupó por cumplir con su obligación de conservar el predio en condiciones de que sirviera para el uso para el cual fue arrendado, sumado a la circunstancia que en el predio en controversia laboraban alrededor de 100 personas, en tanto que, el informe de Salud Ocupacional de Sanitas determinó que los trabajadores corrían peligro.

En este sentido, no desconoce la Sala que al interior del expediente también obra un informe realizado por el Ingeniero Civil Daniel Rojas (fls, 180 y s.s. derivado 1), con el cual presuntamente se pretendía desvirtuar el rendido por POCH Ingeniería, sin embargo, este Colegiatura debe restarle credibilidad al mismo por varias razones a saber:

La primera porque no quedó acreditado que aquél hubiera ingresado al predio para inspeccionarlo y a partir de allí haber arribado a las conclusiones plasmadas en ese documento, todo lo contrario, justamente el cuestionamiento efectuado por la parte convocada a ese legajo estriba en que no existe ningún registro que evidencien que dicho profesional analizó por dentro el inmueble, muestra de ello es que el registro fotográfico es solamente de la fachada, de ahí que no resulta acertado determinar con exactitud las averías que el mismo presentaba.

La segunda, porque no se puede dar por cierto que el predio haya sido reforzado y remodelado con cumplimiento de las normas urbanísticas vigente para la época en la que se construyeron los pisos 3 y 4, tal como se consigna en ese estudio, en razón a que como ya se dijo, aquí quedó plenamente probado que la construcción del año 1994 se realizó sin licencia de construcción, y es que a pesar que se dijo que contaba con estudios, nótese que no existe ni una sola evidencia que permita colegir con un alto grado de certeza que ello en verdad fue así, contrario sensu, obra certificación de la curaduría urbana No, 5 que determina que el predio va a ser demolido.

La tercera, porque sí en gracia de discusión se admitiese que el Ingeniero no requería ingresar al predio para realizar ese informe, tampoco es admisible que el estudio contenido en ese legajo se base solamente en el presunto conocimiento que dice tener del predio y de los suelos del inmueble a raíz de unos supuestos estudios que realizó hace más de 21 años, porque aquí era indispensable que se llevara a cabo un estudio de patología que permitiera colegir con cierto grado de exactitud las afectaciones que presentaba la casa con ocasión de la construcción vecina, ya que en lo medular, fue a partir de que se inició la misma que la casa empezó a presentar las afectaciones a las que ya se hizo alusión.

Entonces, surge indiscutible que la parte demandante desatendió sus obligaciones contractuales, pues no realizó el mínimo esfuerzo para conservar la cosa en estado de servir, al punto que los daños que el inmueble presentaba ponían en peligro la vida de las personas que allí laboraban, de tal modo, que en este asunto está suficientemente demostrado el incumplimiento de la parte convocante respecto del negocio jurídico celebrado entre las partes, por ende, habrá de declararse probada la excepción de contrato no cumplido alegada por la parte demandada.

Puestas las cosas de la anterior manera, también es cuestionable la actitud asumida por la parte ejecutante, pues a pesar que era plenamente conocedor que la aquí demandada había invocado la terminación del contrato con justa causa y lo había citado para efectuarle la entrega, en dos oportunidades, sin que aquel hubiese comparecido, decidió seguir generando el cobro de los cánones de arrendamiento, facturas de venta que valga la pena resaltarlo fueron devueltas sin aceptación, pues el inmueble estaba desocupado y a la espera que AZ Inmobiliaria S. en C.S. lo recibiera y, solamente diez meses después decidió demandar, a pesar de incumplir su obligación de mantener en buen estado el predio.

Frente a este tópico es menester traer a colación lo que de antaño ha expresado la Sala de Casación Civil, en punto de la buena fe contractual:

"8.3.2. Empero, la discrecionalidad de los interesados alrededor del vínculo contractual no resulta absoluta; la libertad en estas materias está limitada por unas reglas o principios que aun cuando no hayan sido convenidos o involucrados expresamente hacen parte del mismo por ser de su esencia. ***Los contratantes al concertar en uno u otro sentido sus objetivos, no solo involucran sus intereses sino que las determinaciones que prohíjan irradian sus efectos más allá de sus exclusivos propósitos y afectan valores que atañen a la comunidad de la que hacen parte****. El ejercicio de esa libre voluntad no puede considerarse, por la libertad misma, como una patente de corzo para desbordar límites propios de las buenas costumbres y el orden público, entendidos en su más amplia consideración. En esa línea, aspectos como la buena fe y la ética de los contratos, entre otros, por disposición legal, constituyen parte integrante (arts. 1603 del C.C., en cc. art. 871 del C. de Co.), de todo negocio o acto jurídico, no obstante hayan sido desdeñados por quienes los celebraron.*

8.4. De lo dicho surge, entonces, que precisar el verdadero sentido de los compromisos asumidos por uno u otro contratante, así como el alcance de

los mismos desde la perspectiva legal, social, naturaleza del negocio, incluyendo la función económica que cumple, impone, sin duda, la valoración de esas circunstancias.

8.5. Desde esa perspectiva, la buena fe bonae fidei, uno de los principales ejes, implícita en todo ensayo negocial, inclusive en las etapas previas, es principio elevado a norma jurídica y así aparece en diferentes codificaciones. Por ejemplo, en el artículo 1134 del Código Civil Francés: "(…) Elles doivent etre exécutées de bonne foi" (art. 1134), disposición replicada en el artículo 1546 del Código Civil Chileno: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe". En su momento, don Andrés Bello, decidió también reproducirla en nuestro ordenamiento jurídico y quedó integrando el texto del artículo 1603 del Código Civil patrio: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe". Posteriormente, en el año 1970, en los artículos 863 y 871, pasó a hacer parte de la codificación comercial y, en su orden, se estableció: "Buena fe precontractual. Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen"; y, "Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural". Luego, a partir de la Constitución Política de 1991, la buena fe fue erigida como canon constitucional (art. 83).

Por manera que, los contratantes, al momento de fijar las reglas que señalan los designios de la convención, adicionalmente a lo que hayan resuelto ajustar, deben someter su comportamiento contractual a los cánones de la buena fe, sin que puedan, por ello, apartarse de un mínimo de referentes que marcan, por ejemplo, respeto por los derechos de la otra parte; no abusar de los propios; no someter injustamente al cocontratante a condiciones desmedidas, desproporcionadas, abusivas o solo en beneficio de uno de ellos y no asumir conductas desleales.

(…)

Luego, ratificando la posición expuesta, volvió a decir:

"*Sobre el particular, la Corte ha explicado que " 'la buena fe, hoy sólidamente entroncada con insoslayables mandatos constitucionales (Carta Política, art.83), suele ser contemplada por el ordenamiento desde tres perspectivas distintas:* ***de un lado, aquella que mira las esferas íntimas de la persona, para tomar en consideración la convicción con la que ésta actúa en determinadas situaciones; de otro lado, como la exigencia de lealtad, semblante que la erige en un verdadero hontanar de normas de corrección contractual; y finalmente, como un criterio de interpretación de los negocios jurídicos****. "Pueden citarse como ejemplo de la primera, cuya principal virtud es la de generar derechos, lo prescrito en el artículo 768 del Código Civil, conforme al cual 'la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo vicio'; o las disposiciones contenidas en los artículos 964, 1634, etc., ejusdem, en los que el ordenamiento privilegia cierto estado subjetivo o espiritual de la persona que se caracteriza porque esta abriga la creencia razonada, sensata y ajena de culpa, de estar obrando en conforme a derecho (…)" (Sent. Cas. Civ. de 16 de agosto de 2007, Exp.No.1994 00200 01)'", posición ratificada en sentencia de 19 de diciembre de 2011, Exp. 2002 00329 01.*

(…)

*Y en referencia a uno de esos oficios que la caracteriza (integrador), pertinente resulta señalar que refleja tanto un aspecto negativo como uno positivo. En el primero, "****la buena fe se presenta como una obligación de respeto, de conservación de la esfera de los intereses ajenos****". Respecto al positivo, "****la buena fe impondrá una activa colaboración entre los cocontratantes, encaminada a promover sus intereses"*** *(Betti, Emilio, Teoría General de las Obligaciones, tomo I., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969).*

Por ello, la potestad que la ley brinda a las personas para decidir, libremente, la suerte de sus destinos, no es posible considerarla, como ya se dijo,

en términos absolutos; la realización de esa facultad impone, simultáneamente, observar un mínimo de exigencias: "el ejercicio de un Derecho subjetivo es contrario a la buena fe no sólo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino también cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone en el tráfico jurídico (…) Los derechos subjetivos han de ejercitarse siempre de buena fe. Más allá de la buena fe el acto es inadmisible y se torna antijurídico" (Luis Díez-Picazo, La Doctrina de los Actos Propios). Se espera, entonces, conciencia que el ejercicio de ciertos derechos impone, concomitantemente, el respeto por los ajenos; es patentizar valores como la razonabilidad, el equilibrio contractual, el fin común; es, en definitiva, vindicar, de manera privilegiada, comportamientos libres de propósitos egoístas e individualistas, que al ejercitar los derechos legales o contractuales, según el caso, arrasen con los intereses de la parte con la que se pactó.[2]

Y es que la parte aquí convocante desconoció por completo que dentro de los planes de la persona jurídica demandada no estaba la de restituir el inmueble, pues fue por petición de ella que se amplió el plazo del término inicialmente pactado, en aras de continuar en el predio, ya que había hecho una importante inversión para las adecuaciones del mismo a sus necesidades, aspectos que fueron confesados por el representante legal de AZ Inmobiliaria S. en C.S., lo que refuerza aún más la teoría que fue justamente la inestabilidad del predio la que la obligaron a dar por terminado por justa causa ese vínculo contractual que los ataba, es decir, que en la conducta asumida por esa sociedad no se avizora el respeto en la conservación de los intereses ajenos, ni tampoco una colaboración activa encaminada a promover los intereses de ambos contratantes.

Ahora bien, tampoco se desconoce que Jhon Alexander Martínez Díaz atestiguo respecto de la recuperación del inmueble para la cual fue contratado en mayo de 2017, quien además, afirmó que el inmueble llevaba mucho tiempo desocupado, situación que era conocida por el representante legal de la ejecutante, sin embargo, se tiene que el abandonó del predio enrostrado a la demandada se había podido evitar si AZ Inmobiliaria S. en C.S. hubiese recibido el mismo en la época en la que Farmasanitas S.A.S. lo puso a su disposición con independencia de las acciones legales que consideraran pertinentes para determinar cuál de las dos partes incumplió el contrato, de ahí que este hecho de modo alguno puede ser imputable a la persona jurídica últimamente citada, ya que su actuar está dentro de las buena fe contractual a la que se acaba de hacer mención.

De otra parte, pertinente es aclarar que aun cuando entre las partes existe un proceso ordinario en el cual se pretende la declaratoria del incumplimiento contractual en cabeza de la aquí ejecutante, ello no es impedimento para que en esta oportunidad se decrete el mismo por la vía de la excepción, es más ni siquiera resultaba procedente la prejudicialidad que con anterioridad decretó la primera instancia, ya que en reiterada jurisprudencia la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado que:

---

[2] *Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC 5851-2014, 13 de mayo de 2014, M.P. Margarita Cabello Blanco. Exp. 11001 31 03 039 2007 00299 01.*

"Evócase igualmente en este recuento legislativo, que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil dispone que no hay suspensión por prejudicialidad, si es que en el proceso ejecutivo se pueden plantear los debates sobre validez o autenticidad del título. Esta norma, interpretada armónicamente con el artículo 512 del mismo compendio, permite concluir que en el proceso ejecutivo deben proponerse todas las excepciones que asistan al demandado, y que ningún proceso ordinario iniciado antes o después puede paralizar la ejecución. Vistas las cosas desde esta perspectiva, la existencia previa de un proceso ordinario no ataja el proceso de ejecución, ni permite que este sea suspendido, a la espera de lo que ocurra en aquel otro juicio ordinario; pero si hallándose en curso un proceso ejecutivo se promueve uno ordinario, no podría tampoco paralizarse aquél, si los hechos planteados en el proceso ordinario pudieron ser esgrimidos oportunamente como excepciones en el proceso ejecutivo. La regla comentada, numeral 2º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, reserva al proceso ejecutivo la decisión de los hechos constitutivos de excepciones, para lo cual basta con que sea procedente en el juicio ejecutivo la alegación de excepciones, y justamente lo es, porque así lo manda el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil –numeral 2º del artículo 555 para el ejecutivo hipotecario–, que autoriza genéricamente a proponer las excepciones de mérito."[3].

*Finalmente, cumple precisar que aun cuando en la cláusula décima quinta del contrato de arrendamiento se estipuló que: "**EL ARRENDADOR** no asume responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que sufra **EL ARRENDATARIO** a causa o con ocasión de los actos o hechos atribuibles a terceros…", a la misma no puede dársele en esta ocasión ningún efecto jurídico en la medida que ella contraviene una norma imperativa -num. 1° del artículo 899 del C.Co en concordancia con el numeral 2° del artículo 1982 del C.C.-, que establece que el arrendador está en la obligación de mantener la cosa en estado de servir, de tal modo que no es dable bajo el amparo de esta cláusula eximir de responsabilidad por daño de un tercero a la convocante y a partir de ahí concluir que no hubo incumplimiento, pues aun cuando la amenaza de ruina que presentaba la cosa dada en arrendamiento no es atribuible a ninguna de las partes, no es posible pasar inadvertido que en todo caso, le correspondía al demandante velar por la conservación del mismo, sin que dentro del expediente exista un solo elemento de juicio que permita colegir el cumplimiento de dicha obligación, como ya se explicó en precedencia, pues es justamente por este aspecto que se le atribuye incumplimiento contractual.*

Los anteriores razonamientos conllevan a colegir que equivocó su decisión la primera instancia al declarar no probadas las excepciones planteadas, ordenando seguir adelante la ejecución, bajo el supuesto que la demandada debía haber iniciado un proceso de restitución en los términos del artículo 426 del C.P.C., como quiera que entre las partes claramente se pactó que el incumplimiento de las estipulaciones de dicha convención darían lugar a la terminación del contrato, de modo tal que la parte aquí ejecutada actúo conforme a lo allí estipulado y atendiendo con estrictez las normas que regentan la materia y a las que se hizo alusión al inicio de la parte considerativa.

---

[3] *Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de febrero de 2007, M.P. Edgardo Villamil Portilla. Exp. 11001-31-03-027-1998-00339-01.*

Ahora bien, ante la prosperidad de la excepción multicitada queda la Sala relevada del estudio de los demás medios de defensa, de conformidad con lo regulado en el artículo 282 del C.G.P.

En conclusión, habrá de declararse probado el medio de defensa nominado contrato no cumplido, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda, sin que haya lugar ordenar el levantamiento de las medidas cautelares y la condena en perjuicios, como quiera que dentro de este asunto no se dispuso la práctica de las mismas dado que la parte llamada a la litis prestó caución a fin de impedir la materialización de las mismas, así mismo se condenará en costas de ambas instancias a la parte convocante conforme lo prevé el numeral 4º del artículo 365 del C.G.P.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

***1.- REVOCAR** por las razones consignadas en este fallo, la sentencia dictada en audiencia el veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020) en el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la ciudad, en consecuencia se dispone:*

***1.1.- DECLARAR** probada la excepción denominada CONTRATO NO CUMPLIDO.*

***1.2.- NEGAR** las pretensiones de la demanda, por las motivaciones expuestas con anterioridad.*

***2- CONDENAR** en costas a la parte ejecutante, en ambas instancias. Tásense.*

***2.1.-** De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con los Acuerdos 1887/03, 2222/03 y 9943/13, en la liquidación de costas causadas en segunda instancia, inclúyase como Agencias en Derecho la suma de **$18'000.000.oo.** Para la elaboración de la misma síganse las reglas previstas en dicha norma.*

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

Adriana Ayala Pulgarín

ADRIANA AYALA PULGARÍN

Magistrada

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora. 4:00 p.m.

Radicación: **11001-3103-032-2018-00265-02**
Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Amparo Rodríguez Navarrete y otros.
Demandado. Carmen Elisa Navarrete de Rodríguez y otros.

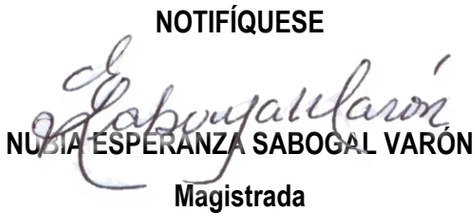
En firme el auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo que dirimió la primera instancia en el asunto citado en la referencia, sin que las partes hayan solicitado la práctica de pruebas, el apelante deberá sustentar la alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído (C.G.P., Art. 118 Inc. 2°; Decreto 806 de 2020, Art. 14), so pena de declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 322 del C.G.P. Dicha sustentación debe contraerse a los expresos reparos formulados ante el juez de primer grado.

Vencido el aludido plazo, por Secretaría córrase traslado a la parte contraria por el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Los respectivos escritos deberán remitirse al correo institucional de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Culminados los plazos aquí otorgados, ingrésense las diligencias al despacho para el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veintiseis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ejecutivo 110013103032 2019 00180 01

Sería del caso decidir la alzada interpuesta por la parte demandada, así como la apelación adhesiva planteada por el extremo activante, contra la sentencia calendada 21 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso **EJECUTIVO** promovido por **MARÍA TERESA CHACÓN KEYEUX** contra **LUIS FERNANDO LUQUE MEDINA**, de no ser porque se advierte que el primero de los aludidos recursos fue allegado a través de medios electrónicos después de la hora de cierre de este Despacho judicial, el día que vencía el término de traslado para sustentarlo, lo cual inviabiliza su procedencia junto con la del medio de opugnación adhesivo. Por ende, le resta competencia funcional a este Colegiado para dirimirlos, como pasa a explicarse.

El inciso 2° del artículo 14 del Decreto 806 de 2020, norma que disciplina el actual trámite de la apelación de sentencias en materia civil dispone que "...[e]*jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de*

cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto...”.

En el sub-lite, el 9 de febrero de 2021 se admitió el remedio vertical formulado por el ejecutado; el 22 de febrero siguiente se hizo lo propio con la impugnación adhesiva propuesta por la promotora[1]; el 4 de marzo posterior se corrió traslado por el término de 5 días a los apelantes, para que sustentaran el recurso[2], decisión notificada en estado del día 5 postrero, por lo que el memorado lapso empezó a transcurrir el 8 del mismo mes y año.

En consecuencia, el plazo para efectuar la referida actuación procesal fenecía el 12 de marzo pasado, a las 5:00 P.M., hora del cierre de esta Corporación de conocimiento. A pesar de ello, el medio de defensa formulado por el convocado apenas fue recibido por la Secretaría del Tribunal el viernes 12 de marzo hogaño, pero en horario inhábil posterior a las cinco de la tarde, esto es, a las 7:32 P.M. tal cual lo documenta el respectivo correo electrónico obrante en el plenario[3], cuando ya la inconformidad resultaba intempestiva.

Lo anterior habida cuenta que es regla general que los actos procesales deben realizarse dentro de la jornada laboral del despacho respectivo, acorde con lo preceptuado en inciso 1° Del artículo 106 del Código General del Proceso, según el cual, “...[l]*as actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se adelantarán en días y horas hábiles…”*, y en el inciso 4° del canon 109 del mismo estatuto, conforme al cual «”...[l]*os memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término...*”.

[1] PDF 12. 32 2019 00180 01AUTO AdmiteApelacion.
[2] PDF 14.32 2019 00180 01AUTO corre traslado.
[3] PDF 22.Correo_MemorialSustentacionDemandado.

Sin que sea dable para contabilizar un interregno procesal, como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, *"…recurrir a las reglas sobre plazos y su cómputo que establecen los artículos 67 y 68 del Código Civil (Subrogados por los artículos 59, 60 y 61 del Código de Régimen Político y Municipal), en tanto las mismas tienen un declarado alcance residual y concluyendo que «la finalización del horario de atención al público apareja la expiración de los términos que estén corriendo» (CSJ SPL, Auto 15, 26 feb. 2002; reiterada en AC, 24 may. 2005, rad. 2001-00432-01 y STC9689-2014, 24 jul. 2014, rad. 01547-00)…"*[4].

Los anteriores derroteros imponen, entonces, declarar desierta la opugnación planteada por el encausado. Esta circunstancia conduce a que el recurso adhesivo quede sin efecto ante el decaimiento del principal, *"…pues aunque el inciso 2º del artículo 322 del Código General del Proceso, que remplazó al precepto 353 del «Código de Procedimiento Civil», dispone que «la adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal», ello no quiere decir que el carácter subordinado y dependiente de tal adhesión se contraiga única y exclusivamente al evento del «desistimiento» que ejemplifica la citada disposición, en tanto que, por necesaria coherencia procesal, dicha secuela se extiende también a los supuestos de «deserción» que de igual forma conllevan a la dimisión del «alzamiento».*

En suma, el recurso apelativo aducido como principal, condiciona necesariamente el de la «apelación adhesiva», de allí que, si por algún motivo ese embate no puede tramitarse, correrá igual suerte lo

[4] Corte Suprema de Justicia. ATC5532 de 24 de agosto de 2016, expediente 76001-22-03-000-2016-00416-01. Magistrado Ponente Doctor Luis Alonso Rico Puerta.

que a él está subordinado, esto es, la «apelación adhesiva»…"[5].

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR DESIERTA la impugnación interpuesta por el convocado contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia ya referidas.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO, en consecuencia, la apelación adhesiva planteada por la promotora.

TERCERO. DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, dejando las constancias del caso. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



Firmado Por:

CLARA INES MARQUEZ BULLA

[5] Corte Suprema de Justicia. STC6140 de 10 de mayo de 2018, expediente 11001-02-03-000-2018-01209-00. Magistrado Ponente Doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque.

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 003 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
82041b0f392a43191a76da551920659e54fa3a9cbd3960e632a8e9e28644db70
Documento generado en 26/03/2021 10:50:54 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO EJECUTIVO
RADICADO No. **11001310303320180029501**
EJECUTANTE: **PALADÍN LA TROCHA INVESTORS (COLOMBIA) LLC.**
EJECUTADOS: **ÁLVARO ENRIQUE GIRALDO VALENCIA Y OTROS**

Examinada la actuación, se verifica que en el oficio remisorio del expediente, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá indicó que la providencia impugnada data del 5 de diciembre de 2019, visible a "*folio 534*" en el "*Cuaderno Principal".*

Al revisar las diligencias se observa que en el folio mencionado figura el auto por el cual se negó la solicitud de nulidad prevista en el artículo 121 del Código General del Proceso, sin que obre el respectivo recurso formulado contra esa decisión, como tampoco la providencia que concede la alzada.

Ahora bien, en el expediente digitalizado se encuentran los recursos de reposición y, en subsidio apelación, que formuló el apoderado de los demandados contra los proveídos dictados el 5 de diciembre de 2019, mediante los cuales (i) se negó la medida cautelar pedida por ese extremo procesal, consistente en el embargo de los créditos que se persiguen en otros procesos, y (ii) se decretó el embargo de los derechos fiduciarios que poseen los demandados, medida solicitada por la parte actora -*fls. 540 y ss., archivo "01MedidasCautelares2A.pdf".* Frente a ésta última determinación, tampoco reposa en el plenario el respectivo pronunciamiento del despacho en torno a la concesión de la apelación.

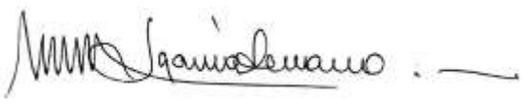
Por tal razón, se ordenará la devolución del proceso para que el Juzgado señale de manera clara y precisa cuáles son las providencias objeto de recurso y, adicionalmente, allegue las piezas procesales de forma completa.

Por lo expuesto, se **DISPONE:**

PRIMERO: DEVOLVER las diligencias al despacho de origen para que subsane las falencias advertidas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
48bbb508c1ac029e8c8c6863e9d229d6e89cfab1444b8013de5f6f0173a2be42
Documento generado en 26/03/2021 04:48:42 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Hora: 4:12 p.m.

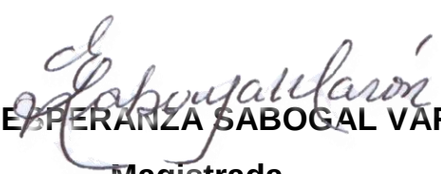
Radicación: 11001-3103-033-2019-00289-01

Asunto.	Declarativo.
Recurso.	Apelación Sentencia.
Demandante.	Sandra Viviana Cano Hernández.
Demandado.	María Alejandra Roberto Latorre.
Reparto.	19/03/2021

ADMÍTASE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación propuesto por la parte demandada frente a la sentencia de 4 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso declarativo de resolución de contrato de compraventa impetrado por Sandra Viviana Cano Hernández y Rafael Colorado Hernández contra María Alejandra Roberto Latorre.

En firme, reingrese el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora. 4:00 p.m.

Radicación: **11001-3103-035-2019-00198-02**

Asunto.	Declarativo.
Recurso.	Apelación Sentencia.
Demandante.	Clara Milena Osorio Guzmán.
Demandado.	Cooperativa de los Profesionales COASMEDAS

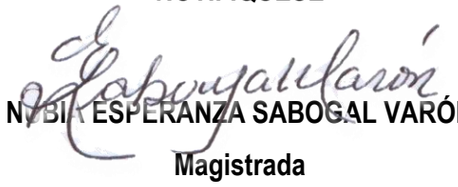
En firme el auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo que dirimió la primera instancia en el asunto citado en la referencia, sin que las partes hayan solicitado la práctica de pruebas, el apelante deberá sustentar la alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído (C.G.P., Art. 118 Inc. 2°; Decreto 806 de 2020, Art. 14), so pena de declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 322 del C.G.P. Dicha sustentación debe contraerse a los expresos reparos formulados ante el juez de primer grado.

Vencido el aludido plazo, por Secretaría córrase traslado a la parte contraria por el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Los respectivos escritos deberán remitirse al correo institucional de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Culminados los plazos aquí otorgados, ingrésense las diligencias al despacho para el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

N.E.S.V. Exp. 2019-00198-02

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiún (2021).

Ref. 11001 3103 **036 2014 00166 01**

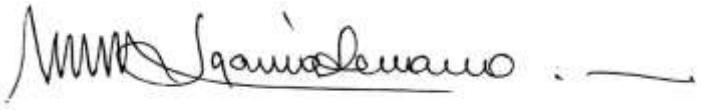
Demandante: MARINA MARTINEZ ARDILA

Demandado: TELO COMPAÑÍA LTDA Y OTRO

Magistrada Sustanciadora: MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Se fijan dentro del asunto de la referencia como **AGENCIAS EN DERECHO** de esta instancia, el equivalente a UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo del extremo actor.

Notifíquese y Cúmplase,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Magistrada

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
af1ddb2bd82c14d736f4065e20821f707f523df621dd12d71f07a2a14a2fecfb
Documento generado en 26/03/2021 07:37:44 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora: 4:00 p.m.

Radicación: **11001-3103-036-2019-00056-01**
Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Edward Lelio Rueda Pinzón y otros.
Demandado. Gloria Montoya Villa y otro.

En firme el auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo que dirimió la primera instancia en el asunto citado en la referencia, sin que las partes hayan solicitado la práctica de pruebas, el apelante deberá sustentar la alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído (C.G.P., Art. 118 Inc. 2°; Decreto 806 de 2020, Art. 14), so pena de declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 322 del C.G.P. Dicha sustentación debe contraerse a los expresos reparos formulados ante el juez de primer grado.

Vencido el aludido plazo, por Secretaría córrase traslado a la parte contraria por el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Los respectivos escritos deberán remitirse al correo institucional de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Culminados los plazos aquí otorgados, ingrésense las diligencias al despacho para el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

N.E.S.V. Exp. 2019-00056-01

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Hora. 4:14 p.m.

Radicación: 11001-3103-036-2019-00141-01

Asunto.	Declarativo.
Recurso.	Apelación Sentencia.
Demandante.	Blanca Inés Salcedo y otros.
Demandado.	Propietarios de Camiones S.A y otros.
Reparto.	08/03/2021

ADMÍTASE, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación propuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 26 de agosto de 2020, dictada por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual impetrado por Blanca Inés Salcedo, Abel Moncaleano Sánchez, Miryam y Danny Moncaleano Salcedo contra Richard Augusto Ramírez Casas, Propietarios de Camiones S.A y Seguros La Previsora S.A.

En firme, reingrese el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente:	**CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA**
Radicación:	110013103036 2020 00181 01
Procedencia:	Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
Demandante:	Exotic Farms S.A.S. en liquidación
Demandado:	Bloom Flower 2 Trade S.A.S.
Proceso:	Ejecutivo
Asunto:	Apelación Auto

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se dirime el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la providencia calendada 3 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso **EJECUTIVO** promovido por **EXOTIC FARMS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** contra **BLOOM FLOWER 2 TRADE S.A.S.**

3. ANTECEDENTES

3.1. Mediante el pronunciamiento materia de censura, la Funcionaria, negó la orden de apremio invocada, porque de las 7 facturas presentadas como báculo del recaudo, 5 de ellas, esto es, las identificadas con número 5770, 5842, 5916, 5983 y 6040, no pueden catalogarse como títulos valores en tanto carecen de la fecha de

recibido, siendo este uno de los requisitos establecidos en la Ley 1231 de 2008 para derivar tal condición[1].

3.2. Inconforme con la determinación, la abogada de la parte demandante planteó remedio horizontal, y en subsidio, alzamiento, mantenida la determinación con sustento en que es inviable considerar título ejecutivo a un título valor que no cumple los condicionamientos para tenerse como tal, se concedió el último medio de impugnación mediante proveído de 9 de noviembre de 2020[2].

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Como sustento de su solicitud revocatoria refirió la mandataria judicial que los cartulares se encuentran firmados por el emisor y expresamente aceptados por la ejecutada o persona autorizada, mediante firma mecánica –sello-, quien no la rechazó dentro del término otorgado para tal fin. Por el contrario, realizó acuerdos de pagos que fueron incumplidos.

La ausencia de la fecha de recibo, el único efecto práctico que tiene es contabilizar el lapso para rechazar o reclamar contra su contenido, por lo tanto, la escasez de la aludida exigencia no es un requisito esencial para configurar la existencia de un título ejecutivo, por lo que la falta del mismo no desvirtúa tal condición, ni afecta el negocio jurídico que representa.

Aun cuando solo estuvieran revestidas de mérito ejecutivo las facturas 5638 y 5697, el Despacho de primer grado conserva la competencia para conocer de su cobro, dado que el capital en estas respaldado, más los intereses causados hasta la presentación de la demanda, supera la mayor cuantía, pues asciende a 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes[3].

1 PDF 04RechazaDemanda.
2 PDF 09ResuelveRecurso.
3 PDF 05RecursoReposición.

5. CONSIDERACIONES

5.1. El aspecto toral de todos los procesos de esta naturaleza, sin excepción alguna, es, en esencia, la satisfacción o cumplimiento de una obligación de dar, hacer, o no hacer, a favor del demandante y a cargo del demandado, que conste en un título ejecutivo, éste que según las voces del artículo 422 del Código General del Proceso, se constituye por aquel documento contentivo de una obligación expresa, clara y actualmente exigible, proveniente del deudor o de su causante, y que constituye plena prueba en su contra. Ahora, cuando además se pregona su condición de título valor, debe satisfacer las exigencias generales y especiales contempladas en el Estatuto Cambiario.

5.2. Se ha dicho que la obligación es expresa, cuando en el documento se determina de manera indubitable, tratándose de sumas de dinero, que estén estipuladas en una cifra numérica precisa, o que sea liquidable por simple operación aritmética. Clara, cuando en el título consten todos los elementos que la integran, esto es, la identificación del acreedor, del deudor y del objeto o prestación. Exigible, cuando no está sometida a plazo por no haberse indicado o por haberse extinguido, o cuando no se sujetó a condición o modo alguno, o si habiéndolo estado estos se hubieren realizado.

5.3. De entrada cumple precisar que los documentos báculo de las pretensiones respecto de los cuales no se libró mandamiento de pago, efectivamente carecen de la connotación de títulos-valores, tal como lo destacó la Juez a-quo, al no contener el hito de recibido, requisito especial de la factura al tenor del numeral 2° del artículo 774 del Código de Comercio. Por tal razón, no se ahondará sobre el particular, debiendo el Tribunal analizar si los cartulares reseñados, reúnen las condiciones que contempla el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012, como quiera que la parte actora insiste que si llenan los presupuestos para considerarse títulos ejecutivos.

En ese norte, cumple precisar que las *“facturas de venta”* son coercibles

de dos formas, dependiendo si satisfacen o no a cabalidad las exigencias de la ley mercantil. Si colman todos los presupuestos serán catalogadas *"títulos valores",* empero, si no logran alcanzar tal calidad, podrían ser estimadas como "títulos ejecutivos", como se pretende en el *sub-examine.*

Pues bien, de entrada observa el Colegiado que a los instrumentos no es viable atribuirles tal virtualidad como lo pretende la litigante, por la potísima razón que no existe certeza que provienen directamente de la deudora y, por tanto, constituyan plena prueba en su contra.

En efecto, no se discute que en los instrumentos número 5770, 5916, 5983 y 6040 obra estampado un sello mecanográfico en tinta que señala: "Boom Flower 2 Trade RECIBIDO", con la firma de la persona que recepcionó, mientras que el cartular 5842, solo aparece la rúbrica de ella[4].

Empero, no emerge señal inequívoca de aceptación por parte de la convocada, por lo que es plausible concluir que la sociedad demandada no manifestó expresamente su voluntad de obligarse para con la ejecutante.

Adicionalmente, tal supuesto no le asigna el carácter de auténtica, pues se trata de una constancia, luego, ello no implica *per se* conformidad de la encartada con los servicios facturados, como tampoco, se reitera, aceptación de la acreencia que se endilga como insoluta, habida cuenta que no es plausible aplicar los efectos de la memorada figura, contemplada en el artículo 773 del Código de Comercio, así aparezca la firma de una persona que recibió, pues la misma se estipuló exclusivamente para la factura -título valor-, mas no para los títulos ejecutivos, connotación que pretende dar la opugnante para los documentos de los que fue negada la orden de apremio invocada.

[4] Folios 27 a 31 del PDF 01Escrito de Demanda.

Finalmente, no desconoce la Sala, que de conformidad con el inciso 2 del artículo 621 del Código de Comercio "…*La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto…".* Sin embargo, al descartarse la vocación de títulos valores, tampoco es procedente aplicar dicho precepto legal en el caso de marras.

5.4. Bajo ese derrotero, se evidencia claramente que a los aludidos instrumentos tampoco puede atribuírsele la connotación de documentos ejecutivos, por no cumplir las exigencias para ello. Así que anduvo afortunada la Juzgadora en restarles mérito y denegar la orden de apremio deprecada.

5.5. A diferencia de lo esbozado en precedencia, le asiste razón a la impugnante en que al Estrado de primer grado le corresponde conocer de la ejecución de las facturas 5638 y 5697, por cuanto sumados los capitales perseguidos con soporte en tales cartulares -$43.174.499,18 y $76.087.834,01 en su orden-, más los intereses moratorios causados por tales montos – desde el 3 de septiembre de 2019 y a partir 28 de enero de 2019, respectivamente[5]- hasta la fecha de presentación de la demanda -8 de julio de 2020[6]-, superan los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, consagrados como una mayor cuantía, la cual compete conocer en primera instancia al Juez Civil del Circuito, al amparo de los artículos 20 numeral 1°, 25 inciso 4°y 26 numeral 1° del Código General del Proceso.

5.6. Se impone como corolario de lo dicho, ratificar el numeral primero de la parte resolutiva del proveído fustigado por al encontrarlo ajustada a la legalidad, y revocar el numeral segundo de aquel acápite de la aludida providencia, para que, en su lugar, el Juzgado a-quo provea lo que en derecho corresponda sobre la orden de apremio implorada respecto de las facturas 5638 y 5697, sin que haya lugar a condena en costas por no haberse trabado la relación procesal.

---

[5] Folios 37 y 38 del PDF 01EscritoDeDemanda.
[6] PDF 03Secuencia10340.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, en **SALA DE DECISIÓN CIVIL,**

RESUELVE:

6.1. CONFIRMAR el ordinal primero del acápite resolutivo del auto calendado 3 de agosto de 2020, proferido por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad.

6.2. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia antes enunciada, para que, en su lugar, el Juzgado a-quo provea lo que en derecho corresponda sobre la orden de apremio implorada respecto de las facturas 5638 y 5697.

6.3. DETERMINAR que no hay condena en costas.

6.4. DEVOLVER el expediente a su despacho judicial de origen, previas las constancias del caso. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



Firmado Por:

CLARA INES MARQUEZ BULLA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 003 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d11d4bdde86daaf88341db1c383dff58dfd1d50e0588210f769a469c21238f8d

Documento generado en 26/03/2021 10:50:53 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente:	**CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA**
Radicación:	110013103037 2018 00160 01
Procedencia:	Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito
Demandante:	Edificio El Árbol Propiedad Horizontal
Demandado:	Gradeco Construcciones y Cia S.A.S.
Proceso:	Verbal
Recurso:	Apelación Sentencia

Discutido y aprobado en Salas de Decisión del 12, 19 y 26 de marzo de 2021. Actas 09, 10 y 11.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se dirime el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia calendada 6 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso **VERBAL** instaurado por **EL ÁRBOL P.H.** contra **GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S.A.S.**

3. ANTECEDENTES

3.1. La Demanda.

Edificio El árbol P.H., a través de apoderado judicial, formuló demanda contra Gradeco Construcciones y Cia S.A.S., para que previos los trámites de rigor, se hagan los siguientes pronunciamientos:

3.1.1. Declarar a Gradeco Construcciones & Cia. S.A.S. responsable por los daños ocasionados al Edificio El Árbol P.H. con ocasión de la construcción y asentamiento de las obras Altavista Country y Reserva Altavista Country.

3.1.2. Condenar a la sociedad a realizar las intervenciones necesarias para garantizar que los perjuicios no continúen ampliándose con el paso del tiempo y pagar $700.000.000,oo por concepto de daño emergente – valor de reparaciones-, más la correspondiente indexación y las costas del proceso[1].

3.2. Los Hechos.

Contiguo al Edificio El Árbol Propiedad Horizontal, ubicado en la carrera 13 número 138 – 62, de esta ciudad se encuentra el Edificio Altavista del Country, proyecto inmobiliario que cuenta con 21 pisos, de los cuales 18 tienen 170 unidades habitacionales destinados para vivienda y 4 con 348 estacionamientos para parqueadero.

La Curaduría Cuarta Urbana de esta ciudad le expidió la licencia número 10-4-1953 a la sociedad convocada, el 20 de diciembre de 2010, frente a la cual el señor Sinesio Gómez Carmona, el 5 de enero siguiente presentó recurso de reposición por incumplimiento de las

[1] Folio 345 PDF 01Principal.

normas urbanísticas, relativas a la altura de a edificación, los aislamientos, la afectación del espacio y movilidad del sector.

En virtud de lo anterior, la constructora efectuó unas correcciones a la altura del edificio y del primer piso por requerimiento de la curaduría y Planeación Distrital, por lo que la licencia quedó en firme el 20 de mayo de 2011.

Los copropietarios y residentes de la persona jurídica promotora han elevado distintas quejas y peticiones por los daños que la obra vecina ha causado a sus inmuebles como: fisuras severas y crecientes del piso del parqueadero, ruptura de paredes en la parte suroriental del conjunto, separación de los inmuebles en el costado norte, grietas de gran dimensión en el lugar que se ubican los contadores del gas y en paredes del sótano limítrofe, fragmentación de la jardinería y los estacionamientos externos, grietas en las escaleras del jardín interno, en el interior de algunos apartamentos, en el garaje del primer piso, en la zona norte colindante, en el salón comunal, en el local y en diferentes partes del inmueble. Afectación de las fachadas por adherencias de pintura y cemento en paredes y ventanas, deterioro del césped y jardín interior, descenso notorio del andén peatonal, daño en la marquesina central que generó goteras, fisuras en las cubiertas, cuartos de máquinas de elevadores y fachada, separación entre las juntas a nivel de primer piso, ruptura de fachada de primer piso costado nororiental, de los muros de cerramiento, postes de luminarias, afectación a tubería de aguas negras y destrucción de tejas.

En la acción popular que presentaron algunos copropietarios y habitantes contra la Curaduría Cuarta, la Secretaría de Planeación Distrital y la enjuiciada, por haber otorgado la memorada licencia, tramitada en el Juzgado 22 Administrativo de la capital, se practicó un concepto técnico por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad Nacional, en el cual se señaló que el sistema estructural empleado en el Edificio Altavista Country no es permitido por el reglamento NSR-10, por lo que así la licencia de construcción la hubieran expedido con base en la NSR-98, como los diseños fueron elaborados con posterioridad a su vencimiento, debieron adecuarse a la primera por seguridad ante el comportamiento sísmico. Además, indicó que con la construcción de ese edificio se privilegió la empresa, pero el ciudadano perdió.

Una vez empezaron a evidenciarse los inconvenientes en el proyecto, los residentes trataron de vincular a la Alcaldía Menor de Usaquén. En el acta de visita realizada el 25 de octubre de 2012 pueden corroborarse los mismos. Ante la reclamación efectuada a la enjuiciada, respondió que la causa no era la obra, sino el alto tráfico vehicular.

El 30 de julio de 2014, Ana María Correa González en representación de la sociedad encartada, la administradora de la propiedad horizontal promotora y un representante del Abaco Internacional Loss Adjuster firmaron un acta en la que expresaron que los apartamentos no presentan mayor afectación, en cambio, el sótano sí.

El 16 de abril de 2015, María Paula Castro Rubio en representación de la compañía convocada y la administradora de la copropiedad elaboraron un acta, en la que aquella se comprometió a mitigar el impacto que tiene el desarrollo del proyecto, cuidar que no se interrumpa el fluido de la cerca eléctrica sobre el muro colindante, evaluar las afectaciones del edificio con ocasión de la obra, y a suscribir un contrato de transacción en el que se estableciera una suma global por concepto de reparaciones. Sin embargo, la demandada no la firmó.

En evaluación preliminar y diagnóstico de efectos colaterales

realizado por la Colegiatura Colombiana de Ingenieros y Arquitectos, entregada el 2 de marzo de 2017, destacó que la edificación El Árbol tiene presencia de grietas y fisuras causadas por construcciones vecinas, algunas de las cuales han sido intervenidas superficialmente, con una notoria inclinación de la construcción *"…en sentidos E-WyN-S…"*, separación de características progresivas con el inmueble vecino, deformaciones y fisuras en el andén de la carrera 13, asentamiento diferencial por encima de los límites permisibles. Además, los Edificios Altavista del Country y Altavista del Country Reservado han incrementado fallas en puertas, ventanas y tuberías de los apartamentos de la copropiedad actora, por continuos movimientos.

Los daños en la construcción se han incrementado por la desidia de la encausada, lo que conllevó a los interesados a iniciar proceso de responsabilidad civil que cursa en el Juzgado 26 Civil del Circuito de a ciudad, con radicación 2016-303. Aquella empresa no acudió a la audiencia de conciliación[2].

3.3. Trámite Procesal.

3.3.1. Admitido el libelo por auto del 30 de mayo de 2018, el Juzgado de Conocimiento vinculó a los Edificios Altavista del Country y Alta Vista Reservado del Country, así mismo dispuso su traslado al extremo pasivo[3].

3.3.2. El 2 de octubre de 2019, Gradeco Construcciones y Cia. S.A.S., se notificó a través de abogado del auto admisorio de la demanda. En oportunidad, el aludido mandatario judicial replicó el libelo, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de mérito denominadas: ***"…PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ENCAMINADA A LA***

[2] Folios 345 a 350 *ibídem*.
[3] Folio 366 *ibídem.*

***REPARACIÓN DE DAÑO CON OCASIÓN A LA RESPONSABILIDAD CIVIL…", "…INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA DEMANDADA GRADECO CONSTRUCCIONES & CIA S.A.S…", "…FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA RESPECTO DE LAS PRETENSIONES TENDIENTES AL RESARCIMIENTO Y/O PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES, EN CABEZA DE LOS BIENES PRIVADOS QUE HACEN PARTE DEL EDIFICIO EL ÁRBOL P.H.…"*, *"…ABUSO DEL DERECHO POR LA PARTE DEMANDANTE…", "…TEMERIDAD Y MALA FE…"* y la *"…ECUMÉNICA…"*. Adicionalmente objetaron el juramento estimatorio[4].

Además, promovieron llamamiento en garantía a la sociedad HDI Seguros S.A. antes Generali Colombia Seguros Generales S.A.[5]

Vinculada al diligenciamiento, la aseguradora contestó, se pronunció sobre las súplicas invocadas, objetó el juramento estimatorio y enfiló los enervantes que rotuló *"...**INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL**..." "…**COBRO DE LO NO DEBIDO Y CONSECUENTE PRETENSIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA**…"*. En el mismo escrito, dio contestación al llamamiento, frente al cual promovió las siguientes defensas *"…**INEXISTENCIA DE COBERTURA**…", "…**DEDUCIBLE PACTADO**…"* y la *"…**GENÉRICA**..."*[6]

Revocada la decisión que convocó a los Edificios Alta Vista del Country y Alta Vista Reservado del Country, y descorrido el traslado de las defensas por la parte activa, se convocó a las audiencias reguladas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. Evacuadas las etapas procesales pertinentes, el Juez advirtió que

[4] Folios 406 a 447 PDF 02ContuniacionPrincipal.
[5] Folios 20 al 23 PDF 01LlamamientoGarantia.
[6] Folios 58 al 69 *ibidem*.

emitiría la sentencia por escrito[7].

Tal decisión se profirió el 6 de octubre de 2020, en la cual declaró probadas las excepciones denominadas *"…inexistencia de responsabilidad por parte de la demandada…"* e *"…inexistencia del nexo causal…"*, propuestas respectivamente por la constructora y la llamada en garantía. Denegó las pretensiones y condenó en costas a la actora[8]. No impuso la sanción establecida en el artículo 206 del Código General del Proceso, al no advertir temeridad o mala fe al promover este litigio[9].

Inconforme la demandante interpuso recurso de apelación, concedido mediante auto de 23 de octubre siguiente[10].

4. LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Funcionario, luego de referirse a los antecedentes y encontrar reunidos los presupuestos procesales, delineó que el estudio de la responsabilidad entre vecinos por daños irrogados con la construcción de obras nuevas, debe abordarse de acuerdo con los postulados del artículo 2356 del Código Civil, por cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha calificado esa actividad como peligrosa.

Después pasó a describir los daños relacionados en el escrito genitor, los que la sociedad encartada reparó por haber sido consecuencia de la obra y los que aún persisten, avizorados cuando se levantaron las actas de vecindad que no tuvieron como causa los proyectos de la encausada.

---

[7] Folios 497, 498 y 500 *ibídem,* 73 a 75 del PDF 01LlamamientoGarantia. PDF 06ActaAudienciaInicial20200915, PDF 09ActaAudienciaInstruccion20200916, PDF 11ActaAudienciaInstruccion20200917 y PDFActaAudiencia20200918.
[8] PDF 15Sentencia 20201006.
[9] PDF 15Sentencia20201006.
[10] PDF 16CorreoMemoApelacion y PDF 17AutoConcedeApelacion20201023.

Refirió que ninguna de las pruebas obrantes refrendan el nexo causal entre la obra y los daños alegados, pues las fotografías solo verifican los inconvenientes existentes al momento de ser tomadas, el informe pericial practicado por la Universidad Nacional se limitó a cuestionar las reglas sismorresistentes, así como el trabajo arquitectónico y urbanístico aplicados en el Edificio Altavista Country. El laborío practicado por el ingeniero Aycardy dio cuenta del estado de la construcción para el año 2013; la testigo Olga Lilly Hazbom refirió todos los problemas que presentó el Edificio El Árbol cuando ella fue residente, algunos de los cuales eran previos a la suscripción de las actas de vecindad; y, Alexander Coy expresó que gestionó la elaboración de un informe de los problemas manifiestos. Además, tomó las fotografías adosadas con el libelo.

Igualmente, los deponentes Alfonso Uribe, Alfonso Castro y María Paula Castro, quienes tienen relación con la constructora encausada, adujeron que realizaron informes de interventoría, estudios de suelos y trámites de vecindad. Algunos de los daños se evidenciaron al momento en que se suscribieron las actas de vecindad, los cuales se pudieron agravar por el asentamiento del propio Edificio El Árbol. El problema del muro medianero se arregló. Declaraciones que valora porque coinciden con otros medios probatorios.

Por su parte, la versión de Otoniel Zárate se circunscribió a explicar y ratificar la experticia que realizó para la copropiedad en el año 2017, la cual aunque atribuye el origen de las averías señaladas en el escrito introductorio a las obras de la constructora demandada, incurrió en contradicciones que le restan mérito demostrativo, aunado no dio cuenta de los exámenes o estudios y medios técnicos efectuados para arribar a tal conclusión.

Las actas de vecindad y los documentos exhibidos por el extremo activo ratifican daños estructurales preexistentes desde 2010, sin que

las otras pruebas respalden que la causa de su agravación fue la construcción de las edificaciones que levantó la enjuiciada.

Por último, el dictamen practicado por Inegeotes S.A.S., mismo que no fue objeto de contradicción y es sólido en sus fundamentos, concluyó que la cimentación de las edificaciones atacadas estuvo acorde con los lineamientos técnicos vigentes, las condiciones del suelo. Las inclinaciones y daños del Edificio El árbol tienen origen en las características propias de su construcción.

Aseveró que como las probanzas reseñadas no acreditan que los daños presentes en el inmueble de la demandante se causaron por los dos conjuntos habitacionales que levantó la empresa llamada a juicio, salen airosas las defensas.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

5.1. El apoderado del extremo activante refutó que al momento de decidir el Juez pasó por alto el derecho a la dignidad humana y la prevalencia de los intereses colectivos a *"…la vivienda, ambiente sano, mínimo vital, entre otros…"*, puesto que los daños denunciados en el escrito introductorio con el pasar del tiempo han ido empeorando, como da fe el material fotográfico aportado.

Adicionalmente, llama la atención que en su oportunidad se adujera que no se encontraron conclusiones convincentes con los peritajes aportados o que no hay nexo causal entre la entidad demandante y la demandada, cuando se tiene certeza y convicción de los daños que se presentan en el Edificio El Árbol a la fecha, máxime cuando la sociedad reconoció que desde un inicio se presentaron averías, que ha estado dispuesta a remediar parcialmente; sin embargo, las mismas en su totalidad son atribuibles a ella y no a factores extraños.

Agregó que, si encontró que eran insuficientes los dictámenes realizados para acreditar el nexo causal, el Juzgador debió realizar una inspección judicial para verificar los hechos objeto de la *litis*. Aunado, tratándose de actividades peligrosas se presume *"…la responsabilidad en cabeza del constructor, el dueño de la obra o el propietario del bien en que se hace la edificación …"*. La construcción puede causar *"…**daños a los vecinos y a terceras personas, y de allí el dueño o el constructor de la edificación o la obra deban tomar las precauciones necesarias y poner el mayor cuidado en la ejecución de ésta para prevenir aquellos perjuicios y para conjurar la responsabilidad civil que tales daños podrían acarrearle**…".*

Finalmente, tras señalar los casos de desplome de construcciones ocurridos el 12 de octubre de 2013 en Medellín y el 27 de abril de 2017 en Cartagena, los cuales dejaron varias víctimas, aseveró que se debe evitar que pase algo igual con el edificio El Árbol P.H., con el fin de prevenir un perjuicio irremediable y brindar garantías a las personas que habitan en la copropiedad promotora, por lo que se debe emitir un fallo integral[11].

5.2. El apoderado de la pasiva replicó que las conclusiones del abogado de la parte contraria son temerarias e irrespetuosas, pues el bien de la activa no se está cayendo ni en estado de colapsar, situaciones por la que ya lo hubieran evacuado las autoridades competentes.

Añadió que el apelante no presentó ningún argumento fáctico, técnico o jurídico que desvirtuara las consideraciones del *a quo*, sus aseveraciones se basan en unas fotografías, de las cuales se desconoce la fecha en que se tomaron y quién lo hizo. En cambio, la

[11] PDF 16CorreoMemoApelacion20201013 y PDF 08Memorail – Contestación traslado del recurso de apelación.

compañía que representa adosó las actas de vecindad que dan cuenta que las deficiencias del edificio el Árbol eran preexistentes a las construcciones de su contendora, lo cual coincide con lo dicho por la testigo Olga Lilli Hasbon. Además se respalda en una experticia contundente que refrenda que los daños manifiestos en el Edificio El Árbol se deben a su propia construcción y no a las obras realizadas por Gradeco. Con estribo en ello, deprecó que se confirmara la sentencia[12].

5.3. La abogada de HDI Seguros S.A. arguyó que la valoración probatoria realizada por el Sentenciador fue adecuada, en tanto que las documentales arrimadas al litigio y los testigos respaldan la preexistencia de las afectaciones del inmueble de la promotora.

En adición, adujo que la carga de demostrar el nexo causal le corresponde a la activa y las circunstancias atinentes al resguardo de garantías fundamentales, así como el desplome de otras construcciones, son aspectos ajenos a la *litis*[13].

6. CONSIDERACIONES.

6.1. No encuentra esta Corporación reparo en cuanto a los llamados, por la doctrina y la jurisprudencia, presupuestos jurídico procesales como son capacidad para ser parte, para comparecer al proceso, demanda en forma y competencia. Además, de la actuación vertida en el plenario no se vislumbra vicio con entidad de nulitar en todo o en parte lo actuado, siendo viable emitir un pronunciamiento de fondo.

6.2. Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el señor Juez *a- quo* y la sustentación del recurso de

[12] PDF TRASLADOGradeco.
[13] PDF 12TrasladoGenerali.

apelación, se circunscribe a determinar, si a partir de las documentales -fotografías y pruebas técnicas- recaudadas en el plenario, está acreditado el nexo de causalidad entre el daño y la culpa, elemento de la responsabilidad civil demandada.

6.3. Todos los sistemas de responsabilidad civil, es decir, por el *hecho propio*, por el *hecho de otro* y por el *hecho de las cosas*, se basan en el postulado según el cual, la persona es obligada a resarcir el daño antijurídico que ocasione a otro como consecuencia del incumplimiento de un deber a su cargo.

La derivada de la construcción, encuentra su fundamento en la *responsabilidad por causa de las cosas*. De manera que, existe cuando el agente dasacata un imperativo jurídico relacionado con la custodia y vigilancia que se tiene sobre edificios, ya sea en el momento de hacerla, por razón de su ruina, por la demolición de los mismos o por un defecto de elaboración.

En otras palabras, si hay un desperfecto de obra, el daño se ubica en este tópico porque interviene en la causación del perjuicio como factor decisivo; y, en tal sentido, estará involucrado aquél que habiendo tenido la ocasión de controlar el riesgo no lo hizo.

Si el hecho ocurre durante el desarrollo de la labor, a juicio de la honorable Corte Suprema de Justicia, debe aplicarse, en ese ápice, un daño ocasionado por una actividad peligrosa, regida bajo los lineamientos del artículo 2536[14] del Código Civil.

Sobre este tópico ha reiterado la jurisprudencia patria que no se está en presencia de una responsabilidad objetiva, sino basada en el sistema de la *culpa presunta*, al decir que *"…Comúnmente sucede*

[14] "*...Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta*...".

que de la edificación moderna en varias plantas se desprenden daños considerables para las vecinas construcciones preexistentes, de pasado más o menos remoto. Esa actividad socialmente útil, es sin embargo, por su naturaleza peligrosa: la comprobación del daño por lo común esclarece también su causa eficiente, y la culpa del autor de la nueva obra se presume de conformidad con el artículo 2536 del Código Civil, como para toda persona que se ocupe de una actividad peligrosa…"[15].

De acuerdo con el anterior criterio, emerge palmario que en el ejercicio de una actividad peligrosa como la construcción se presume la culpa del autor de la obra nueva. Por tanto, en el presente asunto deviene imperioso que la promotora de la demanda de responsabilidad por construcción de obra nueva acredite los dos elementos restantes, esto es, el daño y el nexo causal. Así lo decantó el Alto Tribunal, en posterior pronunciamiento:

"…Es bien sabido que nuestra jurisprudencia explicó desde la mitad del siglo anterior que el artículo 2536 del Código Civil consagra una presunción de culpa, de suerte que para la prosperidad de la pretensión indemnizatoria sólo se requiere que esté probado en el proceso el daño y el nexo causal entre éste y la conducta del agente…"[16].

6.4. En el *sub lite*, el abogado de la actora reprocha que el Juzgador no encontrara demostrada la relación de causalidad, cuando los daños de su representada son manifiestos y se agravan con el pasar de los días, a punto tal que la sociedad encartada reconoció las averías que se presentaron en el edificio El Árbol con ocasión de la ejecución de sus obras. Así que, corresponde examinar si, en efecto,

[15] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 8 de mayo de 1969. Gaceta Judicial tomo CXXX, números 2310,2311 y 2312, páginas 104-105.
[16] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 12 de enero de 2018. Magistrado Ponente Doctor Ariel Salazar Ramírez.

se acreditó el aludido presupuesto, para acceder a las súplicas invocadas.

En el hecho décimo quinto de la demanda se indicó que *"…*[a]*l presentarse tales daños tan evidentes El EDIFICIO EL ÁRBOL – PROPIEDAD HORIZONTAL, el demandado GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S.A.S. realizó algunas reparaciones, apenas necesarias…"*, como arreglo de la pared grande, lavado de fachadas y otras obras realizadas por Magenpop S.A.S., contratista de aquella empresa[17].

Respecto de esta afirmación la compañía encausada admitió que no intervino lo necesario, sino lo que no se evidenciaba como preexistencia, según lo consignado en las actas de vecindad, levantadas para la construcción del edificio Reserva del Country, colindante con el edificio El Árbol, que corresponden a reconstrucción de los muros de los linderos sur y occidental, escaleras y andenes, desinstalación de fachaleta huella de la escalera del costado sur, enchapes del muro de cerramiento y jardineras, embotellamiento con mortero y lavado de estas, impermeabilización de las fachadas sur y occidental, limpieza de perfilería, ventanera y marquesina superior, sellado de fisuras en la zona de los contadores a gas y arreglo de cerca eléctrica[18], enchapes en el área de recepción, en el parqueadero del primer piso, reparación de fisuras en puntos fijos totales de torre 1 y torre 2, pintura salón social, sellado de fisuras entre muros, ladrillos, placas de áreas de apartamentos, puntos fijos, instalación de ladrillos en áreas de costados del ascensor, entrada al parqueadero, muros de bicicletero, apartamentos, así como resane de muros y pintura del cuarto de máquinas en torres 1 y 2[19].

En respuesta al literal k) del hecho séptimo del libelo, la demandada

[17] Folio 348 PDF 01 Principal.
[18] Folios 419 y 420 del PDF 02ContinuacionPrincipal.
[19] Folios 420 y 421 *ibídem*.

también aceptó que cambió el piso del salón comunal, pero la administración nunca quiso recibir la obra[20]. Así mismo, en los literales m), n) y o) del aludido hecho, reconoció que arregló las fisuras presentes en los costados occidental, oriental y sur, en aquel salón, en la administración, en los cuartos de máquinas. Además, lavó la fachada sur del edificio El Árbol, parte colindante con el proyecto Altavista reserva del Country y arregló el jardín[21].

Varias de las reparaciones antes reseñadas se entregaron por parte de Gradeco Construcciones S.A.S. en los años 2015 y 2016, como lo respaldan las actas aportadas[22].

Sin embargo, no por el hecho de haber realizado la empresa encausada las aludidas reparaciones puede colegirse que todos los daños enunciados en el escrito inaugural tuvieron origen en las construcciones Altavista del Country y Altavista Proyecto del Country, como lo pretende el impugnanate, si en cuenta se tiene que en las actas de vecindad se consagró la preexistencia de varias de estas afectaciones.

En efecto, en el acta de vecindad del proyecto Altavista del Country, levantada sobre el edificio El Árbol P.H. el 15 de junio y el 2 de julio de 2010, elevada a escritura pública número 5359 del 19 de octubre de 2011, se consignó que en el salón comunal puerta número 2 *"…se presenta una fisura en sentido horizontal en el muro, del costado izquierdo de la puerta número 2 al interior del salón comunal…"*[23], en la zona verde fachada sur existen fisuras en el piso, *"…asentamiento marcado entre la torre y los elementos rígidos apoyados sobre la zona verde que causan una dilatación*[24], en la escalera del piso 1 a 2 se

[20] Folio 411 *ibídem*.
[21] Folios 411 y 412 *ibídem*.
[22] Folios 324 a 330 del PDf 05Gaceta.
[23] Folio135 del PDF 01Tomo1A.
[24] Folio 142 *ibídem*.

encuentra *"…una pequeña fisura en el muro lateral…"*[25], en el piso 6 – interior 2 Hall costado oriental se aprecia *"…fisura perineal en la unión entre la placa y el muro…"*[26], en el sótano -placa cortapiso *"…se ve un cambio de nivel brusco entre el área de la placa y el restante, lo que afectó la placa dándole una ruptura en el sentido paralelo al muro occidental…"*[27], en el sótano bicicletero *"…se ve seriamente afectado un muro en ladrillo que está al lado del bicicletero, debido a una fisura que se marca en sentido vertical, la cual va de una cara del ladrillo a la otra cara…"*[28].

En las fotografías que le tomaron a la copropiedad demandante el 25 de julio de 2011, se observan varias fisuras en diferentes partes de las zonas comunes[29]. Igualmente, en el acta de vecindad realizada el 23 de junio de 2011 se dejó constancia que el andén adjunto a la copropiedad actora sobre la carrera 13 frente al futuro proyecto Altavista hacia el sur *"…se ve fisuramiento total de la placa en concreto que conforma el antejardín de esta área…"*[30], en la vista de calzada carrera 13 hacia la esquina de la calle 138 *"…se evidencian fisuras sobre la calzada longitudinales al igual que craquelamiento del asfalto…"*[31], y en la esquina nororiental de la calle 138 con carrera 13, se observa *"…andén en concreto totalmente deteriorado, fisurado y sardinel en concreto fracturado y se pierde continuidad…"*[32]. Además, hundimiento y rotura de la placa de concreto, andén en concreto fisurado, ubicados frente al Edificio El Árbol[33]. También se avizoran fisuras en las diferentes unidades habitacionales que integran el conjunto[34].

[25] Folio164 *ibídem.*
[26] Folio 334 *ibídem*.
[27] Folio 511 *ibídem*.
[28] Folio 525 *ibídem*.
[29] PDF 02Tomo B.
[30] Folio 9 PDF 03TomoC.
[31] Folio 11 *ibídem*.
[32] Folio 12 *ibídem.*
[33] Folios 16 y 17 *ibídem.*
[34] PDF 04TomoD, 05TomoE, 06TomoF, 07TomoG, 08TomoH, 09TomoI y 010TomoJ.

Por su parte, la Escritura Pública número 525 del 27 de febrero de 2014 de la Notaría 6 del Círculo de Bogotá contiene las actas de vecindad de unidades privadas y zonas comunes del Edificio El Árbol para la construcción del proyecto Altavista Reserva del Country, así como el respectivo registro fotográfico, tomados el 31 de julio de 2013. En estos documentos se advierten fisuras y hundimientos en los parqueaderos del primer piso, fisuras en algunos de los muros de los sótanos, en los muros de los contadores de acueducto y de los apartamentos, en los jardines y andenes ubicados en la carrera 13, costado norte y costado sur, en la zona de acceso a los parqueaderos, en la fachada principal, en la fachada sur, en el andén interior costado sur oriental, en el costado sur, en zonas comunes, en muros costado norte, en los bicicleteros y en los muros de algunos apartamentos[35].

De consiguiente, las averías antes referidas existían en la copropiedad promotora antes que la encartada iniciara las obras. Algunos de estos daños persisten y se han intensificado en la propiedad horizontal actora, tal como lo refrendan las fotografías adosadas con el escrito genitor[36] del jardín inferior costado sur, de la fachada interior y de los pasillos, de los jardines exteriores, de los muros de los contadores y de los bicicleteros, tomadas por Alexander Coy, en la época que fungió como asistente del administrador de aquella copropiedad -hace más de dos años- Igualmente, dio cuenta de tales inconvenientes al rendir su testimonio[37].

En este escenario de cosas, las memoradas probanzas, a diferencia de lo estimado por el recurrente, no acreditan que los detrimentos reclamados por la activa fueron generados por la ejecución de los proyectos de la convocada. Por el contrario, dan fe que muchas de dichas averías ya se encontraban en la construcción antes que la

[35] Folios 22, 25, 32,43, 54, 73, 78, 79 a 81, 91, 101, 113 PDF 11TomoK y 3, 27, 46, 63, 87, 121, 138, 143, 184 PDF 12TomoL, PDF 12TomoM y PDF 14TomoN.
[36] Folios 104 a 250 PDF 01Principal.
[37] Minuto 2:29 a 3:20 del archivo 10AudienciaInstruccion20200916.

accionada iniciara sus obras, motivo por el cual, el aludido registro fotográfico junto con el dicho de su autor, a lo sumo, respaldan los daños manifiestos en dicha copropiedad, pero no, insístase, que los mismos fueron ocasionados por Gradeco Construcciones S.A.S.

Agregado a lo precedente, como acertadamente lo consideró el *a quo*, ninguna de las pruebas técnicas arrimadas a las diligencias, demuestran que la causa de los detrimentos denunciados por la activa fueron las construcciones efectuadas por la contraparte.

De manera contrapuesta, el laborío realizado por Ingeotes S.A.S., presentado por la pasiva concluyó frente a los daños evidenciados en el Edificio El Árbol que *"…la excentricidad que tiene el edificio al contar con una zona de sótano y tres pisos de altura y una zona de sótano y seis pisos de altura, apoyado sobre una placa de cimentación, se producen asentamientos diferenciales cercanos a 10 cm tal como se ha medido en los controles de verticalidad efectuados. Estos movimientos y asentamientos diferenciales obedecen a dicha excentricidad y existen desde el momento mismo de construcción del edificio mucho antes de que las edificaciones vecinas iniciaran su construcción.*

Adicionalmente la placa de cimentación no cubre las zonas de plataforma oriental y occidental del Edificio El Árbol, sino estas se encuentran cimentadas superficialmente por los cimientos corridos de los muros de conexión y placas de cortapiso convencional. Debido a la diferencia de cargas en la zona donde existe placa de cimentación y la zona de plataformas se ha generado un escalón de aproximadamente 10 cm en la unión entre la placa de cortapiso y la placa de cimentación que es evidente incluso en las actas de vecindad efectuadas por Gradeco Construcciones SAS en el año 2011 antes de iniciar con la construcción de sus edificios.

Por lo tanto finalmente se concluye que los daños en las zonas de cimentación y las inclinaciones existentes en el Edificio El Árbol obedecen a sus propias características estructurales de cimentación, arquitectónicas y de construcción y que no han sido producidas por la construcción de los edificios Altavista Country y Altavista Reserva del Country… incluso sin la construcción de esas edificaciones el Edificio El Árbol presentaría los asentamientos totales y diferenciales que actualmente se observan, así como los escalones en las placas de sótano entre la placa de cimentación y la placa de contrapiso…"[38].

De forma tal que este elemento de juicio antes que corroborar que las obras de la enjuiciada fueron la causa eficiente de los daños alegados, la descarta. La Sala le da la contundencia persuasiva que esta probanza se merece, porque además de no haber sido controvertida por la contraparte, es seria y exhaustiva, se encuentra respaldada en los diferentes estudios y análisis que se efectuaron a la edificación afectada, explica los métodos e investigaciones realizadas, así como los fundamentos de las conclusiones, los datos, los títulos académicos y la experiencia de la perito[39].

De otra parte, el concepto técnico que rindió la Universidad Nacional sobre el proyecto Altavista del Country, para la acción popular tramitada en el Juzgado 22 Administrativo de esta Urbe, poco o nada aporta al caso en lo concerniente al origen de los detrimentos padecidos por la actora, en tanto que se limita a indicar que la licencia de construcción de aquel edificio *"…se expidió con base en la NSR-98, la cual aplicó hasta el 15 de diciembre de 2010. Debido a que los diseños estructurales aprobados por parte de Curaduría Urbana No. 4 de este edificio fueron aprobados con posterioridad al vencimiento de la NSR-98 (planos y memorias de fecha marzo de 2011), por ética profesional, por garantizar un buen comportamiento sísmico del*

[38] Folios 37 y 38 del PDF01Gaceta.
[39] PDF 01Gaceta, 02Gaceta, 03Gaceta, 04Gaceta y 05Gaceta.

edificio, por proteger la vida de cientos de personas y el patrimonio de los ciudadanos, se debió cambiar y diseñar el sistema estructural del proyecto a un sistema estructural permitido por el Reglamento NSR-10…"[40].

Tampoco, el informe de interventoría integral sobre el proyecto Altavista Country, realizado por AIC Aycardi Ingenieros Civiles S.A. corrobora el origen de los perjuicios alegados por la demandante, pues se circunscribe a corroborar el estado de aquella obra para julio de 2013[41].

Por último, el informe sobre la evaluación preliminar y diagnóstico de efectos colaterales a nivel estructural del edificio El Árbol, realizado por Otoniel Castro Zárate de la Colegiatura colombiana de Ingenieros y Arquitectos, refirió como característica de tal construcción que *"…es relevante y notoria una inclinación de la edificación en sentidos E-W y N-S, con una separación de características progresivas, con el edificio vecino del constado norte, haciéndose necesario descartar una posible afectación estructural…"*[42].

En cuanto al estado actual de la edificación aseveró que *"…presenta un asentamiento de cabeceo sentidos E-W y N-S en 6° piso en 1.30 cms y en sótano 12.0 cms, situación anómala estructuralmente, la cual requiere una medición puntual y su comprobación con equipo de alta precisión, piso a piso a fin de definir si requiere de intervención estructural que evite su aumento…"*

"Aparentemente podemos definir que la edificación no solamente presenta un asentamiento diferencial anómalo, por encima de los límites permisibles, sino que también los edificios ALTAVISTA DEL COUNTRY y ALTAVISTA DEL COUNTRY RESERVADOS, han

[40] Folio 25 del PDF 01principal.
[41] Folios 255 a 338 del PDF 01Principal.
[42] Folio 3 PDF 20Prueba20OtonielCastroZarate.

ocasionado en forma acelerada una afectación al edificio EL ÁRBOL que han venido incidiendo en el incremento de las fallas como se viene registrando en puertas y ventanas de los apartamentos, así como en las tuberías que presentan fugas por giros o movimientos continuos…"[43].

En las conclusiones resaltó que *"…**al fin DE establecer con certeza el tipo de construcción del edificio EL ÁRBOL y la afectación actual de la misma, así como los aspectos técnicos que servirán como acervo probatorio para los requerimientos ante la constructora y/o ante las autoridades se requiere:** revisión documentos…, diseños estructurales…, estudios de suelos…, estudios y evaluación de archivos y documentos…, arquitectónica, control hídrico…*

En el informe final se deben establecer todas las pruebas técnicas que nos sirvan tanto de control de anomalías estructurales, geo-hidráulicas propio de la obra, para ser ejecutadas por la copropiedad EDIFICIO EL ÁRBOL o que en su lugar sean el soporte y base de apoyo jurídico para cualquier demanda que se instaure a los constructores…"[44].

Sobre esta probanza, concierta la Colegiatura que, según se colige de la lectura del laborío y del interrogatorio practicado en audiencia a su autor Otoniel Castro Zárate[45], ella atribuye las averías advertidas a las construcciones vecinas realizadas por la demandada; conclusión a la llegó tras realizar una evaluación preliminar respecto al estado del edificio El Árbol, sin efectuar estudios de fondo ya que solo realizó mediciones vía laser; circunstancia que conlleva a que el trabajo pierda fuerza demostrativa.

[43] Folio 3 *ibídem*.
[44] Folios 3 a 6 *ibídem.*
[45] Hora 3:22 a 4:37 del archivo 10AudienciaInstruccion20200916.

A la anterior razón, se suma otra de peso para desestimar la experticia, en la medida que se basó en meras apreciaciones del ingeniero Castro Zárate, en la medida que atribuyó el origen de los daños posiblemente a las construcciones vecinas, las condiciones de suelo, las sobrecargas laterales ocasionadas por las obras aledañas y las excavaciones. Al punto que admitió, al ser indagado, que aquellas eran meras hipótesis de la causa de las afectaciones del inmueble de la actora, más no una conclusión[46].

Una prueba en esas condiciones, esto es, carente de soporte técnico y de métodos que respalden sus apreciaciones, como lo aceptó el perito en interrogatorio efectuado en audiencia, desconoce lo impuesto en el inciso 5° del artículo 226 del Código General del Proceso, según el cual en el dictamen se deben explicar "…*los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones…".*

Las falencias descritas conllevan a no acoger la pericia, dado que era necesaria la confluencia de las exigencias previstas en el aludido artículo 226 *ejúsdem*, para acogerlo como medio de convicción.

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, ha señalado que: "...*el artículo 226 del Código General del Proceso prescribe que todo dictamen,* ***para asignársele mérito demostrativo****, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesión, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los títulos*

[46] Hora 4:36 *ibídem.*

académicos y la prueba de su experiencia; (vi) señalar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado técnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situación que le impida actuar como perito..."[47] –negrilla fuera de texto-.

Como si no fuera poco, también le resta eficacia demostrativa a la referida prueba técnica la ausencia de sus fuentes y la metodología implementada para llegar a las conclusiones allí plasmadas, como lo exige el artículo 237 *ejúsdem*. Memórese que sobre el punto el Alto Tribunal precisó:

"… *En atención a las exigencias del citado artículo 237 del C. de P. C., las referidas omisiones imponen desestimar la experticia en estudio, pues "uno de los requisitos sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que versa, consiste en que sea debidamente fundamentado; y que compete al juzgador apreciar con libertad esa condición, dentro de la autonomía que le es propia, no obstante que el dictamen no haya sido materia de tacha u objeción de las partes en el traslado correspondiente"*[48]*, a lo que se añade que el artículo 241 del C. de P. C. "da al juzgador amplitud de juicio y de criterio para fijar en cada caso el valor de un peritazgo, sin estar forzado nunca a admitirlo o rechazarlo mecánica o ciegamente*…"[49] –subrayado original-.

Lo discurrido, trae consigo la desestimación del trabajo practicado por el profesional Otoniel Castro Zárate, y de contera, la ausencia de demostración del nexo causal, elemento integrante de la responsabilidad civil extracontractual demandada.

---

[47] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto AC1911-2018 del 15 de mayo de 2018. Expediente 11001-02-03-000-2018-00972-00. Magistrado Ponente Doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
[48] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 2 agosto de 2006. Expediente 6192.
[49] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de mayo 20 de 1992. Gaceta Judicial CCXVI páginas. 440 y 441.

Ergo, a la luz de los medios probatorios reseñados, se tiene, entonces, que no se logró acreditar la relación de causalidad entre el daño y la culpa. De ahí que anduvo afortunado el Juzgador de primer grado en así declararlo, para tener por demostradas las excepciones que alegaron y negar las pretensiones.

6.5. Los motivos de censura edificados en que el Juez *a quo* al fallar pasó por alto el derecho a la dignidad humana, así como la prevalencia de los intereses colectivos, aunado, la sentencia debe garantizar los derechos de los habitantes, antes que ocurra el desplome de la edificación, corresponden a argumentos novísimos en razón a que no fueron alegados por la parte activa en la demanda ni el decurso de la primera instancia.

Al respecto, concierta la Sala que tal aspecto no debe tener cabida, porque el extremo activo no los planteó en la oportunidad que legalmente procedía, es decir, como estribo del *petitum*, circunstancia que le impide proponerlo en esa sustentación. Si se admitiera su disertación, produciría el inmediato desconocimiento del principio de la preclusión que informa las actuaciones judiciales, especialmente las civiles y, de contera, terminaría sorprendiendo a la parte contraria de la *litis* con un supuesto frente al cual no tuvo oportunidad de pronunciarse para rebatirlo, trasgrediendo de manera franca el debido proceso que hoy por hoy se erige de rango constitucional[50].

Dicho en otros términos, se trata de una situación que resulta sorpresiva para la parte demandada, quien, se insiste, no contó con la oportunidad de formular sus defensas frente a una pretensión

[50] *Al respecto tiene dicho el ente Colegiado "…En repetidas ocasiones esta Corporación ha censurado la conducta de las partes cuando se evidencia un repentino cambio de postura o actitud frente al litigio, como quiera que tales giros desconocen la buena fe y lealtad que ha de presidir una contienda, a la vez que infringen el derecho de defensa, en la medida en que introducen elementos y argumentos ajenos a los extremos originales del pleito, frente a los cuales, por razones obvias, la contraparte no ha contado con una adecuada oportunidad para contradecirlos o cuestionarlos, (cfr. sentencias de 27 de marzo de 1998, exp. 4798, 4 de abril de 2001, exp. 5667, y 3 de mayo de 2005, exp. 04421-01, entre otras)*".

fundamentada bajo esa perspectiva. Siendo ello así, la Sala no ahondará sobre el particular.

6.6. Atañedero al reproche efectuado al *a quo* por no practicar la inspección judicial si consideraba que las pruebas recaudadas eran insuficientes para estructurar la responsabilidad demandada, debe señalarse que no tiene recepción, ya que no le es dable al apelante volver en la alzada sobre un aspecto procesal que quedó zanjado por el fallador de conocimiento en el decurso de la instancia, al cerrar la etapa probatoria y correr traslado para alegar de conclusión, decisión que por demás no fue refutada en oportunidad[51].

Acerca de la aludida regla, el Tribunal de cierre ha dicho "…[o]*pera también la preclusión, y tienen que acatarse por tanto sus efectos propios, cuando dentro de la oportunidad señalada el litigante ejercita válidamente la facultad de que se trata, pues es apenas obvio pensar que* ***si el derecho se ejerció anteriormente, la decisión judicial correspondiente deba producir como consecuencia la clausura de la respectiva etapa del proceso, impidiendo que la misma pretensión pueda ventilarse nuevamente en el mismo*** (…)".[52] (resalta la Sala).

6.7. Corolario, dado que los argumentos del impugnante no tuvieron acogida, se impone confirmar la sentencia apelada. Costas en esta instancia a cargo de la actora, por cuanto sus inconformidades no hallaron recepción en esta sede.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, en **SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL**,

[51] Minutos 31:45 a 33:50 del archivo 12Audiencia Instruccion20200917, 1:00 a 4: 06 del archivo 14Audiencia20200918 y folios 506 a 517 PDF 02ContinuacionPrincipal.
[52] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 10 de mayo de 1979.

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

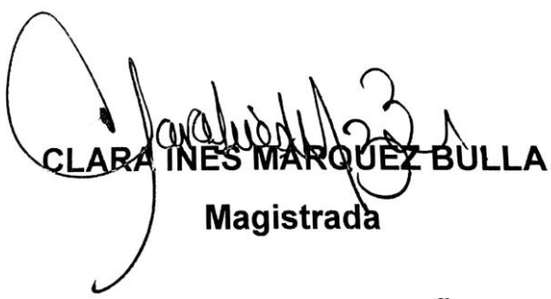
7.1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2020, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad.

7.2. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante. Liquidar en la forma prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso.

7.3. DEVOLVER el expediente a su Despacho de origen. Oficiar y dejar constancia.

La Magistrada Sustanciadora fija la suma de $ 3’000.000.oo como agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE,



CLARA INES MARQUEZ BULLA
Magistrada



S
ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
-con excusa-

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiún (2021).

Ref. 11001 3103 **038 2017 00641 02**

Demandante: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE

Demandado: INMACO EJE LTDA

Magistrada Sustanciadora: MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Se fijan dentro del asunto de la referencia como **AGENCIAS EN DERECHO** de esta instancia, el equivalente a UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo del extremo demandado.

Notifíquese y Cúmplase,

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Magistrada

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
31ba466d2d138e51124e618ba23d05e81176e7474561c464984e6624fcb83ec8
Documento generado en 26/03/2021 07:37:43 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

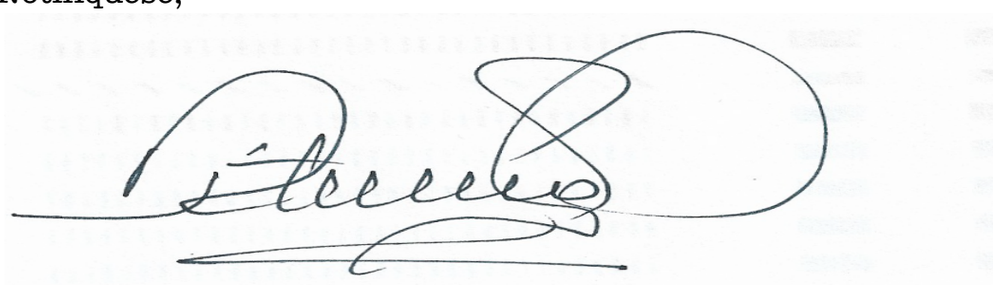
Proceso:	Ejecutivo Hipotecario
Demandante:	Banco Popular S.A.
Demandado:	Álvaro Fernando Cendales Nieto y otra
Radicación:	11001310303920030059O 04
Procedencia:	Juzgado 4º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá

Sobre la petición radicada el 25 de marzo último por el apoderado de la parte demandada debe ilustrarsele que la competencia de esta Colegiatura, en los términos del artículo 328 de la ley 1564 de 2012, se agotó cuando en el AUTO de 10 de diciembre del año retropróximo se resolvió sobre el recurso de apelación propiciado contra el proveído que el 28 de agosto de 2019 se expidió en primera instancia.

Debidamente notificada la providencia de la suscrita, por estado electrónco E-142 del 11 de diciembre de 2020 y sin que se hubiese presentado solicitud alguna, quedó ejecutoriada y adquirió firmeza porcesal, por lo que el expediente fue retornado a la oficina judicial de origen el 3 de febrero del año que vivimos.

Ergo, no resulta viable definir sobre la tardía solicitud que ahora se hace.

Notifíquese,



RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:

RUTH ELENA GALVIS VERGARA

MAGISTRADA

Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d7a6fe8bfd67f1195aade01bb22f98afb9160753b5e167fcb7bbd8ffc9498b28**

Documento generado en 26/03/2021 09:27:36 AM

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiún (2021).

Ref. 11001 3103 **040 2016 00571 02**

Demandante: CESAR AUGUSTO PINEDA

Demandado: ALBERTO CHALEM B. Y OTRO

Magistrada Sustanciadora: MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Se fijan dentro del asunto de la referencia como **AGENCIAS EN DERECHO** de esta instancia, el equivalente a UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo del extremo demandante.

Notifíquese y Cúmplase,

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Magistrada

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5d641685d3a9509085a6dcd78b9f61d014ffe95d30321558723f1b9e80515039
Documento generado en 26/03/2021 03:11:42 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA CIVIL

Radicación: 040-2017-00604-01

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

REF.: VERBAL DE OLGA MARIA ADAME CONTRA OLGA ROMERO Y CIA S. EN C, Y OTROS.

Proyecto discutido y aprobado en Sala y Acta Dual de veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

I. ASUNTO

Procede la Sala Dual a resolver el recurso de súplica, interpuesto por la parte demandante contra la providencia de 29 de enero de 2021, por medio de la cual la Magistrada sustanciadora, negó decretar las pruebas pedidas en esta instancia.

II. ANTECEDENTES

1. La apoderada judicial de la demandante radicó el 15 de enero de 2021 en el correo institucional de la secretaría del Tribunal, escrito de sustentación del recurso de apelación solicitando el decreto de unas pruebas, con el fin de "*establecer los hechos y pretensiones de mi sustentación*", para lo cual anexó unos documentos que adujó no pudo presentar con la demanda, porque se encontraban en las respectivas fiscalías.

2. En providencia de 29 de enero de 2021, la Magistrada Sustanciadora negó la petición de pruebas invocada por la parte demandante, porque no fueron solicitadas dentro de la oportunidad prevista en el inciso primero del art. 14 del Decreto 806 de 2020.

3. Inconforme con lo decidido, interpuso el recurso de reposición, el que conforme lo dispone el parágrafo final del art. 318 del C.G.P., se le dio el trámite de súplica, argumentando que cuando concretó los reparos a la decisión proferida el 19 de noviembre de 2020 por la Juez 40 Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de ese mes y año remitió al respectivo correo electrónico, las pruebas documentales que pretende sean tenidas en cuenta y decretadas; además refirió que en el término de ejecutoria del auto que admitió la apelación, con el escrito de sustentación las relacionó de nuevo, es decir, que las aportó con la debida antelación.

III. CONSIDERACIONES

1. El artículo 331 del Código General del Proceso, consagra que el recurso de súplica "***procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Sustanciador en el curso de la segunda o única instancia***…" (Negrillas añadidas).

En este orden, como quiera que es objeto de súplica la decisión que dispuso negar el decreto de una prueba, que conforme al numeral 3º del artículo 321 de la citada Codificación, es apelable, se procederá a su estudio.

La inconformidad de la recurrente, radica en el hecho que contrario a lo resuelto, las pruebas que pidió debieron decretarse, porque en el escrito de sustentación del recurso

de apelación reiteró dicho pedimento, como quiera que, en el memorial de los reparos a la decisión presentado ante el Juzgado de primer grado ya había solicitado el decreto de pruebas; y agregó que, efectuó esa petición porque esas documentales no las pudo presentar con la demanda, toda vez que las Fiscalías no dieron trámite a las peticiones en donde las solicitó.

En el caso en estudio, revisado el expediente electrónico de la referencia, se advierte que la apoderada judicial de la apelante, radicó en el correo institucional del Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, escrito denominado "*memorial reparos concretos apelación*", en el cual manifestó, que aportaba unos documentos que no pudo presentar con la demanda porque se encontraban en poder de la fiscalía.

Este Tribunal el **14 de diciembre de 2020,** admitió el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de dicha anualidad por la Juez a-quo, y la apoderada judicial de la recurrente radicó el 15 de enero de 2021 el escrito de sustentación, donde de nuevo hizo alusión a los documentos que adjuntó con el documento denominado "*memorial de reparos concretos a la decisión*".

Así las cosas, como las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, se advierte que, los medios probatorios que pretenden sean decretados y practicados, no se solicitaron dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la alzada, como lo establece el inciso primero del art. 14 del Decreto 806 de 2020, plazo que feneció el 12 de enero del año en curso; luego entonces, la petición de medios probatorios pedidas en primera instancia y con el escrito de sustentación en segunda, resultan ser, extemporáneas.

Aunado al hecho, que, la citada relación de documentos, no se encuentra soportada en alguno de los casos previstos por el artículo 327 del C.G.P., en consecuencia, se confirmará la decisión emitida por la Magistrada Ponente.

En virtud de lo expuesto el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Dual de Decisión**,

RESUELVE

Primero: Confirmar el auto de 29 de enero de 2021 proferido por la Magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Sin lugar a condena por costas procesales por no aparecer causadas.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
Magistrada

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
Magistrado

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 018 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9e597faa00f53c8ee2e8bf52b2dbd857d093d16ee7040a913f238477a68f654a
Documento generado en 26/03/2021 03:14:54 PM

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Hora: 4:00 p.m.

Radicación: **11001-3103-040-2018-00011-01**
Asunto. Declarativo.
Recurso. Apelación Sentencia.
Demandante. Gloria María Garzón Gaitán.
Demandado. Rosa María Silva.

A propósito del informe secretarial que antecede, advierte el Tribunal que, ciertamente, proferida la sentencia que da lugar a la apelación, y una vez admitida la misma, el recurrente remitió un escrito dirigido a esta Corporación, sustentando el recurso, por lo que, consecuentemente, se continuará con el trámite de la impugnación, pues dictada la providencia apelada en vigencia del Decreto 806 de 2020[1], esto es, el 16 de diciembre del año pasado, con arreglo al cual el trámite de la alzada es esencialmente por escrito, salvo las eventualidades expresamente señaladas por dicho cuerpo normativo, es ostensible que dicha manera de sustentación cae dentro de los criterios expresamente señalados por el Decreto citado, concluyendo así que resulta oportuna.

A cuenta de lo dicho, se tendrá por sustentado el recurso y ordenará a la Secretaría que dé traslado al no apelante.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- **TENER POR SUSTENTADO** el recurso de apelación interpuesto por Gloria María Garzón Gaitán frente a la sentencia proferida en primera instancia, dentro del asunto citado en la referencia.

[1] Decreto que empezó a regir a través de su publicación, esto es, desde el 4 de junio de 2020.

Segundo.- Ordenar a la Secretaría dar traslado de éste a la contraparte.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -SALA CIVIL

Correo: *des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co*.

Radicación: (040) 2019-00162-02

Bogotá, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref.: PROCESO VERBAL DE ANDRES Y DANIEL RAMIREZ MOLANO CONTRA YULI CONSUELO JIMÉNEZ DÍAZ.

I. ASUNTO

Corresponde al Tribunal decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la decisión proferida en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2021 por la Juez 40 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se rechazó de plano el incidente de nulidad.

II. ANTECEDENTES

1. La recurrente solicitó la nulidad de lo actuado porque la demandada no se notificó en legal forma, aduciendo que el aviso judicial de notificación que fue enviado a la casa objeto del proceso se dejó en la portería, y sólo tuvo conocimiento de la acción iniciada en su contra cuando regresó al predio el 5 de diciembre de 2019, hechos con los cuales se configura la nulidad constitucional del art. 29 de la Constitución Política.

2. La juez *a quo* en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2021, con fundamento en el inciso 4º del artículo 135 del C.G.P., rechazó de plano la nulidad planteada, teniendo en cuenta que la actuación procesal se encuentra saneada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del art. 136 Ibidem.

3. Inconforme con lo resuelto la recurrente interpuso el recurso de apelación, concedido en el efecto devolutivo en auto proferido en la cita audiencia, del cual se ocupa actualmente el Despacho.

III. CONSIDERACIONES.

De entrada, se advierte que la providencia apelada será confirmada, toda vez que el fundamento de la inconformidad del apelante es la irregularidad ocurrida en la diligencia de notificación, porque el aviso judicial quedó en la portería del conjunto, no se le entregó y sólo tuvo conocimiento de la acción cuando regresó al predio el 5 de diciembre de 2019, configurándose una violación al debido proceso consagrado en el art. 29 de la Constitución Política.

Toda vez que, el primer acto procesal efectuado por la apoderada judicial de la demandada, el 11 de diciembre de 2019 fue presentar recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda por "*falta de legitimación en la causa por activa*", que se rechazó de plano; y promover un incidente de nulidad de la demanda fundado en la causal de "*carencia absoluta de la parte pasiva"* sin hacer mención al acto de notificación, negado en auto de 18 de febrero de 2020, decisión que fue confirmada por esta Corporación.

Así las cosas, se evidencia que si existió alguna irregularidad en el acto procesal de notificación, éste se encuentra saneado; si en cuenta se tiene que, la afectada cuando concurrió al proceso por medio de su abogada no la propuso, de donde se infiere que desperdició la posibilidad para alegar la invalidez de lo actuado, y no puede alegarla posteriormente, pues era imperativo de conformidad con lo dispuesto en la norma procesal, proponerla al momento de concurrir al proceso[1] (inc. 2 art. 135 C.G.P.).

Aunado a lo anterior, tampoco es procedente pretender invalidar lo actuado con fundamento en la "*nulidad constitucional del art. 29 de la C.P.*", como quiera que la norma procesal vigente, establece de manera taxativa las causales generadoras de invalidez, y no le es permitido invocar un motivo distinto a los determinados en el art. 133 Ib, para anular alguna actuación surtida dentro del proceso, por lo que corresponde rechazar de plano la solicitud.

Por lo expuesto el **Tribunal Superior de Bogotá, D.C.,**

IV. DECISIÓN

Primero: Confirmar el auto proferido en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2021 por la Juez 40 Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente. Liquídense por la Secretaría, teniendo en cuenta por

[1] La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, respecto al saneamiento de las nulidades ha dicho: "Según *el principio de convalidación que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: 'si el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia tácita o expresa de la parte que sufre lesión por la nulidad. (…) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha (…)"* STC2623-2020

concepto de agencias en derecho, la suma de 1 salario mínimo (1 SMLMV).

Tercero: Disponer la devolución de las actuaciones, al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
fc51a448b533169be4b2611f166f80aec94631341f3a7e67ebbdc813be7943e9
Documento generado en 26/03/2021 03:47:14 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Radicación.	**11001-3103-041-2007-00629 03**
Asunto.	Responsabilidad Civil Extracontractual
Demandante.	Juan Carlos Ramos Buitrago
Demandado.	Radio Taxi Aeropuerto. S.A. y Otros.

Decídese el recurso la reposición interpuesto por el demandante contra el auto proferido el 16 de diciembre de 2020, mediante el cual fue concedido el recurso de casación formulado por la parte demandada y, a efectos de disponer la suspensión del cumplimiento de la sentencia, se fijó el monto de la caución correspondiente en la suma de $450’000.000 (inciso 4° del artículo 341 del C.G.P.).

A cuyo propósito se **considera:**

1. Al conceder el recurso extraordinario que interpuso la demandada contra la sentencia que profirió esta Corporación el pasado 10 de noviembre del año anterior, se le ordenó prestar caución en la suma señalada, con el fin de disponer la suspensión del cumplimiento del sobredicho fallo, cifra que se estimó suficiente para garantizar los perjuicios que puedan llegar a causarse a la parte beneficiada con la condena mientras se surte el recurso en la Corte Suprema de Justicia.

2. La parte actora, sin embargo, esgrime que ese monto es insuficiente en el propósito de garantizar los perjuicios a que se refiere el inciso 4° del artículo 341 del C.G.P., pues, resumidamente, no tiene en cuenta ni el monto de la condena fulminada en contra de la demandada, recurrente en casación, que asciende a $1.118’698.429.09, ni

mucho menos los frutos que esa suma devengarían mientras el cumplimiento de la sentencia esté aplazado, amén de que no garantiza siquiera el 50% de aquella cifra.

3. Ciertamente, reza el citado precepto, que "*en el término para interponer el recurso podrá el recurrente solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia, ofreciendo caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquélla*", carga pecuniaria que "*sin duda refleja el interés de hacer efectivo el derecho sustancial reconocido en la sentencia*" (Cas. Civ. Auto de 26 de marzo de 2007; exp. 1996-00757-01).

4. Aquí, volviendo sobre el monto de la fianza fijado en el auto recurrido, considera el Tribunal que éste no solo se atempera a los lineamientos que señala la norma en mención, sino que, medularmente, se ofrece razonable de cara a los propósitos que tiene una caución como la señalada, como que teniendo ésta como objetivo garantizar los eventuales perjuicios que la suspensión del cumplimiento de la sentencia pueda causar a la parte demandante mientras se tramita la casación, es ostensible que esos $450'000.000 cubren todas las eventuales circunstancias en que un perjuicio pudiera derivarse para ese litigante ganancioso que, en el caso contrario, estaría habilitado para ejecutar sin contratiempos la sentencia.

4. A la verdad, fijada la caución en un monto que equivale proporcionalmente al 40% de la cifra en que se cuantificó la indemnización que debe pagar la recurrente en casación a la parte demandante, se estima que, inclusive, ésta se muestra suficiente para cubrir los intereses -en que se concretan los frutos de una suma líquida de dinero- que los $1.118'698.429.09 producirían durante el trámite del recurso extraordinario, situación que sin más abundamientos, impone mantener en su integridad el auto recurrido.

RESUELVE

Primero. **MANTENER** la decisión adoptada en el auto proferido el 16 de diciembre de 2020, por los argumentos explicitados en esta providencia.

Segundo.- En firme este pronunciamiento, **contabilizar** el término otorgado en la memorada providencia para la constitución de la caución allí ordenada y, una vez vencido, reingrese el expediente al despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
(Discutido y aprobado en Salas 08 y 09 del 19 y 26 de marzo de/2021)

Decide la Sala, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los opositores Henry Neira Rozo, contra el auto del 26 de marzo de 2019 que rechazó de plano la oposición a la diligencia de entrega del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50C-300458.

I.- ANTECEDENTES

1.- Las señoras Elizabeth y Luisa Eva Rivera Rivera, por medio de apoderado judicial iniciaron en contra de Gloria Inés Castro de Neira, un proceso para que se decretara la división por venta del inmueble ubicado en la calle 63C 35-92, identificado con el folio de matrícula 50C-300458.

2.- Mediante auto del 3 de septiembre de 2012, el Juzgado 41 Civil del Circuito declaró en venta *ad valorem* en pública subasta el predio y decretó el secuestro.

3.- La anterior cautela se llevó a cabo el 14 de febrero de 2013, por intermedio de comisionado; diligencia atendida por Henry Neira Rozo a quien el secuestre, le entregó el inmueble en depósito gratuito provisional, empero, se negó a firmar el acta.

4.- El 23 de marzo de 2017, se adjudicó el predio en pública subasta a favor de Leonardo Barón Rincón, por un valor de $859.100.000 y en providencia del 17 de julio del mismo año, fue aprobada la diligencia de remate.

5.- Como el auxiliar de la justicia no hizo la entrega del inmueble subastado en favor del adjudicatario, el Juzgado de conocimiento, comisionó a la Alcaldía Local para que la realizara.

El 18 de octubre de 2018, la Alcaldía Local de Barrios Unidos llevó a cabo la diligencia; no obstante, se admitió la oposición propuesta por los hoy apelantes y se remitió el expediente al Juzgado comitente, dejando el predio, mientras se resolvía lo planteado, en manos de Henry Neira Rozo.

6.- El Juzgado 51 Civil del Circuito, en proveído del 26 de marzo de 2019, rechazó de plano la oposición, con fundamento en el art. 456 del Código General del Proceso; decisión que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

7.- -con excusa-El 6 de mayo de 2019, el Juzgado aclaró que el rechazo de la oposición se hizo para todos los interesados en el asunto, no repuso el auto fustigado y concedió la apelación.

II. CONSIDERACIONES

8.- El recurso de apelación se circunscribe a cuestionar el rechazo de plano de la oposición a la entrega del bien inmueble ubicado en la calle 63C 35-26 de Bogotá, propuesta por Henry Neira Rozo, Henry Francisco, Claudia Aydé, Jorge Enrique, Miguel Ángel, Olga Lucía Neira Castro, Guiovany Alexander Neira Silva, Johanna Patricia Quevedo Delgado, Julieth Tatiana Neira Ramos, Sonia Inés Ramos Corredor, Henry Oswaldo Neira Ramos y María Teresa Pérez Álvarez, quienes alegan ser poseedores desde hace más de 30 años y ante el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito, el señor Henry Neira Rozo, adelanta desde 1987, proceso de pertenecía sobre aquél, aportando certificación de la existencia del proceso, la demanda y estado actual del litigio.

9.- Sea lo primero advertir que, de acuerdo a la manifestación del apoderado, la alzada hace referencia, únicamente, al derecho reclamado por el señor Henry Neira Rozo, toda vez que adicionado el auto cuestionado, se incluyó el rechazo a todos los opositores y aquellos permanecieron silentes.

De otra parte, la providencia recurrida se confirmará, atendiendo las razones que se exponen a continuación:

9.1.- Para analizar "*la viabilidad de rechazo de plano de las oposiciones a la diligencia de entrega cuando el bien fue adquirido producto de un remate,*" existen tres reglas procesales de notable relevancia, los artículos 308, 456 y 411 del Código General del Proceso.

La primera de ellas, textualmente indica: "*Para la entrega de bienes se observarán las siguientes reglas: (…) 4)* ***Cuando el bien esté secuestrado*** *la orden de entrega se le comunicará al secuestre por el medio más expedito. Si vencido el término señalado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien,* ***a petición del interesado se ordenará la diligencia de entrega, en la que no se admitirá ninguna oposición*** *y se condenará al secuestre al pago de los perjuicios* (…)" (art. 308 C.G.P.)

Ahora, en lo pertinente, el artículo 456 es del siguiente tenor literal: "*Entrega del Bien Rematado. Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, el rematante deberá solicitar que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) días después de la solicitud**. En este último evento no se admitirán en la diligencia de entrega oposiciones**, (…).*"

Acompasado con lo anterior, el artículo 411 del estatuto procesal adjetivo, abre la posibilidad para que, los terceros con interés sobre un inmueble cuya división se tramita, al momento de la diligencia de secuestro, hagan su oposición acreditando en debida forma su interés y de resultar triunfante, los derechos de los comuneros, tendrán otra connotación, veamos: "*Cuando el secuestro no se pudiere realizar por haber prosperado la oposición de un tercero, se avaluarán y rematarán los derechos de los comuneros sobre el bien, en la forma prevista para el proceso ejecutivo.*"

En síntesis, cuando un presunto poseedor aspira a salvaguardar su derecho dentro de un proceso divisorio,[1] tiene la oportunidad procesal de así manifestarlo, bien en el decurso de la práctica de esa diligencia o dentro de los cinco (5) días posteriores a la realización de la misma, según se encuentre asistido o no por abogado, o dentro de los siguientes veinte (20) días, si no se hallaba presente en el sitio. (arts. 596 y 309 C.G.P.)

9.2. En el sub judice el apelante Henry Rozo, fue quien atendió la diligencia de secuestro practicada el 14 de febrero de 2013, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Descongestión, así se lee en el acta: "*Acto seguido el personal de la diligencia procede a trasladarse a la calle 63C 35ª-26 de esta ciudad, donde fuimos atendidos por el Henry Neira Rozo identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.080.017, quien informado de la diligencia, nos permite y manifiesta: Yo vivo acá, soy hijo de una de las partes.*" Al final aparece la nota "*Manifiesta no querer firmar.*"

De la lectura de ese documento no se evidencia que el interesado haya planteado oposición alguna, tampoco lo hizo dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la cautela; los demás opositores, aunque no estuvieron allí presentes, permanecieron silentes y sólo hasta la realización de la entrega (18 de octubre de 2018) el primero y los otros, argumentaron la oposición.

Cierto es que, obra certificación expedida por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito y copia de algunas piezas procesal, donde se colige que el prenombrado señor Neira Rozo, adelanta juicio de pertenencia sobre el aludido predio, cuya demanda fue admitida por el Juzgado Veinticuatro de idéntica categoría, en proveído del 26 de enero de 1988 (fl. 7 C 4), proceso activo en el que no se ha tomado decisión de fondo, pues a la fecha aún no se ha integrado el contradictorio porque la demanda ha sido archiva en múltiples ocasiones. Empero, tal circunstancia tampoco no fue

[1] *Artículo 2334 del Código Civil en concordancia con el artículo 406 del C.G.P.*

expresada a manera de oposición ante el Juez que practicó el secuestro o en los días posteriores, según se explicó.

A su vez en la anotación 3 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-300458, aparece la inscripción de la demanda de pertenencia aludida en el párrafo anterior, no obstante, tal suceso por sí solo, no impone al Juez el deber de considerarla como una oposición a las pretensiones de los comuneros, menos aún, cuando el proceso de pertenencia lleva más de 30 años sin un avance significativo. De ahí, que refulge imperativo para quienes tengan legítimo interés en la oposición, proponerla y sustentarla jurídica y fácticamente, aspecto que0 brilló por su ausencia, en la oportunidad procesal establecida por la Ley.

9.3.- Ahora, el hecho de que la Alcaldía comisionada, en la diligencia practicada el 18 de octubre de 2018, haya admitido el trámite de la oposición, no implica per se, que el Juez de conocimiento deba seguir atado a una resolución contraria a la normativa procesal.

Sobre el punto, podemos citar la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia STC7513-2019 del 10 de junio, donde se consideró que el rechazo de la oposición propuesta en una diligencia de entrega, era contrario a derecho, en ese caso particular, el bien objeto de reivindicación no había sido secuestrado[2], por ende, tratándose de terceros, se viabilizaba la oposición, así se explicó: "*Lo anterior, deja en evidencia que el juez de la causa obró al margen del precepto legal que, de manera obligatoria, debía aplicar ante la intervención de terceros que materialmente detentaran el inmueble objeto de la entrega.*"

Contrario sensu, en el caso que ocupa la atención de esta corporación, el opositor apelante estuvo presente en la diligencia de secuestro realizada dentro del juicio divisorio y ni durante el desarrollo de la misma, ni con posterioridad, manifestó la calidad que argüida en la diligencia de entrega. Recuérdese que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento y aceptar el trámite de la oposición propuesto en la entrega de un bien que fue rematado, resulta contrario al ordenamiento jurídico, específicamente a los artículos 308, 456 y 411 del Código General del Proceso.

9.4.- Corolario de lo anterior, ante la inminencia del rechazo de la oposición formulada en la diligencia de entrega de un inmueble rematado dentro del litigio divisorio, deviene imperativo para esta Sala, la desestimación del recurso de apelación.

---

[2] *"(…) se dio trámite al incidente de oposición y el 11 de diciembre de 2018, se rechazó, con fundamento en lo previsto en el numeral 1º del artículo 309 del Código General del Proceso, toda vez que estimó que la sentencia de restitución de tenencia producía efectos contra la opositora, por tratarse de la esposa de uno de los demandados." (STC7513-2019 del 10 de junio).*

II.- DECISIÓN

Por mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. **RESUELVE**

PRIMERO: Confirmar el auto del 26 de marzo de 2019, aclarado el 6 de mayo del mismo año, proferidos por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito dentro del proceso divisorio incoado por Elizabeth Rivera Rivera y otra contra Gloria Inés Castro de Neira (hoy sus herederos), conforme a lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por no aparecer causadas.

TERCERO: Devolver oportunamente el proceso al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
[Ausencia justificada]



CLARA INES MARQUEZ BULLA
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Expediente No. 042201200206 03

De conformidad con el artículo 339 del Código General del Proceso, se concede al recurrente el término de diez (10) días para que aporte un dictamen pericial relativo a la cuantía del interés para recurrir en casación, la cual deberá estimarse para el día 16 de marzo de 2021, fecha en que se dictó la sentencia de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3f33cb1a7635f306e89505de3d0b37afcb82d25bad806aeec6a2673db0556505
Documento generado en 26/03/2021 10:25:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Sala Civil

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: Proceso ejecutivo de David y Yuly Paola Moncada Soler contra Santiago Javier Moncada Soler.

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra el auto de 12 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado 42 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia para revocar el mandamiento de pago, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Según el artículo 422 del CGP, que es norma suficientemente conocida y depurada por la jurisprudencia y la doctrina, para que exista título ejecutivo se requiere de un documento que provenga del deudor o de su causante, desde luego plena prueba contra él, en el que conste una obligación expresa, clara y exigible, es decir, un deber de prestación que aparezca manifiesto o explícito, que identifique sus elementos (sujetos y objeto), y cuyo cumplimiento puede reclamarse por el acreedor.

Así lo ha precisado este Tribunal al señalar que,

> […] para librar mandamiento de pago, es necesario presentarle al juzgador un documento que, entre otros requisitos, contenga una obligación clara, expresa y exigible a cargo del ejecutado (art. 488 C.P.C), es decir, que aparezca explícita y determinada en el título en cuanto a su naturaleza y elementos, amén que se pueda reclamar su cumplimiento, bien porque la obligación es pura y simple, ora porque el plazo expiró o la condición a la cual estaba sometida, se verificó. Desde luego que, en adición, el título debe provenir del deudor y constituir plena prueba contra él (ib.).
>
> Por consiguiente, no podrá adelantarse ejecución alguna sin la presencia de un documento que califique como título ejecutivo (*nulla executio sine*

> *titulo*), lo que quiere significar que la orden de apremio tiene que apoyarse, necesariamente, en un documento que, por sus características, le ofrezca al juzgador un grado de certeza tal, que de su simple lectura quede acreditada, al menos en principio, la existencia de un derecho personal insatisfecho.[1]

2. En este caso no se disputa la exigibilidad de la obligación de hacer cuyo pago se persigue, específicamente la de suscribir "la correspondiente escritura pública" a favor de los recurrentes, cuando cumplieran la mayoría de edad, condición que se acreditó con las cédulas de ciudadanía de cada uno de ellos (doc. 01, p. 24).

La controversia, en estrictez, apunta a la expresividad y claridad de esa obligación, pues con la demanda se pretende que Santiago Javier Moncada otorgue y suscriba el instrumento público de compraventa de la nuda propiedad, a favor de David y Yuly Paola Moncada, "respecto de la cuota parte equivalente al 33.33% para cada uno…", sobre el bien identificado con la matrícula No. 50N-20263777. Sin embargo, los documentos aportados no precisan la tipología del acto jurídico a celebrar, ni el derecho real que se debe transferir, ni el porcentaje que, según los apelantes, debe ser objeto de disposición.

En efecto, al proceso se allegó la escritura pública de compraventa No. 2298 de 6 de abril de 2004, otorgada en la Notaría 37 de Bogotá, mediante la cual la señora Lindaura Soler Álvarez le transfirió al demandado la nuda propiedad sobre el referido inmueble, pues se reservó el derecho de usufructo (doc. 01, p. 8 a 21), así como un documento firmado por el ejecutado el 6 de agosto de esa anualidad, en el que se refiere "que esta compra se realizó con dinero de… David Moncada Soler, tarjeta de identidad #89.011364900 de Bogotá, Yuly Paola

---

[1] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 3 de marzo de 2003, exp. 2320010236 01.

Moncada Soler con la tarjeta de identificación #1020713667 de Bogotá y el suscrito en partes iguales", por lo que se comprometía "a hacer la correspondiente escritura pública a cada uno de los menores al momento en que cumplan la mayoría de edad" (doc. 01, p. 24).

Desde esta perspectiva, aunque el Tribunal aceptara, en gracia de la discusión, que analizados en conjunto esos documentos podría inferirse que "la escritura pública" requerida concierne a la nuda propiedad, lo cierto es que el mandamiento ejecutivo no podía librarse en la medida en que no se puntualizó cuál es el negocio jurídico que ella debe incorporar (¿compraventa? ¿donación?), lo que, desde luego, no se puede suponer puesto que la obligación, se insiste, debe ser clara y expresa. Que los demandantes consideren que dicho acto tiene que ser una "compraventa" (así aparece en la demanda y en el modelo que allegaron), no es suficiente para imponer la orden de apremio puesto que es el título ejecutivo, proveniente del deudor, el que debe precisarlo.

Expresado con otras palabras, en este caso la obligación no es expresa, por lo menos en cuanto a la clase de título que debe otorgarse, ni es claro el deber de prestación a cargo del ejecutado.

3. Así las cosas, se confirmará el auto apelado, máxime si se considera que las falencias aludidas no son requisitos meramente formales del título, propiamente dicho, sino rasgos esenciales de la obligación cuyo pago se pretende, por lo que, en esta hipótesis, sí es procedente el reexamen por parte del juez, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia en múltiples pronunciamientos[2].

---

[2] Cfme: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC4053 de 22 de marzo de 2018, y sentencia en sede de tutela de 13 de marzo de 2019.

No se impondrá condena en costas, por no aparecer causadas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, **CONFIRMA** el auto de 12 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado 42 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
cf24caee186bba6bc080aac8f18443403e9224f464d1b7b64425bc1fb445246d
Documento generado en 26/03/2021 11:28:00 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Proceso verbal de pertenencia instaurado por Rafael Andrés Zamora Jurado contra Myriam González Jurado, Luz Marina González Jurado, como herederos determinados de la señora Aracely Jurado viuda de González, herederos indeterminados de Aracely Jurado viuda de González y demás personas indeterminadas. Rad. No. 11001310304420180008701.

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

En los términos del artículo 14 del Decreto Legislativo número 806 de 2020, mediante proveído calendado del diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se corrió traslado al apelante por el término de cinco (5) días a efectos de sustentar el recurso interpuesto.

Vencido en silencio el término anterior por parte del demandante, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final, del numeral 2º, del artículo 322 del Código General del Proceso **SE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN.**

Ejecutoriada esta providencia, regrese el expediente a su lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 012 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0f419484d27fdce605386abe5c776d772f0f8867815e95df1fcf8dbbb7389d9b
Documento generado en 26/03/2021 03:57:08 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021. Hora: 4:00 P.M.

Radicación.	11001-3103-044-2019-00262-01
Asunto.	Ejecutivo.
Recurso.	Queja
Demandante.	Liliana Pedraza Beltrán.
Demandada.	Inversiones y Negocios Cerros de Oriente - Cerroriente en Liquidación.

Decídese el recurso de queja interpuesto por la demandada frente al auto emitido el 20 de octubre de 2020, por cuya virtud el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, negó la alzada propuesta contra el proveído del 24 de septiembre anterior.

ANTECEDENTES

1. Por auto de 24 de septiembre de 2020, el juzgador de primera instancia negó la solicitud de ordenarle al opositor en la diligencia de secuestro del bien inmueble embargado, prestar caución, pues consideró que no existe una fuente formal para imponérsela.

2. Oportunamente la encartada recurrió esa decisión, directamente en apelación, pero el a quo negó el recurso vertical, comoquiera que la decisión no es objeto de alzada.

3. La recurrente formuló contra este último pronunciamiento reposición y en subsidio queja, argumentando que a voces del numeral 8º del artículo 321 del C.G.P esa determinación es apelable.

4. El *a-quo* confirmó la providencia impugnada, soportado en que la taxatividad es una característica de ese tipo de réplica, que implica que solamente las sentencias y algunos autos son susceptibles de ese recurso, por ello la decisión de no concederlo debe mantenerse, pues ningún precepto autoriza la alzada contra ese precepto.

Subsecuentemente, concedió la queja, la que ahora es objeto de decisión, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Esta Corporación[1] asentó que el recurso de queja sólo permite discutir una cuestión de eminente técnica procesal, consistente en la viabilidad de la apelación denegada por el *a-quo*. Por consiguiente, no fue diseñado para controvertir la justeza de una decisión judicial.

Dicho de otro modo, la competencia funcional del superior en sede de queja se circunscribe exclusivamente a precisar la procedencia o no del recurso vertical denegado, con prescindencia de cualquier otra consideración sobre la legalidad o juridicidad de los razonamientos expuestos por el juzgador de primer grado.

2. De cara a la situación fáctica planteada, no resulta posible conceder la alzada propuesta contra el proveído de 24 de septiembre de 2020, en tanto el Código General del Proceso -cuerpo normativo aplicable al *sub lite*- no prevé como apelable la determinación del juzgador de negar la fijación de una caución a cargo del opositor en la diligencia de secuestro. Así, contrario a lo expresado por la convocada, la

[1] Tribunal Superior de Bogotá, S. Civil, autos de 20 de noviembre de 2003, exp. 1994-06552-03, y 29 de marzo de 2007, exp. 2003-00342-02 (M.P. Ariel Salazar Ramírez), entre otros.

disposición contenida en el numeral 8º del artículo 321 *ibídem* lo que establece es que ese recurso sí procede contra el auto que fija el monto de una caución para decretar, impedir o levantar una medida cautelar, y no, se itera, contra el que la deniega.

Recuérdese, en materia de apelación de autos impera el sistema de la taxatividad (numerus clausus), conforme al cual únicamente son censurables por esa vía los pronunciamientos frente a los que el legislador así lo autorice[2] y, por ende, no es posible acudir en este punto, a interpretaciones extensivas o analógicas.

3. Corolario de lo discurrido, se declarará bien denegada la apelación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente al auto de 24 de septiembre de 2020 dentro del proceso de la referencia.

Segundo.- En su oportunidad, **devolver** las diligencias a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

[2] *FORERO SILVA, Jorge. Oralidad en los procesos civiles -Código General del Proceso-. Módulo de Aprendizaje Autodirigido del Plan de Formación de la Rama Judicial. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2014, pág. 130.*

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Radicación: 1101-3103-044-2019-00262-02
Asunto: Ejecutivo
Recurso. Apelación Auto
Demandante: Liliana Pedraza Beltrán.
Demandado: Inversiones y Negocios Cerros de Oriente Ltda. - Cerroriente Ltda., en Liquidación.

Decídase lo pertinente respecto a la apelación interpuesta por la ejecutante frente a la decisión proferida en audiencia el 11 de noviembre de 2020, por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la oposición a la diligencia de secuestro, incoado por Quenedi Osorio Sierra.

ANTECEDENTES

1. **El auto recurrido**. El juez de conocimiento negó la solicitud de rechazar de plano la oposición al secuestro, formulada por la actora al descorrer el traslado del despacho comisorio que fue agregado al expediente, por considerar que aquella se presentó oportunamente y conforme al artículo 309 del C.G.P, al que se remite por disposición expresa del numeral 2º del artículo 596 *ibídem*, y, además, refirió que requería decretar de oficio otras pruebas, para establecer los hechos discutidos y adoptar una decisión de fondo.

2. **La censura**. La recurrente rebatió esa providencia, en reposición con alzada subsidiaria, cimentando su disenso, en el hecho que la oposición

presentada no podía tenerse en cuenta, comoquiera que la realizó la persona que ostentaba la tenencia del predio, sin que en el plazo legal haya comparecido el poseedor a ratificarla. Relievó que, el escrito presentado por este último, donde impetró incidente de levantamiento de medidas cautelares (13 nov. 2019), no cumple con ese cometido, pues ya fue objeto de pronunciamiento por parte del despacho quien optó por rechazarlo de plano (20 nov. 2019).

3. **Análisis del caso en concreto**. Como es bien sabido, en materia de apelación de autos, el Código General del Proceso consagró el sistema de la taxatividad (numerus clausus), conforme al cual únicamente son censurables por esa vía los pronunciamientos frente a los que el legislador así lo autorice[1] y, por contera, no es posible acudir en este punto, a interpretaciones extensivas o analógicas.

3.1. Así, a la luz del numeral 9º del artículo 321 del Código General del Proceso solamente será apelable el auto "que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano".

Nótese, que de cara al aspecto toral de la norma, y comoquiera que el artículo 596 *ídem*, referente a la oposición a la diligencia de secuestro, impone la aplicabilidad del artículo 309 de la norma en cita, en principio el proveído que resuelva una oposición al secuestro o la rechace de plano, también sería objeto de alzada.

No obstante, ocurre que en el caso *sub-júdice* el auto atacado, en estrictez, negó el rechazo de plano de la oposición a la diligencia de secuestro, exhortada por la actora, toda vez que para el *a-quo* la solicitud fue presentada tempestivamente, y, asimismo, indicó que, previo a tomar una decisión de fondo, era menester decretar los medios probatorios; por consiguiente, esa determinación no es susceptible de estudio mediante el recurso vertical, pues, no está enlistada en el precitado artículo ni en norma especial.

---

[1] *FORERO SILVA, Jorge. Oralidad en los procesos civiles -Código General del Proceso-. Módulo de Aprendizaje Autodirigido del Plan de Formación de la Rama Judicial. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2014, pág. 130.*

Lo anterior, al margen de la legalidad o juridicidad de los razonamientos expuestos por el juzgador de primer grado, pues lo cierto es que ese asunto ni siquiera se ha resuelto, o rechazado de plano, todavía está en trámite, por cuanto el comisionado envió el despacho comisorio debido a la insistencia en el secuestro por parte del interesado, para que fuera el comitente quien dirimiera la controversia. Al respecto ha precisado la Corte Suprema de Justicia que *"lo que habilita la intervención del "juez de conocimiento", esto es, del "comitente", es entonces el "caso" en que "admitida la oposición" por el "comisionado", "el interesado insista en el secuestro", ya que en tal evento, se itera, esa directriz se torna temporal y quien tiene la última palabra sobre ella es aquel funcionario una vez haya "decretado y practicado las pruebas solicitadas por aquel y por el tercero"*[2].

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- Declarar **INADMISIBLE** el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, contra la decisión de no acceder al rechazo de plano de la oposición a la diligencia de secuestro presentada por el tercero poseedor Quenedi Osorio Sierra, proferida en audiencia del 11 de noviembre de 2020, por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso citado en la referencia.

Segundo.- Devolver el expediente al juzgado de origen.

Hora: 4:00 P.M.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

[2] *Corte Suprema de Justicia - Sala Civil, STC 16133 de 7 de diciembre de 2018, exp. 2018-00278-01,M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.*

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO EJECUTIVO
RADICADO No. 11001310304520200011301
DEMANDANTE: DECORACIONES Y CINTAS LTDA.
DEMANDADO: JORGE ELIÉCER GÓMEZ GÓMEZ

I. ASUNTO A DECIDIR

Sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra el proveído calendado 8 de septiembre de 2020 emitido por el Juzgado 45 Civil del Circuito de la ciudad, a través del cual negó el mandamiento de pago solicitado.

II. ANTECEDENTES

1. En el auto censurado, la autoridad judicial estimó que la escritura pública presentada como base de la acción no satisface los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, pues de allí *"no se desprende una obligación clara y expresa en virtud de la cual el señor Jorge Eliecer Gómez Gómez se hubiere obligado a cancelar a la sociedad demandante la suma de $430´000.000.oo"*. Sostuvo que *"aunque en su primera cláusula se señala que el ejecutado se considera deudor del ejecutante en virtud de un contrato de mutuo entre ambos, ninguna precisión, adicional a un plazo, se hizo en torno a él de la que pueda inferirse la existencia de una obligación clara y expresa a cargo de aquél"*, y en las demás cláusulas *"se constituye la garantía hipotecaria que, se puntualiza, es un negocio jurídico independiente de aquél, de manera que tampoco sirve como título base de la ejecución".*

2. Inconforme con la decisión, el extremo ejecutante interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación. Adujo que el título adosado sí reúne las exigencias de ley, y adicionalmente, que en la escritura "*de manera*

inequívoca se pactó entre las partes el plazo de veinticuatro (24) meses, el cual empezó a contarse a partir de la firma del citado instrumento público, y prorrogable por el mismo lapso de conformidad a lo pactado en la cláusula segunda (…)*".*

3. En auto adiado 3 de noviembre de 2020, el *a quo* decidió la reposición de manera desfavorable y concedió la alzada interpuesta en subsidio.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

1. A juicio de esta instancia, la negativa de librar el mandamiento de pago solicitado resulta acertada, por las razones que se exponen a continuación:

1.1. El artículo 422 del Código General del Proceso consagra que pueden demandarse ejecutivamente los documentos que contengan obligaciones claras, expresas, exigibles, provenientes del deudor y que constituyan plena prueba contra él.

1.2. En el caso bajo estudio, se aportó la escritura pública N° 3752 de fecha 18 de octubre de 2016 de la Notaría 17 de Bogotá, en la que se consignaron las siguientes estipulaciones:

> *"PRIMERO.- MUTUO: Que LA PARTE HIPOTECANTE SE DECLARA DEUDORA EN VIRTUD DEL PRÉSTAMO O MUTUO, que le otorga LA PARTE ACREEDORA por UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES, el cual empieza a contarse a partir de la fecha de la firma del presente instrumento público, pagadero en una (1) cuota al finalizar el plazo.*
>
> *SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA.- Que mediante el presente documento LA PARTE DEUDORA constituye HIPOTECA ABIERTA, SIN LÍMITE DE CUANTÍA a favor de la sociedad DECORACIONES Y CINTAS LTDA. DECORCINTAS…denominado LA PARTE ACREEDORA sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50S-40300065 y que se determina más adelante EN VIRTUD DEL PRÉSTAMO O MUTUO, por el plazo prorrogable de VEINTICUATRO (24) MESES, el cual empieza a contarse a partir de la fecha de la firma del presente instrumento público.*
>
> *(…)*
>
> *SEXTO. FORMA DE PAGO.- LA PARTE DEUDORA cancelará el valor del préstamo a la PARTE ACREEDORA al cumplimiento del plazo de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la fecha de la firma del presente instrumento público, que podrán ser prorrogados* (…)"[1]

[1] Folios 15 a 43, archivo "03AnexosDemanda.pdf".

A partir de lo reseñado, se deduce que, en efecto, las partes celebraron un contrato de mutuo por el cual el señor Jorge Eliécer Gómez Gómez se declaró deudor de la sociedad ejecutante, habiéndose comprometido a cancelar la obligación en el plazo de veinticuatro (24) meses, y como garantía constituyó hipoteca abierta sobre el inmueble antes mencionado. No obstante lo anterior, véase que en el referido instrumento público nada se dijo sobre el valor mutuado, lo que impide determinar de manera clara y precisa el monto de la acreencia reclamada por el censor.

1.3. Igualmente, advierte el Tribunal que, si bien es cierto a folio 28 del expediente, reposa un documento mediante el cual el representante legal de la sociedad demandante certificó a la Notaría la aprobación del crédito en la suma de $430.000.000, éste no logra suplir la deficiencia anotada como quiera que en el mismo escrito se mencionó que el préstamo fue aprobado a la "*sociedad INVERSIONES GÓMEZ GÓMEZ LTDA.*", y no al demandado, aunado a que tampoco se encuentra suscrito por el deudor, circunstancia que le resta claridad al título ejecutivo, incumpliendo así las exigencias contenidas en el precitado artículo 422 de la codificación procesal.

2. Los anteriores motivos son suficientes para confirmar la decisión de primer grado, sin que haya lugar a imponer condena en costas por no aparecer causadas, al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada sustanciadora integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C.,

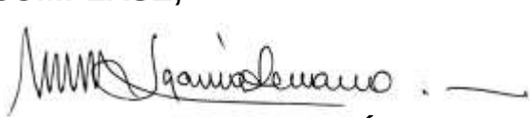
IV. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 8 de septiembre de 2020 por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, por las razones señaladas en este proveído.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: ORDENAR la devolución del expediente a la autoridad de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 009 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9e6439dc4945ed09ec0aea4fa932341213f989cb9fe8bfb0e4f2f3b472431cce
Documento generado en 26/03/2021 04:48:43 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: RICARDO ACOSTA BUITRAGO

DEMANDANTE	**:**	Hospital Fabio Tobón Uribe.
DEMANDADO	**:**	Medimas EPS SAS.
CLASE DE PROCESO	**:**	Ejecutivo singular.
MOTIVO DE ALZADA	**:**	Apelación auto

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto, en subsidio del de reposición, por el demandante en contra del auto proferido por el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de agosto de 2020, en el que negó el mandamiento de pago pretendido porque "no se alle[gó] documento alguno que preste mérito ejecutivo en contra de la ejecutada"[1].

LOS RECURSOS

La parte censora alegó que (i) el inciso 2º del Decreto Ley 806 del 4 de junio de 2020 dispuso que "[l]as demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos…". No obstante, la normatividad citada no contempló las limitaciones prácticas del ejercicio, ya que el aplicativo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para la radicación de las demandas únicamente permite subir archivos que no superen las 20 Megas; (ii) los títulos contentivos de los derechos de crédito objeto de ejecución y sus soportes están integrados en archivo de 75.6 Megas, por lo que, a pesar de los numerosos intentos, no fue posible cargar en su totalidad los documentos anexos al escrito de la demanda; y (iii) si la demanda no contaba con la totalidad de los anexos, debía ser inadmitida, no rechazada[2].

[1] 0004AutoRechaza. PDF, expediente digital.
[2] 0005Recurso ib.

El 7 de septiembre de 2020 el *a quo* confirmó la decisión reiterando que "con la demanda no se acompaño ningún documento que preste mérito ejecutivo".

El expediente se radicó en el Tribunal el 12 de febrero de 2021.

CONSIDERACIONES

Para resolver los reparos formulados basten los siguientes argumentos:

Primero, en punto de la imposibilidad de incorporar las facturas en el sistema de "Demanda en Línea" debido al límite del tamaño de los archivos que se anexan, debe decirse que, en efecto, el portal admite que se carguen varios archivos los que no pueden superar, en total, los 50 MB, no 20MB, como afirmó el apelante; sin embargo al margen de ello, lo relevante es que a la demanda no se adjuntó alguna de las 139 facturas enunciadas en la demanda, ni siquiera se hizo alusión a la imposibilidad de cargarlas en el sistema, lo que tampoco se demostró con los recursos formulados, dejando desprovista de cualquier comprobación las afirmaciones que realizó la parte demandante.

Decantado lo anterior, debe decirse que este tipo de proceso tiene como base un título ejecutivo constituido en uno o más documentos, que reúnan los requisitos determinados en el artículo 422 del C.G.P., además, que contengan una obligación *clara, expresa y exigible*. Presentada la demanda corresponde al juez de conocimiento calificar el báculo de la acción, a la luz de la precitada norma, en aras de establecer la existencia de la obligación cuyo cobro se pretende y su mérito ejecutivo. Lo dicho, con el fin de resaltar la importancia de la actuación judicial inicial, pues la orden de apremio que se erija, deberá corresponder a las pretensiones de la parte demandante y fija los derroteros del litigio.

Entonces, es evidente la importancia del documento que se aporta con la demanda, que no puede ser calificado meramente como un anexo más, en tanto "las acciones ejecutivas [son] aquellas soportadas en un

título que lleva ínsita su ejecutabilidad y mediante el cual se insta el cumplimiento de la obligación" (SC 5515 de 2019 del 18 de diciembre de 2019).

Entonces, si con la demanda se dejaron de aportar las facturas cuya ejecución se pretende, obviamente tampoco se podía realizar la calificación de su mérito ejecutivo a la luz del artículo 422 del C.G.P., ni de la legislación comercial que regula esos títulos valores; por ende, se imponía el rechazo, como lo coligió el juez de primera instancia, no su inadmisión, porque, se repite, no se trataba de subsanar algún defecto asociado a lo requisitos formales de la demanda, ni de aportar un anexo, sino que el libelo adolecía del título ejecutivo, lo que impedía incluso la estudiar la posibilidad de deprecar la orden de apremio.

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia prenotada, de conformidad con lo aquí discurrido.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por no encontrarse causadas.

TERCERO: Devuélvase la presente actuación al despacho de origen. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

REF: ORDINARIO DE FERNANDO BUSTOS TRUJILLO contra FRANCISCO ANTONIO DE JESÚS PRIETO. Exp. 2013-00615-02.

Procede el Magistrado Sustanciador a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el proveído del 10 de julio de 2020, pronunciado en el Juzgado 47 Civil del Circuito de de Bogotá, por el cual se rechazó de plano el incidente de regulación de perjuicios.

I. ANTECEDENTES

1.- Mediante memorial presentado el 26 de junio de 2019, Francisco Antonio de Jesús Prieto, actuando a través de apoderado judicial, presentó incidente de regulación de perjuicios para que se tasen los mismos, ocasionados con la práctica de medidas cautelares que en su contra se materializaron en el proceso de la referencia (fls. 1-2, doc. "01cuadernoincidente.pdf").

2.- La Juez a quo mediante proveído de 10 de julio de 2020 rechazó de plano el mismo, al considerar que fue presentado de manera extemporánea, pues la petición se radicó con posterioridad al término establecido en el artículo 283 de Código General del Proceso, conforme el cual el incidentante contaba con 30 días siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior para formular la solicitud.

Al respecto señaló que el auto de obedézcase y cúmplase se emitió el 9 de julio del 2018 (fl. 4, ibídem).

3.- Inconforme con la decisión, el extremo convocante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, con fundamento en que la sentencia fue registrada el 18 de febrero de 2019 y que en realidad el incidente inició el 15 de mayo de ese mismo año, pero la solicitud fue corregida el 26 de junio de 2019 por orden del juez. Añadió que debe

atenderse que el expediente estuvo al despacho en varias ocasiones lo que le impidió su revisión y por ende formular la petición de perjuicios (fls. 5 y 6, ib).

4.- Mediante auto adiado 19 de octubre de 2020 se mantuvo la decisión cuestionada y, en su lugar, se concedió la alzada que ahora se analiza (fls. 8 y 9, ej).

II. CONSIDERACIONES

1.- Dispone el artículo 283 del Código General del Proceso que "la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados".

Enseguida prevé que: "(...) En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que ***deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior****. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho (...)" (Resalta el Tribunal).*

2.- En el asunto sub-examine se presenta la alzada con miras a determinar si el incidente de liquidación de perjuicios planteado por la parte demandada en proceso verbal fue oportuno, para ello advierte el Tribunal que el examen de tal aspecto se hará en consonancia con si hubo o no condena en perjuicios.

En efecto, si se mira bien lo acontecido en el proceso, se llega a la conclusión de que en la sentencia que puso fin al litigio de fecha 5 de octubre de 2017, la cual quedó ejecutoriada pues en esta instancia se declaró desierto el recurso de apelación, ***no se condenó ni concreta, ni abstractamente en perjuicios*** *a la parte demandante.*

Véase al respecto que tanto en la parte considerativa, como en el numeral segundo de la parte resolutiva del citado fallo se dijo que la condena contra el extremo actor era en costas ante la improsperidad de las pretensiones (fl. 422, cdno. 1), sin que el extremo convocado, acá incidentante, hubiese hecho uso de las herramientas procesales disponibles para solicitar la modificación de tal resolución.

De ese modo, aunque el rechazo del incidente fue acertado, también la juzgadora de primer grado debió reparar en que los motivos para su repudio eran distintos.

3.- En todo caso, si alguna duda subsistiere se observa que la radicación del incidente sí fue extemporánea pues, sin duda, entre la fecha en que se emitió el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior -9 de julio de 2018- y la formulación de dicha petición, mediante escrito idóneo -26 de junio de 2019- transcurrió casi un año, es decir, se excedió, por mucho, el plazo permitido por el legislador para acudir al trámite, generando, consecuentemente, la extinción del derecho que reclamó el acá apelante.

4.- En conclusión, habrá de confirmarse la decisión censurada, a la que se suma la razón agregada en este proveído, atendida la circunstancia que al señor Francisco Antonio de Jesús Prieto no le asistía derecho alguno para la proposición del trámite incidental. Habida cuenta que no se presentó oposición frente al recurso de alzada, este despacho se abstendrá de imponer condena en costas por no aparecer causadas.

III. DECISION

Por lo expuesto, el Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C.,

RESUELVE:

***1.- CONFIRMAR** el auto de fecha 10 de julio de 2020 proferido en el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, por el que se dispuso rechazar de plano el incidente de liquidación de perjuicios, por los argumentos aquí vertidos.*

***2.-** Sin condena en costas.*

***3.- DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.*

COPIESE Y NOTIFIQUESE



JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref: EJECUTIVO SINGULAR de AZ INMOBILIARIA S. EN C. contra DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. Exp. 032-2015-00617-04.

Procede el Magistrado Sustanciador a resolver el recurso de apelación formulado por la demandada contra el auto proferido en audiencia del 17 de agosto de 2020 en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual se negaron unas pruebas.

I. ANTECEDENTES

1.- AZ inmobiliaria S. en C. pidió que se libre mandamiento de pago de $252'771.940,oo correspondiente a diez (10) cánones de arrendamiento adeudados entre el 25 de junio de 2012 y marzo de 2015, más el monto de $75'831.582,oo por concepto de la cláusula penal pactada en el contrato base del recaudo.

El 22 de julio de 2019 (fl. 58 c.3), la ejecutante presentó demanda acumulada, pretendiendo los cánones causados desde abril de 2015 y hasta mayo de 2017, los cuales ascienden a la suma de $750.058.572,oo (fl. 51 y 59 c.3).

2.- Trabada la relación jurídico procesal, en audiencia de agosto 17 de 2020, el juzgador a-quo denegó el decreto de la inspección judicial con exhibición de documentos que al contestar el libelo acumulado solicitó la parte demandada, por considerar que era innecesaria, toda vez que los hechos que pretendían demostrarse con tal elemento de juicio se podían dilucidar con otras pruebas ya recaudadas.

Adicionalmente, el juez de primer grado consideró que no se requería de la copia trasladada de los procesos declarativos que cursan entre las mismas partes en los Juzgados 4º y 30 Civil del Circuito de Bogotá, habida cuenta que esa información no es necesaria para decidir de fondo el presente asunto.

2.- Inconforme con estas determinaciones, el extremo demandado formuló recurso de reposición y, en subsidio de apelación, para lo cual argumentó que la inspección judicial con exhibición de documentos era pertinente, conducente y útil a efectos de demostrar los hechos que son materia de excepción como: i) que AZ Inmobiliaria no adelantó todos los trámites necesarios para la construcción y/o ampliación del inmueble; ii) que la construcción del inmueble no se realizó en concordancia con las normas vigentes que regulan los aspectos relacionados con la construcción de un inmueble para el uso de oficinas; iii) si en las oficinas de la demandante reposan los planos estructurales del inmueble y iv) que la ejecutante recibió el pago de los cánones de arrendamiento desde la fecha de celebración del contrato hasta su terminación.

Adicionó que "el debate en este proceso tiene relación directa e inescindible" con las actuaciones de los juicios declarativos cuya copia se solicita, de modo que no era viable continuar con el fallo sin el previo recaudo de dichas probanzas.

3.- El juez a- quo mantuvo incólume su decisión y concedió la alzada que se estudia.

II. CONSIDERACIONES

1.- En lo que atañe con los medios de prueba, el Juzgador tiene facultad de rechazarlos de plano en los siguientes eventos: ***a)*** *Las pruebas ilícitas,* ***b)*** *las notoriamente impertinentes y,* ***c)*** *las manifiestamente superfluas o inútiles. Lo antes dicho significa que esos medios para que puedan ser ordenadas deben ser* ***pertinentes, conducentes y útiles.***

2.- ***La pertinencia,*** *se refiere a la relación que debe existir entre el hecho por probar y el litigio, o sea, que será impertinente la que se aduce con el fin de llevar al juez el convencimiento sobre hechos que ninguna conexidad tienen con la litis; mientras que la* ***conducencia*** *es la aptitud legal para convencer al juez sobre el hecho a que se refiere y exige el cumplimiento de dos requisitos: uno, que el medio respectivo esté autorizado por la ley y, segundo, que una norma legal no excluya el valor probatorio del medio respecto del hecho que se quiere probar, por exigir otro especial, es decir, es cuestión de derecho y no de hecho; por su lado la* ***utilidad*** *refiere a la posibilidad con que cuentan las partes para llevar probanzas que presten algún servicio en el proceso para la convicción del juez, de tal manera, que si las pruebas que se pretendan aducir no cumplen con éstos propósitos, deben ser rechazadas de plano.*

3.- Descendiendo al sub- judice, se advierte que la providencia censurada se confirmará, por las razones que enseguida se exponen.

3.1.- La implorada inspección judicial con exhibición de documentos, no se ajustó en su totalidad a lo previsto en el artículo 283 del

C. de P. C. –normatividad aplicable a este asunto-, conforme el cual, "el juez decretará la exhibición", únicamente si la parte que la pide 'expresa los hechos que pretende demostrar y afirma que el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlo, su clase y la relación que tenga con aquellos'

En el caso materia de estudio, la parte apelante se abstuvo de afirmar expresamente si en las instalaciones de la ejecutante reposan "las licencias de obra, planos estructurales y demás documentos necesarios para adelantar la construcción, ampliación, adecuación, modificación y cualquier otra obra relacionada con el inmueble", pues su pedimento se limitó a señalar que el objetivo de la diligencia era verificar si los legajos se encontraban en dichas oficinas (fls. 427 y 428, contestación demanda acumulada).

*Sobre este punto en particular, la H. Corte Constitucional, ha puntualizado: "**En el modo de pedir, ordenar y practicar las pruebas se exigen ciertos requisitos consagrados en el Código de Procedimiento Civil que constituyen una ordenación legal, una ritualidad de orden público, lo que significa que son reglas imperativas y no supletivas, es decir, son de derecho estricto y de obligatorio acatamiento por el juez y las partes**. Por otra parte, el juez como director del proceso, debe garantizar, en aras del derecho de defensa de las partes, los principios generales de la contradicción y publicidad de la prueba, y en este sentido, debe sujetarse a las exigencias consagradas en el procedimiento para cada una de las pruebas que se pidan. Es decir, señalando para cada una en la providencia correspondiente, el día y la hora en que habrán de practicarse, y en fin, cumpliendo con los requisitos exigidos para decretar y practicar cada prueba en particular"*[1] *(resalta el despacho).*

De todos modos, y aun cuando se superara la reseñada deficiencia técnica en la solicitud de la prueba, se observa que los hechos que pretende demostrar con las aludidas piezas se contraen a verificar circunstancias relacionadas con deficiencias constructivas del inmueble e incumplimiento de normas vigentes, aspectos que, en el criterio de este despacho, no pueden acreditarse a través del medio de prueba solicitado.

En efecto, sin que se pretenda imponer una «tarifa legal» es razonable entender que asuntos atinentes a los temas especializados como la construcción o ampliación de un inmueble y/o el acatamiento de normativa de estructuras requieren de un elemento de juicio distinto al documental, tal como, dictámenes periciales, testimonios técnicos y calificados, probanzas que, tal y como lo afirmó el juez a-quo, ya obran en el plenario, incluso aportados por la parte aquí interesada.

De otra parte, la apelante insistió en que necesitaba comprobar lo relativo al pago de los cánones de arrendamiento desde la fecha de celebración del contrato hasta su terminación, sin embargo, si se atiende el objeto del debate, es patente que dicho hecho no es materia de discusión por los extremos de la litis, toda vez que ejecutante y ejecutada aceptan que el

---

[1] *Sentencia T-504 de 1998.*

desembolso de las mensualidades por el contrato de tenencia se dio hasta cierta fecha «11 de junio de 2014», lo que no comparten es la ocurrencia de una causa justa de terminación, y por ende la ausencia de obligación posterior, lo que conlleva a que la discrepancia se presente en otro aspecto. De ahí que sea impertinente demostrar hasta qué data se dio el pago de cánones.

Por tales motivaciones se observa que la negativa del referido medio de prueba debe mantenerse.

3.2.- Ahora bien, la censura se dirige igualmente a la decisión que dispuso el cierre del debate probatorio sin que se hubiere recaudado la respuesta a los oficios librados a los Juzgados 4º y 30 Civil del Circuito de Bogotá y a la Curaduría No. 2 de Bogotá, no obstante, esa decisión –cierre de la etapa de pruebas- no es susceptible del recurso de alzada, siéndolo únicamente aquellos autos que nieguen el decreto o práctica de un elemento de juicio, circunstancias que acá no se presentaron comoquiera que dichas probanzas fueron admitidas y practicadas, cuestión distinta es que no se allegaran al litigio antes de la emisión de la sentencia.

En todo caso, como atinadamente lo expuso la primera instancia, su recaudo no era imprescindible para emitir el fallo, dado que en este juicio resultaba idóneo probar, por separado, las circunstancias fácticas alegadas por la defensa, si en cuenta se tiene que "el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso ordinario iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, o si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción".

4.- Por lo expuesto, se confirmará la providencia apelada y se condenará en costas ante la improsperidad de la alzada (num. 1°. Art. 365 del C. G. P).

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil,

RESUELVE:

1.- CONFIRMAR el auto dictado en audiencia del 17 de agosto de 2020 por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual se negaron unas pruebas.

*2.- **CONDENAR** en costas al extremo recurrente. En la liquidación de costas causadas en segunda instancia, inclúyase como Agencias en Derecho la suma de **$400.000** Practíquese su liquidación por el juez de conocimiento conforme lo normado en el artículo 366 del C. G. del P.*

3.- En firme este proveído, retorne el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D. C., veintiséis de marzo de dos mil veintiuno

11001 3103 001 2017 00431 01

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en auto AC783-2021 de 8 de marzo de 2021, por medio del cual declaró que no fue bien denegado el recurso extraordinario de casación que la parte actora interpuso contra la sentencia que el Tribunal dictó el 5 de agosto de 2020.

Remítase, entonces, el expediente al Superior para que sea tramitado el recurso de casación que presentó la demandante Yamile Peña Moreno.

Notifíquese y cúmplase

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 011 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
cfb51e247edd31a6085ed00b28db792ba5808d83d274258cc61be150b7d61fe1
Documento generado en 26/03/2021 01:56:39 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ – SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente:	**CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA**
Radicación:	110013103030 2018 00062 01
Procedencia:	Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá
Demandante:	Alberto Monroy Velasco
Demandado:	Conjunto Residencial Bochica 3 Zona C, Bochica 4 Zona D y Centro Comercial P.H.
Proceso:	Impugnación de Actas de Asamblea
Asunto:	Apelación Sentencia

Discutido y Aprobado en Salas de Decisión del 26 de febrero y 5,12, 19 de marzo de 2021. Actas 07, 08, 09 y10.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se dirime el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia calendada 12 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de **IMPUGNACIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA** promovido por **ALBERTO MONROY VELASCO** contra el **CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 3 ZONA C, BOCHICA 4 ZONA D** y **CENTRO COMERCIAL P.H.**

3. ANTECEDENTES

3.1. La Demanda.

Alberto Monroy Velasco, a través de apoderado judicial, instauró demanda de impugnación de actas de asamblea frente al Conjunto Residencial Bochica 3 Zona C, Bochica 4 Zona D y Centro Comercial Propiedad Horizontal, para que con su citación y previos los trámites legales, se hicieran los siguientes pronunciamientos:

3.1.1. Declarar la nulidad de las decisiones adoptadas en los puntos 10 y 11 del acta número 10 de la asamblea ordinaria efectuada el 26 de marzo de 2017 por la copropiedad demandada

3.1.2. Informar, en consecuencia, a la Alcaldía Local de Engativá y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para lo de su competencia.

3.1.3. Condenar en costas a la encartada[1]

3.2. Los hechos

Los supuestos fácticos en que se apoyan las anteriores peticiones se pueden resumir así:

El actor es propietario del apartamento 509 del Bloque 8 del Conjunto Residencial Bochica 3, al cual lo cobija la “Reforma al REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 3 ZONA C, BOCHICA 4 ZONA D Y CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL”, materializada mediante Escritura Pública número 2876 de 7 de noviembre de 2008 en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, cuyos artículos 15, 16, 19, 20, 25 y 40 señalan que

[1] Folio 99 01DemandaFisicay Anexos.

para todos los efectos legales de existencia y representación se denominará ***"CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 1 DE LAS ZONA C Y D Y CENTRO COMERCIAL P.H."***, nombre que, por ende, debe utilizarse para pagar las expensas y efectuar las convocatorias a la asamblea.

Sin embargo, en los folios de matrícula inmobiliaria en que se registró aquel instrumento público no se hizo a nombre de esta copropiedad, sino del Conjunto Residencial Bochica 3 Zona C, Bochica 4 Zonas D y Centro Comercial Propiedad Horizontal, por lo que se presume surgió una nueva persona jurídica de la fusión de los conjuntos residenciales Bochica 3 y 4, representada actualmente por Alba Cenia Campos Pérez.

La Alcaldía Local de Engativá no certifica la existencia del Conjunto Residencial Bochica 1 de las Zonas C y D y Centro Comercial P.H., sino de la propiedad horizontal convocada, con la aclaración que su denominación no concuerda con la registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y en la certificación que ella expidió a raíz de tal anotación.

El 26 de marzo de 2017 en la asamblea general ordinaria de copropietarios se aprobó autorizar a la administradora, en el punto décimo -con 314 votos-, efectuar los trámites tendientes a aclarar el nombre del conjunto en los artículos 15,16,19, 20, 25 y 40 del Reglamento de Propiedad Horizontal, elevarlo a escritura pública y realizar el registro correspondiente; en el punto once -con 308 votos, para adelantar, junto con el consejo de administración, el trámite ante la curaduría urbana con el fin de cristalizar el encerramiento del conjunto, conforme al plano número E-132/4-04 y la Resolución 132 de 1983, acuerdos que se consignaron en el acta número 10, la cual fue publicada el 16 de mayo de 2017 en la administración.

Tales determinaciones constituyen una verdadera reforma al reglamento, motivo por el cual se exige un 70% del coeficiente de la copropiedad para aclararlo o adicionarlo; y, dado que se hizo solo con un 51.18%, se violó el artículo 6° de las normas que gobiernan la persona jurídica.

Aunque en el acta se consignó que se trataba de una reunión de segunda convocatoria, regulada en el artículo 41 de la Ley 675 de 2011, no se dejaron transcurrir los 3 días hábiles que señalan las disposiciones legales y reglamentaria para llevarla a cabo.

Además, la verificación del *quórum* se hizo sin tener en cuenta la calidad de propietarios de los asistentes, ni el coeficiente que representaba cada uno de ellos, contrariando los artículos 45 legal y 33 del reglamento; tampoco existe prueba que tales decisiones se hubieran adoptado por quienes tienen aquella condición, tornándose ilegal lo atinente a la reforma al reglamento por desatender los artículos 47 de la Ley 675 de 2001 y 33 reglamentario.

Desde la convocatoria hasta la publicación del acta se soslayaron los preceptos de carácter formal y sustancial consagrados en artículos 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50 y 51 de la Ley 675 de 2001 y en el reglamento, por lo que son absolutamente nulas las decisiones referidas, al amparo del inciso 3° del artículo 45 *ibídem*.

Por constituir una reforma al reglamento de la copropiedad, el punto décimo fue protocolizado mediante Escritura Pública número 2054 de 7 de octubre de 2017 en la Notaría 27 del Círculo de Bogotá, registrada en la anotación número 16 del folio de matrícula inmobiliaria de su apartamento -50C-788333- el 30 de noviembre siguiente, notificada el 16 de diciembre posterior.

Las comunicaciones de la citación no se efectuaron a cada uno de los

copropietarios, sino que se dejó en sus casilleros un documento dando aviso de la misma el 8 de marzo de 2017. Además, su celebración se realizó en el parque que se encuentra al frente de las oficinas de administración, contraviniendo los artículos 15, 16, 20, 25,39 y 40 del Reglamento. Así mismo, la administradora, con soporte en el informe rendido por el consejo de administración y la administración logró la aprobación de *"…algunas propuestas que no cumplen con el debido proceso…"*.

No ha operado la caducidad porque como la decisión cuestionada está sujeta a registro, tal fenómeno solo se contabiliza desde la fecha de la inscripción, al tenor del artículo 382 de la Ley 1564 de 2012[2].

3.3. La actuación de la instancia:

3.3.1. El 5 de marzo de 2018 se admitió el libelo y se dispuso su traslado a la pasiva de la *litis*[3].

3.3.2. La persona jurídica fue impuesta, por conducto de su representante legal, el 26 de junio de 2018[4].

Dentro de la oportunidad procesal, compareció a través de apoderado judicial, quien replicó los hechos, con oposición a las pretensiones y propuso las excepciones de mérito de: *"…**CADUCIDAD DE LA ACCIÓN…**", "…**AUSENCIA DE CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA…**"* y la *"…**GENÉRICA…**"*[5].

De los enervantes se dio traslado al extremo activo. Se opuso a su prosperidad[6].

---

[2] Folios 100, 101, 113 a 117 *ibídem*.
[3] Folio 119 *ibídem.*
[4] Folio 130 *ibídem.*
[5] Folio 218 a 223 *ibídem*.
[6] Folios 238 a 242 *ibídem.*

3.3.3. Agotadas las audiencias previstas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso[7], se emitió sentencia por medio de la cual el Juzgado de conocimiento declaró probada la defensa de caducidad de la acción, negó las pretensiones y condenó en costas al demandante.

Contra la determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, concedido en el acto[8].

4. LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Funcionaria, precisó que, revisada el acta de asamblea del 26 de marzo de 2017, en cuyos numerales 10 y 11 obran las decisiones cuestionadas, las cuales se orientaron a autorizar a la administradora a realizar los trámites para aclarar el nombre la copropiedad y el encerramiento de la misma, es evidente que operó la caducidad contemplada en la memorada norma.

Lo anterior, debido a que el documento no está sujeto a registro, en cambio sí la escritura pública de aclaración del reglamento de la copropiedad. En esas circunstancias, el término de aquel fenómeno extintivo no era dable contabilizarlo desde el 30 de noviembre de 2017, fecha de inscripción de la escritura que protocolizó el aludido acto, sino a partir del día en que se adoptaron las decisiones. Empero, el lapso transcurrido desde entonces hasta el 26 de enero de 2018, fecha en que se presentó el escrito genitor, supera con demasía el lapso de 2 meses con que se contaba para demandar.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

5.1. El apoderado judicial del actor solicitó revocar la decisión, con

[7] Folios 253 y 254
[8] PDF 21ActaAudienciaArticulo373 y hora 1:48 a 1:49 del PDF 20AudienciaVirtualArticulo373.

sustento en que la aclaración del reglamento que se facultó realizar a la administradora es inescindible de la protocolización y registro. Así que solo a partir de este acto se vuelve público y es oponible a terceros, por lo que a partir de entonces debe contabilizarse el fenómeno jurídico, el cual no se ha configurado, pues desde el 30 de noviembre de 2017, fecha en que se materializó la inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos al día en que se promovió la demanda -26 de enero de 2018- no transcurrieron los dos meses que se tienen para accionar[9].

En la oportunidad para sustentar el recurso ante esta sede indicó que la Juez aplicó indebidamente el artículo 382 del Código General del Proceso, porque, insiste, al ser objeto de protocolización y registro el punto 10° de la asamblea general de copropietarios celebrada el 26 de marzo de 2017, solo desde su inscripción en la oficina de instrumentos públicos podía contabilizarse el lapso.

Relievó que conforme a lo previsto en el artículo 2° del Decreto1250 de 1970, está sujeto a registro todo acto que implique aclaración del dominio u otro derecho real principal; y, según el artículo 47 de la Ley 1579 de 2012 ningún instrumento sujeto a registro o inscripción surte efectos, sino desde la fecha en que se ejecuta uno de estos actos. Por consiguiente, la demanda se presentó en tiempo, esto es, el 26 de enero de 2018, dentro de los dos meses siguientes al 30 de noviembre de 2017, día de la inscripción, ya que, contrario a lo considerado por la Funcionaria, la decisión si debía registrarse.

En adición, rebatió que la determinación que autorizó a la administradora a aclarar el nombre del conjunto no se adoptó por la mayoría calificada y que la Juez debió rechazar la demanda. si la acción había caducado.

[9] Hora 1:39 a 1:48 *ibídem*.

Por último, adjuntó una providencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que trató el tópico de impugnación de acta de asamblea sujeta a registro e indicó que el Juzgado 6 Civil del circuito de esta ciudad en el litigio de esta misma naturaleza con radicación 2017-0388 desestimó la excepción de caducidad y declaró la nulidad del acta de asamblea ordinaria de la propiedad horizontal demandada, celebrada el 26 de marzo de 2017[10].

5.2. El abogado de la copropiedad solicita confirmar la determinación, con soporte en que la autorización a la administradora para aclarar el nombre del conjunto no es objeto de registro, motivo por el cual la caducidad se cuenta desde la realización de la asamblea. De manera que para la época en que se instauró el libelo tal figura había operado[11].

6. CONSIDERACIONES

6.1. No encuentra la Corporación reparo en cuanto a los llamados, por la doctrina y la jurisprudencia, presupuestos jurídico procesales como son capacidad para ser parte, para comparecer al proceso, demanda en forma y competencia. De otro lado, en la actuación vertida en el plenario no se vislumbra vicio con la entidad de anular en todo o en parte el trámite, siendo viable emitir un pronunciamiento de fondo.

6.2. Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de acuerdo con los reparos esbozados ante la señora Juez *a- quo* y la sustentación del recurso de apelación, se circunscribe a determinar si operó la caducidad de la acción de impugnación de acto o decisión de asamblea promovida por el demandante. En caso de obtener respuesta negativa al anterior cuestionamiento, establecer si deben declararse nulas las

[10] PDF 08SustentaApelacion.
[11] PDF 11OPOSICION A RECURSO DE APELACION 2018-062.

determinaciones contenidas en los puntos 10 y 11 del acta número 10, levantada con ocasión de la asamblea ordinaria de la copropiedad encartada, celebrada el 26 de marzo de 2017.

6.3. El proceso de impugnación de actos de asambleas de copropietarios es un juicio en el que única y exclusivamente puede disputarse y definirse si la decisión censurada se ajusta o no a los lineamientos legales o a los estatutos de la copropiedad; por tanto, si ellas son ineficaces o nulas, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 675 de 2001, sin que el juzgador, por esta específica vía procesal y en el marco de una pretensión planteada con ese propósito, pueda extender o ampliar su competencia para ocuparse de las diferencias que puedan llegar a presentarse entre los intervinientes, o entre éstos y el administrador u otro órgano de dirección, bien sea por causa de la aplicación de decisiones tomadas, o por cualquier otro motivo.

6.4. La propiedad horizontal es una forma especial de dominio que tiene dos dimensiones a saber: como propietario de una unidad particular y, en condición de condueño de las áreas comunes. Un edificio o conjunto se somete a dicho régimen mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos -artículo 4 de la Ley 675 de 2001-.

La Ley 675 de 2001, creó un ambiente de seguridad, convivencia pacífica y solidaridad social en los inmuebles sometidos a ese régimen. Así mismo estableció un marco regulatorio, en aras de garantizar el debido proceso, permitiendo la contradicción e impugnación de las determinaciones que puedan afectar a los condómines.

A su vez, dicha regulación, dispuso que una vez constituida legalmente, nace una persona jurídica conformada por los

propietarios de los bienes de dominio particular, cuyo objeto es administrar en forma oportuna y eficaz las zonas y servicios comunes, así como manejar los asuntos de interés general y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal –artículo 32 *ibídem*-, de donde se evidencia con claridad que el Legislador concretó los objetivos de esa persona jurídica.

La denominación de la persona jurídica constituida corresponderá a la del edificio o conjunto. Sus órganos de dirección y administración son: la asamblea general de propietarios, el consejo de administración -*si lo hubiere*- y el administrador del edificio o conjunto -artículo 36 *ibídem*-.

El primer ente lo componen todos los dueños de los inmuebles que integran la copropiedad, quienes tendrán derecho a participar en sus reuniones, votar en ella, una vez cumplidos el quórum y las condiciones que para el efecto establezcan la Ley y el reglamento, cuyas atribuciones se hallan reguladas normativamente – artículo 37 *ibídem*-. "...*Es pues la máxima autoridad de la copropiedad y, en ese orden de ideas, está encargada de dirigirla y administrarla, por cuanto es en ella en donde confluye la voluntad colectiva de los copropietarios en todo lo relacionado con la administración de los bienes comunes...*"[12]

El consejo, únicamente es obligatorio constituirlo en *"…Los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, integrados por más de treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos, … integrado por un número impar de tres (3) o más propietarios de las unidades privadas respectivas, o sus delegados. En aquellos que tengan un número igual o inferior a treinta (30) bienes privados, excluyendo parqueaderos y depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal.*

[12] Sentencia C-127 del 17 de febrero de 2004, Magistrado Ponente, Doctor Alfredo Beltrán Sierra.

Para edificios o conjuntos de uso residencial, integrados por más de treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal...".

Algunas de las funciones asignadas a los miembros de la copropiedad son: aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, con una mayoría calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio o conjunto -numeral 6° del artículo 38, numeral 5° del artículo 46; numerales 5° del artículo 23, 4° del artículo 33 del Reglamento de Propiedad Horizontal-. *E*legir al administrador -numeral 1° del artículo 38 Ley 675 de 2001; a quien, le corresponde, entre otras labores, la de elevar a escritura pública y registrar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, aprobadas por la asamblea general de propietarios -numeral 10° del artículo 41 reglamento de propiedad horizontal-.

Consonante con lo anterior, el artículo 6° ibidem, consagra que toda reforma futura, aclaración o adición de esta normatividad debe ser aprobada por la asamblea de propietarios con el voto favorable del 70% de los coeficientes de copropiedad, elevada a escritura pública y registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C.

6.5. Como precedentemente quedara expuesto, el recurrente se muestra inconforme porque la primera instancia declaró la caducidad de la acción, al contabilizar el término para interponer la demanda desde cuando se adoptó el acto controvertido, es decir, autorizar a la administradora para que adelantara el trámite de aclaración del nombre de la copropiedad, y no a partir de la inscripción en la oficina de registro de la escritura que protocolizó la aludida facultad.

El fenómeno de la caducidad ha sido definido por la Corte Suprema

de Justicia como *"…la expiración (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto idóneo previsto por la ley para su ejercicio, en el término perentoriamente previsto en ella*", en tanto que se establecen estos "*plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relación jurídica no se extinga o sufra restricciones…*"[13].

En este orden, conviene precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 382 del Código General del Proceso *"…la demanda de impugnación de actos … solo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción…".*

Auscultada el acta número 10 de la asamblea ordinaria realizada por la propiedad horizontal convocada el 26 de marzo de 2017, se tiene que en el punto 10 se consignó:

"...10. ***AUTORIZACIÓN ACLARACIÓN DE NOMBRE DEL CONJUNTO EN ARTÍCULOS 15, 16, 19, 20, 15 Y 40 DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL CONJUNTO.***

La señora Alba Cenia Campos Pérez (administradora) explica que: Este punto surge a raíz de la información desvirtuada que se ha enviado a los residentes de las zonas C y D mediante panfletos y pasquines por parte de los integrantes de la mal llamada administración central que se aprovechan para confundir a las personas indicando que jurídicamente el conjunto no existe. Se proyecta a la asamblea la Escritura Pública No. 2876 del 7 de noviembre de 2008 que corresponde al reglamento de propiedad

[13] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de septiembre de 2002, expediente 6054. Magistrado Ponente Doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles.

horizontal con la que nació este conjunto, específicamente en los artículos 15, 16, 19, 20, 25 y 40 en donde figura ZONAS C Y D PROPIEDAD HORIZONTAL. De acuerdo con la asesoría efectuada a la administración se solicita que la Asamblea autorice a la administradora o quien haga sus veces de representante legal del conjunto para que efectúe los respectivos trámites de aclaración de nombre del conjunto, lo eleve a escritura pública y a su vez, registre dicha aclaración en la oficina de registro de instrumentos públicos, y por ende, en cada certificado de libertad de los apartamentos y locales del centro comercial que conforman las zonas C y D.

Después de suficiente ilustración, el presidente de la Asamblea señor Hernán González solicita a los asistentes efectuar la votación que hace mediante los desprendibles entregados…

Por un total de 314 por el SI, la Asamblea autoriza a la Administradora o quien haga las veces de representante legal del conjunto para que efectúe los respectivos trámites de aclaración de nombre del conjunto, lo eleve a escritura pública y a su vez registre dicha aclaración en la oficina de instrumentos públicos y por ende en cada certificado de libertad de los apartamentos y locales del centro comercial que conforman el Conjunto Residencial Bochica 3 Zona C y Bochica 4 Zona D y Centro Comercial P.H…"[14].

Para adelantar la aclaración del nombre de la copropiedad, según lo explica la especialista en el tema, María Cristina Molina, en el Blog, Contrato de Arrendamiento, Diccionario Jurídico, Funciones Notariales de 19 de diciembre de 2017, la administradora debía evacuar las siguientes etapas:

"… - En la redacción de la modificación, la adición o la sustitución, se debe realizar un examen concienzudo del antiguo Reglamento y tener

[14] Folio 68 PDF 01DemandaFisicay Anexos.

pleno conocimiento de la Ley 675 de 2001 (asesorados por un profesional del Derecho), para no caer en disposiciones contrarias a la Ley.

- Seguidamente, se le hará conocer su contenido a todos los copropietarios a través de foros, circulares, etc., para que sepan el tema a reformar sobre el cual tendrán que decidir y, en lo posible, resumir los artículos a reformar por lo amplio del reglamento.

- Exponer el proyecto de reforma para la aprobación de la Asamblea General de Propietarios, cumpliendo con los requisitos de quórum y mayoría calificada, la oportunidad de la convocatoria, la elaboración del acta respectiva, entre otros.

- Aprobada la reforma, se presenta la minuta (también en medio magnético) ante la Notaría para elevarla a Escritura Pública, en lo posible en la misma notaría donde se registró el reglamento original; anexando la certificación de personería jurídica de la copropiedad, el acta de nombramiento del Administrador o representante legal (fotocopia de su documento de identidad), y si se trata de una persona jurídica se requiere el certificado de la Cámara de Comercio; el acta de la Asamblea en la que se avaló la reforma.

- La escritura pública debe ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, por ello es mejor tener dos copias de ésta.

- Al finalizar el trámite en la oficina de Registro se solicita un Certificado de Tradición de los Inmuebles que ya contengan la anotación de la Reforma del Reglamento de Propiedad Horizontal.

Finalmente, se presentan ante la Alcaldía Local los siguientes documentos: Copia de la escritura pública, los certificados de Tradición, el acta de la Asamblea donde se aprobó la reforma, el acta de nombramiento del Administrador y una carta donde se le solicita al Alcalde la inscripción y la certificación de la existencia y representación legal de la persona jurídica (Propiedad Horizontal)…"[15].

15 Visible en https://www.notaria19bogota.com/una-reforma-al-reglamento-propiedad-horizontal/.

En línea con lo anterior, la representante legal de la copropiedad con el propósito de cumplir su encargo, debía, en primer lugar, efectuar un estudio del por qué se hacía necesario aclarar el nombre del conjunto, luego, poner en conocimiento de los condómines el resultado de este análisis. A continuación, convocar a asamblea para someter a votación de los copropietarios el proyecto de aclaración, obtenida su aprobación por la mayoría calificada, si procedía su protocolización, para después inscribir la escritura pública en los folios de matrículas inmobiliarias correspondientes. Finalmente, allegar a la alcaldía competente toda la documentación pertinente que refrende la memorada aclaración.

Así, entonces, se desvirtúa que sean inescindibles la autorización para aquel fin, con la protocolización de la escritura que materializa la aclaración de la denominación de la copropiedad y su registro, pues estos dos últimos actos constituyen apenas una de las fases que debía evacuar la administradora en el trámite facultado, siempre y cuando hubiera obtenido el aval de los copropietarios con el umbral exigido.

Ergo, siendo la siguiente etapa presentar los análisis adelantados que conllevaran a definir la razón por la cual la denominación del conjunto no era la adecuada, las consecuencias de la misma para las diferentes unidades que conforman el Conjunto Residencial Bochica, así como someter a la aprobación de la asamblea el texto que se incluiría en la escritura contentiva del reglamento de propiedad horizontal; solo una vez obtenido el respaldo del 70% de los copropietarios, incluirla en el acta con los soportes respectivos, para a continuación, elevarla a escritura pública y proceder a su registro. Sin embargo, en el *sub -lite* tal diligenciamiento no se agotó o al menos ninguna evidencia revela lo contrario.

A diferencia, si se encuentra acreditado que la administradora, en uso de la facultad otorgada, elevó a escritura pública el acta número 10 de la asamblea ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2010, en cuyo punto 10° se le autorizó para adelantar el procedimiento de aclaración del nombre de la copropiedad, acto que por sí mismo no es objeto de registro, porque ninguna disposición legal ni reglamentaria lo prevé.

Aunado, pese a que hubiere protocolizado el acta de la asamblea que la facultó a ejecutar el procedimiento pertinente, lo cierto es que por ese solo hecho no se torna susceptible de inscripción en la oficina competente.

En consonancia con lo dicho en antelación, no es plausible en el *sub exámine* contabilizar la caducidad de esta acción desde la fecha de registro -30 de noviembre de 2017- de la Escritura Pública número 2054 de 7 de octubre de 2017 en la Notaría 27 del Círculo de Bogotá, mediante la cual la administradora elevó a escritura pública, se insiste, el contenido de la determinación que la autorizó a realizar el trámite necesario para aclarar el nombre de la propiedad horizontal encausada y materializó tal acto, como lo pretende el recurrente, dado que conforme ya se dijo, dicho acto no es registrable.

En estas condiciones, el día en que se adoptó la resolución marca el hito para computar la caducidad, lo que implica que la demanda para impugnarla debía interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que la mismas se tomaron.

Así, entonces, como la aludida reunión se llevó a cabo el 26 de marzo de 2017, el plazo para demandar la decisión contenida en los puntos 10 y 11 del acta número 10 de la asamblea ordinaria feneció el 26 de mayo de la misma anualidad. Por tanto, la acción ya había caducado para el 26 de enero de 2018 cuando se incoó el libelo. Desde esa óptica anduvo afortunada la Funcionaria de primer grado en así

declararlo.

Las conclusiones precedentes conllevan a que los argumentos del impugnante no deban abrirse paso. Sin que sea dable efectuar alguna consideración sobre la nulidad de las decisiones fustigadas por medio de esta acción, puesto que la caducidad de la misma imposibilita cualquier análisis al respecto.

Adicionalmente, dígase, que las irregularidades que se puedan avizorar en la protocolización de Escritura Pública número 2054 de 7 de octubre de 2017 de la Notaría 27 del Círculo de Bogotá, son atacables por otra vía.

6.6. Como corolario, se confirmará la sentencia de primer grado pero por las razones antes expuestas, con la consecuente condena en costas, atendiendo las razones atrás anotadas.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, EN SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

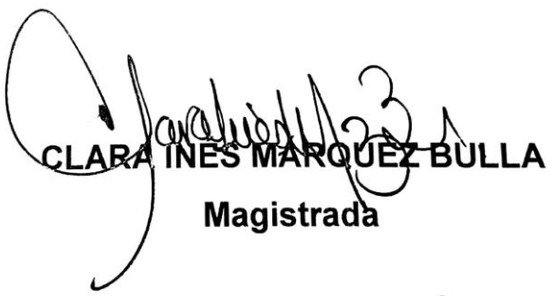
RESUELVE:

7.1. CONFIRMAR la sentencia calendada 12 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá.

7.2. CONDENAR en costas de la instancia a la parte recurrente. Liquídense en la forma prevista por el artículo 366 del Código General del Proceso. La Magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de $ 1.500.000.oo.

7.3. DEVOLVER el expediente a su despacho de origen, previas las constancias del caso. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE,



CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA
Magistrada



ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
-con excusa-

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: Exp. 11001-3103-015-2019-00185-01

Al entrar a resolver la apelación interpuesta por Graciela María Marrigo Gómez, en su condición de tercera interesada, contra el auto de 27 de enero del año anterior, proferido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ejecutivo que adelanta Nory Esther Bustillo Gallo contra Alejandro de Jesus Herrera Bustillo, osberva el Tribunal que entre las piezas procesales enviadas por correo electrónico no se encuentran ni el auto que resolvió la reposición que interpuso la aquí recurrente contra el precitado proveído, ni tampoco el que concedió la alzada, los cuales resultan indispensables para proveer en esta sede sobre la impugnación en cuestión.

Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en el inciso 3º del artículo 324 del Código General del Proceso, con arreglo al cual "[s]i *el superior considera necesarias otras piezas procesales deberá solicitárselas al juez de primera instancia por auto*", se ordena oficiar al juzgado a-quo, con el fin de que, previo el trámite de rigor, remita con destino a esta actuación el auto o los autos que contengan las determinaciones echadas de menos en esta decisión.

Hora: 4:15 P.M.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: Exp. 11001-3199-005-2020-20917-01

Decídese el recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra el auto Nº 02 del 11 de diciembre de 2020, proferido por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el que rechazó la demanda verbal instaurada por Actores Sociedad Colombiana De Gestión contra Nova Mar Development S.A.

Para resolver la inconformidad del apelante frente al precitado proveído, cuyo fundamento estuvo en que la demandante no subsanó uno de los motivos de inadmisión señalados por la subdirección, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 90 Código General del Proceso, los recursos que proceden "*contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión*", desde luego, entonces, que habiendo sobrevenido el rechazo de la demanda, en el presente caso, por no haberse subsanado correctamente ésta, según lo adujo la delegatura de primera instancia al proveer en ese sentido, la competencia del Tribunal para resolver sobre el recurso comprende no solamente el rechazo, en sí considerado, sino también el motivo de inadmisión que, señalado por medio de un auto contra el que no procede ningún recurso, a juicio del juzgador a-quo, no fue cabalmente subsanado.

2. La inadmisión, que se hizo mediante auto de 30 de noviembre de 2020, estimó que la demanda no era formalmente idónea, en cuanto que adolecía de "*falta de claridad en cuanto del cálculo en la estimación de la tarifa para el año 2012, correspondiente a dos meses y cinco días en el juramento estimatorio*" y no traía uno de los "*anexos señalados por la ley*", cumplidamente el identificado en el numeral 26 del acápite de pruebas, el cual, correspondiendo a un video, no pudo ejecutar al tratar de acceder a él, carencias que entonces debía corregir la parte, aclarando lo concerniente al juramento estimatorio y aportando el video anexo en un formato que permitiera reproducirse.

3. Ante ese requerimiento, la accionante presentó un escrito de subsanación clarificando lo que se le exigía aclarar en torno al juramento estimatorio, y aportando un video que, según lo declaró en ese libelo, garantizaba acceder a su contenido; mas, la delegatura examinó el video y comprobó que éste no correspondía a lo anunciado en el numeral 26 del acápite de pruebas, y apuntalada en ello dio, sin más ponderaciones adicionales, en el rechazo. Sin embargo, analizando ese concreto motivo de inadmisión aparentemente no atendido por la demandante, no ve el Tribunal que éste encuadre en alguna de las causales legales establecidas para negar la admisión de la demanda, situación que, es incontestable, impide aducirlo como justificación para ese rechazo que automática y de forma consecuencial se dispuso por el a-quo.

4. A la verdad, si los requisitos formales de la demanda son los que establece el artículo 82 del código en cita, y los anexos obligatorios de dicho libelo son los que aluden los artículos 84 y 85 de dicho ordenamiento, ¿de dónde, entonces, colegir que un inconveniente técnico que se presente con una prueba arrimada con la demanda en un formato como el que se aporta en el caso de autos, cae dentro de una de aquellas formalidades que denigran de su idoneidad?

Cierto, el precepto 84 dicta en su numeral 3º que a la demanda deberán acompañarse "[*l*]as pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en poder del demandante"; en su numeral 5º, que también deberán aportarse los demás documentos "que la ley exija"; pero, el interrogante que surge, confrontando el texto legal con la circunstancias de ocurrencia en el caso sub-

examen, es ¿en qué categoría, de esas a las que aluden las precitadas normas, cabe el video que la delegatura no pudo visualizar cuando trató de abrirlo, para verificar qué había en él?.

Señala la delegatura que es un anexo establecido por la ley, pero se guarda de explicar qué razones conducen a concluir que esto es así, no obstante que se trata de una prueba que, según el discurso que sobre su aducción se plantea por la demandante, corresponde a una actuación procesal realizada dentro de otro proceso, algo que de entrada indica que el documento, en el soporte que se trae, no está poder de la demandante sino en otro proceso; y que, adicionalmente, no es una prueba de carácter extraprocesal, ni mucho menos que a ella se refiera la ley como anexo obligatorio de la demanda.

5. A modo didáctico, recuérdese que la prueba judicial tiene cuatro momentos: solicitud, decreto, práctica o incorporación y, finalmente, la asunción; la fase de solicitud, que obviamente es un derecho de la parte, es un primer momento en que ésta se encuentra en libertad de pedir el decreto de todas aquellas que, en el desenlace del litigio, van a sustentar esa carga probatoria que hoy pone en sus hombros el precepto 166 del Código General del Proceso. Sin embargo, no por pedirlas en la oportunidad señalada por la ley éstas deben ingresar al litigio sin ningún control. Antes de ello será menester su decreto, donde el juzgador efectúa un primer examen, formal y material, que determinará a qué punto es posible disponer lo necesario para que la prueba se practique o incorpore, dependiendo de su naturaleza, lo cual constituye esa tercera etapa de la prueba, cuya valoración, una vez regularizado su ingreso al proceso, se hará normalmente cuando se dirime el litigio.

Quiere decir lo anterior, que si la prueba apenas se encuentra en su primer estadio, como que la aportación del video y la petición de su decreto apenas si se está surtiendo en esta primera fase del proceso, es a todas luces equivocado pretender hacerle un control previo, cual lo hace el funcionario de primera instancia, en menoscabo del principio de acceso a la administración de justicia, cuyo núcleo esencial entronca con el derecho del debido proceso a que se contrae el canon 29 de la Constitución Política.

6. En ese orden de ideas, la alzada debe abrirse paso, situación que impone revocar el proveído opugnado. La delegatura, por ende, deberá volver sobre la admisión de la demanda, analizando todos los factores que influyan en ello.

Por lo brevemente expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá

RESUELVE

Primero.- **REVOCAR** el auto de fecha y origen anotados en el encabezado de esta providencia para, en su lugar, ordenar a la delegatura de primera instancia que vuelva sobre la admisión de la demanda, atendiendo los argumentos expresados en esta decisión.

Segundo.- Oportunamente, **devolver** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas en la instancia.

Hora. 4:15 p.m.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA SEPTIMA CIVIL DE DECISIÒN

Bogotá, D. C., veintiséis de marzo de dos mil veintiuno

11001 3199 001 2019 75306 01

Ref. Proceso verbal de Nelson Dulcey Berardinelli (y otros) frente a REM Construcciones S.A.

El suscrito Magistrado no repondrá el auto de fecha 19 de febrero de 2021, mediante el cual se declaró desierta la alzada que formularon los demandantes contra la sentencia que en primera instancia se dictó, en el asunto en referencia.

En concreto, fueron dos los aspectos sobre los cuales los inconformes soportaron su recurso horizontal: que el recurso de alzada frente a la sentencia se sustentó en primera instancia y que "el proceso de la referencia inició en el año 2019 bajo la existencia de las normas del Código General del Proceso, razón por la que las partes estamos sometidas a los cánones mediante los cuales la Litis fue tranzada".

Para decidir, se **considera**:

1. En cuanto al hecho de haber "sustentado", eventualmente, la alzada ante el juez de primer grado, valga memorar pronunciamiento de la Corte Constitucional, **sentencia de Unificación SU-418 que recién se publicó, de fecha 11 de septiembre de 2019,** en el que se expresó, entre otras cosas, que "para garantizar el derecho a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jurídico, (…) **el recurso de apelación debe sustentarse ante el superior** en la audiencia de sustentación y fallo**, y la consecuencia de no hacerlo así, es la declaratoria de desierto del recurso**"[1].

Fue así, entonces, como la Corte Constitucional refrendó lo que al respecto había decidido, en reiteradas ocasiones, la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre la obligatoriedad de acudir y sustentar ante el superior funcional, la apelación, por vía de ejemplo, cuando expresó que "quien apela una sentencia no sólo debe aducir de manera breve sus reparos concretos respecto de esa decisión, **sino acudir ante el superior para sustentar allí ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales**" [2].

Es pertinente precisar que esos pronunciamientos judiciales, proferidos antes de la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020, han de ser interpretados a la luz de las nuevas reglas procesales adoptadas en esta última normatividad. Vale decir, tal carga de sustentación ante el funcionario judicial competente para resolver el recurso, se exige, trátese en el escenario del Código General del Proceso (audiencia de sustentación y fallo), o como en la actualidad lo regula el Decreto Legislativo, (en forma escrita), cuyo artículo 14,

[1] Corte Constitucional. Sentencia SU-418/19 (septiembre 11).
[2] CSJ – S.C. Sentencia STC8909-2017 del 21 de junio de 2017, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, Rad. 11001-02-03-000-2017-01328-00. Ver entre otras: CSJ STC11058-2016, 11 ago. 2016, rad. 02143-00; CSJ. STC6055 de 4 de mayo de 2017, exp. 08001-22-13-000-2017-00100-01.

prevé en su penúltimo inciso, que **el apelante deberá sustentar el recurso** a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes" y que **"si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto"**.

2. La importancia de lo decidido en esa **sentencia de Unificación** SU-418 de 11 de3 septiembre de 2019, **de reciente publicación,** no se puede soslayar, como quiera que esa modalidad de providencias las emite la Corte Constitucional en el marco de su función de revisión de los fallos de tutela (Constitución Política, art. 241, num. 9°) y, entre otras, con el propósito de unificar la jurisprudencia constitucional, según emana de lo que establece el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991[3].

Sobre el particular, la misma Corte Constitucional ha dicho que, "no solo sus precedentes deben respetarse, sino también los expedidos por las demás Cortes; parámetro expuesto desde la sentencia T-193 de 1995. En la sentencia C-335 de 2008 se sostuvo que: 'De allí que reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, **la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes** son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares'. Por su parte, en la sentencia C-816 de 2011 se consideró que **las Cortes, al ser órganos de cierre, deben unificar la jurisprudencia en el ámbito de sus jurisdicciones**, aserto ratificado en la SU-053 de 2015 en la cual se señaló que, además de asegurar el principio de igualdad, la fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos de cierre garantiza la primacía de la Constitución, la confianza, la certeza del derecho y el debido proceso. Ahora bien, la necesidad de imprimirle fuerza vinculante a los precedentes de las Cortes, como se explicó en la mencionada SU-053 de 2015, también toma en cuenta que la interpretación del derecho no es asunto pacífico y, en ese orden, los precedentes de estas corporaciones constituyen una herramienta trascendental en la solución de casos en los cuales las leyes pueden admitir diversas comprensiones en aras de evitar decisiones contradictorias en casos idénticos" (Sentencia SU-072 de 2018).

3. Ahora, tampoco es de recibo el argumento según el cual, este proceso debía de tramitarse (en ambas instancias) conforme a las reglas del Código General del Proceso, por haberse radicado la demanda en el año 2019.

Lo anterior por cuanto, para dilucidar esa discusión lo relevante no es la fecha de la presentación de la demanda, sino el día en que se impetró la alzada contra la sentencia de primer grado, lo cual aquí ocurrió en la audiencia de 26 de octubre de 2020, esto es, cuando ya estaba vigente el aludido Decreto Legislativo (entró a regir el 4 de junio de 2020, art. 16).

[3]"Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, **unifiquen la jurisprudencia constitucional** o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas".

No se olvide que "**los recursos interpuestos** (…) **se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos**, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones" (art. 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del C.G.P.).

4. No prospera, entonces, la reposición en estudio.

DECISION. Por lo expuesto, el suscrito Magistrado NO REPONE el auto de 19 de febrero de 2021, mediante el cual se declaró desierta la alzada que se formuló contra la sentencia que en primera instancia se dictó en el litigio en referencia.

Devuélvase la actuación a la oficina de origen.

Notifíquese

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 011 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a610a21668af6c8c50642baeb34bd6118d82e27831310ce32b427c66fed7edf7**
Documento generado en 26/03/2021 02:23:20 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA
OFICIO No. 4006 –80 DE 2021

Bogotá D.C.
4006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 19-229370- -36-0 **FECHA**: 2021-01-20 10:12:08
DEP: 4006 GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARÍA **EVE:** 362 DEMANDA
TRA: 400 DEM PROT JURISD **FOLIOS**: 815
ACT: 330 COMUNICACIÓN

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ- SALA CIVIL
jchaurn@cendoj.ramajudicial.gov.co
slotac@cendoj.ramajudicial.gov.co
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto:	***Proceso:***	***Verbal Jurisdiccional***
	Radicación:	***19-229370***
	Demandante:	***DIEGO GARCIA OSPINA***
	Demandado:	***AVORA S.A.S., SPORAS S.A.S., ARAUJO Y SEGOVIA S.A. y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – Como vocera del Fideicomiso Lote Vitra 57***

Respetados Señores:

AÑO DE INICIACIÓN DEL PROCESO: 2019 NUMERO DE RADICACIÓN: 229370; CLASE DE PROCESO: VERBAL.

APELACIÓN EFECTO SUSPENSIVO; CONTRA: SENTENCIA proferida en el acta 7809 del 24 de Agosto 2020.

Dando cumplimiento a lo ordenado mediante acta No. 7809 del 24 de Agosto del 2020, me permito remitir copia de las piezas procesales ordenadas las cuales consta de ochocientos once (811) folios útiles y un (1) video los cuales se encuentra en archivo digital, junto a la certificación que da fe de las piezas procesales y los videos respectivos, para tal efecto me permito enviar:

Para la visualización de los anexos y videos del expediente, debe dar clic en el siguiente enlace y posteriormente solicitar autorización de acceso.

https://drive.google.com/drive/folders/1cywUp7ubAjYW3p6iONmWp9FbORwZA558?usp=sharing

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DEMANDANTE:

DIEGO GARCIA OSPINA, *Identificado con cedula de ciudadanía No. 72.222.415, Dirección de notificación: Carrera 57 # 90-38 Apto 902 edificio Vitra 57, Correo Electrónico: gerencia@sillasyestilos.com.*

- ***APODERADO: Dra. MAIRA ISABEL GUIO SÁNCHEZ,*** *Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.368.933y T. P. No. 129.077 del C.S.J; dirección de notificación: Calle 72 No. 57-37 de Barranquilla o mairaisabel_g@yahoo.com*

DEMANDADOS:

AVORAS S.A.S., *Identificado con el número de NIT. 900.711.610-9, Dirección de notificación: CL 115 No 2 – 399 y notificacionesjuridicas@avora.co*

SPORAS S.A.S., *Identificado con el número de NIT. 830.509.496-7, Dirección de notificación: CL 115 No 2 – 399 y notificacionesjuridicas@avora.co*

ALIANZA FIDUCIARIA S.A., *Identificado con el número de NIT. 860.531.315-3, Dirección de notificación: Carrera 15 #82-99 y notificacionesjudiciales@alianza.com.co*

- **APODERADO: Dr. IVAN VILLA SIERRA,** Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.175.155 y T. P. No. 73.792 del C.S.J dirección de notificación Carrera 44 # 84-192

ARAUJO Y SEGOVIA S.A. Identificado con el número de NIT. 890.400.048-9, Dirección de notificación: LA MATUNA ED CONCASA PISO 2 y gerente@araujoysegovia.com

- **APODERADO: Dr. JOSÉ IGNACIO PEDRO ELÍAS NOVOA SERRANO,** Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.592.192 y T. P. No. 100.709 del C.S.J dirección de notificación MATUNA CALLE 32A No. 8A-50

ENVIO A USTED POR PRIMERA VEZ
Atentamente,

PEDRO ALEJANDRO NIÑO ROA
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA

Elaboró: M.V.
Aprobó: P.N.

OBSERVACIONES

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL TRIBUNAL

Recibido en la fecha _____ por _____.

Revisado_____

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo ordenado por el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –** Sala Civil, en sesión de 111Sala Plena de 28 de mayo de 2018, que el Expediente con Radicado N° **2.019 – 229370** se encuentra completo (Con todas sus piezas procesales que lo conforman) y que el material de audio y/o video, contenido en archivo digital, que se utilizó para el registro de las sesiones de audiencias públicas, y/o anexos de las partes, funcionan correctamente y **NO** contiene material de audio y/o video contenido en medio magnético (DVD-CD, BLUE RAY, USB, etc.).

- El expediente **digital** consta de **ochocientos once (811) folios útiles** vistos en archivos PDF, incluido **un (1) video** descritos así**:**

VIDEO	CARPETA	FECHA	DESCRIPCIÓN
1 video	**N° 18**	24 agosto 2.020	Audiencia – Sentencia

Correspondientes a los mismos que obran en el expediente de la referencia.

Se firma en Bogotá a los **diecinueve (19) días del mes de enero del 2.021**.

PEDRO ALEJANDRO NIÑO ROA

Elaboro: Derly Maldonado

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ÍNDICE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Ciudad	Bogotá D.C.
Despacho Judicial	**Superintendencia de Industria de Comercio**
Serie o Subserie Documental	**Verbal - Acción de Protección Al Consumidor**
No. Radicación del Proceso	**2.019 - 229370**
Partes Procesales (Parte A) (demandado, procesado, accionado)	**Diego Garcia Ospina**
Partes Procesales (Parte B) (demandante, denunciante, accionante)	**Avora S.A.S., Araujo & Segovia S.A., Sporas S.A.S. Y Alianza Fiduciaria S.**

EXPEDIENTE FÍSICO	
El expediente judicial posee documentos físicos:	SI____ NO **X**
N° de carpetas, legajos o tomos:	**21 CARPETAS**

Nombre Documento	Fecha Creación Documento	Fecha Incorporación Expediete	Orden Documento	Número Páginas	Página Inicio	Página Fin	Formato	Tamaño	Origen	Observaciones
Demanda 2.019 - 229370	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**1**	94	1	94	PDF	37.4 MB	ELECTRÓNICO	
Auto Admisorio Demanda	**19/01**/2.021	19/01/2.021	**2**	2	95	96	PDF	70.5 KB	ELECTRÓNICO	
Notificaciones Demandados	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**3**	6	97	102	PDF	747 KB	ELECTRÓNICO	
Recurso Reposición Contra Admisorio	19/01/2.021	19/01/2.021	4		103	314	PDF	92.3 MB	ELECTRÓNICO	
9**Fijación En Lista Recurso De Reposición**	19/01/2.021	19/01/2.021	**5**	1	315	315	PDF	128 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Descorre Reposición	19/01/2.021	19/01/2.021	**6**	3	316	318	PDF	114 KB	ELECTRÓNICO	
Contestación Demanda Araujo & Segovia S.A.	19/01/2.021	19/01/2.021	**7**	85	319	403	PDF	21.3 MB	ELECTRÓNICO	
Autorización Dependente Judicial	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**8**	2	404	405	PDF	462 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Resuelve Recurso De Reposición	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**9**	3	406	408	PDF	223 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitanto Aclaración Auto	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**10**	2	409	410	PDF	352 KB	ELECTRÓNICO	
Notificación Demandado Alianza Fiduciaria S.A	19/01/2.021	19/01/2.021	**11**	311	411	721	PDF	52.8 MB	ELECTRÓNICO	
Contestación Demanda Avora S.A.S.	19/01/2.021	19/01/2.021	**12**	54	722	775	PDF	12.0 MB	ELECTRÓNICO	
01/07/2.021 **Fijación En Lista Excepciones De Mérito Y Pre**	**19/01/2.021**	19/01/2.021	**13**	3	776	778	PDF	384 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Descorre Traslado Excepciones	19/01/2.021	19/01/2.021	**14**	4	779	782	PDF	1.16 MB	ELECTRÓNICO	
Auto Ordena Correr Traslado Juramento	19/01/2.021	19/01/2.021	**15**	1	783	783	PDF	169 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Fija Fecha Audiencia	19/01/2.021	19/01/2.021	**16**	5	784	788	PDF	183 KB	ELECTRÓNICO	
Auto Resuelve Excepción Previa	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**17**	3	789	791	PDF	239 KB	ELECTRÓNICO	
Audiencia Sentencia 24 Agosto 2.020	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**18**	3	792	794	PDF	568 MB	ELECTRÓNICO	
Memorial Recurso Apelación	19/01/2.021	19/01/2.021	**19**	4	795	798	PDF	228 KB	ELECTRÓNICO	
Memorial Solicitud Valor Expensas	19/01/2.021	19/01/2.021	**20**	3	799	801	PDF	220 KB	ELECTRÓNICO	
Comunicación Apelante	**19**/01/2.021	19/01/2.021	**21**	10	802	811	PDF	930 KB	ELECTRÓNICO	
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE:	**19/01/2.021**									

019